

ANUARIO DE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL 1998

Volumen II
Segunda parte

*Informe de la Comisión
a la Asamblea General sobre la labor realizada
en su quincuagésimo período de sesiones*

NACIONES UNIDAS



ANUARIO DE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL

1998

Volumen II
Segunda parte

*Informe de la Comisión
a la Asamblea General sobre la labor realizada
en su quincuagésimo período de sesiones*

NACIONES UNIDAS
Nueva York y Ginebra, 2003



ADVERTENCIA

Las firmas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras mayúsculas y cifras. La mención de una de estas firmas indica que se hace referencia a un documento de las Naciones Unidas.

Las referencias al *Anuario de la Comisión de Derecho Internacional* se hacen en forma abreviada, a saber: *Anuario...*, seguido del año de que se trate (por ejemplo *Anuario... 1997*).

El *Anuario* correspondiente a cada período de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional comprende dos volúmenes:

Volumen I: actas resumidas del período de sesiones;

Volumen II (primera parte): informes de los Relatores Especiales y otros documentos examinados durante el período de sesiones;

Volumen II (segunda parte): informe de la Comisión a la Asamblea General.

Las referencias a esos textos y los pasajes que de ellos se citan remiten a la versión definitiva de los volúmenes del *Anuario*, que aparecen como publicaciones de las Naciones Unidas.

A/CN.4/SER.A/1998/Add.1 (Part 2)

PUBLICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
<i>Número de venta</i> S 00 V 11 (Part 2) ISBN 92-1-333304-8
<i>Edición completa de dos volúmenes</i> ISBN 92-1-333305-6
ISSN 0497-9885

ÍNDICE

	<i>Página</i>
<i>Documento A/53/10.—Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 50.º período de sesiones (20 de abril-12 de junio y 27 de julio-14 de agosto de 1998)</i>	1
Lista de documentos del 50.º período de sesiones.....	125

	Página
<i>Actas resumidas de las sesiones 2549^a a 2564^a, celebradas en Nueva York del 27 de julio al 14 de agosto de 1998</i>	
2549.^a sesión	
<i>Lunes 27 de julio de 1998, a las 10 25 horas</i>	
Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional	221
Las reservas a los tratados (<i>continuación</i>)	
Tercer informe del Relator Especial (<i>continuación</i>)	
Guía de la práctica (<i>continuación</i>)	221
Proyectos de directriz 1 1 5 y 1 1 6	222
2550.^a sesión	
<i>Martes 28 de julio de 1998, a las 10 15 horas</i>	
Las reservas a los tratados (<i>continuación</i>)	
Tercer informe del Relator Especial (<i>continuación</i>)	
Guía de la práctica (<i>continuación</i>)	
Proyectos de directriz 1 1 5 y 1 1 6 (<i>conclusión</i>)	226
Proyecto de directriz 1 1 7	228
2551.^a sesión	
<i>Miércoles 29 de julio de 1998, a las 10 10 horas</i>	
Las reservas a los tratados (<i>continuación</i>)	
Tercer informe del Relator Especial (<i>continuación</i>)	
Guía de la práctica (<i>continuación</i>)	
Proyecto de directriz 1 1 7 (<i>conclusión</i>)	232
2552.^a sesión	
<i>Jueves 30 de julio de 1998, a las 10 15 horas</i>	
Las reservas a los tratados (<i>continuación</i>)	
Tercer informe del Relator Especial (<i>conclusión</i>)	
Guía de la práctica (<i>conclusión</i>)	
Proyecto de directriz 1 4	239
Proyectos de directriz 1 2 a 1 3 1	241
2553.^a sesión	
<i>Viernes 31 de julio de 1998, a las 10 10 horas</i>	
Responsabilidad de los Estados (<i>continuación</i>)	
Primer informe del Relator Especial (<i>continuación</i>)	244
Artículos 5 a 8 y 10	245
Artículos 5 y 6	245
Artículo 7	246
Artículo 8	246
Artículo 10	247
2554.^a sesión	
<i>Lunes 3 de agosto de 1998, a las 10 20 horas</i>	
Cooperación con otros organismos (<i>continuación</i>)	
Declaración del observador del Comité Jurídico Inter- americano	251
Responsabilidad de los Estados (<i>continuación</i>)	
Primer informe del Relator Especial (<i>continuación</i>)	
Artículos 5 a 8 y 10 (<i>continuación</i>)	253
2555.^a sesión	
<i>Martes 4 de agosto de 1998, a las 12 10 horas</i>	
Responsabilidad de los Estados (<i>continuación</i>)	
Primer informe del Relator Especial (<i>continuación</i>)	
Artículos 5 a 8 y 10 (<i>conclusión</i>)	259
Artículos 9 y 11 a 15 bis	264
2556.^a sesión	
<i>Miércoles 5 de agosto de 1998, a las 10 10 horas</i>	
Responsabilidad de los Estados (<i>continuación</i>)	
Primer informe del Relator Especial (<i>continuación</i>)	
Artículos 9 y 11 a 15 bis (<i>continuación</i>)	268
Las reservas a los tratados (<i>continuación</i>)	

	Página
Examen de los proyectos de directrices de la Guía de la práctica aprobados por el Comité de Redacción en el 50 ° período de sesiones	275
2557.^a sesión	
<i>Jueves 6 de agosto de 1998, a las 12 00 horas</i>	
Las reservas a los tratados (<i>continuación</i>)	
Examen de los proyectos de directrices de la Guía de la práctica aprobados por el Comité de Redacción en el 50 ° período de sesiones (<i>continuación</i>)	278
2558.^a sesión	
<i>Viernes 7 de agosto de 1998, a las 10 15 horas</i>	
Cooperación con otros organismos (<i>conclusión</i>)	
Declaración del observador del Comité de Asesores Jurídicos sobre el Derecho Internacional Público	282
Las reservas a los tratados (<i>conclusión</i>)	
Examen de los proyectos de directrices de la Guía de la práctica aprobados por el Comité de Redacción en el 50 ° período de sesiones (<i>conclusión</i>)	287
Organización de los trabajos del período de sesiones (<i>conclusión</i>)	287
Responsabilidad de los Estados (<i>continuación</i>)	
Primer informe del Relator Especial (<i>conclusión</i>)	
Artículos 9 y 11 a 15 bis (<i>conclusión</i>)	287
2559.^a sesión	
<i>Miércoles 12 de agosto de 1998, a las 12 15 horas</i>	
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor reali- zada en su 50 ° período de sesiones (<i>continuación</i>)	
Capítulo IX — Las reservas a los tratados	
A Introducción	289
B Examen del tema en el actual período de sesiones	289
2560.^a sesión	
<i>Miércoles 12 de agosto de 1998, a las 15 10 horas</i>	
Responsabilidad internacional por las consecuencias per- judiciales de actos no prohibidos por el derecho inter- nacional (prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas) (<i>continuación</i>)	
Examen de los proyectos de artículo 1 a 17 aprobados por el Comité de Redacción en el 50 ° período de sesiones	289
Artículo 1 (Actividades a las que se aplican los presentes proyectos de artículos)	295
Artículo 2 (Términos empleados)	295
Artículo 3 (Prevención)	295
Artículo 4 (Cooperación)	296
Artículo 5 (Aplicación)	297
Composición de la Comisión	297
2561.^a sesión	
<i>Jueves 13 de agosto de 1998, a las 10 15 horas</i>	
Responsabilidad internacional por las consecuencias per- judiciales de actos no prohibidos por el derecho inter- nacional (prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas) (<i>continuación</i>)	
Examen de los proyectos de artículo 1 a 17 aprobados por el Comité de Redacción en el 50 ° período de sesiones (<i>continuación</i>)	
Artículo 6 (Relación con otras normas de derecho inter- nacional)	298
Artículo 7 (Autorización previa)	298
Artículo 8 (Evaluación de los efectos)	298
Artículo 9 (Información al público) y	
Artículo 10 (Notificación e información)	298
Artículo 11 (<i>Consultas sobre las medidas preventivas</i>)	298
Artículo 12 (Factores de un equilibrio equitativo de intereses)	300
Artículo 13 (Procedimientos aplicables a falta de notificación)	302

2562.ª sesión*Jueves 13 de agosto de 1998, a las 15 10 horas*

Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas) (<i>conclusión</i>)	
Examen de los proyectos de artículo 1 a 17 aprobados por el Comité de Redacción en el 50.º periodo de sesiones (<i>conclusión</i>)	
Artículo 14 (Intercambio de información)	303
Artículo 15 (Seguridad nacional y secretos industriales)	303
Artículo 16 (No discriminación)	303
Artículo 17 (Solución de controversias)	303
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 50.º periodo de sesiones (<i>continuación</i>)	
Capítulo IX —Las reservas a los tratados (<i>conclusión</i>)	
C Texto del proyecto de directrices sobre las reservas a los tratados aprobado provisionalmente por la Comisión en primera lectura	305
Capítulo VII —Responsabilidad de los Estados	
A Introducción	305
B Examen del tema en el actual periodo de sesiones	305
Responsabilidad de los Estados (<i>conclusión</i>)	
Proyecto de artículos aprobado por el Comité de Redacción en segunda lectura	308

2563.ª sesión*Viernes 14 de agosto de 1998 a las 10 10 horas*

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 50.º periodo de sesiones (<i>continuación</i>)	313
Capítulo III —Cuestiones concretas respecto de las cuales las observaciones podrían ser de particular interés para la Comisión	313
Capítulo X —Otras decisiones y conclusiones de la Comisión	314
Capítulo VII —Responsabilidad de los Estados (<i>conclusión</i>)	
B Examen del tema en el actual periodo de sesiones (<i>conclusión</i>)	314
Capítulo VI —Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas) (<i>continuación</i>)	
B Examen del tema en el actual periodo de sesiones (<i>continuación</i>)	315
C Texto de los proyectos de artículos sobre la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas) aprobados provisionalmente por la Comisión en primera lectura	

Página

2 Texto de los proyectos de artículos con comentarios	
Comentario general	316
Comentario al artículo 1	316
Comentario al artículo 2	316
Comentario al artículo 3	316
Comentario al artículo 4	316
Comentario al artículo 5	316
Comentario al artículo 6	316
Comentario al artículo 7	317
Comentario al artículo 8	317
Comentario al artículo 9	318
Comentario al artículo 10	318
Comentario al artículo 11	318
Comentario al artículo 12	318
Homenaje al Secretario de la Comisión	318

2564.ª sesión*Viernes 14 de agosto de 1998, a las 15 15 horas*

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor en su 50.º periodo de sesiones (<i>conclusión</i>)	
Capítulo VI —Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas) (<i>conclusión</i>)	
C Texto de los proyectos de artículos sobre la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas) aprobados provisionalmente por la Comisión en primera lectura (<i>conclusión</i>)	
2 Texto de los proyectos de artículos con comentarios (<i>conclusión</i>)	
Comentario al artículo 8 (<i>conclusión</i>)	319
Comentario al artículo 13	319
Comentario al artículo 14	319
Comentario al artículo 15	319
Comentario al artículo 16	319
Comentario al artículo 17	319
1 Texto de los proyectos de artículos	319
B Examen del tema en el actual periodo de sesiones (<i>conclusión</i>)	319
Capítulo I —Organización del periodo de sesiones	320
Capítulo II —Resumen de la labor de la Comisión en su 50.º periodo de sesiones	320
Clausura del periodo de sesiones	320

Página

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN

<i>Nombre</i>	<i>Nacionalidad</i>	<i>Nombre</i>	<i>Nacionalidad</i>
Sr. Emmanuel Akwei ADDO	Ghana	Sr. Mauricio HERDOCIA SACASA	Nicaragua
Sr. Husain AL-BAHARNA	Bahrein	Sr. Jorge ILLUECA	Panamá
Sr. Awn AL-KHASAWNEH	Jordania	Sr. Peter KABATSI	Uganda
Sr. João Clemente BAENA SOARES	Brasil	Sr. James Lutabanzibwa KATEKA	República Unida de Tanzania
Sr. Mohamed BENNOUNA	Marruecos	Sr. Mochtar KUSUMA-ATMADJA	Indonesia
Sr. Ian BROWNLIE	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	Sr. Igor Ivanovich LUKASHUK	Federación de Rusia
Sr. Enrique CANDIOTI	Argentina	Sr. Teodor Viorel MELESCANU	Rumania
Sr. James CRAWFORD	Australia	Sr. Václav MIKULKA	República Checa
Sr. Christopher John Robert DUGARD	Sudáfrica	Sr. Didier OPERTTI BADAN	Uruguay
Sr. Constantin ECONOMIDES	Grecia	Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA	Gabón
Sr. Nabil ELARABY	Egipto	Sr. Alain PELLET	Francia
Sr. Luigi FERRARI BRAVO	Italia	Sr. Pemmaraju Sreenivasa RAO	India
Sr. Zdzislaw GALICKI	Polonia	Sr. Víctor RODRIGUEZ CEDEÑO	Venezuela
Sr. Raul Ilustre GOCO	Filipinas	Sr. Robert ROSENSTOCK	Estados Unidos de América
Sr. Gerhard HAFNER	Austria	Sr. Bernardo SEPULVEDA	México
Sr. Qizhi HE	China	Sr. Bruno SIMMA	Alemania
		Sr. Doudou THIAM	Senegal
		Sr. Chusei YAMADA	Japón

MESA

Presidente: Sr. João BAENA SOARES
Primer Vicepresidente: Sr. Igor Ivanovich LUKASHUK
Segundo Vicepresidente: Sr. Raul Ilustre GOCO
Presidente del Comité de Redacción: Sr. Bruno SIMMA
Relator: Sr. Christopher John Robert DUGARD

El Sr. Hans Corell, Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos, Asesor Jurídico, representó al Secretario General. El Sr. Roy S. Lee, Director de la División de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos, actuó como Secretario de la Comisión y, en ausencia del Asesor Jurídico, representó al Secretario General.

PROGRAMA

En su 2519.^a sesión, el 20 de abril de 1998, la Comisión aprobó el siguiente programa:

1. Organización de los trabajos del período de sesiones.
2. Responsabilidad de los Estados.
3. Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas).
4. Las reservas a los tratados.
5. La nacionalidad en relación con la sucesión de Estados.
6. Protección diplomática.
7. Actos unilaterales de los Estados.
8. Programa, procedimientos y métodos de trabajo de la Comisión, y su documentación.
9. Cooperación con otros organismos.
10. Fecha y lugar de celebración del 51.º período de sesiones.
11. Otros asuntos.

ABREVIATURAS Y SIGLAS

ALADI	Asociación Latinoamericana de Integración
CCAAP	Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
CDI	Comisión de Derecho Internacional
CEPE	Comisión Económica para Europa
CIADI	Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones
CICR	Comité Internacional de la Cruz Roja
CIDIP	Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado
CIJ	Corte Internacional de Justicia
CPJI	Corte Permanente de Justicia Internacional
Euratom	Comunidad Europea de la Energía Atómica
FIDA	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
GATT	Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
MCCA	Mercado Común Centroamericano
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
OCDE	Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
OEA	Organización de los Estados Americanos
OIEA	Organismo Internacional de Energía Atómica
OSCE	Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
OUA	Organización de la Unidad Africana
PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
TLCAN	Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

*

* *

<i>C.I.J. Recueil</i>	<i>CIJ, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances</i>
<i>C.P.J.I. série A</i>	<i>CPJI, Recueil des arrêts (n.ºs 1 a 24, hasta 1930 inclusive)</i>
<i>C.P.J.I. série A/B</i>	<i>CPJI, Arrêts, ordonnances et avis consultatifs (n.ºs 40 a 80, a partir de 1931)</i>
<i>ILM</i>	<i>International Legal Materials</i>
<i>RGDIP</i>	<i>Revue générale de droit international public</i>

*

* *

En el presente volumen, por «Tribunal Internacional para Rwanda» debe entenderse Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables del genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Rwanda y a ciudadanos de Rwanda responsables de genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1º de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994, y por «Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia» debe entenderse Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991

*

* *

NOTA

Salvo indicación en contrario, las citas de obras en idiomas extranjeros son traducciones de la Secretaría

FALLOS, OPINIONES CONSULTIVAS Y PROVIDENCIAS CITADOS EN EL PRESENTE VOLUMEN

<i>Título abreviado del asunto</i>	<i>Tipo de decisión</i>
<i>Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci</i>	(Nicaragua c. Estados Unidos de América), fondo, fallo, <i>C.I.J. Recueil</i> 1986, pág. 14. Véase también <i>Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991</i> (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.92.V.5), pág. 210.
<i>Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide</i>	(Bosnia y Herzegovina c. Yugoslavia), excepciones preliminares, fallo, <i>C.I.J. Recueil</i> 1996, pág. 595. Véase también <i>Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1992-1996</i> (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.97.V.7), pág. 123.
<i>Barcelona Traction</i>	<i>Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited</i> , segunda fase, fallo, <i>C.I.J. Recueil</i> 1970, pág. 3. Véase también <i>Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991</i> (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.92.V.5), pág. 104.
<i>Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis</i>	Fallo, 1939, <i>C.P.J.I., série A/B</i> , n.º 76, pág. 4.
<i>Concessions Mavrommatis en Palestine</i>	Fallo n.º 2, 1924, <i>C.P.J.I., série A</i> , n.º 2.
<i>Convention de Vienne sur les relations consulaires</i>	(Paraguay c. Estados Unidos de América), providencia de 9 de abril de 1998, <i>C.I.J. Recueil</i> 1998, pág. 266.
<i>Détroit de Corfou</i>	Fondo, fallo, <i>C.I.J. Recueil</i> 1949, pág. 4. Véase también <i>Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991</i> (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.92.V.5), pág. 7.
<i>Différend frontalier</i>	(Burkina Faso/República de Mali), fallo, <i>C.I.J. Recueil</i> 1986, pág. 554. Véase también <i>Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991</i> (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.92.V.5), pág. 223.
<i>Essais nucléaires</i>	(Australia c. Francia), fallo, <i>C.I.J. Recueil</i> 1974, pág. 253. Véase también <i>Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991</i> (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.92.V.5), pág. 133.
<i>Fonderie de Trail (Trail Smelter)</i>	Naciones Unidas, <i>Recueil des sentences arbitrales</i> , vol. III (n.º de venta: 1949.V.2), págs. 1905 y ss.

<i>Título abreviado del asunto</i>	<i>Tipo de decisión</i>
<i>Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires</i>	Opinión consultiva, <i>C.I.J. Recueil</i> 1996, pág. 226. Véase también <i>Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1992-1996</i> (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.97.V.7), pág. 111.
<i>Loizidou c. Turquie</i>	Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fallo de 18 de diciembre de 1996 (fondo), <i>Recueil des arrêts et décisions</i> , 1996-VI.
<i>Namibie</i>	<i>Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de Sécurité</i> , opinión consultiva, <i>C.I.J. Recueil</i> 1971, pág. 16. Véase también <i>Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991</i> (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.92.V.5), pág. 107.
<i>North American Dredging Company</i>	Véase A. H. Feller, <i>The Mexican Claims Commissions, 1923-1934</i> , Nueva York, The Macmillan Company, 1935.
<i>Nottebohm</i>	Segunda fase, fallo, <i>C.I.J. Recueil</i> 1955, pág. 4. Véase también <i>Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991</i> (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.92.V.5), pág. 46.
<i>Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran</i>	Fallo, <i>C.I.J. Recueil</i> 1980, pág. 3. Véase también <i>Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991</i> (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.92.V.5), pág. 145.
<i>Projet Gabčíkovo-Nagymaros</i>	(Hungría/Eslovaquia), fallo, <i>C.I.J. Recueil</i> 1997, pág. 7.
<i>Rainbow Warrior</i>	Naciones Unidas, <i>Recueil des sentences arbitrales</i> , vol. XIX, págs. 197 y ss.
<i>Réparation des dommages subis au service des Nations Unies</i>	Opinión consultiva, <i>C.I.J. Recueil</i> 1949, pág. 174. Véase también <i>Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991</i> (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.92.V.5), pág. 10.
<i>Statut international du Sud-Ouest africain</i>	Opinión consultiva, <i>C.I.J. Recueil</i> 1950, pág. 128. Véase también <i>Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991</i> (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.92.V.5), pág. 17.
<i>Statut juridique du Groënland oriental</i>	Fallo, 1933, <i>C.P.J.I., série A/B</i> , n.º 53, pág. 22.

<i>Título abreviado del asunto</i>	<i>Tipo de decisión</i>
<i>Sud-Ouest africain</i>	(Etiopía <i>c.</i> Sudáfrica; Liberia <i>c.</i> Sudáfrica), excepciones preliminares, fallo, <i>C.I.J. Recueil 1962</i> , pág. 319. Véase también <i>Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991</i> (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.92.V.5), pág. 87.
	(Etiopía <i>c.</i> Sudáfrica; Liberia <i>c.</i> Sudáfrica), segunda fase, fallo, <i>C.I.J. Recueil 1966</i> , pág. 6. Véase también <i>Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991</i> (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.92.V.5), pág. 96.
<i>Usine de Chorzów</i>	Fondo, fallo n.º 13, 1928, <i>C.P.J.I., série A, n.º 17</i> .

INSTRUMENTOS MULTILATERALES CITADOS EN EL PRESENTE VOLUMEN

Fuente

Derechos humanos

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Nueva York, 9 de diciembre de 1948)	Naciones Unidas, <i>Recueil des Traités</i> , vol. 78, pág. 296.
Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (Convenio europeo de derechos humanos) (Roma, 4 de noviembre de 1950)	Ibíd., vol. 213, pág. 221. En español, véase España, <i>Boletín Oficial del Estado</i> , n.º 243, 10 de octubre de 1979.
Protocolo adicional al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (París, 20 de marzo de 1952)	Naciones Unidas, <i>Recueil des Traités</i> , vol. 213, pág. 263.
Protocolo n.º 11 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales relativo a la reestructuración del mecanismo de control establecido por Convenio (Estrasburgo, 11 de mayo de 1994)	Consejo de Europa, <i>Série des traités européens</i> , n.º 155.
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (Nueva York, 21 de diciembre de 1965)	Naciones Unidas, <i>Recueil des Traités</i> , vol. 660, pág. 241.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Nueva York, 16 de diciembre de 1966)	Ibíd., vol. 993, pág. 3.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 16 de diciembre de 1966)	Ibíd., vol. 999, pág. 241.
Convención americana sobre derechos humanos: «Pacto de San José de Costa Rica» (San José, 22 de noviembre de 1969)	Ibíd., vol. 1144, pág. 124.
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Nairobi, 27 de junio de 1981)	Ibíd., vol. 1520, pág. 217.
Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas (Belém, 9 de junio de 1994)	OEA, <i>Documentos Oficiales</i> , OEA/Ser.A/55 (SEPF).

Medio ambiente y recursos naturales

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación (Basilea, 22 de marzo de 1989)	PNUMA, <i>Selected Multilateral Treaties in the Field of the Environment</i> , Cambridge (Reino Unido), 1991, vol. 2.
---	---

- Convención de Bamako relativa a la prohibición de la importación a África, la fiscalización de los movimientos transfronterizos y la gestión dentro de África de desechos peligrosos (Bamako, 30 de enero de 1991) OUA, doc. A/46/390, anexo I, resolución 1356 (LIV).
- Convenio sobre la evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo (Espoo, 25 de febrero de 1991) Doc. E/ECE/1250, 1991. En español véase *Repertorio Cronológico de Legislación 1997*, Pamplona, Aranzadi, marginal 1962.
- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Nueva York, 9 de mayo de 1992) Doc. A/AC.237/18 (Parte II)/Add.1 y Corr.1, anexo I. Véase también *Biblioteca de Textos Legales: legislación del medio ambiente*, Madrid, tecnos, 1995, pág. 647.
- Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 5 de junio de 1992) *International Legal Materials*, Washington D.C., vol. 31, n.º 4, julio de 1992, pág. 822.
- Protocolo de 1996 del Convenio de 1972 sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias (Londres, 7 de noviembre de 1996) C. Dommen y P. Cullet, eds., *Droit international de l'environnement.—Textes de base et références*, Kluwer Law International, Londres, 1998, pág. 67.
- Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación (Nueva York, 21 de mayo de 1997) *Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo primer período de sesiones, Suplemento n.º 49*, resolución 51/229, anexo.
- Convención sobre Indemnización Suplementaria por Daños Nucleares (Viena, 12 de septiembre de 1997) OIEA, doc. GOV/INF/822-GC(41)/INF/13 y Corr. (N5-52 Circ. [Depositary Notification]).

Nacionalidad y apatridia

- Convenio sobre ciertas cuestiones relativas al conflicto de leyes de nacionalidad (La Haya, 12 de abril de 1930) Sociedad de las Naciones, *Recueil des Traités*, vol. CLXXIX, pág. 89.
- Convenio europeo sobre la nacionalidad (Estrasburgo, 6 de noviembre de 1997) Consejo de Europa, *Série des traités européens*, n.º 166.

Privilegios e inmunidades, relaciones diplomáticas

- Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (Viena, 18 de abril de 1961) Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol. 500, pág. 162.

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (Viena, 24 de abril de 1963)

Ibíd., vol. 596, pág. 392.

Derecho del mar

Convenio para asegurar a todas las Potencias y en todo tiempo el libre uso del Canal de Suez (Constantinopla, 29 de octubre de 1888)

I. Arroyo, *Convenios internacionales marítimos*, vol. I, Barcelona, Librería Bosch, 1986, pág. 871.

Convenciones de Ginebra sobre el derecho del mar (Ginebra, abril de 1958)

Convención sobre el mar territorial y la zona contigua (Ginebra, 29 de abril de 1958)

Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol. 516, pág. 241.

Convención sobre la plataforma continental (Ginebra, 29 de abril de 1958)

Ibíd., vol. 499, pág. 330.

Convención sobre la alta mar (Ginebra, 29 de abril de 1958)

Ibíd., vol. 450, pág. 115.

Convención sobre la pesca y la conservación de los recursos vivos de alta mar (Ginebra, 29 de abril de 1958)

Ibíd., vol. 559, pág. 307.

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Montego Bay, 10 de diciembre de 1982)

Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, vol. XVII (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.84.V.3), pág. 155.

Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios (Nueva York, 4 de diciembre de 1995)

Naciones Unidas, *Boletín del Derecho del Mar*, n.º 29, 1995, pág. 23.

Derecho aplicable a los conflictos armados

Convenio para la adaptación a la guerra marítima de los principios del Convenio de Ginebra (La Haya, 18 de octubre de 1907)

J. B. Scott, ed., *Las Convenciones y Declaraciones de La Haya de 1899 y 1907*, Nueva York, Oxford University Press, 1916.

- | | |
|--|---|
| <p>Tratado de Paz entre las Potencias Aliadas y Asociadas y Alemania (Tratado de Versalles) (Versalles, 28 de junio de 1919)</p> | <p>H. Triepel, <i>Nouveau recueil général de traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international. Continuation du grand recueil de G.F. de Martens</i>, 3.^a serie, vol. XI, Leipzig, Librairie Theodor Weicher, 1923, pág. 323.</p> |
| <p>Convenios de Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra (Ginebra, 12 de agosto de 1949)</p> | <p>Naciones Unidas, <i>Recueil des Traités</i>, vol. 75, págs. 31 y ss. En español, véase CICR, <i>Manual de la Cruz Roja Internacional</i>, 12.^a ed., Ginebra, 1983, págs. 23 y ss.</p> |
| <p>Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña (Convenio I)</p> | <p>Naciones Unidas, <i>ibíd.</i>, pág. 31. En español, véase CICR, <i>ibíd.</i>, págs. 23 y ss.</p> |
| <p>Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar (Convenio II)</p> | <p>Naciones Unidas, <i>ibíd.</i>, págs. 85 y ss. En español, véase CICR, <i>ibíd.</i>, págs. 47 y ss.</p> |
| <p>Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio III)</p> | <p>Naciones Unidas, <i>ibíd.</i>, págs. 135 y ss. En español, véase CICR, <i>ibíd.</i>, págs. 68 y ss.</p> |
| <p>Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV)</p> | <p>Naciones Unidas, <i>ibíd.</i>, págs. 287 y ss. En español, véase CICR, <i>ibíd.</i>, págs. 138 y ss.</p> |
| <p>Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Ginebra, 8 de junio de 1977)</p> | <p>Naciones Unidas, <i>ibíd.</i>, vol. 1125, págs. 214 y 642.</p> |

Derecho de los tratados

- | | |
|---|--|
| <p>Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (Viena, 23 de mayo de 1969)</p> | <p>Naciones Unidas, <i>ibíd.</i>, vol. 1155, pág. 443.</p> |
|---|--|

- | | |
|---|--|
| Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de tratados (Viena, 23 de agosto de 1978) | <i>Documentos oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la sucesión de Estados en materia de tratado, Viena, 4 de abril-6 de mayo de 1977 y 31 de julio-23 de agosto de 1978, vol. III (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.79.V.10).</i> |
| Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas de Estado (Viena, 8 de abril de 1983) | Naciones Unidas, <i>Anuario Jurídico 1983</i> (n.º de venta: S.90.V.1), pág. 154. |
| Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales (Viena, 21 de marzo de 1986) | Doc. A/CONF.129/15. |

Comercio internacional y desarrollo

- | | |
|--|--|
| Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Ginebra, 30 de octubre de 1947) | Naciones Unidas, <i>Recueil des Traités</i> , vol. 55, pág. 187. |
| Protocolo de modificación de ciertas disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (La Habana, 24 de marzo de 1948) | Ibíd., vol. 62, pág. 31. |
| Convenio constitutivo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (y anexos) (Roma, 13 de junio de 1976) | Ibíd., vol. 1059, pág. 275. |

Desarme

- | | |
|--|---|
| Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (y Protocolos Adicionales I y II, en anexo) (México, D.F., 14 de febrero de 1967) | Ibíd., vol. 634, pág. 282. |
| Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (Londres, Moscú y Washington, 1.º de julio de 1968) | Ibíd., vol. 729, pág. 191. |
| Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles (Nueva York, 10 de diciembre de 1976) | Ibíd., vol. 1108, pág. 175. |
| Convención sobre la prohibición, el desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción (París, 13 de enero de 1993) | <i>Situación de los acuerdos multilaterales de regulación de armamentos y de desarme</i> , 4.ª ed., 1992, vol. 2 (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.93.IX.11 [vol. 2]), pág. 111. |

Espacio ultraterrestre

- | | |
|--|---|
| Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y la utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes (Moscú, Londres y Washington, 27 de enero de 1967) | Naciones Unidas, <i>Recueil des Traités</i> , vol. 610, pág. 228. |
|--|---|

Derecho internacional general

- | | |
|---|---------------------------------|
| Tratado Antártico (Washington, 1.º de diciembre de 1959) | Ibíd., vol. 402, pág. 87. |
| Convenio sobre la ayuda alimentaria, 1971 (abierto a la firma en Washington del 29 de marzo al 3 de mayo de 1971) | Ibíd., vol. 800, pág. 179. |
| Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica (Viena, 26 de septiembre de 1986) | Ibíd., vol. 1457, pág. 187. |
| Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht) (Maastricht, 7 de febrero de 1992) | Ibíd., vol. 1755, pág. 3. |
| Convención Interamericana contra la Corrupción (Caracas, 29 de marzo de 1996) | Doc. E/1996/99. |
| Convención sobre la lucha contra el soborno de funcionarios extranjeros en las transacciones comerciales internacionales (París, 17 de diciembre de 1997) | OCDE, doc. DAF/FE/IME/BR(97)20. |

LISTA DE DOCUMENTOS DEL 50.º PERÍODO DE SESIONES

<i>Signatura</i>	<i>Título</i>	<i>Observaciones y referencias</i>
A/CN.4/483	Resumen por temas, preparado por la Secretaría, del debate en la Sexta Comisión sobre el informe de la CDI durante el quincuagesimo segundo periodo de sesiones de la Asamblea General	Mimeografiado
A/CN.4/484	Informe preliminar sobre la protección diplomática, por el Sr. Mohamed Bennouna, Relator Especial	Reproducido en <i>Anuario</i> 1998, vol. II (primera parte)
A/CN.4/485 [y Corr. 1]	Programa provisional	Mimeografiado. Véase el programa aprobado en pag. viii <i>supra</i>
A/CN.4/486	Primer informe sobre los actos unilaterales de los Estados, por el Sr. Víctor Rodríguez Cedeño, Relator Especial	Reproducido en <i>Anuario</i> 1998, vol. II (primera parte)
A/CN.4/487 y Add. 1	Primer informe sobre la prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas, por el Sr. Pemmaraju Sreenivasa Rao, Relator Especial	Idem
A/CN.4/488 y Add. 1 a 3	Responsabilidad de los Estados —Comentarios y observaciones recibidos de los gobiernos	Idem
A/CN.4/489	Cuarto informe sobre la nacionalidad en relación con la sucesión de Estados, por el Sr. Václav Mikulka, Relator Especial	Idem
A/CN.4/490 y Add. 1 y 2 [y Add. 2/Corr. 1], Add. 3 y 4 [y Add. 4/Corr. 1] y Add. 5 a 7 [y Add. 7/Corr. 1]	Primer informe sobre la responsabilidad de los Estados, por el Sr. James Crawford, Relator Especial	Idem
A/CN.4/491 y Add. 1 y 2 [y Add. 2/Corr. 1], Add. 3 y 4 [y Add. 4/Corr. 1] y Add. 5 y 6 [y Add. 6/Corr. 1]	Tercer informe sobre las reservas a los tratados, por el Sr. Alain Pellet, Relator Especial	Idem
A/CN.4/L.552 y Add. 1	Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 50.º periodo de sesiones: capítulo IV (Protección diplomática)	Mimeografiado. Véase el texto aprobado en <i>Documentos Oficiales de la Asamblea General quincuagesimo tercer periodo de sesiones Suplemento n.º 10 (A/53/10)</i> . El texto definitivo figura en <i>Anuario</i> 1998, vol. II (segunda parte)
A/CN.4/L.553	Informe del Grupo de Trabajo sobre la protección diplomática	Mimeografiado
A/CN.4/L.554 [y Corr. 1 y 2] y Add. 1 [y Add. 1/Corr. 1 y 2] y Add. 2 [y Add. 2/Corr. 1]	Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 50.º periodo de sesiones: capítulo VI (Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional [prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas])	Idem. Véase el texto aprobado en <i>Documentos Oficiales de la Asamblea General quincuagesimo tercer periodo de sesiones Suplemento n.º 10 (A/53/10)</i> . El texto definitivo figura en <i>Anuario</i> 1998, vol. II (segunda parte)
A/CN.4/L.555 y Add. 1	Idem: capítulo V (Actos unilaterales de los Estados)	Idem

<i>Signatura</i>	<i>Título</i>	<i>Observaciones y referencias</i>
A/CN.4/L.556	Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas) —Propuesta del Relator Especial	Mimeografiado
A/CN.4/L.557 [y Corr.1]	Informe del Grupo de Trabajo sobre la nacionalidad en relación con la sucesión de Estados	Idem
A/CN.4/L.558	Informe del Grupo de Trabajo sobre los actos unilaterales de los Estados	Idem
A/CN.4/L.559 [y Corr.1]	Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 50.º período de sesiones capítulo VIII (La nacionalidad en relación con la sucesión de Estados)	Idem Véase el texto aprobado en <i>Documentos Oficiales de la Asamblea General quincuagésimo tercer período de sesiones Suplemento n.º 10</i> (A/53/10) El texto definitivo figura en <i>Anuario 1998</i> , vol. II (segunda parte)
A/CN.4/L.560	Recomendaciones del Grupo de Planificación a la Comisión	Mimeografiado
A/CN.4/L.561 y Add.1 a 6	Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 50.º período de sesiones capítulo VII (Responsabilidad de los Estados)	Idem Véase el texto aprobado en <i>Documentos Oficiales de la Asamblea General quincuagésimo tercer período de sesiones Suplemento n.º 10</i> (A/53/10) El texto definitivo figura en <i>Anuario 1998</i> , vol. II (segunda parte)
A/CN.4/L.562 [y Corr.1] y Add.1 y 2	Idem capítulo IX (Las reservas a los tratados)	Idem
A/CN.4/L.563 [y Corr.1]	Las reservas a los tratados —Títulos y textos del proyecto de directrices de la Guía de la práctica aprobado por el Comité de Redacción en el 50.º período de sesiones	Mimeografiado
A/CN.4/L.564	Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 50.º período de sesiones capítulo IX (Las reservas a los tratados) —Texto del proyecto de directrices de la Guía de la práctica sobre las reservas a los tratados, con comentarios	Idem Véase el texto aprobado en <i>Documentos Oficiales de la Asamblea General quincuagésimo tercer período de sesiones Suplemento n.º 10</i> (A/53/10) El texto definitivo figura en <i>Anuario 1998</i> , vol. II (segunda parte)
A/CN.4/L.565 [y Corr.1]	Responsabilidad de los Estados —Proyectos de artículos aprobados provisionalmente por el Comité de Redacción primera parte, capítulo I (arts. 1, 2 [3] y 3 [4])	Mimeografiado
A/CN.4/L.566	Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 50.º período de sesiones capítulo I (Organización del período de sesiones)	Idem Véase el texto aprobado en <i>Documentos Oficiales de la Asamblea General quincuagésimo tercer período de sesiones Suplemento n.º 10</i> (A/53/10) El texto definitivo figura en <i>Anuario 1998</i> , vol. II (segunda parte)
A/CN.4/L.567	Idem capítulo X (Otras decisiones y conclusiones de la Comisión)	Idem
A/CN.4/L.568	Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas) —Título y texto de los proyectos de artículo 1 a 17 aprobados por el Comité de Redacción	Mimeografiado
A/CN.4/L.569 [y Corr.1]	Responsabilidad de los Estados —Proyectos de artículos aprobados provisionalmente por el Comité de Redacción primera parte, capítulo I (arts. 1, 3 y 4) y capítulo II (arts. 5, 7, 8, 8 bis, 9, 10, 15, 15 bis y A)	Véase el acta resumida de la 2562.ª sesión

<i>Signatura</i>	<i>Título</i>	<i>Observaciones y referencias</i>
A/CN.4/L.570	Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 50.º período de sesiones - capítulo III (Cuestiones concretas respecto de las cuales las observaciones podrían revestir particular interés para la Comisión)	Mimeografiado. Véase el texto aprobado en <i>Documentos Oficiales de la Asamblea General</i> , quincuagesimo tercer período de sesiones, Suplemento n.º 10 (A/53/10). El texto definitivo figura en <i>Anuario</i> 1998, vol. II (segunda parte).
A/CN.4/L.571	Idem - capítulo II (Resumen de la labor de la Comisión en su 50.º período de sesiones)	Idem
A/CN.4/SR.2519 a A/CN.4/SR.2564	Actas resumidas provisionales de las sesiones 2519 ^a a 2564 ^a	Mimeografiado. El texto definitivo figura en el presente volumen.

DOCUMENTO A/53/10*

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 50.º período de sesiones (20 de abril-12 de junio y 27 de julio-14 de agosto de 1998)

ÍNDICE

	<i>Página</i>
Abreviaturas y siglas	6
Nota referida a las citas	6
Instrumentos multilaterales citados en el presente volumen	7
<i>Capítulo</i>	<i>Parrafos</i>
I ORGANIZACION DEL PERIODO DE SESIONES	1-10 13
A Composicion de la Comision	2 13
B Mesa y Mesa Ampliada	3-5 13
C Comite de Redaccion	6-7 13
D Grupos de trabajo	8 14
E Secretaria	9 14
F Programa	10 14
II RESUMEN DE LA LABOR DE LA COMISION EN SU 50 º PERIODO DE SESIONES	11-25 15
III CUESTIONES CONCRETAS RESPECTO DE LAS CUALES LAS OBSERVACIONES PODRIAN SER DE PARTICULAR INTERES PARA LA COMISION	26-43 17
A Proteccion diplomatica	27-28 17
B Actos unilaterales de los Estados	29-30 17
C Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (prevencion de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas)	31-34 17
D Responsabilidad de los Estados	35-38 17
E La nacionalidad en relacion con la sucesion de Estados	39-40 18
F Las reservas a los tratados	41-42 18
G Proteccion del medio ambiente	43 18
IV RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR LAS CONSECUENCIAS PERJUDICIALES DE ACTOS NO PROHIBIDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL (PREVENCION DE DAÑOS TRANSFRONTERIZOS CAUSADOS POR ACTIVIDADES PELIGROSAS)	44-55 19
A Introduccion	44-45 19
B Examen del tema en el actual periodo de sesiones	46-54 19
C Texto de los proyectos de articulo sobre la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (prevencion de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas) aprobados provisionalmente por la Comision en primera lectura	55 21
1 Texto de los proyectos de articulo	55 21
2 Texto de los proyectos de articulo con comentarios	23
Comentario general	23

* Distribuido inicialmente como *Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo tercer período de sesiones, Suplemento n.º 10*

<i>Capítulo</i>		<i>Página</i>
	Artículo 1 —Actividades a las que se aplican los presentes proyectos de artículo	24
	Comentario	24
	Artículo 2 —Terminos empleados	26
	Comentario	26
	Artículo 3 —Prevencion	28
	Comentario	28
	Artículo 4 —Cooperacion	30
	Comentario	30
	Artículo 5 —Aplicacion	31
	Comentario	31
	Artículo 6 —Relacion con otras normas de derecho internacional	31
	Comentario	31
	Artículo 7 —Autorizacion	32
	Comentario	32
	Artículo 8 —Evaluacion de los efectos	33
	Comentario	33
	Artículo 9 —Informacion al publico	35
	Comentario	35
	Artículo 10 —Notificacion e informacion	36
	Comentario	36
	Artículo 11 —Consultas sobre las medidas preventivas	37
	Comentario	37
	Artículo 12 —Factores de un equilibrio equitativo de intereses	38
	Comentario	39
	Artículo 13 —Procedimientos aplicables a falta de notificacion	40
	Comentario	40
	Artículo 14 —Intercambio de informacion	41
	Comentario	41
	Artículo 15 —Seguridad nacional y secretos industriales	42
	Comentario	42
	Artículo 16 —No discriminacion	42
	Comentario	42
	Artículo 17 —Solucion de controversias	43
	Comentario	43
	<i>Párrafos</i>	
V	PROTECCION DIPLOMATICA	56-110 45
A	Introduccion	56-58 45
B	Examen del tema en el actual periodo de sesiones	59-110 45
1	Introduccion del informe preliminar del Relator Especial	61-70 45
a)	El caracter juridico de la proteccion diplomatica	62-68 45
i)	Origen de la proteccion diplomatica	62-65 45
ii)	Reconocimiento de los derechos de la persona en el plano internacional	66-67 46
iii)	Los derechos que entraña la proteccion diplomatica	68 46
b)	La cuestion de las normas «primarias» y «secundarias»	69-70 47
2	Resumen del debate	71-106 47
a)	Observaciones generales	71-75 47
b)	La nocion consuetudinaria de proteccion diplomatica	76-82 47
c)	Relacion entre derechos humanos y proteccion diplomatica	83-91 48
d)	Condiciones para el ejercicio de la proteccion diplomatica	92-97 49
e)	La cuestion de las normas «primarias» y «secundarias»	98-103 50
f)	La relacion entre el tema de la proteccion diplomatica y el tema de la responsabilidad de los Estados	104-105 51
g)	Ambito del tema	106 51
3	Establecimiento de un grupo de trabajo	107-110 51
VI	ACTOS UNILATERALES DE LOS ESTADOS	111-201 53
A	Introduccion	111 53
B	Examen del tema en el actual periodo de sesiones	112-201 53
1	Introduccion del primer informe del Relator Especial	113-145 53
2	Resumen del debate	146-191 57
a)	Observaciones generales	147-150 57
b)	Ambito del tema	151-164 57
c)	Definicion y elementos de los actos unilaterales	165-176 59
d)	Planteamiento del tema	177-187 60
e)	Forma definitiva del trabajo de la Comision	188-191 62
3	Establecimiento de un grupo de trabajo	192-201 62
VII	RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS	202-451 64
A	Introduccion	202-214 64

	Párrafos	Página
B Examen del tema en el actual periodo de sesiones	215-451	65
1 Presentacion por el Relator Especial de algunas cuestiones generales relativas al proyecto de articulos	219-224	66
a) La distincion entre normas «primarias» y «secundarias» de la responsabilidad de los Estados	220	66
b) Alcance del proyecto de articulos	221	66
c) Inclusion de disposiciones detalladas sobre las contramedidas y el arreglo de controversias	222	66
d) Relacion entre el proyecto de articulos y otras normas de derecho internacional	223	66
e) Forma que ha de adoptar el proyecto de articulos	224	66
2 Resumen del debate sobre cuestiones generales	225-235	67
a) La distincion entre normas «primarias» y «secundarias» de la responsabilidad de los Estados	226	67
b) Alcance del proyecto de articulos	227-228	67
c) Inclusion de disposiciones detalladas sobre las contramedidas y el arreglo de controversias	229	67
d) Relacion entre el proyecto de articulos y otras normas de derecho internacional	230	67
e) Forma que ha de adoptar el proyecto de articulos	231-235	68
3 Observaciones finales del Relator Especial relativas al debate sobre cuestiones generales	236-240	68
4 Presentacion del Relator Especial sobre la distincion entre la responsabilidad por «crímenes» y la responsabilidad por «delitos»	241-259	69
a) Regulacion de los crímenes de Estado en el proyecto de articulos	241-245	69
1 Observaciones de los gobiernos sobre los crímenes de Estado	246	69
b) El derecho internacional vigente en materia de responsabilidad penal del Estado	247-250	70
d) Relacion entre la responsabilidad penal internacional de los Estados y ciertos conceptos afines	251	71
e) Posibles planteamientos de la cuestion de los crímenes internacionales de los Estados	252-259	71
5 Resumen del debate sobre la distincion entre la responsabilidad por «crímenes» y la responsabilidad por «delitos»	260-321	72
a) Observaciones de los gobiernos sobre los crímenes de Estado	261	72
b) El derecho internacional vigente en materia de responsabilidad penal del Estado	262-274	72
i) La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia	263-266	72
ii) Derecho de los tratados	267	73
iii) Organizaciones internacionales	268	73
iv) Definicion de la agresion	269	73
v) Sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad	270-271	73
vi) Doctrina	272	73
vii) Conclusiones relativas a la practica estatal	273-274	73
c) Relacion entre la responsabilidad penal de los Estados y ciertos conceptos afines	275-282	74
i) La responsabilidad penal individual en derecho internacional	275-277	74
ii) Normas imperativas de derecho internacional (<i>jus cogens</i>)	278	74
iii) Obligaciones <i>erga omnes</i>	279-282	75
d) Posibles planteamientos de la cuestion de los crímenes internacionales de los Estados	283-321	75
i) Cuestiones preliminares	283-287	75
a. El concepto de la responsabilidad «objetiva»	283	75
b. El caracter de derecho civil o de derecho penal de la responsabilidad del Estado	284	76
c. Analogia con el derecho interno	285	76
d. Aplicabilidad del Capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y de otros regimenes especiales	286-287	76
ii) Planteamiento del proyecto de articulos actual	288-301	76
a. Definicion de crimen de Estado en el articulo 19	288-292	76
b. Regulacion de los crímenes de Estado en la primera parte	293-295	77
c. Concepto de Estado lesionado	296-297	77
d. Consecuencias de los crímenes de Estado	298-301	78
iii) Sustitucion por el concepto de «hecho ilícito excepcionalmente grave»	302-305	79
iv) Establecimiento de un regimen completo de responsabilidad penal del Estado en el proyecto de articulos	306-316	79
a. Definicion exacta de crimen de Estado (<i>nullum crimen sine lege</i>)	308	80
b. Institucion y procedimiento adecuados para investigar y determinar la comision de crímenes por los Estados	309-311	80
c. Garantias procesales adecuadas	312	80
d. Sanciones adecuadas	313-315	80
e. Rehabilitacion	316	81
v) La cuestion del rechazo del concepto de responsabilidad penal de los Estados	317-318	81
vi) Exclusion del concepto del proyecto de articulos	319-321	81
6 Observaciones finales del Relator Especial sobre el debate relativo a la distincion entre responsabilidad por «crímenes» y «delitos»	322-330	82

<i>Capítulo</i>		<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
7	Conclusiones provisionales de la Comisión respecto del proyecto de artículo 19	331	83
8	Introducción por el Relator Especial de los proyectos de artículo 1 a 4 de la primera parte	332-347	84
	a) Observaciones generales sobre la segunda lectura	333	84
	b) Cuestiones de terminología	334-337	84
	c) Clausulas generales y de salvaguardia	338	84
	d) Título del capítulo I de la primera parte	339	84
	e) Artículo 1	340-343	84
	f) Artículo 2	344	85
	g) Artículo 3	345	85
	h) Artículo 4	346-347	85
9	Resumen del debate sobre los proyectos de artículo 1 a 4 de la primera parte	348-358	86
	a) Cuestiones de terminología	348	86
	b) Título del capítulo I de la primera parte	349	86
	c) Artículo 1	350-354	86
	d) Artículo 2	355-356	86
	e) Artículo 3	357	86
	f) Artículo 4	358	86
10	Introducción por el Relator Especial de los proyectos de artículo 5 a 8 y 10 del capítulo II de la primera parte	359-378	86
	a) Introducción	359-361	86
	b) Observaciones de los gobiernos	362-363	87
	c) Práctica reciente de los Estados	364	87
	d) Terminología	365-366	87
	e) Principios básicos del concepto de atribución	367	87
	f) Artículo 5	368-369	87
	g) Artículo 6	370-373	87
	h) Artículo 7	374-375	88
	i) Artículo 8	376-377	88
	j) Artículo 10	378	88
11	Resumen del debate sobre los proyectos de artículo 5 a 8 y 10 del capítulo II de la primera parte	379-400	88
	a) Observaciones generales	379	88
	b) Terminología	380-381	89
	c) Título del capítulo II	382	89
	d) Artículo 5	383-388	89
	e) Artículo 6	389	89
	f) Artículo 7	390-393	89
	g) Artículo 8	394-398	90
	h) Artículo 10	399-400	90
12	Observaciones finales del Relator Especial sobre el debate relativo a los proyectos de artículo 5 a 8 y 10 del capítulo II de la primera parte	401-408	90
13	Introducción por el Relator Especial de los proyectos de artículo 9 y 11 a 15 <i>bis</i> del capítulo II de la primera parte	409-420	91
	a) Introducción	409-411	91
	b) Artículos 9 y 12	412-413	91
	c) Artículos 9 y 13	414-415	91
	d) Artículos 14 y 15	416-418	92
	e) Artículos 11 y 15 <i>bis</i>	419-420	92
14	Resumen de las deliberaciones sobre los proyectos de artículo 9 y 11 a 15 <i>bis</i>	421-444	92
	a) Artículo 9	422-424	
	b) Artículo 11	425	92
	c) Artículo 12	426	93
	d) Artículo 13	427-429	93
	e) Artículos 14 y 15	430-441	93
	f) Artículo 15 <i>bis</i>	442-444	94
15	Observaciones finales del Relator Especial sobre el debate relativo a los proyectos de artículo 9 y 11 a 15 <i>bis</i>	445-451	94
VIII	LA NACIONALIDAD EN RELACION CON LA SUCESION DE ESTADOS	452-468	96
A	Introducción	452-455	96
B	Examen del tema en el actual período de sesiones	456-459	96
	Conclusiones preliminares del Grupo de Trabajo	460-468	97

<i>Capítulo</i>	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
IX LAS RESERVAS A LOS TRATADOS	469-540	98
A Introducción	469-477	98
B Examen del tema en el actual periodo de sesiones	478-539	99
1 Presentación por el Relator Especial de su tercer informe	481-520	100
a) Trabajos anteriores de la Comisión sobre el tema y respuestas de los Estados y los órganos consultados	482-489	100
b) Definición de las reservas a los tratados	490-504	101
i) Declaración unilateral	496	101
ii) Momento en que se formula la reserva	497	102
iii) Reservas de alcance territorial	498	102
iv) Enunciado o denominación	499	102
v) Exclusión o modificación de los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado	500-502	102
vi) «Excluir o modificar»—Reservas «extensivas»	503-504	102
c) Definición de las declaraciones interpretativas	505-520	103
i) Formulación conjunta de una declaración interpretativa	509	103
ii) Enunciado y denominación, formulación de una declaración interpretativa cuando estén prohibidas las reservas	510-511	104
iii) Declaraciones interpretativas condicionales	512-513	104
iv) Declaraciones de política general y declaraciones informativas	514-516	104
v) Distinción entre reservas y declaraciones interpretativas	517-518	104
vi) Método de aplicación de la distinción entre reservas y declaraciones interpretativas	519	105
vii) Alcance de las definiciones	520	105
2 Resumen del debate	521-539	105
C Texto del proyecto de directrices sobre reservas a los tratados aprobado provisionalmente por la Comisión en primera lectura	540	108
1 Texto del proyecto de directrices		108
2 Texto del proyecto de directrices con comentarios		108
1 Definiciones		108
1 1 Definición de reservas		108
Comentario		109
1 1 1 [1 1 4] Objeto de las reservas		110
Comentario		110
1 1 2 Casos en que puede formularse una reserva		112
Comentario		112
1 1 3 [1 1 8] Reservas de alcance territorial		113
Comentario		114
1 1 4 [1 1 3] Reservas formuladas al notificar alguna aplicación territorial		115
Comentario		115
1 1 7 [1 1 1] Formulación conjunta de una reserva		116
Comentario		116
Directrices adicionales		117
Comentario		117
X OTRAS DECISIONES Y CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN	541-580	119
A Programa, procedimientos y métodos de trabajo de la Comisión, y su documentación	541-545	119
1 Planificación de la labor del actual periodo de sesiones	541	119
2 Programa de trabajo de la Comisión para el resto del quinquenio	542	119
3 Distribución de los informes de los relatores especiales con anterioridad al periodo de sesiones de la Comisión	543-544	119
4 Organización del 51 ° periodo de sesiones	545	119
B Conmemoración del 50 ° aniversario de la Comisión	546-550	120
C Programa de trabajo a largo plazo	551-554	120
D Representación de la Comisión en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional	555-556	121
E Cooperación con otros organismos	557-561	121
F Fecha y lugar de celebración del 51 ° periodo de sesiones y de los periodos de sesiones subsiguientes	562-563	122

	<i>Parrafos</i>	<i>Página</i>
G Representación en el quincuagesimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General	564	122
H Seminario de derecho internacional	565-577	122
I Conferencia en memoria de Gilberto Amado	578-579	123
J Homenaje al Secretario de la Comisión	580	124

ABREVIATURAS Y SIGLAS

CAHDI	Comité de Asesores Jurídicos sobre Derecho Internacional Público
CDI	Comisión de Derecho Internacional
CEPE	Comisión Económica para Europa
CICR	Comité Internacional de la Cruz Roja
CIJ	Corte Internacional de Justicia
CPJI	Corte Permanente de Justicia Internacional
GATT	Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
OCDE	Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
OEA	Organización de los Estados Americanos
OMM	Organización Meteorológica Mundial
OSCE	Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
UICN	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales

*

* *

<i>C I J Recueil</i>	<i>CIJ, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances</i>
<i>C P J I, serie A</i>	<i>CPJI, Recueil des arrêts (n.ºs 1 a 24, hasta 1930 inclusive)</i>
<i>C P J I, serie A/B</i>	<i>CPJI, Arrêts, ordonnances et avis consultatifs (n.ºs 40 a 80, a partir de 1931)</i>
<i>ILM</i>	<i>International Legal Materials</i>
<i>RGDIP</i>	<i>Revue generale de droit international public</i>

*

* *

En el presente volumen, por «Tribunal Internacional para Rwanda» debe entenderse Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Rwanda y de los ciudadanos de Rwanda responsables del genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1.º de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994, y por «Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia» debe entenderse Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991.

NOTA REFERIDA A LAS CITAS

En las citas, las palabras en cursiva seguidas de un asterisco no están subrayadas en el texto original.

Salvo indicación en contrario, las citas de obras en idiomas extranjeros son traducciones de la Secretaría.

 INSTRUMENTOS MULTILATERALES CITADOS EN EL PRESENTE VOLUMEN

Fuente

ARREGLO PACIFICO DE LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES

- | | |
|---|---|
| Acta general (arreglo pacífico de desacuerdos internacionales)
(Ginebra, 26 de septiembre de 1928) | Sociedad de las Naciones,
<i>Recueil des Traités</i> ,
vol XCIII, pág 343 |
|---|---|

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES, RELACIONES DIPLOMATICAS

- | | |
|---|---|
| Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas (Nueva York, 13 de febrero de 1946) | Naciones Unidas, <i>Recueil des Traités</i> , vol 1, pág 15 |
| Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (Viena, 24 de abril de 1963) | Ibid , vol 596, pág 392 |

DERECHOS HUMANOS

- | | |
|---|---|
| Convencion para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Nueva York, 9 de diciembre de 1948) | Ibid , vol 78, pág 296 |
| Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (Convenio europeo de derechos humanos) (Roma, 4 de noviembre de 1950) | Ibid , vol 213, pág 221 En español, véase España, <i>Boletín Oficial del Estado</i> , n° 243, 10 de octubre de 1979 |
| Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (Nueva York, 31 de marzo de 1953) | Naciones Unidas, <i>Recueil des Traités</i> , vol 193, pág 149 |
| Convencion Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminacion Racial (Nueva York, 21 de diciembre de 1965) | Ibid , vol 660, pág 241 |
| Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Nueva York, 16 de diciembre de 1966) | Ibid , vol 993, pag 3 |
| Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 16 de diciembre de 1966) | Ibid , vol 999, pág 241 |
| Convención americana sobre derechos humanos «Pacto de San Jose de Costa Rica» (San Jose, 22 de noviembre de 1969) | Ibid , vol 1144, pág 124 |
| Convencion sobre la eliminación de todas las formas de discriminacion contra la mujer (Nueva York, 18 de diciembre de 1979) | Ibid , vol 1249, pág 70 |
| Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas (Belem, 9 de junio de 1994) | OEA, <i>Documentos Oficiales</i> , OEA/Ser A/55 (SEPF) |

REFUGIADOS Y APATRIDAS

- | | |
|--|--|
| Convención sobre el estatuto de los refugiados (Ginebra, 28 de julio de 1951) | <i>Derechos humanos recopilación de instrumentos internacionales</i> (publicación de las Naciones Unidas, n° de venta S 88 XIV 1), pág 295 |
| Convencion sobre el estatuto de los apatridas (Nueva York, 28 de septiembre de 1954) | Naciones Unidas, <i>Recueil des Traités</i> , vol 360, pag 174 |

Fuente

COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO

Convenio destinado a reglamentar ciertos conflictos de leyes en materia de letras de cambio y pagares (Ginebra, 7 de junio de 1930)	Sociedad de las Naciones, <i>Recueil des Traités</i> , vol CXLIII, pág 317
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Ginebra, 30 de octubre de 1947)	Naciones Unidas, <i>Recueil des Traités</i> , vol 55, pág 187
Protocolo de modificación de ciertas disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (La Habana, 24 de marzo de 1948)	Ibid , vol 62, pág 31
Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados (Washington, 18 de marzo de 1965)	Ibid , vol 575, pag 206
Convenio sobre la ayuda alimentaria, 1971 (abierto a la firma en Washington del 29 de marzo de 1971 al 3 de mayo de 1971)	Ibid , vol 800, pág 179
Convenio Internacional del Trigo, 1986 a) Convenio sobre el comercio del trigo, 1986 (con anexo) (Londres, 14 de marzo de 1986), b) Convenio sobre la ayuda alimentaria, 1986 (Londres, 13 de marzo de 1986)	Ibid , vol 1429, pág 126

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Convenio sobre el régimen internacional de ferrocarriles (Ginebra, 9 de diciembre de 1923)	Sociedad de las Naciones, <i>Recueil des Traités</i> , vol XLVII, pág 55
Convención sobre formalidades aduaneras para la importación temporal de vehículos particulares de carretera (con anexos) (Nueva York, 4 de junio de 1954)	Naciones Unidas, <i>Recueil des Traités</i> , vol 282, pág 306
Convención sobre la circulación vial (Viena, 8 de noviembre de 1968)	Ibid , vol 1042, pág 270
Convención sobre la señalización vial (con anexos) (Viena, 8 de noviembre de 1968)	Ibid , vol 1091, pag 263
Acuerdo sobre el transporte internacional de productos alimentarios perecederos y sobre la utilización de equipo especial para su transporte (ATP) (con anexos) (Ginebra, 1.º de septiembre de 1970)	Ibid , vol 1028, pág 121
Convenio Aduanero relativo al Transporte Internacional de Mercancías al Amparo de los Cuadernos TIR (Convenio TIR) (con anexos) (Ginebra, 14 de noviembre de 1975)	Ibid , vol 1079, pag 89, y vol 1142, pag 413

NAVEGACION

Convención relativa a la unificación de ciertas disposiciones sobre los abordajes en la navegación interior (Ginebra, 15 de marzo de 1960)	Ibid , vol 572, pág 133
Convención relativa a la matriculación de buques de navegación interior (con protocolos anexos) (Ginebra, 25 de enero de 1965)	Ibid , vol 1281, pág 111

DERECHO DEL MAR

Convenciones de Ginebra sobre el derecho del mar (Ginebra, abril de 1958)	
Convención sobre el mar territorial y la zona contigua (Ginebra, 29 de abril de 1958)	Ibid , vol 516, pag 241
Convención sobre la plataforma continental (Ginebra, 29 de abril de 1958)	Ibid , vol 449, pág 330

Fuente

Convención sobre la alta mar (Ginebra, 29 de abril de 1958)	Ibid , vol 450, pag 115
Convención sobre la pesca y la conservación de los recursos vivos de alta mar (Ginebra, 29 de abril de 1958)	Ibid , vol 559, pag 307
Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Montego Bay, 10 de diciembre de 1982)	<i>Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar</i> , vol XVII (publicacion de las Naciones Unidas, n° de venta S 84 V 3), pag 155
Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios (Nueva York, 4 de diciembre de 1995)	Naciones Unidas, <i>Boletín del Derecho del Mar</i> , n° 29, 1995, pág 23
DERECHO APLICABLE A LOS CONFLICTOS ARMADOS	
Tratado de Paz entre las Potencias Aliadas y Asociadas y Alemania (Tratado de Versalles) (Versalles, 28 de junio de 1919)	H Triepel, <i>Nouveau recueil général de traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international Continuation du grand recueil de GF de Martens</i> , 3ª serie, vol XI, Leipzig, Librairie Theodor Weicher, 1923, pág 323
Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos (Ginebra, 17 de junio de 1925)	<i>Situación de los acuerdos multilaterales de regulación de armamentos y de desarme</i> , 4ª ed , 1992, vol I [publicación de las Naciones Unidas, n° de venta S 93 IX 11 (Vol 1)]
Convenios de Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra (Ginebra, 12 de agosto de 1949)	Naciones Unidas, <i>Recueil des Traités</i> , vol 75, págs 31 y ss En español, véase CICR, <i>Manual de la Cruz Roja Internacional</i> , 12ª ed , Ginebra, 1983, págs 23 y ss
Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña (Convenio I)	Naciones Unidas, <i>ibid</i> , pág 31 En español, véase CICR, <i>ibid</i> , págs 23 y ss
Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar (Convenio II)	Naciones Unidas, <i>ibid</i> , págs 85 y ss En español, véase CICR, <i>ibid</i> , págs 47 y ss
Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio III)	Naciones Unidas, <i>ibid</i> , págs 135 y ss En español, véase CICR, <i>ibid</i> , págs 68 y ss
Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV)	Naciones Unidas, <i>ibid</i> , págs 287 y ss En español, véase CICR, <i>ibid</i> , págs 138 y ss
Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Ginebra, 8 de junio de 1977)	Naciones Unidas, <i>ibid</i> , vol 1125, pags 214 y 642

Fuente

DERECHO DE LOS TRATADOS

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (Viena, 23 de mayo de 1969)	Naciones Unidas, <i>Recueil des Traités</i> , vol 1155, pag 443
Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de tratados (Viena, 23 de agosto de 1978)	<i>Documentos oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, Viena, 4 de abril-6 de mayo de 1977 y 31 de julio-23 de agosto de 1978</i> , vol III (publicación de las Naciones Unidas, n° de venta S 79 V 10)
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales (Viena, 21 de marzo de 1986)	Doc A/CONF 129/15

RESPONSABILIDAD

Convención sobre la responsabilidad civil por daños resultantes de actividades peligrosas para el medio ambiente (Lugano, 21 de junio de 1993)	Consejo de Europa, <i>Série des traités européens</i> , n° 150
--	--

TELECOMUNICACIONES

Convención internacional sobre radiotelegrafía (Washington D C , 25 de noviembre de 1927)	Sociedad de las Naciones, <i>Recueil des Traités</i> , vol LXXXIV, pag 97
Convención internacional relativa al empleo de la radiodifusión en beneficio de la paz (Ginebra, 23 de septiembre de 1936)	Ibid , vol CLXXXVI, pag 301
Convenio Internacional de Telecomunicaciones (con anexos, protocolo final, protocolos adicionales, resoluciones, recomendación y ruegos) (Nairobi, 6 de noviembre de 1982)	Naciones Unidas, <i>Recueil des Traités</i> , vol 1533, pag 4

DESARME

Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (y Protocolos adicionales I y II, en anexo) (México, D F , 14 de febrero de 1967)	Ibid , vol 634, pag 282
Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y sobre su destrucción (Londres, Moscú y Washington D C , 10 de abril de 1972)	Ibid , vol 1015, pag 180
Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles (con anexo) (Nueva York, 10 de diciembre de 1976)	Ibid , vol 1108, pag 175
Convención sobre la prohibición, el desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción (París, 13 de enero de 1993)	<i>Situación de los acuerdos multilaterales de regulación de armamentos y de desarme</i> , 4ª ed , 1992, vol 2 [publicación de las Naciones Unidas, n° de venta S 93 IX 11 (Vol 2)], pag 111

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias (Londres, México, Moscú y Washington, 29 de diciembre de 1972)	Naciones Unidas, <i>Recueil des Traités</i> , vol 1046, pag 122
--	---

	Fuente
Convención y Protocolo relativos a la protección del medio ambiente (Estocolmo, 19 de febrero de 1974)	Ibid, vol 1092, pág 279
Convenio sobre la protección del medio marino en la zona del Mar Báltico (Helsinki, 22 de marzo de 1974)	Ibid, vol 1507, pág 167
Convenio para la prevención de la contaminación marina de origen terrestre (París, 4 de junio de 1974)	Ibid, vol 1546, pág 103 En español véase <i>Repertorio Cronológico de Legislación 1981</i> , Pamplona, Aranzadi, marginal 128
Convenio sobre la protección del Rin contra la contaminación química (Bonn, 3 de diciembre de 1976)	Naciones Unidas, ibid, vol 1124, pág 375
Convenio para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación (Barcelona, 16 de febrero de 1976)	Ibid, vol 1102, pág 27
Protocolo sobre la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre (Atenas, 17 de mayo de 1980)	Ibid, vol 1328, pág 136
Convenio regional de Kuwait sobre la cooperación en materia de protección del medio marino contra la contaminación (Kuwait, 24 de abril de 1978)	Ibid, vol 1140, pag 133
Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia (Ginebra, 13 de noviembre de 1979)	Ibid, vol 1302, pág 217 En español véase <i>Repertorio Cronológico de Legislación 1983</i> , Pamplona, Aranzadi, marginal 460
Convención regional sobre la conservación del medio ambiente en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén (Jeddah, 14 de febrero de 1982)	UICN, <i>Droit international de l'environnement — Traités multilatéraux</i> , t V, Erich Schmidt Verlag, Berlin, pág 982 13
Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono (Viena, 22 de marzo de 1985)	Naciones Unidas, <i>Recueil des Traités</i> , vol 1513, pág 371
Acuerdo de 1985 de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) sobre la conservación de la naturaleza y de los recursos naturales (Kuala Lumpur, 9 de julio de 1985)	UICN, <i>Droit international de l'environnement — Traités multilatéraux</i> , t VI, Erich Schmidt Verlag, Berlin, pág 985 51
Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares (Viena, 26 de septiembre de 1986)	Naciones Unidas, <i>Recueil des Traités</i> , vol 1439, pág 311
Convención para la protección de los recursos naturales y del medio ambiente en la región del Pacífico sur (Numea, 25 de noviembre de 1986)	<i>Revue générale de droit international</i> , París, A Pedone, t 92, 1988, pág 776
Convención para regular las actividades relacionadas con los recursos minerales antárticos (Wellington, 2 de junio de 1988)	Ibid, t 93, 1989/1
Convenio internacional sobre la preparación, la lucha y la cooperación en materia de contaminación por hidrocarburos (Londres, 30 de noviembre de 1990)	UICN, <i>Droit international de l'environnement — Traités multilatéraux</i> , t VII, Erich Schmidt, Berlin, pag 990 88
Convenio sobre la evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo (Espoo, 25 de febrero de 1991)	Doc E/ECE/1250, 1991 En español véase <i>Repertorio Cronológico de Legislación 1997</i> , Pamplona, Aranzadi, marginal 1562
Protocolo sobre la Protección del Medio Ambiente del Tratado Antártico (Madrid, 4 de octubre de 1991)	UICN, <i>Droit international de l'environnement — Traités multilatéraux</i> , t VII, Erich Schmidt, Berlin, pág 991 74/1

	<i>Fuente</i>
Convenio sobre la protección y utilización de cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales (Helsinki, 17 de marzo de 1992)	Ibid , pág 992 20
Convencion sobre los efectos transfronterizos de los accidentes industriales (Helsinki, 17 de marzo de 1992)	Ibid , pág 992 22
Convenio sobre la protección del medio marino en la zona del Mar Báltico (Helsinki, 9 de abril de 1992)	Naciones Unidas, <i>Boletín del Derecho del Mar</i> , n.º 22, enero de 1993, pág 62
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Nueva York, 9 de mayo de 1992)	Doc A/AC 237/18 (Parte II)/ Add 1 y Corr 1, anexo I Véase también <i>Biblioteca de Textos Legales legislación del medio ambiente</i> , 2.ª ed , Madrid, Tecnos, 1995, pág 647
Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 5 de junio de 1992)	<i>International Legal Materials</i> , Washington D C , vol 31, n.º 4, julio de 1992, pág 822
Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación (Nueva York, 21 de mayo de 1997)	<i>Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo primer período de sesiones, Suplemento n.º 49</i> , resolución 51/229, anexo
DERECHO INTERNACIONAL GENERAL	
Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht) (Maastricht, 7 de febrero de 1992)	Naciones Unidas, <i>Recueil des Traités</i> , vol 1755, pág 3

Capítulo I

ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO DE SESIONES

1. La Comisión de Derecho Internacional celebró la primera parte de su 50.º período de sesiones en su sede permanente en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, del 20 de abril al 12 de junio de 1998, y la segunda parte en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 27 de julio al 14 de agosto de 1998. El Sr. Alain Pellet, Presidente saliente, abrió el período de sesiones.

A.—Composición de la Comisión

2. La Comisión está integrada por los siguientes miembros:

Sr. Emmanuel Akwei ADDO (Ghana);
Sr. Husain AL-BAHARNA (Bahrein);
Sr. Awn AL-KHASAWNEH (Jordania);
Sr. João Clemente BAENA SOARES (Brasil);
Sr. Mohamed BENNOUNA (Marruecos);
Sr. Ian BROWNLIE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);
Sr. Enrique CANDIOTI (Argentina);
Sr. James CRAWFORD (Australia);
Sr. Christopher John Robert DUGARD (Sudáfrica);
Sr. Constantin ECONOMIDES (Grecia);
Sr. Nabil ELARABY (Egipto);
Sr. Luigi FERRARI BRAVO (Italia);
Sr. Zdzislaw GALICKI (Polonia);
Sr. Raul Ilustre GOCO (Filipinas);
Sr. Gerhard HAFNER (Austria);
Sr. Qizhi HE (China);
Sr. Mauricio HERDOCIA SACASA (Nicaragua);
Sr. Jorge ILLUECA (Panamá);
Sr. Peter KABATSI (Uganda);
Sr. James Lutabanzibwa KATEKA (República Unida de Tanzania);
Sr. Mochtar KUSUMA-ATMADJA (Indonesia);
Sr. Igor Ivanovich LUKASHUK (Federación de Rusia);
Sr. Teodor Viorel MELESCANU (Rumania);
Sr. Václav MIKULKA (República Checa);
Sr. Didier OPPERTI BADAN (Uruguay);
Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA (Gabón);
Sr. Alain PELLET (Francia);
Sr. Pemmaraju Sreenivasa RAO (India);
Sr. Víctor RODRIGUEZ CEDEÑO (Venezuela);
Sr. Robert ROSENSTOCK (Estados Unidos de América);
Sr. Bernardo SEPÚLVEDA (México);
Sr. Bruno SIMMA (Alemania);
Sr. Doudou THIAM (Senegal);
Sr. Chusei YAMADA (Japón).

B.—Mesa y Mesa Ampliada

3. En su 2519.ª sesión, celebrada el 20 de abril de 1998, la Comisión eligió la siguiente Mesa:

Presidente: Sr. João Clemente Baena Soares

Primer Vicepresidente: Sr. Igor Ivanovich Lukashuk

Segundo Vicepresidente: Sr. Raul Ilustre Goco

Presidente del Comité de Redacción: Sr. Bruno Simma

Relator: Sr. Christopher John Robert Dugard.

4. La Mesa Ampliada de la Comisión estuvo integrada por los miembros de la Mesa del presente período de sesiones, por los Presidentes anteriores de la Comisión¹ y por los Relatores Especiales².

5. Por recomendación de la Mesa Ampliada, la Comisión estableció un Grupo de Planificación integrado por los miembros siguientes: Sr. Igor Ivanovich Lukashuk (Presidente), Sr. Emmanuel Akwei Addo, Sr. Nabil Elaraby, Sr. Luigi Ferrari Bravo, Sr. Zdzislaw Galicki, Sr. Raul Ilustre Goco, Sr. Qizhi He, Sr. Jorge Illueca, Sr. James Kateka, Sr. Mochtar Kusuma-Atmadja, Sr. Didier Operti Badan, Sr. Guillaume Pambou-Tchivounda, Sr. Bernardo Sepúlveda, Sr. Doudou Thiam y Sr. Christopher John Robert Dugard (*ex officio*).

C.—Comité de Redacción

6. La Comisión estableció un Comité de Redacción integrado por los siguientes miembros para los temas que se indican a continuación:

a) Prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas: Sr. Bruno Simma (Presidente), Sr. Pemmaraju Sreenivasa Rao (Relator Especial), Sr. Emmanuel Akwei Addo, Sr. Husain Al-Baharna, Sr. Enrique Candiotti, Sr. Constantin Economides, Sr. Luigi Ferrari Bravo, Sr. Zdzislaw Galicki, Sr. Gerhard Hafner, Sr. Peter Kabatsi, Sr. Robert Rosenstock, Sr. Guillaume Pambou-Tchivounda, Sr. Chusei Yamada y Sr. Christopher John Robert Dugard (*ex officio*);

¹ Esto es, el Sr. Alain Pellet, el Sr. Pemmaraju Sreenivasa Rao y el Sr. Doudou Thiam

² Esto es, el Sr. Mohamed Bennouna, el Sr. James Crawford, el Sr. Václav Mikulka, el Sr. Alain Pellet, el Sr. Pemmaraju Sreenivasa Rao y el Sr. Víctor Rodríguez Cedeño

b) Responsabilidad de los Estados: Sr. Bruno Simma (Presidente), Sr. James Crawford (Relator Especial), Sr. Emmanuel Akwei Addo, Sr. Mohamed Bennouna, Sr. Ian Brownlie, Sr. Enrique Candioti, Sr. Constantin Economides, Sr. Luigi Ferrari Bravo, Sr. Zdzislaw Galicki, Sr. Gerhard Hafner, Sr. Qizhi He, Sr. James Kateka, Sr. Igor Ivanovich Lukashuk, Sr. Teodor Viorel Melescanu, Sr. Alain Pellet, Sr. Robert Rosenstock, Sr. Víctor Rodríguez Cedeño, Sr. Chusei Yamada y Sr. Christopher John Robert Dugard (*ex officio*);

c) Las reservas a los tratados: Sr. Bruno Simma (Presidente), Sr. Alain Pellet (Relator Especial), Sr. Emmanuel Akwei Addo, Sr. Awn Al-Khasawneh, Sr. Ian Brownlie, Sr. Enrique Candioti, Sr. Constantin Economides, Sr. Zdzislaw Galicki, Sr. Gerhard Hafner, Sr. Qizhi He, Sr. Teodor Viorel Melescanu, Sr. Václav Mikulka, Sr. Robert Rosenstock, Sr. Víctor Rodríguez Cedeño y Sr. Christopher John Robert Dugard (*ex officio*).

7. El Comité de Redacción celebró un total de 17 sesiones sobre los tres temas antes indicados.

D.—Grupos de trabajo

8. La Comisión estableció también los siguientes grupos de trabajo integrados por los miembros cuyos nombres se indican a continuación:

a) Responsabilidad de los Estados: Sr. Bruno Simma (Presidente), Sr. James Crawford (Relator Especial), Sr. Constantin Economides, Sr. Nabil Elaraby, Sr. Luigi Ferrari Bravo, Sr. Zdzislaw Galicki, Sr. Qizhi He, Sr. Guillaume Pambou-Tchivounda, Sr. Robert Rosenstock, Sr. Chusei Yamada y Sr. Christopher John Robert Dugard (*ex officio*);

b) Actos unilaterales de los Estados: Sr. Enrique Candioti (Presidente), Sr. Víctor Rodríguez Cedeño (Relator Especial), Sr. Constantin Economides, Sr. Nabil Elaraby, Sr. Luigi Ferrari Bravo, Sr. Gerhard Hafner, Sr. Qizhi He, Sr. Peter Kabatsi, Sr. Igor Ivanovich Lukashuk, Sr. Václav Mikulka, Sr. Didier Operti Badan y Sr. Christopher John Robert Dugard (*ex officio*);

c) La nacionalidad en relación con la sucesión de Estados: Sr. Václav Mikulka (Presidente; Relator Especial), Sr. Emmanuel Akwei Addo, Sr. Husain Al-Baharna, Sr. Ian Brownlie, Sr. Enrique Candioti, Sr. Constantin Economides, Sr. Zdzislaw Galicki, Sr. Gerhard Hafner, Sr. Robert Rosenstock y Sr. Christopher John Robert Dugard (*ex officio*);

d) Prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas: Sr. Chusei Yamada (Presidente), Sr. Pemmaraju Sreenivasa Rao (Relator Especial), Sr. Emmanuel Akwei Addo, Sr. Enrique Candioti, Sr. Constantin Economides, Sr. Luigi Ferrari Bravo, Sr. Gerhard Hafner, Sr. Guillaume Pambou-Tchivounda, Sr. Bruno

Simma y Sr. Christopher John Robert Dugard (*ex officio*);

e) Protección diplomática: un grupo de trabajo de composición abierta presidido por el Sr. Mohamed Bennouna (Relator Especial);

f) Programa de trabajo a largo plazo: Sr. Ian Brownlie (Presidente), Sr. Raul Ilustre Goco, Sr. Qizhi He, Sr. Mauricio Herdocia Sacasa, Sr. Václav Mikulka, Sr. Didier Operti Badan, Sr. Bernardo Sepúlveda y Sr. Bruno Simma.

E.—Secretaría

9. El Sr. Hans Corell, Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos, el Asesor Jurídico, asistió al período de sesiones y representó al Secretario General. El Sr. Roy S. Lee, Director de la División de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos, hizo las veces de Secretario de la Comisión y, en ausencia del Asesor Jurídico, representó al Secretario General. El Sr. Manuel Rama-Montaldo, Director Adjunto de la División de Codificación, desempeñó la función de Secretario Adjunto de la Comisión. La Sra. Mahnoush H. Arsanjani, Oficial Jurídico Superior, desempeñó la función de Secretaria Auxiliar Superior de la Comisión; la Sra. Christiane Bourloyannis-Vrailas, el Sr. David Hutchinson, el Sr. George Korontzis y la Sra. Virginia Morris, Oficiales Jurídicos, desempeñaron las funciones de Secretarios Auxiliares de la Comisión.

F.—Programa

10. En su 2519.^a sesión, celebrada el 20 de abril de 1998, la Comisión aprobó el programa de su 50.º período de sesiones, que comprendía los temas siguientes:

- 1 Organización de los trabajos del período de sesiones
- 2 Responsabilidad de los Estados
- 3 Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas)
- 4 Las reservas a los tratados
- 5 La nacionalidad en relación con la sucesión de Estados
- 6 Protección diplomática
- 7 Actos unilaterales de los Estados
- 8 Programa, procedimientos, métodos de trabajo de la Comisión, y su documentación
- 9 Cooperación con otros organismos
- 10 Fecha y lugar de celebración del 51.º período de sesiones
- 11 Otros asuntos

Capítulo II

RESUMEN DE LA LABOR DE LA COMISIÓN EN SU 50.º PERÍODO DE SESIONES

11. La Comisión aprobó en primera lectura un conjunto de 17 proyectos de artículo sobre la prevención del daño transfronterizo causado por actividades peligrosas en relación con el tema de la «Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional», con sus comentarios correspondientes, y decidió transmitirlos a los gobiernos para que formularan comentarios y observaciones (véase cap. IV).

12. La Comisión examinó el informe preliminar del Relator Especial sobre el tema de la «Protección diplomática» (A/CN.4/484), en el que se trataban el carácter jurídico de ésta y el de las normas que la regulaban. La Comisión creó un grupo de trabajo de composición abierta encargado de examinar las conclusiones que podrían extraerse del debate respecto del planteamiento del tema y de orientar acerca de las cuestiones que debieran tratarse en el informe del Relator Especial para el 51.º período de sesiones de la Comisión. Al concluir su informe el Grupo de Trabajo sugirió que el Relator Especial, en su segundo informe, se concentrara en las cuestiones planteadas en el capítulo I, «Base de la protección diplomática», del esquema propuesto por el Grupo de Trabajo creado en el 49.º período de sesiones³ (véase cap. V).

13. En cuanto al tema de los «Actos unilaterales de los Estados», la Comisión examinó el primer informe del Relator Especial (A/CN.4/486). El debate se centró principalmente en el ámbito del tema, la definición y los elementos de los actos unilaterales, el planteamiento del tema y la forma definitiva de la labor de la Comisión a su respecto. Hubo acuerdo general en cuanto a: *a*) limitar el tema a los actos unilaterales de los Estados encaminados a surtir efectos jurídicos internacionales y *b*) elaborar posibles proyectos de artículo con sus comentarios sobre el tema. La Comisión pidió al Relator Especial que, al preparar su segundo informe, presentara proyectos de artículo sobre la definición de los actos unilaterales de los Estados y el ámbito de los proyectos de artículo y que continuara el examen del tema centrándose en las cuestiones relativas a la elaboración de los requisitos de validez de los actos unilaterales de los Estados (véase cap. VI).

14. Con respecto al tema de la «Responsabilidad de los Estados», la Comisión examinó el primer informe del Relator Especial (A/CN.4/490 y Add.1 a 7), en el que se

abordaban cuestiones generales relativas al proyecto, la distinción entre responsabilidad por «crímenes» y por «delitos», y los artículos 1 a 15 de la primera parte del proyecto. La Comisión creó un Grupo de Trabajo encargado de ayudar al Relator Especial a examinar diversas cuestiones durante la segunda lectura del proyecto de artículos. La Comisión decidió asignar los proyectos de artículo 1 a 15 al Comité de Redacción. La Comisión tomó nota del informe del Comité de Redacción sobre los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8 *bis*, 9, 10, 15, 15 *bis* y A, y de la supresión de los artículos 2 y 6 y 11 a 14 (véase cap. VII).

15. Con respecto al tema de «La nacionalidad en relación con la sucesión de Estados», la Comisión examinó el cuarto informe del Relator Especial (A/CN.4/489) y creó un Grupo de Trabajo encargado de examinar el planteamiento que podía darse a la segunda parte del tema, relativa a la nacionalidad de las personas jurídicas. Las conclusiones preliminares del Grupo de Trabajo figuran en los párrafos 460 a 468 *infra* (véase cap. VIII).

16. En cuanto al tema de «Las reservas a los tratados», la Comisión examinó el tercer informe del Relator Especial (A/CN.4/491 y Add.1 a 6), en el que se abordaba la definición de las reservas (y las declaraciones interpretativas). La Comisión aprobó siete proyectos de directriz, relativos a la definición de las reservas, el objeto de éstas, los casos en que podían formularse, las reservas de alcance territorial, las reservas formuladas al notificar la aplicación territorial, las reservas formuladas conjuntamente y la relación entre la definición y la admisibilidad de las reservas (véase cap. IX).

17. Por lo que respecta a su programa de trabajo para el resto del quinquenio, la Comisión afirmó que el programa aprobado en su 49.º período de sesiones debía cumplirse en lo posible (véase párr. 542 *infra*).

18. La Comisión decidió que el Grupo de Trabajo sobre el programa de trabajo a largo plazo prosiguiera su labor en el próximo período de sesiones (véase párr. 554 *infra*).

19. La Comisión decidió asimismo que los Relatores Especiales presentaran sus informes a tiempo para que estuvieran disponibles en todos los idiomas antes del comienzo del período de sesiones (véanse párrs. 543 y 544 *infra*).

20. La Comisión estuvo representada en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional.

³ *Anuario* 1997, vol II (segunda parte), párr 189

La Conferencia expresó su profunda gratitud a la Comisión (véase cap. X, secc. D).

21. Para conmemorar su cincuentenario la Comisión: a) celebró un seminario sobre la evaluación crítica de su labor y sobre la experiencia adquirida para su labor futura; b) recibió como obsequio dos publicaciones, a saber: *Pour un meilleur droit international: la Commission du droit international à 50 ans*⁴ y *Analytical Guide to the Work of the International Law Commission, 1949-1997*⁵; y c) creó un espacio propio en la Web de cuyo mantenimiento se encarga la División de Codificación (véase cap. X, secc. B).

22. Se mantuvo un diálogo fructífero sobre temas de interés común con la CIJ, el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, el Comité Jurídico Interamericano y

el Comité de Asesores Jurídicos sobre Derecho Internacional Público del Consejo de Europa (véase cap. X, secc. E).

23. Durante el 50.º período de sesiones de la Comisión se celebró el 34.º período de sesiones del Seminario de derecho internacional en el que participaron 23 personas, todas ellas de nacionalidades diferentes (véase cap. X, secc. H).

24. Se pronunció la 14.ª Conferencia en homenaje a la memoria del Sr. Gilberto Amado, ex miembro de la Comisión (véase cap. X, secc. I).

25. La Comisión acordó que su próximo período de sesiones se celebrara en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, del 3 de mayo al 23 de julio de 1999, y que el 52.º período de sesiones, en el año 2000, tuviera lugar del 24 de abril al 2 de junio y del 3 de julio al 11 de agosto (véase cap. X, secc. F).

⁴ Publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta E/F 98 V 5

⁵ *Ibid.*, E 98 V 10

Capítulo III

CUESTIONES CONCRETAS RESPECTO DE LAS CUALES LAS OBSERVACIONES PODRÍAN SER DE PARTICULAR INTERÉS PARA LA COMISIÓN

26. En cumplimiento del párrafo 12 de la resolución 52/156 de la Asamblea General, la CDI desea señalar las cuestiones concretas de cada tema a cuyo respecto la expresión de las opiniones de los gobiernos, ya sea en la Sexta Comisión o por escrito, podrían revestir particular interés para orientar de manera eficaz a la CDI en su labor futura.

A.—Protección diplomática

27. La Comisión acogerá con agrado los comentarios y observaciones de los gobiernos sobre las conclusiones del Grupo de Trabajo que figuran en el párrafo 108 del presente informe.

28. La Comisión pide también a los gobiernos que le proporcionen los textos de las leyes nacionales, las decisiones de los tribunales del país y la práctica del Estado más significativas y pertinentes a la protección diplomática.

B.—Actos unilaterales de los Estados

29. La Comisión acogerá con agrado comentarios sobre si el alcance del tema debería limitarse a declaraciones, como propuso el Relator Especial en su primer informe, o si debería ampliarse ese alcance para abarcar otras expresiones unilaterales de la voluntad del Estado.

30. Asimismo, acogerá con agrado comentarios sobre si el alcance del tema debería limitarse a actos unilaterales de los Estados dirigidos a otros Estados o si debería comprender también los actos unilaterales de los Estados dirigidos a otros sujetos del derecho internacional.

C.—Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas)

31. Habida cuenta de que la Comisión se había propuesto hacer una distinción entre las actividades que llevan aparejado el riesgo de causar daños significativos y

las que los causan efectivamente a los efectos del desarrollo y la aplicación de la obligación de prevenir, se plantea el interrogante de qué tipo de régimen es o debería ser aplicable a ese último tipo de actividades.

32. Hasta el momento se entiende de forma generalizada que la obligación de prevenir es una obligación de conducta y no de resultado. En consecuencia, se sugiere que el incumplimiento de las obligaciones de prevención en ausencia de daños efectivos no origine responsabilidad alguna. La Comisión ha decidido recomendar un régimen de prevención, distinguiéndolo del régimen de responsabilidad. ¿Debería tratarse la obligación de prevenir como una obligación de conducta o el incumplimiento tener consecuencias adecuadas con arreglo a la ley de responsabilidad del Estado, de responsabilidad civil o ambas cuando tanto el Estado de origen como el agente sean responsables del mismo hecho? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipo de consecuencias serían adecuadas o aplicables?

33. ¿Qué forma debe adoptar el proyecto de artículos: convención, convención marco o ley modelo?

34. ¿Qué tipo o forma de procedimiento de arreglo de controversias es más apropiado a las controversias derivadas de la aplicación o interpretación del proyecto de artículos?

D.—Responsabilidad de los Estados

35. En lo que respecta a la primera parte del proyecto, ¿es toda conducta de un órgano de un Estado atribuible a ese Estado con arreglo al artículo 5 (Atribución al Estado del comportamiento de sus órganos), independientemente del carácter *jure gestionis* o *jure imperii* de la conducta?

36. En lo que se refiere a la segunda parte del proyecto, ¿cómo hallar el equilibrio adecuado entre la elaboración de principios generales sobre la reparación y disposiciones más detalladas, particularmente en relación con la indemnización?

37. La Comisión ha recibido ya comentarios muy útiles de algunos gobiernos acerca del proyecto de artículos o de aspectos determinados, que figuran en los comentarios y observaciones recibidos de los gobiernos sobre la responsabilidad de los Estados (A/CN.4/488 y Add.1 a 3). Esos comentarios se han ocupado de algunas cuestiones fundamentales, entre ellas:

a) Si las normas de atribución del capítulo II de la primera parte se ocupan adecuadamente de asuntos como el papel del derecho interno al determinar el estatuto de un «órgano» del Estado a los efectos del artículo 5, y la posición de las entidades privatizadas que ejercen funciones gubernamentales (apartado b del artículo 7);

b) Si debe conservarse o reemplazarse el artículo 19 (Crímenes y delitos internacionales), o si la idea de infracción grave de normas de interés para la comunidad internacional en su conjunto puede elaborarse mejor en el proyecto de artículos de manera distinta que hacer una distinción entre «crímenes» y «delitos» (véase párr. 331 *infra*);

c) La medida en que las circunstancias que excluyen la ilicitud, que se tratan en el capítulo V de la primera parte, deben tratarse de manera de excluir totalmente la responsabilidad por la conducta en cuestión;

d) La definición de «Estado lesionado» en el artículo 40 (Significado de Estado lesionado), especialmente en lo que se refiere al incumplimiento de obligaciones *erga omnes* o respecto de un gran número de Estados;

e) Si se debe tratar de regular en el proyecto de artículos las contramedidas en forma pormenorizada, y en particular el vínculo entre contramedidas y el recurso al arreglo de controversias por terceras partes;

f) Las disposiciones de la tercera parte relativas al arreglo de controversias en general.

38. Los gobiernos que todavía no han formulado comentarios acerca del proyecto de artículos tal vez deseen observar que no es demasiado tarde para hacerlo, y que se acogerían con beneplácito los comentarios acerca de esos asuntos u otros.

E.—La nacionalidad en relación con la sucesión de Estados

39. La Comisión acogería con beneplácito comentarios sobre la cuestión planteada en el informe del Grupo de

Trabajo (véase párr. 468 *infra*), con respecto al futuro de la segunda parte del tema de la nacionalidad, en relación con la sucesión de Estados en cuanto a las personas jurídicas.

40. La Comisión desea reiterar además su petición de que los gobiernos formulen comentarios y observaciones por escrito sobre los proyectos de artículo relativos a la nacionalidad de las personas naturales en relación con la sucesión de Estados, aprobados en primera lectura en el 49.º período de sesiones⁶, para poder iniciar la segunda lectura de los proyectos de artículo en su próximo período de sesiones.

F.—Las reservas a los tratados

41. La Comisión acogerá con agrado comentarios y observaciones de los gobiernos sobre si se considerarían o no reservas las declaraciones unilaterales mediante las cuales un Estado se propone aumentar sus compromisos o derechos en el contexto de un tratado más allá de los previstos en el tratado mismo.

42. La Comisión agradecerá toda información o material respecto de la práctica de los Estados acerca de esas declaraciones unilaterales.

G.—Protección del medio ambiente

43. La Comisión estudió la posibilidad de ocuparse de cuestiones especiales relacionadas con el derecho ambiental internacional y desearía contar con las opiniones y sugerencias de los Estados en cuanto a los asuntos concretos que ellos consideren que serían más apropiados para la labor de la Comisión a ese respecto.

⁶ *Anuario* 1997, vol II (segunda parte), párr 43

Capítulo IV

RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR LAS CONSECUENCIAS PERJUDICIALES DE ACTOS NO PROHIBIDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL (PREVENCIÓN DE DAÑOS TRANSFRONTERIZOS CAUSADOS POR ACTIVIDADES PELIGROSAS)

A.—Introducción

44. En su 49.º período de sesiones, celebrado en 1997, la Comisión decidió proseguir su labor sobre el tema «Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional» y tratar en primer lugar la cuestión de la prevención en el marco del subtítulo «Prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas»⁷. La Asamblea General tomó nota de esa decisión en el párrafo 7 de su resolución 52/156.

45. En el mismo período de sesiones la Comisión nombró al Sr. Pemmaraju Sreenivasa Rao Relator Especial de esta parte del tema⁸.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones

46. En el actual período de sesiones la Comisión tuvo a la vista el primer informe del Relator Especial (A/CN.4/487 y Add.1), que examinó en sus sesiones 2527.^a a 2531.^a, celebradas entre el 8 y el 15 de mayo de 1998.

47. En el informe se examinaba la labor de la Comisión sobre el tema de la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional desde que por primera vez se incluyó en el programa, en 1978, centrándose en particular en la cuestión del ámbito del proyecto de artículos que se había de elaborar. Seguía un análisis de las obligaciones procesales y sustantivas que implicaba la obligación general de prevención. En cuanto a aquellas el Relator Especial examinaba los principios siguientes: autorización previa, evaluación de los efectos ambientales internacionales, cooperación, intercambio de información, notificación, consulta y negociación de buena fe, prevención de conflictos o evitación y arreglo de controversias, y no discriminación. En cuanto a las obligaciones sustantivas el Relator Especial consideró el principio de precaución, el principio de pago por el contaminador y los principios de equidad, aumento de la capacidad y buen gobierno.

⁷ *Anuario* 1997, vol II (segunda parte), parr 168

⁸ *Ibid*

48. El Relator Especial recomendó que, una vez que se llegara a acuerdo acerca de la orientación general del tema, la Comisión estudiara los proyectos de artículo que había adoptado el Grupo de Trabajo en el 48.º período de sesiones, en 1996⁹, y decidiera respecto de su posible inclusión en el nuevo proyecto que se habría de elaborar acerca de la cuestión de la prevención.

49. En su 2531.^a sesión, el 15 de mayo de 1998, la Comisión decidió remitir al Comité de Redacción el apartado *a* del proyecto de artículo 1 (Actividades a las que se aplican los presentes artículos) y el proyecto de artículo 2 (Términos empleados), recomendados por el Grupo de Trabajo en el 48.º período de sesiones¹⁰.

50. En la misma sesión la Comisión estableció un Grupo de Trabajo¹¹ y le encargó que estudiase los pro-

⁹ *Anuario* 1996, vol II (segunda parte), doc A/51/10, anexo I, secc B

¹⁰ *Ibid* El texto de los artículos era el siguiente

«Artículo 1 —Actividades a las que se aplican los presentes artículos»

»Los presentes artículos se aplican a

»*a*) Las actividades no prohibidas por el derecho internacional que entrañan un riesgo de causar un daño transfronterizo sensible []

por sus consecuencias físicas

»Artículo 2 —Terminos empleados»

»A los efectos de los presentes artículos

»*a*) Se entiende por “riesgo de causar un daño transfronterizo sensible” el que implica pocas probabilidades de causar un daño catastrófico y muchas probabilidades de causar otro daño sensible,

»*b*) Se entiende por “daño transfronterizo” el daño causado en el territorio o en otros lugares bajo la jurisdicción o el control de un Estado distinto del Estado de origen, tengan o no esos Estados fronteras comunes,

»*c*) Se entiende por “Estado de origen” el Estado en cuyo territorio o bajo cuya jurisdicción o control se realizan las actividades a que se refiere el artículo 1,

»*d*) Se entiende por “Estado afectado” el Estado en cuyo territorio se ha producido el daño transfronterizo sensible o que tiene jurisdicción o control sobre cualquier otro lugar en que se ha producido tal daño »

¹¹ Véase la composición del Grupo de Trabajo en el apartado *d* del párrafo 8 *supra*

yectos de artículo 3 a 22 recomendados en el 48.º período de sesiones, en vista de la decisión de la Comisión de concentrarse primero en la cuestión de la prevención. Ese examen tendría por objeto determinar si se reflejaban convenientemente en el texto los principios del procedimiento y del contenido del deber de prevención.

51. Basándose en las deliberaciones del Grupo de Trabajo, el Relator Especial propuso una revisión del texto del proyecto de artículos (A/CN.4/L.556)¹². Teniendo en cuenta las observaciones que se habían hecho en sesión plenaria, la Comisión decidió en su 2542.ª sesión, el 5 de junio de 1998, remitir al Comité de Redacción el proyecto de artículos propuesto por el Relator Especial.

¹² El texto de la propuesta del Relator Especial era el siguiente

[Nota el número entre corchetes es el del artículo correspondiente propuesto por el Grupo de Trabajo en el 48.º período de sesiones]

«[Artículo 3 —La libertad de acción y sus límites]

[Suprimido]

»Artículo 3[4] —La prevención

»Los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas para prevenir y minimizar el riesgo de causar un daño transfronterizo sensible

»[Artículo 5 —Responsabilidad]

[Suprimido]

»Artículo 4[6] —Cooperación

»Los Estados de que se trata cooperarán de buena fe y recabarán, según sea necesario, la asistencia de cualquier organización internacional para prevenir y minimizar el riesgo de causar un daño transfronterizo sensible

»Artículo 5[7] —Aplicación

»Los Estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas o de otra índole necesarias para aplicar las disposiciones de los presentes artículos

»Artículo 6[8] —Relación con otras normas de derecho internacional

»Las obligaciones establecidas en virtud de los presentes artículos se entenderán sin perjuicio de cualesquiera otras obligaciones contraídas por los Estados de conformidad con los tratados pertinentes o los principios de derecho internacional

[Nota habría que aplazar el examen de este artículo hasta que se tome una decisión sobre la forma del proyecto de artículos]

»Artículo 7[9] —Autorización previa

»1 Se requerirá la autorización previa de un Estado para que se lleven a cabo en su territorio, o de cualquier otro modo bajo su jurisdicción o control, actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de los presentes artículos. Dicha autorización se requerirá también en el caso de que se proyecte efectuar algún cambio importante que pueda transformar una actividad en otra comprendida en el ámbito de aplicación de los presentes artículos

»2 El requisito de la autorización previa que deba otorgar el Estado con arreglo al párrafo 1 será aplicable con respecto a todas las actividades preexistentes que queden comprendidas en el ámbito de aplicación de los presentes artículos

[Nota el párrafo 2 refleja el contenido del artículo 11 que se ha suprimido (Actividades preexistentes)]

52. La Comisión consideró el informe del Comité de Redacción en sus sesiones 2560.^a a 2562.^a, celebradas los días 12 y 13 de agosto de 1998, y aprobó en primera lectura un conjunto de 17 proyectos de artículo sobre

»Artículo 8 [10] —Evaluación de los efectos

»1 Cualquier decisión con respecto a la autorización de una actividad comprendida en el ámbito de aplicación de los presentes artículos deberá basarse en una evaluación de los posibles efectos perjudiciales de esa actividad en las personas o los bienes, así como en el medio ambiente de otros Estados

»2 Los Estados deberán proporcionar, por los medios que consideren apropiados, al público que pueda resultar afectado por una actividad comprendida en el ámbito de aplicación de los presentes artículos la información pertinente relativa a esa actividad, al riesgo que entraña y a los daños que puedan resultar de ella, y consultará su opinión

[Nota el párrafo 2 refleja el contenido del artículo 15 que se ha suprimido (Información al público)]

»[Artículo 11 —Actividades preexistentes]

[Nota el contenido del artículo 11 se refleja en el párrafo 2 del artículo 7[9]]

»[Artículo 12 —No transferencia del riesgo]

[Suprimido]

»Artículo 9 [13] —Notificación e información

»1 Si la evaluación a que se refiere el artículo 8 [10] indica que existe un riesgo de causar un daño transfronterizo sensible, el Estado de origen deberá, antes de que se tome una decisión sobre la autorización de la actividad, hacer la oportuna notificación al respecto a los Estados que puedan resultar afectados y les transmitirá la información técnica disponible y demás información pertinente en que se base la evaluación

»2 Los Estados que puedan resultar afectados deberán presentar su respuesta dentro de un plazo razonable

»Artículo 10[17] —Consultas sobre las medidas preventivas

»1 Los Estados de que se trata celebrarán consultas, a petición de cualquiera de ellos, con miras a encontrar soluciones aceptables respecto de las medidas que hayan de adoptarse para prevenir y minimizar el riesgo de causar un daño transfronterizo sensible

»2 Los Estados deberán buscar soluciones basadas en un equilibrio equitativo de intereses a la luz del artículo 11[19]

»3 Si las consultas a que se refiere el párrafo 1 no conducen a una solución acordada, el Estado de origen, si decide autorizar que la actividad se realice por su cuenta y riesgo, deberá tener en cuenta los intereses de los Estados que puedan resultar afectados, sin perjuicio de los derechos de cualquier Estado que pueda resultar afectado

»Artículo 11[19] —Factores de un equilibrio equitativo de intereses

»Para lograr un equilibrio equitativo de intereses a tenor del párrafo 2 del artículo 10[17], los Estados de que se trate tendrán en cuenta todos los factores y circunstancias pertinentes, en particular

»a) El grado de riesgo de daño transfronterizo sensible y la disponibilidad de medios para impedir ese daño y minimizar ese riesgo o reparar el daño,

»b) La importancia de la actividad, teniendo en cuenta sus ventajas generales de carácter social, económico y técnico para el Estado de origen en relación con el daño potencial para los Estados que puedan resultar afectados,

»c) El riesgo de que se cause un daño sensible al medio ambiente y la disponibilidad de medios para prevenir ese daño y minimizar ese riesgo o rehabilitar el medio ambiente,

»d) La viabilidad económica de la actividad en relación con los costos de la prevención exigida por los Estados que puedan resultar

prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas (véase secc. C *infra*).

afectados y con la posibilidad de realizar la actividad en otro lugar o por otros medios o de sustituirla por otra actividad,

»e) El grado en que los Estados que puedan resultar afectados estén dispuestos a contribuir a los costos de la prevención,

»f) Las normas de protección que los Estados que puedan resultar afectados apliquen a la misma actividad o actividades comparables y las normas aplicadas en la práctica regional o internacional comparable

»Artículo 12[18] —Procedimientos aplicables a falta de notificación

»1 Si un Estado tiene motivos razonables para creer que una actividad que se proyecta o lleva a cabo en el territorio o de cualquier otro modo bajo la jurisdicción o el control de otro Estado puede entrañar un riesgo de causarle un daño transfronterizo sensible, podrá pedir al otro Estado que aplique la disposición del artículo 9[13]. La petición irá acompañada de una exposición documentada de sus motivos

»2 En caso de que el Estado de origen llegue, no obstante, a la conclusión de que no está obligado a hacer la notificación a que se refiere el artículo 9[13], informará de esa conclusión al otro Estado y le presentará una exposición documentada de las razones en que ella se funde. Si el otro Estado no está de acuerdo con esa conclusión, los dos Estados entablarán sin demora, a petición de ese otro Estado, consultas en la forma indicada en el artículo 10[17]

»3 Durante las consultas, el Estado de origen deberá, a petición de otro Estado, disponer la suspensión de la actividad de que se trate por un período de seis meses, salvo que se acuerde otra cosa

»Artículo 13[14] —Intercambio de información

»Mientras se lleve a cabo la actividad, los Estados de que se trata deberán intercambiar oportunamente toda la información pertinente para prevenir y minimizar el riesgo de causar un daño transfronterizo sensible

»[Artículo 15 —Información al público]

[Nota: el contenido del artículo 15 se refleja en el párrafo 2 del artículo 8[10]]

»Artículo 14[16] —Seguridad nacional y secretos industriales

»Los datos e informaciones vitales para la seguridad nacional del Estado de origen o para la protección de secretos industriales podrán no ser transmitidos, pero el Estado de origen cooperará de buena fe con los demás Estados de que se trate para proporcionar toda la información posible en atención a las circunstancias

»Artículo 15[20] —No discriminación

»Salvo que los Estados de que se trate hayan acordado otra cosa a los efectos de la protección de las personas, naturales o jurídicas, que puedan estar o estén expuestas al riesgo de que se les cause un daño transfronterizo sensible como resultado de actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de los presentes Estados, los Estados no discriminarán por motivos de nacionalidad o residencia o del lugar en que pueda ocurrir el daño, y darán a esas personas, de conformidad con sus ordenamientos jurídicos, acceso a los procedimientos judiciales o de otra índole para que soliciten protección u otra reparación apropiada

»[Artículo 21 —Naturaleza y cuantía de la indemnización u otra forma de reparación]

[Suprimido]

»[Artículo 22 —Factores para las negociaciones]

[Suprimido]

53. En su 2564.^a sesión, celebrada el 14 de agosto de 1998, la Comisión expresó su profundo reconocimiento por la contribución sobresaliente que los tres Relatores Especiales, Sr. Robert Q. Quentin-Baxter, Sr. Julio Barboza y Sr. Pemmaraju Sreenivasa Rao, habían hecho al tratamiento del tema con su investigación académica y su vasta experiencia, lo que había permitido a la Comisión llevar a feliz término su primera lectura de los proyectos de artículo sobre prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas.

54. En la misma sesión la Comisión decidió, con arreglo a lo previsto en los artículos 16 y 21 de su estatuto, transmitir a los gobiernos los proyectos de artículo enunciados en la sección C *infra* por intermedio del Secretario General, a fin de que formularan comentarios y observaciones, con la solicitud de que se presentaran al Secretario General esos comentarios y observaciones antes del 1.º de enero del año 2000.

C.—Texto de los proyectos de artículo sobre la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas) aprobados provisionalmente por la Comisión en primera lectura

1. TEXTO DE LOS PROYECTOS DE ARTICULO

55. A continuación se reproduce el texto de los proyectos de artículo aprobados provisionalmente por la Comisión en primera lectura.

RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR LAS CONSECUENCIAS PERJUDICIALES DE ACTOS NO PROHIBIDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL (PREVENCIÓN DE DAÑOS TRANSFRONTERIZOS CAUSADOS POR ACTIVIDADES PELIGROSAS)

Artículo 1.—Actividades a las que se aplican los presentes proyectos de artículo

Los presentes proyectos de artículo se aplican a las actividades no prohibidas por el derecho internacional que entrañan un riesgo de causar, por sus consecuencias físicas, un daño transfronterizo sensible.

»Artículo 16 —Solución de controversias

»Toda diferencia o controversia acerca de la interpretación o aplicación de los presentes artículos se resolverá prontamente por mutuo acuerdo aplicando los medios de solución pacífica que elijan las partes, tales como el arbitraje o el arreglo judicial. De no lograrse acuerdo a este respecto en un plazo de seis meses cualquiera de las partes interesadas podrá pedir que se nombre una comisión independiente e imparcial de determinación de los hechos. El informe de la comisión tendrá carácter de recomendación, que las partes considerarán de buena fe »

Artículo 2.—Términos empleados

A los efectos de los presentes artículos:

a) Se entiende por «riesgo de causar un daño transfronterizo sensible» el que implica pocas probabilidades de causar un daño catastrófico y muchas probabilidades de causar otro daño sensible;

b) Se entiende por «daño» el daño causado a las personas, los bienes o el medio ambiente;

c) Se entiende por «daño transfronterizo» el daño causado en el territorio o en otros lugares bajo la jurisdicción o el control de un Estado distinto del Estado de origen, tengan o no esos Estados fronteras comunes;

d) Se entiende por «Estado de origen» el Estado en cuyo territorio o bajo jurisdicción o control se realizan las actividades a las que se refiere el proyecto de artículo 1;

e) Se entiende por «Estado que puede resultar afectado» el Estado en cuyo territorio es probable que se produzca el daño transfronterizo sensible o que tiene jurisdicción o control sobre cualquier otro lugar en que es probable que se produzca ese daño.

Artículo 3.—Prevención

Los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas para prevenir o minimizar el riesgo de causar un daño transfronterizo sensible.

Artículo 4.—Cooperación

Los Estados de que se trata cooperarán de buena fe y recabarán, según sea necesario, la asistencia de una o más organizaciones internacionales para prevenir o minimizar el riesgo de causar un daño transfronterizo sensible.

Artículo 5.—Aplicación

Los Estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas o de otra índole necesarias, incluido el establecimiento de mecanismos de vigilancia apropiados, para aplicar las disposiciones de los presentes proyectos de artículo.

Artículo 6.—Relación con otras normas de derecho internacional

Las obligaciones establecidas en virtud de los presentes proyectos de artículo se entenderán sin perjuicio de cualesquiera otras obligaciones contraídas por los Estados de conformidad con los tratados pertinentes o con las normas consuetudinarias de derecho internacional.

Artículo 7.—Autorización

1. Se requerirá la autorización previa de un Estado para que se lleven a cabo en su territorio, o de cualquier otro modo bajo su jurisdicción o control, actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de los presentes proyectos de artículo, así como para cualquier cambio importante en una actividad así autorizada. Dicha autorización se requerirá también en el caso de que se proyecte efectuar algún cambio que pueda transformar alguna actividad en otra comprendida en el ámbito de aplicación de los presentes proyectos de artículo.

2. El requisito de la autorización que deba obtener el Estado será aplicable con respecto a todas las actividades preexistentes que queden comprendidas en el ámbito de aplicación de los presentes proyectos de artículo.

3. En el caso de que no se observen los requisitos de la autorización, el Estado que la otorga tomará todas las medidas que resulten apropiadas, incluida, cuando sea necesario, la revocación de la autorización.

Artículo 8.—Evaluación de los efectos

Cualquier decisión con respecto a la autorización de una actividad comprendida en el ámbito de aplicación de los presentes proyectos de artículo deberá basarse en una evaluación de los posibles daños transfronterizos causados por esa actividad.

Artículo 9.—Información al público

Los Estados deberán proporcionar, por los medios que consideren apropiados, al público que pueda resultar afectado por una actividad comprendida en el ámbito de aplicación de los presentes proyectos de artículo, la información pertinente relativa a esa actividad, el riesgo que entraña y los daños que puedan resultar de ella, y consultarán su opinión.

Artículo 10.—Notificación e información

1. Si la evaluación a que se refiere el artículo 8 indica que existe un riesgo de causar un daño transfronterizo sensible, el Estado de origen deberá, antes de que se tome una decisión sobre la autorización de la actividad, hacer la oportuna notificación al respecto a los Estados que pueden resultar afectados y les transmitirá la información técnica disponible y demás información pertinente en que se base la evaluación.

2. Los Estados que pueden resultar afectados deberán presentar su respuesta dentro de un plazo razonable.

Artículo 11.—Consultas sobre las medidas preventivas

1. Los Estados de que se trata celebrarán consultas, a petición de cualquiera de ellos, con miras a encontrar soluciones aceptables respecto de las medidas que hayan de adoptarse para prevenir o minimizar el riesgo de daño transfronterizo sensible.

2. Los Estados deberán buscar soluciones basadas en un equilibrio equitativo de intereses a la luz del artículo 12.

3. Si las consultas a que se refiere el párrafo 1 no conducen a una solución acordada, el Estado de origen, si decide autorizar que la actividad se realice, deberá tener en cuenta los intereses de los Estados que puedan resultar afectados, sin perjuicio de los derechos de cualquier Estado que pueda resultar afectado.

Artículo 12.—Factores de un equilibrio equitativo de intereses

Para lograr un equilibrio equitativo de intereses a tenor del párrafo 2 del artículo 11, los Estados de que se trate tendrán en cuenta todos los factores y circunstancias pertinentes, en particular:

a) El grado de riesgo de daño transfronterizo sensible y la disponibilidad de medios para prevenir ese daño o minimizar ese riesgo o reparar el daño;

b) La importancia de la actividad, teniendo en cuenta sus ventajas generales de carácter social, económico y técnico para el Estado de origen en relación con el daño potencial para los Estados que puedan resultar afectados;

c) El riesgo de que se cause un daño sensible al medio ambiente y la disponibilidad de medios para prevenir ese daño o minimizar ese riesgo o rehabilitar el medio ambiente;

d) El grado en que los Estados de origen y, cuando corresponda, los Estados que puedan resultar afectados estén dispuestos a sufragar los costos de la prevención;

e) La viabilidad económica de la actividad en relación con los costos de la prevención y con la posibilidad de realizar la actividad en otro lugar o por otros medios o de sustituirla por otra actividad;

f) Las normas de prevención que los Estados que pueden resultar afectados apliquen a la misma actividad o actividades comparables y las normas aplicadas en la práctica regional o internacional comparable.

Artículo 13.—Procedimientos aplicables a falta de notificación

1. Si un Estado tiene motivos razonables para creer que una actividad que se proyecta o lleva a cabo en el territorio o de cualquier otro modo bajo la jurisdicción o el control de otro Estado puede entrañar un riesgo de causarle un daño transfronterizo sensible, podrá pedir al otro Estado que se aplique la disposición del artículo 10. La petición irá acompañada de una exposición documentada de sus motivos.

2. En caso de que el Estado de origen llegue, no obstante, a la conclusión de que no está obligado a hacer la notificación a que se refiere el artículo 10, informará de esa conclusión al otro Estado dentro de un plazo razonable y le presentará una exposición documentada de las razones en que ella se funde. Si el otro Estado no está de acuerdo con esa conclusión, los dos Estados entablarán sin demora, a petición de ese otro Estado, consultas en la forma indicada en el artículo 11.

3. Durante las consultas, el Estado de origen deberá, a petición del otro Estado, disponer las medidas adecuadas y viables para minimizar el riesgo y, cuando proceda, suspender la actividad de que se trate por un período de seis meses, salvo que se acuerde otra cosa.

Artículo 14.—Intercambio de información

Mientras se lleve a cabo la actividad, los Estados de que se trata deberán intercambiar oportunamente toda la información pertinente disponible para prevenir o minimizar el riesgo de daño transfronterizo sensible.

Artículo 15.—Seguridad nacional y secretos industriales

Los datos e informaciones vitales para la seguridad nacional del Estado de origen o para la protección de secretos industriales podrán no ser transmitidos, pero el Estado de origen cooperará de buena fe con los demás Estados de que se trate para proporcionar toda la información posible en atención a las circunstancias.

Artículo 16.—No discriminación

Salvo que los Estados de que se trate hayan acordado otra cosa a los efectos de la protección de las personas, naturales o jurídicas, que puedan estar o estén expuestas al riesgo de que se les cause un daño transfronterizo sensible como resultado de actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de los presentes proyectos de artículo, los Estados no discriminarán por motivos de nacionalidad o residencia o de lugar en que pueda ocurrir el daño, y darán a esas personas, de conformidad con sus ordenamientos jurídicos, acceso a los procedimientos judiciales o de otra índole para que soliciten protección u otra reparación apropiada.

Artículo 17.—Solución de controversias

1. Toda controversia acerca de la interpretación o aplicación de los presentes proyectos de artículo se resolverá prontamente

mediante los medios de solución pacífica que elijan de mutuo acuerdo las partes, incluido el sometimiento de la controversia a la mediación, la conciliación, el arbitraje o el arreglo judicial.

2. De no lograr acuerdo a este respecto en un plazo de seis meses, cualquiera de las partes interesadas podrá pedir que se nombre una comisión independiente e imparcial de determinación de los hechos. El informe de la comisión tendrá carácter de recomendación, que las partes considerarán de buena fe.

2. TEXTO DE LOS PROYECTOS DE ARTICULO CON COMENTARIOS

RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR LAS CONSECUENCIAS PERJUDICIALES DE ACTOS NO PROHIBIDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL (PREVENCIÓN DE DAÑOS TRANSFRONTERIZOS CAUSADOS POR ACTIVIDADES PELIGROSAS)

Comentario general

1) Los proyectos de artículo tratan de la prevención en el contexto de la autorización y reglamentación de actividades peligrosas que plantean un riesgo significativo de daño transfronterizo. La prevención en este sentido, como procedimiento o como deber, trata de la fase anterior a la situación en que ya se ha producido efectivamente un daño o perjuicio importantes que requieren que los Estados interesados apliquen medidas de compensación o corrección y que a menudo abarca cuestiones relativas a la responsabilidad.

2) El concepto de prevención ha asumido gran importancia y actualidad. Se hace hincapié en el deber de prevenir, por oposición a la obligación de reparar, remediar o compensar y esto tiene varios aspectos importantes. La política preferida debe ser la prevención, ya que la compensación en el caso de daño por lo general no restablece la situación prevaleciente antes del suceso o accidente. El cumplimiento del deber de prevenir o aplicar la debida diligencia adquiere mayor pertinencia a medida que aumentan constantemente los conocimientos sobre las operaciones peligrosas, los materiales utilizados y los procesos para realizarlas. Desde un punto de vista jurídico, la mayor capacidad para determinar la cadena causativa, es decir, la vinculación física entre la causa (actividad) y el efecto (daño), y hasta los eslabones intermedios en esa cadena de causas, hace también imperativo que los que realizan actividades peligrosas adopten todas las medidas necesarias para prevenir el daño. En todo caso, la política de prevención es mejor que la de curación.

3) La prevención del daño transfronterizo dimanante de actividades peligrosas es un objetivo en el que hace mucho hincapié el principio 2 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Declaración de Río)¹³, aspecto que la CIJ confirmó en su opinión consultiva de 8 de julio de 1996 en el asunto *Licéité de la*

¹³ Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992 (publicación de las Naciones Unidas, n° de venta S 93 I 8 y correcciones), vol I *Resoluciones aprobadas por la Conferencia*, resolución 1, anexo I

*menace ou de l'emploi d'armes nucléaires*¹⁴, declarando que formaba parte del cuerpo del derecho internacional.

4) Por consiguiente, el Grupo de Expertos en Derecho Ambiental de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland) destacó acertadamente la cuestión de la prevención. El texto del artículo 10 de los Principios Jurídicos para la Protección del Medio Ambiente y un Desarrollo Duradero recomendado por la Comisión Brundtland sobre los recursos naturales transfronterizos y la interferencia en el medio ambiente es el siguiente:

Los Estados, sin perjuicio de los principios establecidos en los artículos 11 y 12, impedirán o reducirán toda interferencia ambiental transfronteriza o peligro considerable de esa interferencia que cause un daño considerable, es decir, un daño que no sea menor o insignificante¹⁵

Cabe destacar, además, que el principio bien establecido de la prevención se puso de relieve en el laudo arbitral relativo al asunto de la *Fonderie de Trail (Trail Smelter)*¹⁶ y fue reiterado no sólo en el principio 21 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Declaración de Estocolmo)¹⁷ y en el principio 2 de la Declaración de Río, sino también en la resolución 2995 (XXVII) de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 1972, relativa a la cooperación entre los Estados en el campo del medio ambiente. Este principio se refleja también en el principio 3 de los Principios de conducta en el campo del medio ambiente para orientar a los Estados en la conservación y la utilización armoniosa de los recursos naturales compartidos por dos o más Estados, aprobados por el Consejo de Administración del PNUMA en 1978, en el cual se estipulaba que los Estados deberían evitar

en la máxima medida posible y [reducir] al mínimo posible los efectos ambientales perjudiciales fuera de su jurisdicción de modo de proteger el medio, en particular cuando dicha utilización sea susceptible de

a) causar un perjuicio al medio ambiente que pueda tener repercusiones sobre la utilización de ese recurso por otro Estado que lo comparte,

b) comprometer la conservación de un recurso renovable compartido,

c) poner en peligro la salud de la población de otro Estado¹⁸

¹⁴ Opinión consultiva, *C I J Recueil* 1996, págs. 226 y ss., en particular pág. 242, párr. 29 Véase también *Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1992-1996* (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta S 97 V 7), pág. 111

¹⁵ *Environmental Protection and Sustainable Development Legal Principles and Recommendations*, Londres, Dordrecht, Boston, Graham and Trotman/Martinus Nijhoff, 1987, pág. 75 También se señaló que la obligación de no causar daños importantes podía derivarse de la práctica no convencional de los Estados, así como de las declaraciones formuladas individualmente y/o colectivamente por los Estados Véase J. G. Lammers, *Pollution of International Watercourses*, La Haya, Martinus Nijhoff, 1984, págs. 346 y 347 y 374 a 376

¹⁶ Naciones Unidas, *Recueil des sentences arbitrales*, vol. III (n.º de venta 1949 V 2), págs. 1905 y ss.

¹⁷ *Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972* (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta S 73 II A 14), primera parte, cap. I

¹⁸ PNUMA, *Derecho ambiental, líneas directrices y principios*, n.º 2, *Recursos naturales compartidos*, Nairobi, 1978 Una referencia a otras fuentes donde se refleja el principio de la prevención figura en *Environmental Protection and Sustainable Development*. (nota 15 *supra*), págs. 75 a 80

5) La prevención de los daños transfronterizos al medio ambiente, a las personas y a los bienes se ha aceptado como un principio importante de muchos tratados multilaterales relativos a la protección del medio ambiente, a los accidentes nucleares, a los objetos espaciales, a los cursos de agua internacionales, a la ordenación de los residuos peligrosos y a la prevención de la contaminación marina. También se ha aceptado en varios instrumentos, como el Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia, el Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, el Convenio sobre la protección y utilización de cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales, y la Convención sobre los efectos transfronterizos de los accidentes industriales.

Artículo 1.—Actividades a las que se aplican los presentes proyectos de artículo

Los presentes proyectos de artículo se aplican a las actividades no prohibidas por el derecho internacional que entrañan un riesgo de causar, por sus consecuencias físicas, un daño transfronterizo sensible.

Comentario

1) El artículo 1 limita el ámbito de aplicación de los artículos a las actividades no prohibidas por el derecho internacional y que incluyan un riesgo de causar un daño transfronterizo importante por sus consecuencias físicas. El apartado c del artículo 2 limita además el ámbito de aplicación de los artículos a aquellas actividades realizadas en el territorio de un Estado o de alguna otra manera bajo su jurisdicción o control. Dado que los artículos tienen carácter general y residual, no se ha intentado en esta fase especificar las actividades a que se aplican. La Comisión tuvo diversas razones para apoyar esta conclusión. Según algunos miembros, cualquier lista de actividades no podría ser exhaustiva y además habría que cambiarla periódicamente con la evolución de la tecnología. Por otra parte, dejando de lado algunas actividades ultrapeligrosas que en su mayoría son objeto de una reglamentación especial, por ejemplo las actividades en materia nuclear o en el espacio ultraterrestre, el riesgo que entraña una actividad depende primordialmente de una aplicación determinada del contexto específico y del modo de operación. Una lista genérica no podría abarcar estos elementos. Otros miembros de la Comisión, en cambio, se inclinaron más a la idea de una lista de actividades, pero opinaban que sería prematuro en esta fase elaborar la lista hasta que se fijara más claramente la forma, el ámbito y el contenido de los artículos. Además, a su juicio, la elaboración de tal lista era una labor más propia de los expertos competentes en el marco de una conferencia diplomática convocada para aprobar los artículos como convención.

2) La definición del ámbito de actividades establecida en el artículo 1 contiene ahora cuatro criterios.

3) El *primer criterio* se refiere al título del tema, a saber, que los artículos se aplican a «actividades no pro-

hibidas por el derecho internacional», ya sea que la prohibición se plantee en relación con la realización de la actividad o en razón de sus efectos prohibidos.

4) El *segundo criterio*, enunciado en la definición de Estado de origen en el apartado *d* del artículo 2, es que las actividades a que son aplicables las medidas preventivas se realicen en el territorio de un Estado o de alguna otra manera bajo su jurisdicción o control. Tres conceptos se utilizan en estos criterios: «territorio», «jurisdicción» y «control». Aunque la expresión «jurisdicción o control de un Estado» es la fórmula más comúnmente usada en algunos instrumentos¹⁹, la Comisión considera útil mencionar también el concepto de «territorio» para subrayar la importancia del vínculo territorial, cuando existe ese vínculo, entre las actividades a que se refieren estos artículos y un Estado.

5) El uso del término «territorio» en el artículo 1 se deriva de preocupaciones acerca de una posible incertidumbre en el derecho internacional contemporáneo en cuanto a la medida en que un Estado puede ejercer jurisdicción extraterritorial con respecto a ciertas actividades. A juicio de la Comisión, a los fines de estos artículos, «jurisdicción territorial» es el criterio dominante. En consecuencia, cuando una actividad se produce dentro del «territorio» de un Estado, ese Estado debe cumplir las obligaciones relativas a las medidas preventivas. El «territorio» se toma pues como prueba concluyente de jurisdicción. Por consiguiente, en casos de conflicto de jurisdicción sobre una actividad incluida en estos artículos, prevalece la jurisdicción de base territorial. Sin embargo, la Comisión tiene presente que hay situaciones en las que un Estado, con arreglo al derecho internacional, ha de ceder su jurisdicción dentro de su territorio a otro Estado. El ejemplo primordial de tal situación es el paso inocente de un buque extranjero por el mar territorial o las aguas territoriales. En tales situaciones, si la actividad que origina un daño transfronterizo sensible procede del buque extranjero, es el Estado del pabellón y no el Estado territorial el que debe cumplir las disposiciones de los presentes artículos.

6) El concepto de «territorio» a efectos de estos artículos es limitado y por eso se utilizan también los conceptos de «jurisdicción» y «control». La expresión «jurisdicción» de un Estado abarca, además de las actividades realizadas dentro del territorio de un Estado, las actividades sobre las cuales, en virtud del derecho internacional, un Estado está autorizado a ejercer su competencia y autoridad. La Comisión es consciente de que las cuestiones relacionadas con la determinación de la jurisdicción son complejas y a veces constituyen el núcleo de una controversia. En este artículo no se pretende ciertamente resolver todas las cuestiones de conflictos de jurisdicción.

7) Debido en ocasiones a la localización de la actividad, no hay vínculo territorial entre un Estado y las actividades, como, por ejemplo, las que tienen lugar en el

espacio ultraterrestre o en alta mar. El ejemplo más común es la jurisdicción del Estado del pabellón sobre un buque. Las Convenciones de Ginebra sobre el derecho del mar y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar han abarcado muchas capacidades jurisdiccionales del Estado del pabellón.

8) Las actividades pueden realizarse también en lugares donde en virtud del derecho internacional hay más de un Estado autorizado a ejercer jurisdicciones particulares que no son incompatibles. Las esferas más comunes en que hay jurisdicciones funcionales mixtas son la navegación y el paso por el mar territorial, la zona contigua y las zonas económicas exclusivas. En tales circunstancias, el Estado que está autorizado a ejercer su jurisdicción sobre la actividad comprendida en este tema debe, por supuesto, cumplir las disposiciones de estos artículos.

9) En casos de jurisdicción concurrente de más de un Estado sobre las actividades comprendidas en estos artículos, los Estados, individualmente y cuando proceda conjuntamente, cumplirán las disposiciones de estos artículos.

10) La función del concepto de «control» en derecho internacional, que es atribuir ciertas consecuencias jurídicas a un Estado cuya jurisdicción sobre determinadas actividades o hechos no es reconocida por el derecho internacional, abarca situaciones en las que un Estado ejerce jurisdicción *de facto* aun cuando carezca de jurisdicción *de jure*, como en casos de intervención, ocupación y anexión ilícita que no han sido reconocidos en el derecho internacional. A este respecto se hizo referencia a la opinión consultiva de la CIJ en el asunto *Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité*²⁰. En ese asunto la Corte, tras considerar a Sudáfrica responsable de haber creado y mantenido una situación que la Corte declaró ilegal y considerar que Sudáfrica estaba obligada a retirar su administración de Namibia, atribuyó no obstante ciertas consecuencias legales al control *de facto* de Sudáfrica sobre Namibia. La Corte declaró lo siguiente:

El hecho de que Sudáfrica no tenga ya ningún título para administrar el Territorio no la libera de las obligaciones y responsabilidades que el derecho internacional le impone para con otros Estados y que están relacionadas con el ejercicio de sus poderes en este Territorio. Es el control material sobre un territorio y no la soberanía o la legitimidad del título lo que constituye el fundamento de la responsabilidad del Estado por actos que afecten a otros Estados²¹.

11) El concepto de control puede utilizarse también en casos de intervención para atribuir ciertas obligaciones a un Estado que ejerce control por contraposición a jurisdicción. La intervención en este caso se refiere a un control efectivo a corto plazo por un Estado sobre hechos o actividades sometidos a la jurisdicción de otro Estado. A juicio de la Comisión, en tales casos, si el Estado juris-

¹⁹ Véanse, por ejemplo, el principio 21 de la Declaración de Estocolmo (nota 17 *supra*), el párrafo 2 del artículo 194 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el principio 2 de la Declaración de Río (nota 13 *supra*), y el artículo 3 del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

²⁰ Opinión consultiva, *CIJ Recueil 1971*, págs. 16 y ss. Véase también *Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991* (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta S 92 V 5), pág. 107.

²¹ *CIJ Recueil 1971*, pág. 54, párr. 118.

diccional demuestra que había sido privado efectivamente del ejercicio de su jurisdicción sobre las actividades comprendidas en estos artículos, el Estado que ejerce el control será considerado responsable de cumplir las obligaciones que imponen estos artículos.

12) El *tercer criterio* es que las actividades comprendidas en estos artículos deben entrañar un «riesgo de causar un daño transfronterizo sensible». La expresión se define en el artículo 2 (véase el comentario al artículo 2). Las palabras «daño transfronterizo» tienen por objeto excluir las actividades que sólo causan daño en el territorio del Estado dentro del cual se realizan, sin causar daños a cualquier otro Estado. El término «sensible» se examina en el comentario al artículo 2.

13) Pasando al elemento de «riesgo», éste, por definición, se refiere a posibilidades futuras y, por tanto, entraña un elemento de evaluación o estimación del riesgo. El mero hecho de que puedan derivarse daños de una actividad no significa que esa actividad entrañe un riesgo si ningún observador debidamente informado tuvo o pudo tener conciencia de ese riesgo cuando se realizaba la actividad. Por otra parte, una actividad puede entrañar un riesgo de causar un daño transfronterizo sensible aun cuando los encargados de realizar la actividad subestimen el riesgo o incluso no tengan conciencia de él. Por lo tanto, la noción de riesgo se interpreta objetivamente, es decir, como apreciación de un posible daño resultante de una actividad, apreciación que un observador debidamente informado haya hecho o hubiera debido hacer.

14) En este contexto, hay que destacar que estos artículos en conjunto tienen un efecto y aplicación continuados, es decir, a menos que se indique otra cosa, se aplican a actividades realizadas desde un momento hasta otro. Por tanto, es posible que una actividad que inicialmente no entrañara un riesgo (en el sentido explicado en el párrafo 13), puedan pasar a tenerlo como consecuencia de algún acontecimiento o novedad. Por ejemplo, un embalse perfectamente seguro puede resultar peligroso como consecuencia de un sismo, en cuyo caso seguir utilizándolo sería una actividad que entrañaría un riesgo. También, el adelanto de los conocimientos científicos podría revelar una debilidad propia de una estructura o material que podría llevar consigo el riesgo de fallo o de derrumbe, en cuyo caso los presentes artículos podrían pasar a ser aplicables a la actividad de que se trate a tenor de los mismos.

15) El *cuarto criterio* es que el daño transfronterizo sensible ha de haber sido causado por las «consecuencias físicas» de esas actividades. La Comisión convino en que con el fin de dar a este tema un alcance manejable debía excluirse el daño transfronterizo que podían causar las políticas de los Estados en la esfera monetaria, socioeconómica o en esferas similares. La Comisión estima que la manera más eficaz de limitar el ámbito de aplicación de estos artículos es exigir que estas actividades tengan consecuencias físicas transfronterizas que a su vez provoquen un daño sensible.

16) El vínculo físico debe conectar la actividad con sus efectos transfronterizos. Esto implica una conexión de un tipo muy concreto, una consecuencia que surja o pueda surgir de la naturaleza misma de la actividad o situación de que se trate, en respuesta a una ley natural. Ello

implica que las actividades comprendidas en estos artículos deben tener una cualidad física y que las consecuencias deben derivarse de esa cualidad, no de una decisión de política. Así, el almacenamiento de armas no entraña la consecuencia de que las armas almacenadas se dediquen a un uso beligerante. Sin embargo, este almacenamiento puede caracterizarse como actividad que, debido a las propiedades explosivas o incendiarias de los materiales almacenados, entraña un riesgo inherente de accidente desastroso.

Artículo 2.—*Términos empleados*

A los efectos de los presentes artículos:

a) Se entiende por «riesgo de causar un daño transfronterizo sensible» el que implica pocas probabilidades de causar un daño catastrófico y muchas probabilidades de causar otro daño sensible;

b) Se entiende por «daño» el daño causado a las personas, los bienes o el medio ambiente;

c) Se entiende por «daño transfronterizo» el daño causado en el territorio o en otros lugares bajo la jurisdicción o el control de un Estado distinto del Estado de origen, tengan o no esos Estados fronteras comunes;

d) Se entiende por «Estado de origen» el Estado en cuyo territorio o bajo jurisdicción o control se realizan las actividades a las que se refiere el proyecto de artículo 1;

e) Se entiende por «Estado que puede resultar afectado» el Estado en cuyo territorio es probable que se produzca el daño transfronterizo sensible o que tiene jurisdicción o control sobre cualquier otro lugar en que es probable que se produzca ese daño.

Comentario

1) El *apartado a* define el concepto de «riesgo de causar un daño transfronterizo sensible» como el que implica pocas probabilidades de causar un daño catastrófico y muchas probabilidades de causar otro daño sensible. La Comisión estima que, en lugar de definir por separado los conceptos de «riesgo» y «daño», resulta más conveniente definir la expresión «riesgo de causar un daño transfronterizo sensible», por la mutua relación existente entre «riesgo» y «daño» y por la relación entre esos dos términos y el adjetivo «sensible».

2) A los efectos de los presentes artículos el «riesgo de causar un daño transfronterizo sensible» se refiere al efecto combinado de la probabilidad de que se produzca un accidente y a la magnitud de los efectos perjudiciales. Por consiguiente, es ese efecto combinado de «riesgo» y «daño» el que determina el límite. A este respecto, la Comisión se inspiró en el Código de conducta sobre contaminación accidental de aguas interiores transfronterizas²², aprobado por la CEPE en 1990. De conformidad

²² Publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: S.90.II.E.28, doc. E/ECE/1225-ECE/ENVWA/16.

con el apartado *f* de la sección I, «se entiende por riesgo el efecto combinado de la probabilidad de que se produzca un acontecimiento indeseable y de su magnitud». La Comisión opina que una definición basada en el efecto combinado de «riesgo» y «daño» es más conveniente para estos artículos, y que el efecto combinado debe alcanzar un nivel que se considere sensible. La opinión dominante en la Comisión es que las obligaciones de prevención impuestas a los Estados no sólo deben ser razonables sino estar también suficientemente limitadas, a fin de no imponer tales obligaciones con respecto a casi todas las actividades, dado que las que se examinan no están prohibidas por el derecho internacional. La finalidad es encontrar un equilibrio entre los intereses de los Estados interesados.

3) La definición del párrafo anterior tiene en cuenta una serie de relaciones comprendidas entre el «riesgo» y el «daño» que alcanzarían todas el nivel de «sensibles». La definición determina los dos polos entre los que quedarán comprendidas las actividades previstas en esos artículos. Un polo es el de las pocas probabilidades de causar un daño catastrófico. Esta es normalmente la característica de las actividades sumamente peligrosas. El otro polo es el de las muchas posibilidades de causar otro daño sensible. Comprende las actividades que tienen muchas probabilidades de causar un daño que, aunque no sea catastrófico, no por ello deja de ser sensible. Sin embargo, excluiría las actividades en que hubiera muy pocas probabilidades de causar daños transfronterizos sensibles. La palabra «implica» en el apartado *a* tiene por objeto subrayar la intención de que la definición ofrece una gama dentro de la cual quedarán comprendidas las actividades previstas en el artículo.

4) Por lo que se refiere al significado de la palabra «sensible» (*significant*), la Comisión tiene conciencia de que no carece de ambigüedades y de que habrá que precisarla en cada caso concreto, lo que exigirá más consideraciones de hecho que decisiones jurídicas. Hay que entender que «sensible» es algo más que «detectable» pero sin que llegue a alcanzar el nivel de «grave» o «sustancial». El daño debe producir un efecto realmente perjudicial en esferas como, por ejemplo, la salud humana, la industria, los bienes, el medio ambiente o la agricultura de otros Estados. Esos efectos perjudiciales deben poder medirse con criterios reales y objetivos.

5) La unidad ecológica del planeta no coincide con sus fronteras políticas. Las actividades legítimas que realizan los Estados dentro de sus propios territorios tienen repercusiones en los demás Estados. Esos efectos mutuos, mientras no alcancen el nivel de «sensibles», se consideran tolerables. Teniendo en cuenta que las obligaciones impuestas a los Estados por esos artículos tratan de actividades no prohibidas por el derecho internacional, el límite de la intolerancia del daño no puede situarse por debajo de lo «sensible».

6) El concepto de límite se refleja en el laudo arbitral sobre el caso de la *Fonderie de Trail*, que habla de «consecuencias graves»²³, así como en el tribunal del asunto

del *Lac Lanoux*²⁴, que emplea el término «gravemente». Algunas convenciones han utilizado también para fijar un límite las palabras «sensible» (*significant*), «grave» (*serious*) o «sustancial» (*substantial*)²⁵. La palabra «sensible» (*significant*) se ha utilizado asimismo en otros instrumentos jurídicos y leyes nacionales²⁶.

7) La Comisión opina también que la palabra «sensible», aunque determinada por criterios reales y objetivos, implica igualmente un juicio de valor que depende de las circunstancias del caso y del momento en que se formule ese juicio. Por ejemplo, una privación determinada, en un momento determinado, podría no considerarse «sensible» porque, en ese momento, los conocimientos científicos o la valoración humana de un recurso determinado no hubieran llegado a un punto en que se atribuyera mucha utilidad a ese recurso concreto. Sin embargo, algún tiempo más tarde esa opinión podría cambiar y el mismo daño ser considerado «sensible».

8) El apartado *b* no requiere explicación ya que a los fines del presente proyecto de artículos «daño» abarcaría el daño causado a personas, bienes o el medio ambiente.

9) El apartado *c* define el «daño transfronterizo» como el daño causado en el territorio o en lugares bajo la jurisdicción o el control de un Estado distintos del Estado de origen, tengan o no esos Estados fronteras comunes. Esa definición incluye, además del caso típico de una actividad realizada dentro de un Estado que produce efectos perjudiciales en otro, las actividades realizadas bajo la jurisdicción o el control de un Estado, por ejemplo en alta mar, que producen efectos en el territorio de otro

²⁴ *Ibid.*, vol. XII (n.º de venta 63 V 3), págs. 281 y ss.

²⁵ Véanse, por ejemplo, el párrafo 2 del artículo 4 de la Convención para regular las actividades relacionadas con los recursos minerales antárticos, los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, y el apartado *b* de la sección I del Código de conducta sobre contaminación accidental de aguas interiores transfronterizas (nota 22 *supra*).

²⁶ Véanse, por ejemplo, los párrafos 1 y 2 de la resolución 2995 (XXVII) de la Asamblea General relativa a la cooperación entre los Estados en el campo del medio ambiente, el párrafo 6 de la recomendación C(74)224 del Consejo de la OCDE sobre la contaminación transfronteriza (anexo, sección E), aprobada el 14 de noviembre de 1974 (OCDE, *L'OCDE et l'environnement*, París, 1986, pág. 167), el artículo X de las Normas de Helsinki sobre el uso de las aguas de los ríos internacionales [Asociación de Derecho Internacional, *Report of the Fifty-Second Conference, Helsinki, 1966*, Londres, 1967, págs. 484 y ss., reproducidas en parte en *Anuario* 1974, vol. II (segunda parte), págs. 389 y ss., doc. A/CN.4/274, párr. 405], y el artículo 5 del proyecto de convención sobre el uso industrial y agrícola de los ríos y lagos internacionales, preparado por el Comité Jurídico Interamericano en 1965 [OEA, *Ríos y lagos internacionales (utilización para fines agrícolas e industriales)*, 4.ª ed. rev. (OEA/Ser. I/VI, CIJ-75 Rev. 2, Washington D. C., 1971), pag. 132].

Véase también el Memorando de intenciones entre los Estados Unidos y el Canadá sobre la contaminación atmosférica transfronteriza, de 5 de agosto de 1980 (*United States Treaties and Other International Agreements, Treaties and Other International Acts Series*, Washington D. C., United States Government Printing Office, 1981, n.º 9856), y el artículo 7 del Acuerdo de Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza, firmado el 14 de agosto de 1983 entre México y los Estados Unidos de América (*ILM*, vol. XXII, n.º 5, septiembre de 1983), pag. 1025.

Los Estados Unidos han utilizado asimismo la palabra *significant* en su derecho nacional sobre cuestiones ambientales [véase *Restatement of the Law, Third, Foreign Relations Law of the United States*, vol. 2, St. Paul (Minnesota), American Law Institute Publishers, 1987, págs. 111 y 112].

²³ Naciones Unidas, *Recueil des sentences arbitrales* (nota 16 *supra*), pag. 1965.

Estado o en lugares bajo su jurisdicción o control. Comprende, por ejemplo, los efectos perjudiciales en buques o plataformas de otros Estados que se encuentren igualmente en alta mar, e incluirá asimismo las actividades realizadas en el territorio de un Estado que tengan consecuencias perjudiciales en, por ejemplo, los buques o plataformas de otro Estado en alta mar. La Comisión no puede prever todas las formas futuras posibles de «daño transfronterizo». No obstante, quiere dejar bien sentado que su intención es que se pueda trazar una línea y distinguir claramente entre el Estado al que sea atribuible la actividad comprendida en esos artículos y el Estado que sufra los efectos perjudiciales. Las líneas de separación son las fronteras territoriales, las fronteras jurisdiccionales y las fronteras de control.

10) En el *apartado d* se introduce la expresión «Estado de origen» para referirse al Estado en cuyo territorio, o de alguna otra manera bajo su jurisdicción o control, se realicen las actividades a que se refiere el artículo 1 (véase el comentario al artículo 1, párrs. 4 a 11).

11) En el *apartado e* se define el término «Estado que puede resultar afectado» como el Estado en cuyo territorio o en otros lugares sujetos a su jurisdicción y control en que es probable que se produzca el daño transfronterizo sensible. Puede haber más de un Estado probablemente afectado con respecto a una actividad determinada.

Artículo 3.—Prevención

Los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas para prevenir y minimizar el riesgo de causar un daño transfronterizo sensible.

Comentario

1) El artículo 3 se basa en el principio fundamental *sic utere tuo ut alienum non laedas*, reflejado en el principio 21 de la Declaración de Estocolmo²⁷, cuyo texto es el siguiente:

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional

2) Pero las limitaciones de la libertad de los Estados reflejadas en el principio 21 de la Declaración de Estocolmo se concentran más en el artículo 3 y en los siguientes.

3) Este artículo, junto con el artículo 4, constituye el fundamento básico de los artículos sobre prevención. Los artículos establecen las obligaciones más concretas de los Estados en cuanto a prevenir o minimizar los daños transfronterizos sensibles. El artículo es una declaración

de principio. Dispone que los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas para prevenir o minimizar el riesgo de causar un daño transfronterizo sensible. La palabra «medidas» hace referencia a todas las medidas y disposiciones que se especifican en los artículos sobre prevención y reducción al mínimo de los daños transfronterizos.

4) Como principio general, la obligación enunciada en el artículo 3 de prevenir o minimizar el riesgo se aplica únicamente a aquellas actividades que entrañan el riesgo de causar un daño transfronterizo sensible, según las definiciones dadas en el artículo 2. En general, en el contexto de la prevención, un Estado no asume el riesgo que puedan tener para otros Estados las consecuencias imprevisibles de actividades no prohibidas por el derecho internacional que se realicen en su territorio o en otro lugar sujeto a su jurisdicción o control. Por otra parte, la obligación de «adoptar medidas apropiadas para prevenir o minimizar» el riesgo de causar un daño no puede limitarse a actividades de las que ya se ha determinado adecuadamente que entrañan tal riesgo. Esa obligación comprende la adopción de medidas apropiadas para identificar las actividades que entrañan tal riesgo y tiene carácter permanente.

5) Por consiguiente, este artículo sienta el principio de la prevención que concierne a todo Estado respecto de las actividades comprendidas en el artículo 1. Entre las modalidades por las cuales el Estado de origen puede cumplir las obligaciones de prevención establecidas figuran, por ejemplo, las medidas legislativas, administrativas o de otra índole necesarias para llevar a la práctica las leyes, las decisiones administrativas y las políticas que el Estado haya aprobado (véanse el artículo 5 y su comentario).

6) La obligación de los Estados de tomar medidas preventivas o medidas para aminorar el riesgo está regida por la diligencia debida, que requiere que los Estados tomen determinadas medidas unilaterales para prevenir o aminorar el riesgo de daño transfronterizo sensible. La obligación que impone este artículo no es una obligación de resultado. La conducta del Estado es la que determinará si éste ha cumplido su obligación con arreglo a los presentes artículos.

7) La obligación de observar la diligencia debida como base de la norma de la protección del medio ambiente contra los daños puede deducirse de varias convenciones internacionales²⁸, así como de las resoluciones e informes de conferencias y organizaciones internacionales²⁹.

²⁸ Véanse, por ejemplo, el párrafo 1 del artículo 194 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los artículos I y II y el párrafo 2 del artículo VII del Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, el artículo 2 del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, el párrafo 5 del artículo 7 de la Convención para regular las actividades relacionadas con los recursos minerales antárticos, el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio sobre la evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, y el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio sobre la protección y utilización de cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales

²⁹ Véanse el principio 21 de la Carta Mundial de la Naturaleza (resolución 37/7 de la Asamblea General, anexo) y el principio VI del proyecto relativo a la modificación meteorológica, preparado por la OMM y el PNUMA (M. L. Nash, *Digest of United States Practice in International Law*, Washington D C, United States Printing Office, 1978, pag. 1205)

²⁷ Véase la nota 17 *supra*

La obligación de diligencia debida se debatió recientemente en una controversia entre la República Federal de Alemania y Suiza relativa a la contaminación del Rin por Sandoz; el Gobierno de Suiza reconoció su responsabilidad por falta de diligencia debida para prevenir el accidente mediante la reglamentación adecuada de sus industrias farmacéuticas³⁰.

8) En el asunto del «Alabama», el tribunal examinó dos definiciones diferentes de diligencia debida presentadas por las partes. Los Estados Unidos definieron la diligencia debida en los términos siguientes:

[Una] diligencia proporcional a la magnitud del tema y a la dignidad y fuerza de la Potencia que ha de ejercerla, una diligencia que mediante el uso de la vigilancia activa y de todos los demás medios en poder del neutral, a través de todas las etapas de la transacción, impedirá que su suelo sea violado. Una diligencia que de igual manera disuadirá a los hombres de cometer actos de guerra en el suelo del neutral contra su voluntad³¹.

9) Gran Bretaña definió la diligencia debida como «el cuidado que los gobiernos ordinariamente aplican en sus asuntos internos»³². Parece que el tribunal hizo suya la definición más amplia de la norma de diligencia debida presentada por los Estados Unidos y expresó su preocupación acerca de la «norma nacional» de diligencia debida presentada por Gran Bretaña. El tribunal declaró que

la posición inglesa parecía también reducir los deberes internacionales de un gobierno al ejercicio de las facultades restrictivas que le confería el derecho interno y pasar por alto la obligación del neutral de modificar sus leyes cuando eran insuficientes³³.

10) El alcance y el grado de la obligación de diligencia debida fueron desarrollados también por Lord Atkin en el asunto *Donoghue c. Stevenson* en los términos siguientes:

La norma de que hay que amar al prójimo se convierte, en derecho, en el deber de no dañar al vecino, y la pregunta del jurista «¿quien es mi vecino?» recibe una respuesta restringida. Hay que tener cuidado razonable en evitar actos u omisiones respecto de los cuales quepa razonablemente prever que pueden perjudicar al vecino. ¿Quién es, pues, en derecho, mi vecino? La respuesta parece ser: toda persona afectada tan de cerca y tan directamente por mis actos que razonablemente debo tenerla en consideración como persona así afectada cuando pienso en los actos y omisiones cuestionados³⁴.

11) En el contexto de los presentes artículos la diligencia debida se manifiesta en los esfuerzos razonables por parte del Estado para informarse de los componentes de hecho o de derecho que se relacionan previsiblemente con un procedimiento futuro y tomar en momento oportuno las medidas apropiadas para hacerles frente. Así, los Estados están obligados a tomar medidas unilaterales

para prevenir o aminorar el riesgo de daño transfronterizo causado por las actividades a que se refiere el artículo 1. Esas medidas incluyen, primero, formular políticas destinadas a prevenir o aminorar el riesgo de daño transfronterizo y, segundo, aplicar esas políticas. Estas se expresan en la legislación y en los reglamentos administrativos y se aplican mediante diversos mecanismos.

12) La Comisión estima que la norma de diligencia debida con la cual debe contrastarse la conducta de un Estado es lo que generalmente se considera apropiado y proporcional al grado de riesgo de daño transfronterizo en el caso de que se trate. Por ejemplo, las actividades que pueden considerarse ultrapeligrosas requieren un grado de cuidado mucho mayor al formular políticas y un grado mucho mayor de vigor por parte del Estado para aplicarlas. Cuestiones como el tamaño de la operación, su ubicación, las condiciones climáticas especiales, los materiales utilizados en la actividad, y la razonable idoneidad de las conclusiones sacadas de la aplicación de estos factores en un caso concreto figuran entre los factores que han de considerarse para determinar la existencia del requisito de la diligencia debida en cada caso. La Comisión también cree que lo que se consideraría como un grado razonable de cuidado o de diligencia debida puede cambiar con el tiempo; lo que se considera como procedimiento, norma o regla apropiados y razonables en un momento dado quizás no se considere como tal en una fecha futura. En consecuencia, la diligencia debida al garantizar la seguridad requiere que un Estado se mantenga al día de los cambios tecnológicos y la evolución científica.

13) La Comisión toma nota del principio 11 de la Declaración de Río, que dice así:

Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo³⁵.

14) Se encuentra una terminología parecida en el principio 23 de la Declaración de Estocolmo. No obstante, en ese principio se especifica que dichas normas internas han de entenderse «sin perjuicio de los criterios que puedan acordarse por la comunidad internacional»³⁶. A juicio de la Comisión, el nivel económico de los Estados es uno de los factores que han de tenerse en cuenta al determinar si un Estado ha cumplido su obligación de diligencia debida. Pero el nivel económico del Estado no puede utilizarse para exonerar a éste de la obligación que le imponen estos artículos.

15) El Estado tiene la obligación, en primer lugar, de tratar de formular políticas y de aplicarlas con la finalidad de prevenir el daño transfronterizo sensible. Si ello no es posible, la obligación consiste entonces en tratar de aminorar el riesgo de ese daño. A juicio de la Comisión, la palabra «aminorar» debe entenderse en este contexto

³⁰ Véase *The New York Times* de 11, 12 y 13 de noviembre de 1986, págs. A 1, A 8 y A 3, respectivamente. Véase también A. C. Kiss, «"Tchernobôlle", ou la pollution accidentelle du Rhin par des produits chimiques», *Annuaire français de droit international* (Paris), vol. 33, 1987, págs. 719 a 727.

³¹ Asunto del «Alabama» (Estados Unidos de América c. Gran Bretaña), sentencia de 14 de septiembre de 1872, A. de Lapradelle y N. Politis, *Recueil des arbitrages internationaux*, t. II, Paris, Pedone, 1923, págs. 814 y 815.

³² *Ibid.*, pág. 803.

³³ *Ibid.*

³⁴ Reino Unido, *The Law Reports, House of Lords, Judicial Committee of the Privy Council*, Londres, 1932, pág. 580.

³⁵ Véase la nota 13 *supra*.

³⁶ Véase la nota 17 *supra*.

en el sentido de perseguir la meta de reducir al punto más bajo la posibilidad de daño.

16) El artículo 3 impone al Estado la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir o minimizar el riesgo de daño transfronterizo sensible. Esto puede implicar, entre otras cosas, la adopción de las medidas que correspondan a manera de precaución suficiente, aunque no exista la certidumbre científica plena, para evitar o prevenir daño grave o irreversible. Esto está bien articulado en el principio 15 de la Declaración de Río y está sujeto a la capacidad de los Estados interesados. Se comprende que el cumplimiento óptimo y eficiente de la obligación de prevención requeriría la modernización del insumo de tecnología en la actividad, así como la asignación de recursos financieros y humanos suficientes con la capacitación necesaria para la gestión y vigilancia de la actividad.

17) Se espera que el operador de la actividad cargue con los gastos de prevención en la medida en que sea responsable de la operación. Se espera además que el Estado de origen haga los gastos necesarios para establecer los mecanismos administrativos, financieros y de vigilancia indicados en el artículo 5.

18) La Comisión observa que los Estados participan en planes en las esferas de aumento de la capacidad, transferencia de tecnología y recursos financieros que están en evolución y que son recíprocamente beneficiosos. Se reconoce que esos esfuerzos se hacen en aras del interés común de todos los Estados por elaborar normas internacionales uniformes que regulen y apliquen la obligación de prevención.

Artículo 4.—Cooperación

Los Estados de que se trata cooperarán de buena fe y recabarán, según sea necesario, la asistencia de una o más organizaciones internacionales para prevenir o minimizar el riesgo de causar un daño transfronterizo sensible.

Comentario

1) El principio de cooperación entre los Estados es esencial para trazar y aplicar políticas eficaces destinadas a prevenir o minimizar el riesgo de causar daños transfronterizos sensibles. El requisito de la cooperación de los Estados se extiende a todas las etapas de la planificación y la aplicación. En el principio 24 de la Declaración de Estocolmo³⁷ y en el principio 7 de la Declaración de Río³⁸ se reconoce que la cooperación es un elemento esencial de toda planificación eficaz para la protección del medio ambiente. Se han previsto formas más concretas de cooperación en los artículos subsiguientes. En ellos se prevé la participación del Estado probablemente afectado, que es indispensable para aumentar la eficacia de cualquier medida preventiva.

³⁷ Ibid

³⁸ Véase la nota 13 *supra*

Este último Estado puede saber mejor que nadie qué características de la actividad de que se trate pueden ser más perjudiciales para él o qué zonas de su territorio cercanas a la frontera pueden verse más afectadas por los efectos transfronterizos de la actividad, como un ecosistema especialmente vulnerable.

2) El artículo requiere que los Estados interesados cooperen de buena fe. El párrafo 2 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas dispone que todos los Miembros «cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta». En los preámbulos de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y de la Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de tratados se declara que el principio de buena fe está universalmente reconocido. Además, en el artículo 26 y en el párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados se reconoce el lugar esencial de este principio en la estructura de los tratados. La decisión de la CIJ en el asunto de los *Essais nucléaires* se refiere al alcance de la aplicación de la buena fe. En ese asunto la Corte proclamó que «uno de los principios fundamentales que rigen la creación y ejecución de las obligaciones jurídicas, sea cual fuere su fuente, es el principio de buena fe»³⁹. Ese dictamen de la Corte implica que la buena fe se aplica también a los actos unilaterales⁴⁰. Ciertamente el principio de buena fe abarca «toda la estructura de las relaciones internacionales»⁴¹.

3) El tribunal de arbitraje establecido en 1985 entre el Canadá y Francia sobre las controversias relativas al fileteado en el buque *La Bretagne* dentro del golfo de San Lorenzo sostuvo que el principio de buena fe era uno de los elementos que ofrecían garantía suficiente contra cualquier riesgo de que una parte ejerciera sus derechos de manera abusiva⁴².

4) Las palabras «los Estados de que se trata» que figuran en el artículo se refieren al Estado de origen y al Estado o los Estados probablemente afectados. Si bien se alienta a cooperar a otros Estados que estén en condiciones de contribuir a los fines de estos artículos, no tienen obligación jurídica alguna de hacerlo.

5) El artículo dispone que los Estados, según sea necesario, recabarán la ayuda de una o más organizaciones internacionales para cumplir sus obligaciones preventivas expuestas en estos artículos. Los Estados sólo lo harán así cuando se considere necesario. Las palabras «según sea necesario» tienen por objeto tener en cuenta

³⁹ Asunto *Essais nucléaires (Australie c France)*, fallo, *C.I.J. Recueil* 1974, pag 268 Véase también *Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991* (publicación de las Naciones Unidas, n° de venta S 92 V 5), pag 133

⁴⁰ Véase M. Virally, «Review essay good faith in public international law», *American Journal of International Law*, vol 77, n° 1 (enero de 1983), pag 130

⁴¹ Véase R. Rosenstock, «The Declaration of principles of international law concerning friendly relations a survey», *American Journal of International Law* (Washington D C), vol 65, n° 5 (octubre de 1971), pag 734

⁴² Asunto relativo al fileteado dentro del golfo de San Lorenzo (Canadá c Francia), *RGDIP*, vol 90, 1986/3, pag 713

varias posibilidades, incluidas las indicadas en los párrafos 6 a 9 *infra*.

6) En primer lugar, la asistencia de las organizaciones internacionales puede no ser apropiada o necesaria en todos los casos en que se trate de la prevención o minimización del riesgo de daño transfronterizo. Por ejemplo, el Estado de origen o el Estado probablemente afectado pueden ser Estados tecnológicamente avanzados y tener la misma o incluso mayor capacidad técnica que las organizaciones internacionales para prevenir o minimizar el riesgo de un daño transfronterizo sensible. Evidentemente, en tales casos no hay obligación de recabar asistencia de las organizaciones internacionales.

7) En segundo lugar, el término «organizaciones internacionales» hace referencia a las organizaciones que son importantes y están en condiciones de prestar ayuda en esta materia. Incluso con el creciente número de organizaciones internacionales no cabe suponer que habrá necesariamente una organización internacional con la capacidad necesaria para un determinado caso.

8) En tercer lugar, aun cuando existan organizaciones internacionales importantes, sus constituciones pueden prohibirles responder a esas peticiones de los Estados. Por ejemplo, en el caso de algunas organizaciones se les puede exigir (o permitir) que respondan a peticiones de asistencia sólo de sus Estados miembros o pueden operar bajo otros impedimentos constitucionales. Evidentemente, no se pretende imponer a las organizaciones internacionales ninguna obligación de responder a peticiones de asistencia en virtud de este artículo.

9) En cuarto lugar, pueden formular peticiones de asistencia a las organizaciones internacionales uno o más Estados interesados. El principio de cooperación significa que es preferible que esas peticiones sean hechas por todos los Estados interesados. Sin embargo, el hecho de que todos los Estados interesados no recaben la asistencia necesaria no exonera a los distintos Estados de la obligación de recabar asistencia. Por supuesto, la respuesta y el tipo de participación de una organización internacional en los casos en que la petición haya sido presentada por un Estado solamente dependerán de la naturaleza de la petición, el tipo de asistencia de que se trate, el lugar donde la organización tendría que prestar esa asistencia, etc.

Artículo 5.—Aplicación

Los Estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas o de otra índole necesarias, incluido el establecimiento de mecanismos de vigilancia apropiados, para aplicar las disposiciones de los presentes proyectos de artículo.

Comentario

1) El presente artículo enuncia lo que cabría pensar que es evidente, a saber, que, al hacerse parte en los presentes artículos, los Estados están obligados a adoptar las medi-

das de aplicación necesarias, ya sean legislativas, administrativas o de otra índole. Se ha incluido aquí el artículo 5 para destacar el carácter permanente de los artículos, que exige que de vez en cuando se adopten medidas para prevenir o minimizar el riesgo de daños transfronterizos derivados de actividades a las que se aplican los artículos⁴³.

2) Las medidas mencionadas en el presente artículo incluyen, por ejemplo, audiencias otorgadas a las personas interesadas y procedimientos cuasijudiciales. El uso de la expresión «de otra índole» tiene por objeto abarcar las diversas formas en que los Estados apliquen los proyectos de artículo. En el artículo 5 se mencionan expresamente algunas medidas sólo con el objeto de dar orientación a los Estados; quedan entregadas a su arbitrio las medidas que adoptarán. Se hace referencia a «mecanismos de vigilancia apropiados» a fin de destacar las medidas de inspección que los Estados adoptan en general respecto de las actividades peligrosas.

3) Decir que los Estados deben adoptar las medidas necesarias no significa que deban ellos mismos intervenir en las cuestiones operacionales relativas a las actividades a las que se aplica el artículo 1. Cuando esas actividades son realizadas por particulares o empresas, la obligación del Estado se limita a establecer el marco normativo adecuado y a aplicarlo de conformidad con el presente proyecto de artículos. La aplicación de ese marco normativo en cada caso concreto será entonces cuestión de administración ordinaria o, en el caso de controversias, incumbirá a los tribunales competentes, asistidos del principio de no discriminación contenido en el artículo 16.

Artículo 6.—Relación con otras normas de derecho internacional

Las obligaciones establecidas en virtud de los presentes proyectos de artículo se entenderán sin perjuicio de cualesquiera otras obligaciones contraídas por los Estados de conformidad con los tratados pertinentes o con las normas consuetudinarias de derecho internacional.

Comentario

1) Se ha subrayado ya que los presentes proyectos de artículo únicamente se aplican a actividades no prohibidas por el derecho internacional, con independencia de

⁴³ El presente artículo es análogo al párrafo 2 del artículo 2 del Convenio sobre la evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, que dice

«Cada Parte adoptará las necesarias medidas jurídicas, administrativas o de otra índole para poner en práctica las disposiciones del presente Convenio, incluido, con respecto a las actividades propuestas [] que son susceptibles de originar consecuencias transfronterizas perjudiciales en grado considerable, el establecimiento de un procedimiento de evaluación de las consecuencias ambientales que permita la participación del público y la preparación de la documentación de evaluación de las consecuencias ambientales »

que esa prohibición se manifieste con respecto a la realización de la actividad o debido a sus efectos prohibidos. La aplicación del presente proyecto de artículos tiene carácter residual. Únicamente se aplica en situaciones en las que no rige una norma o régimen internacional más específico.

2) De esta manera, el artículo 6 tiene por objeto dejar lo más claro posible que los presentes artículos se entienden sin perjuicio de la existencia, aplicación o efecto de cualquier obligación de los Estados en virtud del derecho internacional relativa a una acción u omisión a la que de otro modo —es decir, si no existiera tal obligación— cabría pensar que se aplicara. Se deriva de ello que no debe inferirse del hecho de que una actividad quede incluida en el ámbito aparente de los presentes proyectos de artículo la existencia o inexistencia de cualquier otra norma de derecho internacional, incluida cualquier norma primaria, respecto de la actividad en cuestión o de sus posibles o reales efectos transfronterizos. La referencia en el artículo 6 a cualquier otra obligación de los Estados abarca tanto las obligaciones estipuladas por tratados como las obligaciones de derecho internacional consuetudinario. Igualmente abarca las normas de aplicación particular —ya se trate de una región determinada o de una actividad especificada— y las normas de alcance universal o general. Se destaca así más el carácter de fondo de este proyecto de artículos.

Artículo 7.—Autorización

1. Se requerirá la autorización previa de un Estado para que se lleven a cabo en su territorio, o de cualquier otro modo bajo su jurisdicción o control, actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de los presentes proyectos de artículo, así como para cualquier cambio importante en una actividad así autorizada. Dicha autorización se requerirá también en el caso de que se proyecte efectuar algún cambio que pueda transformar alguna actividad en otra comprendida en el ámbito de aplicación de los presentes proyectos de artículo.

2. El requisito de la autorización que deba obtener el Estado será aplicable con respecto a todas las actividades preexistentes que queden comprendidas en el ámbito de aplicación de los presentes proyectos de artículo.

3. En el caso de que no se observen los requisitos de la autorización, el Estado que la otorga tomará todas las medidas que resulten apropiadas, incluida, cuando sea necesario, la revocación de la autorización.

Comentario

1) Este artículo establece el principio fundamental de que se requiere la autorización previa de un Estado para realizar actividades que impliquen un riesgo de causar un daño transfronterizo sensible en su territorio o de alguna otra manera bajo su jurisdicción o control. La palabra

«autorización» significa la concesión por las autoridades gubernamentales del permiso necesario para realizar una de las actividades a que se refieren esos artículos. Los Estados son libres de escoger la forma que haya de adoptar esa autorización.

2) La Comisión opina que el requisito de autorización obliga a un Estado a determinar si una actividad con posible riesgo de causar un daño transfronterizo sensible se está realizando en su territorio, o de alguna otra manera bajo su jurisdicción o control, y que ese Estado debe tomar las medidas que se indican en estos artículos. Este artículo obliga a los Estados a desempeñar un papel más responsable y activo en la reglamentación de las actividades que se realizan en su territorio o bajo su jurisdicción o control con riesgo de daño transfronterizo sensible. La Comisión toma nota, a este respecto, de que el tribunal de arbitraje del caso de la *Fonderie de Trail* sostuvo que el Canadá tenía «la obligación [...] de velar por que esa conducta se ajustara a la obligación que, como aquí se determina, tenía el Dominio con arreglo al derecho internacional»⁴⁴. El tribunal mantuvo que, en particular, «debe exigirse de la Fundición Trail que se abstenga de causar daño alguno con sus humos en el Estado de Washington»⁴⁵. En opinión de la Comisión, el artículo 7 es compatible con ese requisito.

3) La CIJ en el asunto del *Détroit de Corfou* mantuvo que todo Estado tiene la obligación de «no permitir a sabiendas que su territorio sea utilizado para la realización de actos contrarios a los derechos de otros Estados»⁴⁶.

4) Las palabras «en su territorio, o de alguna otra manera bajo su jurisdicción o control» están tomadas del artículo 2. Las palabras «actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de los presentes proyectos de artículo» enuncian todos los requisitos del artículo 1 para que una actividad quede incluida en el ámbito del proyecto de artículos.

5) Como se dispone al final de la primera oración del párrafo 1 del artículo 7, se requerirá asimismo esa autorización para cualquier cambio importante que se proyecte en una de las actividades a que se refiere el artículo 1, siempre que ese cambio pueda agravar el riesgo o modificar su naturaleza o alcance. La segunda oración del párrafo 1 se refiere a aquellas situaciones en que se proyecta un cambio importante en la realización de una actividad que, sin ese cambio, es inocua, pero que el cambio proyectado transformaría en una de las actividades que crea un riesgo de causar un daño transfronterizo sensible. Para efectuar ese cambio se requeriría también la autorización del Estado.

6) El párrafo 2 del artículo 7 hace hincapié en que, una vez que un Estado adopta el régimen contenido en estos artículos, el requisito de la autorización será aplicable

⁴⁴ Naciones Unidas, *Recueil des sentences arbitrales* (nota 16 supra), págs 1965 y 1966

⁴⁵ *Ibid*, pag 1966

⁴⁶ Fondo, fallo, *C I J Recueil 1949*, págs 4 y ss, en particular pag 22 Véase también *Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991* (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta S 97 V 7), pag 7

con respecto a todas las actividades preexistentes que queden comprendidas en el ámbito de aplicación de los presentes artículos. La Comisión tiene conciencia de que podría no ser razonable exigir que los Estados que asuman las obligaciones impuestas por estos artículos las apliquen de manera inmediata respecto de actividades existentes. En esos casos podría requerirse un período adicional para que el explotador de la actividad diera cumplimiento al requisito de la autorización. La Comisión opina que debe dejarse al arbitrio del Estado de origen la decisión de si la actividad debe suspenderse a la espera de la autorización o si puede continuar mientras el explotador realiza los trámites para obtenerla. En el caso de que el Estado de origen deniegue la autorización, se supone que el Estado de origen suspenderá la actividad.

7) El ajuste previsto en el párrafo 2 tiene lugar por lo general cada vez que se impongan nuevas exigencias legislativas y administrativas en razón de normas de seguridad o de nuevas normas u obligaciones internacionales que el Estado deba aplicar. No obstante, algunos miembros consideraron que esta cuestión debía tratarse en un nuevo artículo titulado «Prevención permanente». En opinión de un miembro, la obligación de autorización retrospectiva imponía una carga excesiva a los explotadores en el contexto de las actividades no prohibidas por el derecho internacional.

8) El párrafo 3 del artículo 7 establece las consecuencias cuando el explotador no cumple con el requisito de la autorización. El Estado de origen, que es el principal responsable de vigilar esas actividades, tiene suficiente flexibilidad para asegurar que el explotador cumpla los requisitos establecidos. Cuando corresponda, ese Estado podrá retirar la autorización y, de esta forma, impedir que se realice esa actividad.

Artículo 8.—Evaluación de los efectos

Cualquier decisión con respecto a la autorización de una actividad comprendida en el ámbito de aplicación de los presentes proyectos de artículo deberá basarse en una evaluación de los posibles daños transfronterizos causados por esa actividad.

Comentario

1) En virtud del artículo 8 todo Estado, antes de conceder la autorización necesaria a los encargados de la realización de una de las actividades a que se refiere el artículo 1, debería velar por que se procediera a determinar el riesgo de que esa actividad pudiera causar un daño transfronterizo sensible. Esa determinación permite al Estado estimar la amplitud y la naturaleza del riesgo que pueda crear esa actividad y, por consiguiente, el tipo de medidas preventivas que debería adoptar. La Comisión opina que, dado que estos artículos están destinados a tener una aplicación mundial, no pueden ser demasiado detallados. Deben contener únicamente aquellos elementos que sean necesarios para su mayor claridad.

2) La evaluación de las consecuencias en el caso de la *Fonderie de Trail* quizá no guarde relación directa con la responsabilidad del riesgo, pero destaca la importancia de evaluar las consecuencias de una actividad que entrañe riesgos sensibles. En dicho caso el tribunal indicó que el estudio realizado por conocidos científicos de reconocida reputación era «probablemente el más concienzudo de los hasta el momento efectuados en cualquier sector sometido a la contaminación atmosférica causada por humos industriales»⁴⁷.

3) El requisito que se establece en el artículo 8 está en plena consonancia con el principio 17 de la Declaración de Río, que prevé también la realización de una evaluación del impacto ambiental de las actividades que probablemente hayan de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente:

Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que este sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente⁴⁸

El requisito de evaluación de los efectos negativos de una actividad se ha incluido de distintas formas en muchos acuerdos internacionales⁴⁹. El caso más notable es el del Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, que está íntegramente consagrado al procedimiento de realización de la evaluación ambiental y al contenido de ésta.

4) La cuestión de quién debe determinar el riesgo se deja a la discreción de los Estados; normalmente la evaluación es efectuada por explotadores que se atienen a ciertas directrices establecidas por los Estados. Estas cuestiones tendrían que ser resueltas por los propios Estados sobre la base de su legislación interna o los ins-

⁴⁷ Naciones Unidas, *Recueil des sentences arbitrales* (nota 16 *supra*), págs. 1973 y 1974

⁴⁸ Véase la nota 13 *supra*

⁴⁹ Veanse, por ejemplo, los artículos 205 y 206 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el artículo 4 de la Convención para regular las actividades relacionadas con los recursos minerales antárticos, el artículo 8 del Protocolo sobre la Protección del Medio Ambiente del Tratado Antártico, los apartados *a* y *b* del párrafo 1 del artículo 14 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el artículo 14 del Acuerdo de la ASEAN sobre la conservación de la naturaleza y los recursos naturales, el Convenio para la protección de los recursos naturales y el medio ambiente en la región del Pacífico sur, el artículo XI del Convenio regional de Kuwait sobre cooperación en materia de protección del medio marino contra la contaminación, y el Convenio regional para la conservación del medio ambiente del Mar Rojo y el Golfo de Adén. En algunos tratados, el requisito de evaluación de las consecuencias se encuentra implícito. Tal es, por ejemplo, el caso de los dos tratados multilaterales relativos a sistemas de comunicaciones, que exigen que sus signatarios utilicen sus instalaciones de modo que no ocasionen interferencias en las instalaciones de otros Estados Partes. El párrafo 2 del artículo 10 de la Convención internacional sobre radiotelegrafía exige que las Partes en la Convención establezcan y exploten sus estaciones de manera que no perturben las comunicaciones radioeléctricas de otras Partes contratantes o de personas autorizadas por sus gobiernos. También el artículo 1 de la Convención internacional relativa al empleo de la radiodifusión en beneficio de la paz dispone que las partes contratantes se comprometen a prohibir las emisiones destinadas a incitar a la población de cualquier territorio a cometer actos contrarios al orden interno o a la seguridad de un Estado Parte.

trumentos internacionales aplicables. No obstante, se supone que el Estado designará una autoridad, gubernamental o no gubernamental, que examine la evaluación en nombre del gobierno, y asumirá las responsabilidades que se deriven de las conclusiones a que llegue esa autoridad.

5) El artículo no especifica cuál debería ser el contenido de la determinación del riesgo. Es evidente que la determinación del riesgo de una actividad no puede hacerse eficazmente sino en la medida en que relacione el riesgo con el posible daño que de éste pueda derivarse. La mayor parte de las convenciones y otros instrumentos jurídicos internacionales vigentes no especifican el contenido de la determinación. Hay excepciones, como el Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, que detalla el contenido de esa evaluación⁵⁰. El estudio de 1981 sobre los aspectos jurídicos del medio ambiente con respecto a la minería y las perforaciones que se llevan a cabo frente a las costas dentro de los límites de la jurisdicción nacional preparado por el Grupo de Trabajo de Expertos en Derecho Ambiental, del PNUMA⁵¹, se refiere también en detalle al contenido de la evaluación en relación con la conclusión n.º 8 del estudio concerniente a la minería y las perforaciones frente a las costas.

6) La opinión dominante en la Comisión es que es conveniente dejar al derecho interno del Estado que efectúe la evaluación la determinación detallada del contenido de ésta. Algunos miembros estimaron, sin embargo, que era conveniente y necesario que se abundara en el proyecto de artículos respecto de los elementos de la evaluación de efectos ambientales para la orientación de los Estados. A

⁵⁰ El artículo 4 del Convenio dispone que la evaluación del impacto ambiental de un Estado Parte debe contener como mínimo la información que se describe en el apéndice II del propio Convenio. En ese apéndice se enumeran los nueve puntos siguientes:

«Contenido de la documentación de evaluación de las consecuencias sobre el medio ambiente»

»Informaciones mínimas que deben figurar en la documentación de evaluación de las consecuencias sobre el medio ambiente, en virtud del artículo 4

»a) Descripción de la actividad propuesta y de su objeto,

»b) Descripción, si procede, de las soluciones de sustitución (por ejemplo en lo que se refiere al lugar de implantación o a la tecnología) que puedan razonablemente considerarse, sin omitir la opción "cero",

»c) Descripción del medio ambiente sobre el que la actividad propuesta y las soluciones de sustitución pueden tener un efecto importante,

»d) Descripción de las consecuencias que la actividad propuesta y las soluciones de sustitución pueden tener en el medio ambiente y evaluación de su importancia,

»e) Descripción de las medidas correctivas destinadas a reducir en lo posible las consecuencias perjudiciales en el medio ambiente,

»f) Indicación precisa de las hipótesis de base y de los métodos de previsión adoptados y de los datos ambientales pertinentes utilizados,

»g) Inventario de las lagunas en los conocimientos y de las incertidumbres comprobadas en la compilación de los datos necesarios,

»h) Cuando proceda, resumen de los programas de vigilancia y gestión y de los planes que puedan existir para análisis ulteriores,

»i) Resumen no técnico acompañado, si fuere necesario, de una presentación visual (mapas, gráficos, etc.)»

⁵¹ Véase doc UNEP/GC 9/5/Add 5, anexo III

los fines del artículo 8, sin embargo, esa evaluación debería contener por lo menos una estimación de las posibles consecuencias transfronterizas negativas de la actividad. Con arreglo al artículo 10, el Estado de origen tendrá que transmitir la evaluación del riesgo a los Estados que puedan estar sufriendo daños como resultado de la actividad. Para que esos Estados puedan evaluar el riesgo a que están expuestos tienen que saber qué efectos perjudiciales puede tener la actividad para ellos, así como las probabilidades de que ese daño se produzca.

7) La evaluación incluirá los efectos de la actividad, no sólo sobre las personas y los bienes, sino también sobre el medio ambiente de otros Estados. La Comisión está convencida de la necesidad y la importancia de la protección del medio ambiente, independientemente de cualquier daño que puedan sufrir los seres humanos o los bienes.

8) Este artículo no obliga a los Estados a exigir una determinación del riesgo de cualquier actividad que se realice en su territorio o de alguna otra manera bajo su jurisdicción o control. Las actividades que entrañan un riesgo de causar un daño transfronterizo sensible tienen características generales que pueden identificarse y proporcionar a los Estados indicaciones sobre cuáles son las que pueden entrar dentro del ámbito de aplicación de estos artículos. Así, por ejemplo, el tipo de fuente de energía utilizada en la fabricación, la ubicación de la actividad y su proximidad a la zona fronteriza, etc., son todos indicios de la posibilidad de que esa actividad esté comprendida en el ámbito de estos artículos. Existen ciertas sustancias que algunas convenciones enumeran como peligrosas o arriesgadas y cuyo uso en cualquier actividad puede por sí solo denunciar el riesgo de que esa actividad cause un daño transfronterizo sensible⁵². Hay también convenios que enumeran las actividades que se suponen perjudiciales y que, por lo tanto, es posible que deban ser consideradas como incluidas dentro del ámbito de esos artículos⁵³.

⁵² Por ejemplo, el Convenio para la prevención de la contaminación marina de origen terrestre establece en su artículo 4 la obligación de las partes de eliminar o reducir la contaminación ambiental causada por ciertas sustancias y contiene en el anexo la lista de éstas. Análogamente, el Convenio sobre la protección del medio marino de la zona del Mar Báltico incluye una lista de sustancias peligrosas en el anexo I y de sustancias y materiales nocivos en el anexo II, haciendo constar que los depósitos de esas sustancias están prohibidos o estrictamente limitados, véanse también el Protocolo del Convenio para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre y el Convenio sobre la protección del Rin contra la contaminación química.

⁵³ Véase, por ejemplo, el anexo I del Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, en el que se enumeran como posiblemente peligrosas para el medio ambiente y sometidas al requisito de evaluación del impacto ambiental con arreglo al Convenio actividades tales como las refinerías de petróleo, las centrales térmicas y las instalaciones para la producción de combustibles nucleares enriquecidos. Véase también el anexo II de la Convención sobre responsabilidad civil por daños resultantes de actividades peligrosas para el medio ambiente, instrumento que enumera entre tales actividades el establecimiento de instalaciones o lugares para la eliminación parcial o total de desechos sólidos, líquidos o gaseosos mediante su incineración en tierra o en el mar e instalaciones o lugares para la degradación térmica de desechos sólidos, gaseosos o líquidos mediante la reducción de oxígeno. Esta Convención contiene también una lista de sustancias peligrosas en su anexo I.

Artículo 9.—Información al público

Los Estados deberán proporcionar, por los medios que consideren apropiados, al público que pueda resultar afectado por una actividad comprendida en el ámbito de aplicación de los presentes proyectos de artículo, la información pertinente relativa a esa actividad, el riesgo que entraña y los daños que puedan resultar de ella, y consultarán su opinión.

Comentario

1) El artículo 9 requiere que los Estados, en la medida de lo posible y por los medios que corresponda, faciliten al público que pueda resultar afectado, de su propio Estado o de otros Estados, información relativa al riesgo que entraña y a los daños que pudieran derivarse de una actividad sometida a autorización, con el fin de conocer sus opiniones. Por tanto, el artículo requiere de los Estados *a)* que faciliten información a su opinión pública sobre la actividad y sobre el riesgo que supone y los daños y *b)* que averigüen la opinión del público. Naturalmente, está claro que la idea de facilitar información al público tiene por objeto que éste pueda informarse para luego conocer su opinión. Sin este segundo paso, se anularía el efecto del artículo.

2) Los datos que han de facilitarse al público comprenden la información sobre la propia actividad, así como sobre la naturaleza y el alcance del riesgo, y los daños que comporta. Esa información figura en los documentos que acompañan a la notificación prevista en el artículo 10 o en la evaluación que haga el Estado que puede resultar afectado, de conformidad con el artículo 13.

3) Este artículo se inspira en las nuevas tendencias del derecho internacional en general y del derecho ambiental en particular, que tratan de hacer participar, en la toma de decisiones, a las personas cuyas vidas, salud, bienes y ambiente puedan resultar afectados, dándoles la oportunidad de exponer sus opiniones y de ser oídas por los encargados de adoptar las decisiones definitivas.

4) El principio 10 de la Declaración de Río prevé la participación del público en el proceso de adopción de decisiones de la manera siguiente:

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.⁵⁴

5) Otros acuerdos jurídicos internacionales recientes sobre cuestiones ambientales han requerido de los Estados que faciliten al público información y le den la oportu-

nidad de participar en la toma de decisiones. A este respecto son pertinentes los párrafos 1 y 2 de la sección VII del Código de conducta sobre contaminación accidental de aguas interiores transfronterizas:

1 Con objeto de promover una toma de decisiones con conocimiento de causa por las autoridades centrales, regionales o locales en las deliberaciones relativas a la contaminación accidental de las aguas interiores transfronterizas, los países deberían facilitar la participación del público que pueda ser afectado en las audiencias e investigaciones preliminares y la formulación de objeciones a las decisiones propuestas, así como la presentación de recursos y la representación en los procedimientos administrativos y judiciales

2 Los países en que se produzca un incidente deberían adoptar todas las medidas apropiadas para facilitar a las personas naturales y jurídicas expuestas a un riesgo importante de contaminación accidental de las aguas interiores transfronterizas información suficiente para que puedan ejercer los derechos que les conceda la legislación nacional de conformidad con los objetivos del presente Código.⁵⁵

Asimismo, el artículo 16 del Convenio sobre la protección y utilización de cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales, el párrafo 8 del artículo 3 del Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, el artículo 17 del Convenio sobre la protección del medio marino en la zona del Mar Báltico y el artículo 6 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático disponen que se informe al público.

6) Hay muchas modalidades de participación en la toma de decisiones. El examen de los datos y de la información sobre los que se tomarán las decisiones y la oportunidad de confirmar o rechazar la exactitud de los datos, el análisis y las consideraciones de orden político ya sea por medio de tribunales administrativos o judiciales o de grupos de ciudadanos interesados, son algunas de las maneras de participar en la toma de decisiones. A juicio de la Comisión, esta forma de participación del público contribuye a propiciar los esfuerzos para impedir los daños ambientales y transfronterizos.

7) La obligación prevista en el artículo 9 se limita con la oración «por los medios que consideren apropiados», que tiene por objeto confiar la manera de facilitar esa información a los Estados, a las normas de su derecho interno y a la política del Estado en lo que respecta, por ejemplo, a si dicha información ha de facilitarse a través de los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, los organismos públicos, las autoridades locales, etc. En el caso del público ubicado fuera de las fronteras del Estado, la información se puede proporcionar, si corresponde, usando los buenos oficios del Estado de que se trate si la comunicación directa no fuera factible o práctica.

8) Asimismo, el Estado que pueda resultar afectado, tras recibir la notificación e información del Estado de origen, informará, por los medios que corresponda, a aquel sector de su público que pueda ser perjudicado antes de responder a la notificación.

⁵⁴ Véase la nota 13 *supra*

⁵⁵ Véase la nota 22 *supra*

Artículo 10.—Notificación e información

1. Si la evaluación a que se refiere el artículo 8 indica que existe un riesgo de causar un daño transfronterizo sensible, el Estado de origen deberá, antes de que se tome una decisión sobre la autorización de la actividad, hacer la oportuna notificación al respecto a los Estados que pueden resultar afectados y les transmitirá la información técnica disponible y demás información pertinente en que se base la evaluación.

2. Los Estados que puedan resultar afectados deberán presentar su respuesta dentro de un plazo razonable.

Comentario

1) El artículo 10 trata del caso de que la evaluación realizada por un Estado, de conformidad con el artículo 8, indique que la actividad prevista supone un riesgo real de causar daños transfronterizos sensibles. Este artículo, junto con los artículos 9, 11, 13 y 14, establece un conjunto de procedimientos esencial para equilibrar los intereses de todos los Estados interesados, dándoles una oportunidad razonable de encontrar la forma de realizar la actividad adoptando medidas satisfactorias y razonables destinadas a prevenir o aminorar los daños transfronterizos.

2) El artículo 10 obliga al Estado a notificar a los otros Estados que puedan resultar afectados por la actividad prevista. Las actividades incluidas son tanto las proyectadas por el propio Estado como las planificadas por entidades privadas. El requisito de la notificación es parte indispensable de cualquier sistema orientado a prevenir o aminorar el riesgo de daños transfronterizos.

3) La obligación de notificar a otros Estados el riesgo de sufrir daños sensibles a que estén expuestos se recogió en el asunto del *Détroit de Corfou*, en que la CIJ dijo que la obligación de advertir se basaba en «consideraciones elementales de humanidad»⁵⁶. Este principio está reconocido en el contexto de los usos de los cursos de agua internacionales y, en el contexto citado, se encuentra incorporado en algunos acuerdos internacionales, decisiones de cortes y tribunales internacionales, declaraciones y resoluciones aprobados por organizaciones intergubernamentales, conferencias y reuniones, y estudios de organizaciones intergubernamentales e internacionales⁵⁷.

4) Además de la utilización de los cursos de agua internacionales, el principio de la notificación está reconocido también con respecto a otras actividades de efectos transfronterizos. Por ejemplo, en el artículo 3 del Convenio

sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, que prevé un elaborado sistema de notificación, y en los artículos 3 y 10 de la Convención sobre los efectos transfronterizos de los accidentes industriales. El principio 19 de la Declaración de Río se refiere a la notificación oportuna:

Los Estados deberán proporcionar la información pertinente, y notificar previamente y en forma oportuna, a los Estados que posiblemente resulten afectados por actividades que puedan tener considerables efectos ambientales transfronterizos adversos, y deberán celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y de buena fe⁵⁸.

5) El procedimiento de notificación se ha definido en algunas resoluciones de la OCDE. Por ejemplo, con respecto a algunas sustancias químicas, el anexo de la resolución C(71)73 de la OCDE, de 18 de mayo de 1971, determina que todo Estado miembro recibirá una notificación antes de que cualquier otro Estado miembro adopte las medidas que proyecte con respecto a sustancias que tengan efectos perjudiciales en el hombre o el medio ambiente, cuando esas medidas puedan producir efectos sensibles en la economía y el comercio de otros Estados⁵⁹. El anexo de la recomendación C(74)224 de la OCDE, de 14 de noviembre de 1974, sobre los «Principios relativos a la contaminación transfronteriza», en su principio sobre información y consulta requiere la notificación y consulta antes de realizar cualquier actividad que pueda crear un riesgo de contaminación transfronteriza sensible⁶⁰.

6) El principio de la notificación está ampliamente asentado en el caso de emergencias ambientales. El principio 18 de la Declaración de Río⁶¹, el artículo 198 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el artículo 2 de la Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares, el apartado *d* del párrafo 1 y el párrafo 3 del artículo 14 del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el apartado *c* del párrafo 1 del artículo 5 del Convenio internacional sobre la preparación, la lucha y la cooperación en materia de contaminación por hidrocarburos exigen todos la notificación.

7) De conformidad con el párrafo 1, cuando la evaluación revele riesgo de causar daños transfronterizos sensibles, el Estado que se proponga realizar esa actividad tendrá la obligación de notificar a los Estados que puedan resultar afectados. Esa notificación deberá ir acompañada de la información técnica disponible en que la evaluación se base. La referencia hecha a la información técnica «disponible» y otra información pertinente tiene por objeto indicar que la obligación del Estado de origen se limita a comunicar la información técnica y de otra índole obtenida en relación con la actividad. Esa información se obtiene por lo general durante la evaluación de la actividad de conformidad con el artículo 8. El párrafo 1 supone que la información técnica resultante de la evaluación comprende no sólo lo que podría llamarse datos brutos, es decir, hojas de datos, estadísticas, etc., sino también el análisis de la información

⁵⁶ Véase la nota 46 *supra*.

⁵⁷ Por lo que se refiere a los tratados que se ocupan de la notificación previa y el intercambio de información con respecto a los cursos de agua, véase el párrafo 6 del comentario del artículo 12 (Notificación de las medidas proyectadas que puedan causar un efecto perjudicial), del proyecto de artículos sobre el derecho de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación [*Anuario 1994*, vol II (segunda parte), págs. 119 y 120].

⁵⁸ Véase la nota 13 *supra*.

⁵⁹ *L'OCDE et l'environnement* (nota 26 *supra*), pág. 104.

⁶⁰ *Ibid.*, pág. 167, secc. E.

⁶¹ Véase la nota 13 *supra*.

utilizada por el propio Estado de origen para determinar el riesgo de daños transfronterizos.

8) Los Estados pueden decidir libremente cómo quieren informar a los Estados que puedan resultar afectados. En general, se supone que los Estados se pondrán en contacto con los otros Estados directamente, por cauces diplomáticos. Si no hay relaciones diplomáticas, los Estados podrán notificar a los otros Estados por medio de un tercer Estado.

9) El párrafo 1 también se ocupa del caso en que el Estado de origen, a pesar de todos sus esfuerzos y de su diligencia, no pueda identificar, antes de autorizar la actividad, a todos los Estados que puedan resultar afectados y esa información llegue a su conocimiento solamente después de haber emprendido la actividad. De conformidad con ese párrafo, el Estado de origen, en tales casos, estará obligado a hacer la notificación tan pronto como la información llegue a su conocimiento y tenga oportunidad de determinar, en un plazo razonable, si hay otros Estados que puedan resultar afectados por la actividad.

10) El párrafo 2 trata de la necesidad de que los Estados en cuestión respondan en un plazo razonable. La determinación de lo que es un «plazo razonable» depende de varios factores. Por lo general, es un plazo que permite a los Estados interesados evaluar los datos correspondientes y sacar sus propias conclusiones. Este requisito está supeditado a la cooperación y la buena fe.

Artículo 11.—Consultas sobre las medidas preventivas

1. Los Estados de que se trata celebrarán consultas, a petición de cualquiera de ellos, con miras a encontrar soluciones aceptables respecto de las medidas que hayan de adoptarse para prevenir y minimizar el riesgo de daño transfronterizo sensible.

2. Los Estados deberán buscar soluciones basadas en un equilibrio equitativo de intereses a la luz del artículo 12.

3. Si las consultas a que se refiere el párrafo 1 no conducen a una solución acordada, el Estado de origen, si decide autorizar que la actividad se realice, deberá tener en cuenta los intereses de los Estados que puedan resultar afectados, sin perjuicio de los derechos de cualquier Estado que pueda resultar afectado.

Comentario

1) El artículo 11 requiere que los Estados interesados, es decir, el Estado de origen y los Estados que puedan resultar afectados, se consulten para acordar medidas destinadas a prevenir o aminorar el riesgo de daños transfronterizos sensibles. Según el momento en que se invoque el artículo 11, las consultas pueden celebrarse antes de la autorización y comienzo de una actividad o durante su realización.

2) En este artículo la Comisión ha intentado mantener el equilibrio entre dos consideraciones igualmente importantes. En primer lugar, el artículo trata de actividades no prohibidas por el derecho internacional y que normalmente son importantes para el desarrollo económico del Estado de origen. Pero, en segundo lugar, no sería equitativo para los demás Estados permitir que esas actividades se realizaran sin consultar con ellos y sin adoptar medidas preventivas apropiadas. Por tanto, el artículo no establece una simple formalidad que el Estado de origen tenga que cumplir sin el propósito real de llegar a una solución aceptable para los demás Estados, ni tampoco el derecho de veto para los Estados que puedan resultar afectados. Para mantener el equilibrio, el artículo prescribe la manera y la finalidad de las consultas entre las partes. Las partes deben consultarse de buena fe y tener en cuenta los legítimos intereses de cada una. Las partes han de consultarse con miras a llegar a una solución aceptable sobre las medidas que han de adoptarse para prevenir o aminorar el riesgo de daños transfronterizos sensibles.

3) A juicio de la Comisión, el principio de la buena fe es parte integrante de toda obligación de consulta y negociación. La obligación de consultar y negociar sinceramente y de buena fe se reconoció en el laudo del asunto del *Lac Lanoux*, en el que el tribunal declaró que:

Las consultas y negociaciones entre los dos Estados deben ser sinceras, deben cumplir las normas de la buena fe y no deben ser simples formalidades. Las normas de la razón y la buena fe son aplicables a los derechos y obligaciones de procedimiento relativos al uso compartido de los ríos internacionales⁶²

4) En lo que respecta a esta cuestión concreta de la buena fe, la Comisión se basa también en el fallo de la CIJ en el asunto de la *Compétence en matière de pêcheries* (Reino Unido *c.* Islandia). En este fallo la Corte declaró que «su tarea [la de las partes] consistirá en celebrar negociaciones de manera que cada parte tenga de buena fe razonablemente en cuenta los derechos de la otra»⁶³. La Comisión considera también pertinente a este artículo la decisión de la Corte en los asuntos referidos al *Plateau continental de la mer du Nord* (República Federal de Alemania *c.* Dinamarca y República Federal de Alemania *c.* Países Bajos)⁶⁴ sobre la manera en que deben celebrarse negociaciones. En esos casos la Corte declaró lo siguiente:

a) Las partes tienen la obligación de entablar una negociación con miras a llegar a un acuerdo y no simplemente proceder a una negociación formal como una especie de condición previa para la aplicación automática de un determinado método de limitación, a falta de acuerdo, las partes tienen la obligación de comportarse de manera que la negociación tenga sentido, lo que no sucede cuando una de ellas insiste en su propia posición sin contemplar ninguna modificación⁶⁵

⁶² Véase la nota 24 *supra*

⁶³ Fondo, fallo, *C I J Recueil* 1974, pág. 33, párr. 78. Véase también *Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991* (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta S 92 V 5), pág. 127

⁶⁴ Fallo, *C I J Recueil* 1969, págs. 3 y ss., en particular págs. 47 y 48, párrs. 85 y 87. Véase también *Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991* (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta S 92 V 5), pág. 100

⁶⁵ *C I J Recueil* 1969, párr. 85

Aun cuando la Corte en este fallo habla de «negociación», la Comisión cree que el requisito de buena fe en la conducta de las partes durante el curso de las consultas o negociaciones es el mismo.

5) Las consultas tienen por objeto que las partes encuentren soluciones aceptables respecto de las medidas que han de adoptarse a fin de prevenir o aminorar el riesgo de daños transfronterizos sensibles. Las palabras «soluciones aceptables», relativas a la adopción de medidas preventivas, hacen referencia a aquellas medidas que son aceptadas por las partes dentro de las directrices especificadas en el párrafo 2. En general, el consentimiento de las partes en tomar medidas de prevención se expresará mediante algún tipo de acuerdo.

6) Las partes evidentemente intentarán primero seleccionar aquellas medidas que puedan evitar el riesgo de causar daños transfronterizos sensibles o, si esto no es posible, que aminoren el riesgo de esos daños. En virtud del artículo 4 las partes tienen la obligación, además, de cooperar en la aplicación de esas medidas. También esta obligación deriva de la opinión de la Comisión de que la obligación de ejercer la debida diligencia, núcleo de las disposiciones destinadas a prevenir o a aminorar los daños transfronterizos sensibles, tiene carácter continuo y vale para todas las fases de la actividad.

7) El artículo 11 puede invocarse siempre que se planee la necesidad de adoptar medidas preventivas. Esta cuestión evidentemente puede suscitarse como consecuencia del artículo 10, a causa de una notificación hecha a los demás Estados por el Estado de origen en el sentido de que una actividad que se propone emprender puede entrañar el riesgo de causar daños transfronterizos sensibles, o bien en el curso del intercambio de información previsto en el artículo 14 o en el contexto del artículo 13 sobre los procedimientos que se han de aplicar a falta de la notificación.

8) El artículo 11 tiene un ámbito amplio de aplicación. Ha de aplicarse a todas las cuestiones relativas a las medidas preventivas. Por ejemplo, cuando las partes efectúan la notificación prevista en el artículo 10 o intercambian información en virtud del artículo 14 y hay ambigüedades en esas comunicaciones, pueden pedirse consultas simplemente para aclarar esas ambigüedades.

9) El párrafo 2 orienta a los Estados para cuando se consulten sobre las medidas preventivas. Las partes buscarán soluciones basadas en el equilibrio equitativo de intereses previsto en el artículo 12. Ni el párrafo 2 de este artículo ni el artículo 12 impiden a las partes tener en cuenta otros factores que consideren pertinentes para lograr un equilibrio equitativo de intereses.

10) El párrafo 3 trata de la posibilidad de que, pese a todos los esfuerzos, las partes no puedan llegar a un acuerdo sobre medidas preventivas aceptables. Como se explicó en el párrafo 3 *supra*, el artículo establece un equilibrio entre dos consideraciones, una de las cuales es no conceder el derecho de veto a los Estados que puedan resultar afectados. A este respecto, la Comisión recuerda el laudo dictado en el asunto del *Lac Lanoux* en el que el tribunal señaló que en algunas situaciones la parte que pueda resultar afectada puede, en contra de la buena fe,

paralizar los esfuerzos sinceros de negociación⁶⁶. A fin de tener en cuenta esta posibilidad, el artículo dispone que el Estado de origen pueda proseguir la actividad, ya que la falta de esta opción concedería de hecho un derecho de veto a los Estados que puedan resultar afectados. Aunque se le permite proseguir la actividad, el Estado de origen sigue obligado a tener en cuenta los intereses de los Estados que puedan resultar afectados. Después de las consultas, el Estado de origen es consciente de las preocupaciones de los Estados que puedan resultar afectados y está incluso en una mejor situación para tomarlas seriamente en cuenta al realizar la actividad.

11) La última parte del párrafo 3 protege también los intereses de los Estados que puedan resultar afectados. La finalidad es tener un amplio alcance con objeto de incluir los derechos que los Estados que puedan resultar afectados tengan en virtud de cualquier norma de derecho internacional, de los principios generales del derecho, del derecho interno, etc.

12) En opinión de un miembro de la Comisión, a falta de una solución acordada por los Estados interesados, la designación de una comisión independiente e imparcial de investigación, con arreglo a lo previsto en el párrafo 2 del artículo 17, debería tener prioridad con respecto a una decisión unilateral de seguir adelante con la actividad en cuestión. El principio de buena fe exigiría que así fuera en relación con un instrumento que se ocupara de la prevención del daño transfronterizo sensible.

Artículo 12.—Factores de un equilibrio equitativo de intereses

Para lograr un equilibrio equitativo de intereses a tenor del párrafo 2 del artículo 11, los Estados de que se trate tendrán en cuenta todos los factores y circunstancias pertinentes, en particular:

a) El grado de riesgo de daño transfronterizo sensible y la disponibilidad de medios para prevenir ese daño o minimizar ese riesgo o reparar el daño;

b) La importancia de la actividad, teniendo en cuenta sus ventajas generales de carácter social, económico y técnico para el Estado de origen en relación con el daño potencial para los Estados que puedan resultar afectados;

c) El riesgo de que se cause un daño sensible al medio ambiente y la disponibilidad de medios para prevenir ese daño o minimizar ese riesgo o rehabilitar el medio ambiente;

d) El grado en que los Estados de origen y, cuando corresponda, los Estados que puedan resultar afectados estén dispuestos a sufragar los costos de la prevención;

e) La viabilidad económica de la actividad en relación con los costos de la prevención y con la posibilidad de realizar la actividad en otro lugar o por otros medios o de sustituirla por otra actividad;

f) Las normas de prevención que los Estados que puedan resultar afectados apliquen a la misma activi-

⁶⁶ Véase la nota 24 *supra*.

dad o actividades comparables y las normas aplicadas en la práctica regional o internacional comparable.

Comentario

1) El objeto de este artículo es ofrecer alguna orientación a los Estados que han iniciado consultas tratando de lograr un equilibrio de intereses equitativo. Para alcanzar un equilibrio de intereses equitativo hay que determinar los hechos y sopesar todos los factores y circunstancias pertinentes.

2) La cláusula principal del artículo dispone que, «para lograr un equilibrio equitativo de intereses a tenor del párrafo 2 del artículo 11, los Estados interesados tendrán en cuenta todos los factores y circunstancias pertinentes». El artículo continúa con una lista no exhaustiva de esos factores y circunstancias. La amplia diversidad de tipos de actividades que abarcan estos artículos y las diferentes situaciones y circunstancias en que se realizarán hacen imposible formular una lista exhaustiva de factores que guarden relación con todos los casos individuales. Algunos de los factores pueden ser pertinentes en un determinado caso mientras que otros pueden no serlo y algunos otros factores no contenidos en la lista pueden resultar pertinentes. No se asigna prioridad ni peso a los factores y circunstancias enumerados puesto que algunos de ellos pueden ser más importantes en ciertos casos y otros pueden merecer que se les conceda mayor peso en otros casos. En general, los factores y circunstancias indicados permitirán a las partes comparar los costos y beneficios que pueden darse en un caso particular.

3) En el *apartado a* se compara el grado de riesgo del daño transfronterizo sensible con la disponibilidad de medios de prevenir ese daño o reducir al mínimo ese riesgo y la posibilidad de reparar el daño. Por ejemplo, el grado de riesgo de daño puede ser elevado pero puede haber medidas que permitan prevenir el daño o reducir ese riesgo o puede haber posibilidades de reparar el daño. Las comparaciones en este caso son cuantitativas y cualitativas.

4) En el *apartado b* se compara la importancia de la actividad en función de sus ventajas sociales, económicas y técnicas para el Estado de origen con el daño potencial para los Estados que puedan verse afectados. La Comisión recuerda en este contexto la decisión del asunto *Donauversinkung* en el que la Corte declaró lo siguiente:

Los intereses de los Estados en cuestión han de ponderarse entre sí de manera equitativa. Se ha de considerar no sólo el daño absoluto causado al Estado vecino sino también la relación de la ventaja obtenida por el uno con el daño causado al otro⁶⁷

⁶⁷ *Streitsache des Landes Württemberg und des Landes Preussen gegen das Land Baden, betreffend die Donauversinkung*, Staatsgerichtshof alemán, 18 de junio de 1927, *Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen*, Berlin, vol 116, apéndice, págs 18 y ss, véase también *Annual Digest of Public International Law Cases, 1927 and 1928*, edición de A. McNair y H. Lauterpacht, Londres, Longmans, 1931, vol 4, pág 131, *Kansas c Colorado* (1907), *United States Reports*, vol 206, 1921, pág 100, y *Washington c Oregon* (1936), *ibíd*, vol 297, 1936, pág 517

5) En el *apartado c* se compara, de la misma manera que en el *apartado a*, el riesgo de daño sensible al medio ambiente con la disponibilidad de medios de prevenir ese daño o aminorar ese riesgo y la posibilidad de rehabilitar el medio ambiente. La Comisión recalca la importancia particular de la protección del medio ambiente. Considera que el principio 15 de la Declaración de Río guarda relación con este párrafo cuando dice:

Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente⁶⁸

6) La Comisión consideró la posibilidad de reemplazar la expresión «rehabilitar» por la expresión «preservar», pero decidió conservar la primera. En su opinión, los Estados debían considerar los medios apropiados para restablecer, en la medida de lo posible, la situación existente antes de producirse el daño. Se considera que se debía destacar lo anterior como un factor que habrían de tomar en cuenta los Estados interesados que adoptaran medidas propicias al medio ambiente.

7) Un miembro de la Comisión expresó la opinión de que debía suprimirse el *apartado c* por cuanto, atendida la definición de daño del *apartado b* del artículo 2, el daño del medio ambiente ya estaba comprendido en las disposiciones del *apartado a*. Otros miembros consideraron que el *apartado a* se refería más directamente al grado de riesgo y al grado de disponibilidad de medios de prevención, en tanto que el *apartado c* se refería a la necesidad de velar por la adopción de medidas más propicias al medio ambiente. Por lo tanto, debía mantenerse el *apartado c* como disposición.

8) En el *apartado d* se dispone que uno de los elementos que determinan la elección de medidas preventivas es la voluntad de los Estados que pueden verse afectados de contribuir al costo de la prevención. Por ejemplo, si los Estados que pueden verse afectados están dispuestos a contribuir a los gastos de las medidas preventivas puede ser razonable, teniendo en cuenta otros factores, esperar que el Estado de origen tome medidas preventivas más costosas pero más eficaces. Sin embargo, esto no debe restar importancia a las medidas eficaces en función del costo que el Estado de origen está obligado a tomar en primera instancia para que se puedan tomar las medidas apropiadas con arreglo al artículo 3.

9) La expresión «cuando corresponda» indica que el Estado de origen y los Estados que probablemente resultarían afectados no están en el mismo nivel en cuanto a la contribución a los gastos de prevención. Con frecuencia los Estados interesados inician negociaciones respecto de la distribución de los gastos de las medidas preventivas. Al hacerlo actúan sobre la base del principio básico derivado del artículo 3 en cuya virtud esos gastos deben correr de cargo del operador o del Estado de origen. Esas negociaciones tienen lugar principalmente en los casos en que no hay acuerdo respecto del monto de las medidas preventivas y en que el Estado afectado contribuye a los gastos de las medidas preventivas a fin de velar por un mayor grado de protección por encima de lo

⁶⁸ Véase la nota 13 *supra*

que el Estado de origen considera que es esencial garantizar. Ese vínculo entre la distribución de los gastos y el monto de las medidas preventivas se refleja en particular en el apartado d.

10) El *apartado e* introduce una serie de factores que han de compararse y tenerse en cuenta. La viabilidad económica de la actividad debe compararse con los costos de la prevención. El costo de las medidas preventivas no debe ser tan alto que haga económicamente inviable la actividad. La viabilidad económica de la actividad debe evaluarse también en función de la posibilidad de cambiar el emplazamiento o realizarla por otros medios o sustituirla por otra actividad. Con las palabras «realizar la actividad [...] por otros medios» se pretende tener en cuenta, por ejemplo, una situación en la que un tipo de sustancia química utilizado en la actividad, que pudiera ser la causa del daño transfronterizo, pueda sustituirse por otra sustancia química o el equipo mecánico de la planta o la fábrica pueda sustituirse por otro equipo diferente. Las palabras «sustituirla por otra actividad» tienen por objeto tener en cuenta la posibilidad de que se puedan alcanzar los mismos resultados o resultados comparables con otra actividad sin riesgo, o con un riesgo muy inferior, de daño transfronterizo sensible.

11) En el *apartado f* se comparan las normas de protección solicitadas del Estado de origen con las aplicadas a la misma actividad o una actividad comparable en el Estado que puede verse afectado. El fundamento es que, en general, puede no ser razonable pedir al Estado de origen que cumpla una norma de prevención mucho más estricta que la que se aplica en los Estados que pueden verse afectados. Sin embargo, este factor no es en sí mismo concluyente. Puede haber situaciones en que cabría esperar que el Estado de origen aplicara a la actividad normas de prevención superiores a las aplicadas en los Estados que pueden resultar afectados, por ejemplo, cuando el Estado de origen es un Estado muy desarrollado y aplica reglamentaciones legales sobre el medio ambiente establecidas en el plano interno. Estas reglamentaciones pueden ser considerablemente más estrictas que las aplicadas en un Estado de origen que, por hallarse en determinada fase de desarrollo, tenga (y ciertamente necesite) pocas reglamentaciones, si es que las tiene, sobre las normas de prevención. Teniendo en cuenta otros factores, el Estado de origen puede tener que aplicar sus propias normas de prevención, más estrictas que las de los Estados que pueden verse afectados.

12) Los Estados deben también tener en cuenta las normas de prevención aplicadas a las mismas actividades o a actividades comparables en otras regiones o, si existen, las normas internacionales de prevención aplicables a actividades semejantes. Esto reviste especial importancia cuando, por ejemplo, los Estados interesados no disponen de ninguna norma de prevención en relación con esas actividades o desean mejorar las normas existentes.

Artículo 13.—Procedimientos aplicables a falta de notificación

1. Si un Estado tiene motivos razonables para creer que una actividad que se proyecta o lleva a cabo en el territorio o de cualquier otro modo bajo la juris-

dicción o el control de otro Estado puede entrañar un riesgo de causarle un daño transfronterizo sensible, podrá pedir al otro Estado que se aplique la disposición del artículo 10. La petición irá acompañada de una exposición documentada de sus motivos.

2. En caso de que el Estado de origen llegue, no obstante, a la conclusión de que no está obligado a hacer la notificación a que se refiere el artículo 10, informará de esa conclusión al otro Estado dentro de un plazo razonable y le presentará una exposición documentada de las razones en que ella se funde. Si el otro Estado no está de acuerdo con esa conclusión, los dos Estados entablarán sin demora, a petición de ese otro Estado, consultas en la forma indicada en el artículo 11.

3. Durante las consultas, el Estado de origen deberá, a petición del otro Estado, disponer las medidas adecuadas y viables para minimizar el riesgo y, cuando proceda, suspender la actividad de que se trate por un período de seis meses, salvo que se acuerde otra cosa.

Comentario

1) El artículo 13 trata de la situación en la que un Estado, a pesar de no haber recibido notificación de una actividad de conformidad con el artículo 10, tiene conocimiento de que se está llevando a cabo una actividad en otro Estado, bien sea por el propio Estado o por una entidad privada, y tiene motivos razonables para creer que esa actividad entraña un riesgo de causarle un daño sensible.

2) La expresión «un Estado» no excluye la posibilidad de que más de un Estado crea que una actividad proyectada puede dañarle de manera sensible. Las palabras «se aplique la disposición del artículo 10» no deben interpretarse en el sentido de que el Estado que tiene la intención de autorizar o ha autorizado una actividad necesariamente ha incumplido sus obligaciones en virtud del artículo 10. En otras palabras, ese Estado puede haber hecho una evaluación del riesgo de que la actividad prevista cause un daño transfronterizo sensible y haber llegado de buena fe a la conclusión de que no se derivarían tales efectos de dicha actividad. El *párrafo 1* permite que un Estado pida al Estado en el que se origina la actividad que reconsidere su evaluación y sus conclusiones, y no prejuzga si el Estado de origen cumplió inicialmente las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 10.

3) Para que el Estado que puede resultar afectado tenga derecho a hacer tal petición han de cumplirse, no obstante, dos condiciones. La primera es que el Estado solicitante tenga «motivos razonables para creer» que la actividad de que se trate puede entrañar un riesgo de causarle un daño transfronterizo sensible. La segunda es que el Estado solicitante presente «una exposición documentada de sus motivos». El objeto de estas condiciones es que el Estado solicitante tenga algo más que un temor vago y carente de fundamento. Es necesaria una creencia seria y fundamentada, en particular dada la posibilidad

de pedir al Estado de origen que suspenda la ejecución de sus planes con arreglo al párrafo 3 del artículo 13.

4) La primera frase del párrafo 2 trata del caso en que el Estado que proyecta tomar las medidas llegue a la conclusión, después de reconsiderar su posición, como se indica en el párrafo 2 del presente comentario, de que no está obligado a hacer la notificación a que se refiere el artículo 10. En tal situación, el párrafo 2 tiene por objeto mantener un justo equilibrio entre los intereses de los Estados interesados exigiendo que el Estado de origen ofrezca el mismo tipo de justificación de su conclusión que los que se exigen al Estado solicitante en virtud del párrafo 1. La segunda frase del párrafo 2 trata del supuesto de que la conclusión del Estado de origen no satisfaga al Estado solicitante. Exige que en tal situación el Estado de origen inicie sin demora consultas con el otro Estado (o Estados) a petición de este (estos) último(s). Las consultas se han de realizar en la forma indicada en los párrafos 1 y 2 del artículo 11. En otras palabras, su objeto es hallar «soluciones aceptables» con respecto a las medidas que han de adoptarse para prevenir o minimizar el riesgo de causar un daño transfronterizo sensible, y que las soluciones que se persiguen deben estar «basadas en un equilibrio equitativo de intereses». Estas frases se han examinado en el comentario del artículo 11.

5) El párrafo 3 requiere que el Estado de origen adopte medidas adecuadas y viables para minimizar el riesgo y, cuando proceda, que suspenda la actividad de que se trate por un período de seis meses, si así se lo pide el otro Estado durante las consultas. Los Estados interesados también podrían acordar otra cosa.

6) Otros instrumentos jurídicos contienen disposiciones análogas. El artículo 18 de la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación y el párrafo 7 del artículo 3 del Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo también prevén un procedimiento por el cual un Estado que pueda verse afectado por una actividad puede iniciar consultas con el Estado de origen.

7) En opinión de un miembro era simplemente arbitrario prever un período de suspensión de seis meses en el párrafo 3. Además, no era claro si se mencionaba ese plazo en tanto marco temporal recomendado o si el Estado de origen, en ese caso, tenía la obligación de suspender la actividad durante seis meses. En opinión de ese miembro, la expresión «cuando proceda» complicaba todavía más la interpretación de esa disposición. Otros miembros defendieron la redacción actual por ser pragmática.

Artículo 14.—Intercambio de información

Mientras se lleve a cabo la actividad, los Estados de que se trata deberán intercambiar oportunamente toda la información pertinente disponible para prevenir o minimizar el riesgo de daño transfronterizo sensible.

Comentario

1) El artículo 14 trata de las medidas que deben adoptarse después de haber emprendido una actividad. La finalidad de todas esas medidas es la misma que la de los artículos anteriores, es decir, prevenir o aminorar el riesgo de daño transfronterizo sensible.

2) El artículo 14 obliga al Estado de origen y a los demás Estados interesados a intercambiar información sobre la actividad después de haber sido ésta emprendida. En opinión de la Comisión, prevenir y aminorar el riesgo de daños transfronterizos sobre la base del concepto de la diligencia debida no es algo que se realice de una vez para siempre, sino que requiere esfuerzos continuados. Esto significa que la diligencia debida no acaba después de conceder la autorización para la actividad y de iniciar ésta; continúa en lo que se refiere a la vigilancia de la realización de la actividad, mientras ésta prosiga.

3) La información que se debe intercambiar, en virtud del artículo 14, será toda la que resulte útil, en el caso concreto, para prevenir el riesgo de daños sensibles. Normalmente, el Estado de origen tendrá conocimiento de esa información. Sin embargo, cuando el Estado que pueda resultar afectado tenga alguna información que pudiera ser útil con fines preventivos deberá ponerla a disposición del Estado de origen.

4) La obligación de intercambiar información es bastante corriente en las convenciones orientadas a prevenir o aminorar los daños ambientales y transfronterizos. Esas convenciones prevén diversas formas de reunir e intercambiar información, ya sea entre las partes o bien proporcionando la información a una organización internacional que la ponga a disposición de otros Estados⁶⁹. En el contexto de esos artículos, cuando las actividades afecten sólo, probablemente, a algunos Estados, el intercambio de información se realizará entre los Estados directamente interesados. Cuando la información pueda afectar a un gran número de Estados, la información pertinente podrá intercambiarse por otros medios como, por ejemplo, las organizaciones internacionales competentes.

5) El artículo 14 obliga a que la información se intercambie oportunamente. Esto significa que el Estado, cuando tenga conocimiento de esa información, deberá informar rápidamente a los otros Estados a fin de que haya tiempo suficiente para que los Estados interesados

⁶⁹ Por ejemplo, el artículo 10 del Convenio para la prevención de la contaminación marina de origen terrestre, el artículo 4 del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono y el artículo 200 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar hablan de investigaciones aisladas o conjuntas de los Estados Partes sobre la prevención o la reducción de la contaminación, y de su comunicación mutua directamente o por conducto de la organización internacional competente. El Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia prevé la investigación y el intercambio de información sobre los efectos de las actividades emprendidas por los Estados Partes. Se encuentran ejemplos en otros instrumentos, como el inciso iii) del apartado b del párrafo 1 de la sección VI del Código de conducta sobre contaminación accidental de aguas interiores transfronterizas (nota 22 *supra*), el artículo 17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y el artículo 13 del Convenio sobre la protección y utilización de cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales.

realicen consultas sobre medidas preventivas apropiadas, o los Estados que puedan resultar afectados tengan tiempo suficiente para adoptar medidas adecuadas.

6) El artículo no establece ningún requisito en cuanto a la frecuencia del intercambio de información. La obligación del artículo 14 sólo surge cuando los Estados tienen alguna información que sea pertinente para prevenir o aminorar el riesgo de daños transfronterizos.

Artículo 15.—Seguridad nacional y secretos industriales

Los datos e informaciones vitales para la seguridad nacional del Estado de origen o para la protección de secretos industriales podrán no ser transmitidos, pero el Estado de origen cooperará de buena fe con los demás Estados de que se trate para proporcionar toda la información posible en atención a las circunstancias.

Comentario

1) El artículo 15 tiene por objeto establecer una excepción restringida a la obligación de los Estados de facilitar información en virtud de los artículos 9, 10 y 14. A juicio de la Comisión, no debería obligarse a los Estados a revelar información vital para su seguridad nacional o considerada secreto industrial. Este tipo de cláusula no es rara en los tratados que requieren intercambio de información. El artículo 31 de la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación prevé también una excepción semejante a la obligación de revelar información vital para la defensa o la seguridad nacionales.

2) En el artículo 15 se incluyen los secretos industriales además de la seguridad nacional. En el contexto de estos artículos, es muy probable que alguna de las actividades comprendidas dentro del artículo 1 puedan implicar el uso de tecnología adelantada con algunos tipos de información que puedan estar protegidos incluso por el derecho interno. Normalmente la legislación nacional de los Estados determina la información que se considera secreto industrial y la protege. Este tipo de cláusula de salvaguardia no es rara en los instrumentos jurídicos que se ocupan del intercambio de información sobre actividades industriales. Por ejemplo, el artículo 8 del Convenio sobre la protección y utilización de cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales y el párrafo 8 del artículo 2 del Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo prevén una protección similar para los secretos industriales y comerciales.

3) El artículo 15 reconoce la necesidad de equilibrar los intereses legítimos del Estado de origen y de los Estados que puedan resultar afectados. Por tanto, requiere que el Estado de origen que no transmita información por razones de seguridad o de secreto industrial coopere de buena fe con los demás Estados facilitando toda la información que sea posible según las circunstancias. Las palabras

«toda la información posible» incluyen, por ejemplo, la descripción general del riesgo y del tipo y magnitud de los daños a que esté expuesto un Estado. Las palabras «en atención a las circunstancias» se refieren a las condiciones invocadas para no transmitir la información. En lo esencial, el artículo 15 se basa en la cooperación de buena fe de las partes y la estimula.

Artículo 16.—No discriminación

Salvo que los Estados de que se trate hayan acordado otra cosa a los efectos de la protección de las personas, naturales o jurídicas, que puedan estar o estén expuestas al riesgo de que se les cause un daño transfronterizo sensible como resultado de actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de los presentes proyectos de artículo, los Estados no discriminarán por motivo de nacionalidad o residencia o de lugar en que pueda ocurrir el daño, y darán a esas personas, de conformidad con sus ordenamientos jurídicos, acceso a los procedimientos judiciales o de otra índole para que soliciten protección u otra reparación apropiada.

Comentario

1) Este artículo sienta el principio básico de que el Estado de origen ha de conceder acceso a sus procedimientos judiciales y de otra índole sin discriminación por razón de la nacionalidad, la residencia o el lugar en que pueda ocurrir el daño.

2) El artículo 16 contiene dos elementos básicos, a saber: la no discriminación por la nacionalidad o la residencia y la no discriminación por el lugar en que pueda ocurrir el daño. La norma obliga a los Estados a garantizar que toda persona, cualquiera que sea su nacionalidad o lugar de residencia, que haya sufrido un daño transfronterizo sensible a causa de las actividades a que se refiere el artículo 1, con independencia del lugar en que se haya producido o pueda producirse el daño, reciba el mismo tratamiento que el concedido por el Estado de origen a sus nacionales en caso de daños de carácter interno. Esta obligación no pretende afectar a la práctica de algunos Estados que exigen a los no residentes o extranjeros prestar fianza como condición para recurrir al sistema judicial, a fin de cubrir las costas judiciales u otros gastos. Según este artículo, esta práctica no es «discriminatoria» y a ella se refieren las palabras «de conformidad con sus ordenamientos jurídicos».

3) El artículo 16 dispone también que el Estado de origen no puede discriminar por razón del lugar en que pueda ocurrir el daño. Es decir, si se causó un daño sensible en el Estado A como consecuencia de una actividad prevista en el artículo 1 realizada en el Estado B, éste no puede oponerse a una acción basándose en que el daño se produjo fuera de su jurisdicción. Esta disposición también tiene por objeto cubrir el daño a que pueden estar expuestas las personas sin documentos de identidad o pasaporte, los autóctonos o miembros de clanes familiares.

4) Esta norma es subsidiaria, como indica la frase «Salvo que los Estados de que se trate hayan acordado otra cosa». En consecuencia, los Estados interesados pueden ponerse de acuerdo sobre la mejor manera de dar reparación a las personas que hayan sufrido un daño sensible, por ejemplo, mediante un acuerdo bilateral. En virtud del presente proyecto de artículos se alienta a los Estados interesados a concertar un régimen especial para las actividades que entrañen el riesgo de daño transfronterizo sensible. En esos acuerdos los Estados pueden prever también la manera de proteger los intereses de las personas afectadas en caso de daño transfronterizo sensible. Las palabras «a los efectos de la protección de las personas» se utilizan para dejar claro que el párrafo no pretende sugerir que los Estados pueden de común acuerdo discriminar en cuanto al acceso a sus procedimientos judiciales o de otra índole o al derecho a indemnización. El acuerdo interestatal debe siempre tener por objeto proteger los intereses de las víctimas del daño.

5) En los acuerdos internacionales y en las recomendaciones de las organizaciones internacionales se encuentran precedentes de la obligación prevista en este artículo. Por ejemplo, el artículo 3 de la Convención sobre la protección del medio ambiente entre Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, de 19 de febrero de 1974, dispone lo siguiente:

Toda persona que resulte afectada o pueda resultar afectada por un daño causado por actividades ambientalmente nocivas en otro Estado contratante tendrá derecho a plantear ante el tribunal o la autoridad administrativa competentes de ese Estado la cuestión de la permisibilidad de tales actividades, incluida la cuestión de las medidas encaminadas a prevenir daños, y a apelar contra la decisión del tribunal o de la autoridad administrativa, en la misma medida y en las mismas condiciones que una entidad jurídica del Estado en el que se estén realizando las actividades

Lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo se aplicará también en el caso de procedimientos relativos a la indemnización por daños causados por actividades ambientalmente nocivas. La cuestión de la indemnización no se juzgará por normas que sean menos favorables a la parte lesionada que las normas de indemnización del Estado en el que se estén realizando las actividades⁷⁰

El Consejo de la OCDE ha adoptado la recomendación C(77)28(Final) sobre la aplicación de un régimen de igualdad de acceso y no discriminación en materia de contaminación transfronteriza. El apartado a del párrafo 4 del anexo de esa recomendación dispone lo siguiente:

Los países de origen garantizarán que toda persona que haya sufrido daños a causa de contaminación transfronteriza o esté expuesta a un riesgo importante de contaminación transfronteriza recibirá por lo menos un trato equivalente al otorgado en el país de origen, en casos de contaminación interna y en circunstancias comparables, a personas de situación o condición equivalentes⁷¹

⁷⁰ Disposiciones semejantes pueden encontrarse en el párrafo 6 del artículo 2 del Convenio sobre la evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, en las Directrices sobre la responsabilidad y la obligación de reparar en caso de contaminación de aguas transfronterizas, parte II E 8, preparadas por el Grupo Especial sobre responsabilidad y obligación de reparar en caso de contaminación de aguas transfronterizas (doc ENVWA/R 45, anexo), y en el párrafo 6 del proyecto de Carta de la CEPE sobre derechos y obligaciones ambientales preparado en una reunión de expertos en derecho ambiental, 25 de febrero a 1º de marzo de 1991 (doc ENVWA/R 38, anexo I)

⁷¹ *L'OCDE et l'environnement* (nota 26 *supra*), pág. 173. En el mismo sentido véase el principio 14 de los «Principios de Conducta en el campo del medio ambiente para orientar a los Estados en la conservación y utilización armoniosa de los recursos naturales compartidos por dos o más Estados», aprobados por el Consejo de Administración

Artículo 17.—Solución de controversias

1. Toda controversia acerca de la interpretación o aplicación de los presentes proyectos de artículo se resolverá prontamente mediante los medios de solución pacífica que elijan de mutuo acuerdo las partes, incluido el sometimiento de la controversia a la mediación, la conciliación, el arbitraje o el arreglo judicial.

2. De no lograr acuerdo a este respecto en un plazo de seis meses, cualquiera de las partes interesadas podrá pedir que se nombre una comisión independiente e imparcial de determinación de los hechos. El informe de la Comisión tendrá carácter de recomendación, que las partes considerarán de buena fe.

Comentario

1) El artículo 17 establece una norma básica para el arreglo de controversias acerca de la interpretación o aplicación del régimen de prevención establecido en el presente proyecto de artículos. La norma tiene carácter subsidiario y se aplica cuando los Estados interesados no han llegado a un acuerdo aplicable al arreglo de dichas controversias.

2) Se parte de la base de que la aplicación de este artículo tendrá lugar únicamente después de que los Estados interesados hayan agotado todos los medios de persuasión a su alcance, mediante consultas y negociaciones apropiadas. Éstas pueden tener lugar como resultado de las obligaciones impuestas por el presente proyecto de artículos o en el curso normal de las relaciones entre los Estados.

3) En caso de que no se llegue a un acuerdo mediante el procedimiento de consultas y negociaciones, se insta a los Estados interesados a que continúen realizando esfuerzos para solucionar su controversia mediante aquellos otros medios pacíficos de arreglo que elijan de mutuo acuerdo, incluidos la mediación, los buenos oficios, la conciliación, el arbitraje o el arreglo judicial. Se trata de los medios de arreglo pacífico de controversias establecidos en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, en el segundo párrafo de la sección pertinente de la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas⁷² y en el párrafo 5 de la sección I de la Declaración de Manila sobre Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales⁷³, que los Estados pueden elegir de común acuerdo⁷⁴.

del PNUMA en su decisión 6/14, de 19 de mayo de 1978 (véase la nota 18 *supra*). El principio del acceso igual se examina en S. Van Hoogstraten, P. Dupuy y H. Smets, «L'égalité d'accès pollution transfrontière», *Environmental Policy and Law*, vol. 2, n.º 2 (junio de 1976), pág. 77.

⁷² Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, de 24 de octubre de 1970, anexo.

⁷³ Resolución 37/10 de la Asamblea General, anexo.

⁷⁴ Véase un análisis de los distintos medios de arreglo pacífico de controversias y referencias a los instrumentos internacionales pertinentes en *Manual sobre el arreglo pacífico de controversias entre Estados* (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta S.92.V.7, doc OLA/COD/2416).

4) Si los Estados interesados no pueden llegar a un acuerdo sobre alguno de los medios de arreglo pacífico de controversias en un plazo de seis meses, el párrafo 2 del artículo 17 obliga a los Estados, a petición de uno de ellos, a recurrir a una comisión independiente e imparcial de determinación de los hechos. Es este un procedimiento obligatorio que, a juicio de la Comisión, es útil y necesario para ayudar a los Estados a solucionar sus controversias rápidamente sobre la base de la determinación y la evaluación objetivas de los hechos. La falta de una determinación adecuada de los hechos constituye a menudo el origen de las diferencias o controversias entre los Estados.

5) El recurso a una comisión independiente e imparcial de determinación de los hechos es un método bien conocido incorporado en varios tratados bilaterales y multilaterales, incluidos el Pacto de la Sociedad de las Naciones, la Carta de las Naciones Unidas y los instrumentos constitutivos de algunos organismos especializados y otras organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas. Las posibilidades que ofrecen de contribuir a la prevención de controversias internacionales han sido reconocidas en la resolución 1967 (XVIII) de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1963, titulada «Cuestión de los métodos para la determinación de los hechos»⁷⁵.

6) En virtud del mandato de investigar los hechos y aclarar las cuestiones objeto de controversia, dichas comisiones suelen tener competencia para organizar audiencias con las partes, efectuar el examen de testigos y visitas sobre el terreno.

7) El informe de la Comisión debe por lo general determinar o aclarar «hechos». En la medida en que esto no

presupone estimación o evaluación algunas, por lo general una vez determinados los hechos ya no cabe disputarlos. Los Estados interesados todavía pueden dar el peso que estimen adecuado a esos «hechos» a efectos de llegar a una solución de la controversia. Sin embargo, el artículo 17 exige que los Estados interesados, como mínimo, deben considerar de buena fe el informe de la comisión de determinación de los hechos.

8) La CIJ se refirió al requisito de «buena fe» en el caso del *Plateau continental de la mer du Nord* entre Dinamarca y la República Federal de Alemania. Al aplicar este principio, la Corte dijo que las partes en la controversia «tienen la obligación de comportarse de manera que las negociaciones tengan sentido, lo que no sucederá si una de las partes insiste en mantener su propia posición sin contemplar la posibilidad de modificarla»⁷⁶.

9) El artículo 17 no es de aplicación automática. Requiere mayor complementación, mediante un anexo, acerca de la manera y los medios de constitución y funcionamiento de la comisión de determinación de los hechos. Los Estados que acepten el artículo 17 podrían concretar el procedimiento de constitución de una comisión de esa naturaleza mediante un acuerdo especial. Toda convención futura que incorpore el régimen de prevención podría proporcionar también la necesaria complementación al respecto. Existe un modelo en el artículo 33 de la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. No obstante, se consideró que en esta etapa era prematuro establecer un procedimiento tan detallado en el texto antes de adoptar una decisión en cuanto a la forma que asumirían los proyectos de artículo.

⁷⁵ Ibid, pag 25. Véase también la Declaración sobre la determinación de los hechos por las Naciones Unidas en la esfera del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (resolución 46/59 de la Asamblea General, anexo).

⁷⁶ Véase la nota 65 *supra*. Véase también el asunto relativo al *Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie)*, fallo, *C I J Recueil* 1997, pag 7, en particular pag 78, par 141.

Capítulo V

PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA

A.—Introducción

56. En su 48.º período de sesiones, celebrado en 1996, la Comisión consideró que el tema de la «Protección diplomática» era uno de los tres temas idóneos para la codificación y el desarrollo progresivo⁷⁷. En ese mismo año la Asamblea General, en el párrafo 13 de su resolución 51/160, invitó a la CDI a que examinara el tema e indicara su alcance y contenido atendidas las observaciones formuladas en el curso del debate en la Sexta Comisión y las observaciones que los gobiernos presentasen por escrito. En la 2477.ª sesión de su 49.º período de sesiones, celebrado en 1997, de conformidad con la invitación hecha en la resolución de la Asamblea, la Comisión estableció un Grupo de Trabajo sobre el tema⁷⁸. En el mismo período de sesiones el Grupo de Trabajo sobre la protección diplomática presentó un informe que fue aprobado por la Comisión⁷⁹. El Grupo de Trabajo trató de: *a)* aclarar, en lo posible, el ámbito del tema, y *b)* determinar las cuestiones que deberían estudiarse en el contexto de dicho tema y, por su parte, la Comisión recomendó al Relator Especial que adoptase ese esquema como base para la presentación de un informe preliminar. La Comisión acordó también que trataría de concluir el examen del tema en primera lectura antes de que finalizara el quinquenio en curso.

57. También en su 49.º período de sesiones, la Comisión designó como Relator Especial para el tema al Sr. Mohamed Bennouna⁸⁰.

58. En el párrafo 8 de su resolución 52/156 la Asamblea General hizo suya la decisión de la Comisión de incluir en su programa el tema de la «Protección diplomática».

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones

59. En su actual período de sesiones la Comisión tuvo ante sí el informe preliminar del Relator Especial (A/CN.4/484).

⁷⁷ *Anuario* 1996, vol II (segunda parte), doc A/51/10, parr 248 y anexo II, adición I

⁷⁸ *Anuario* 1997, vol II (segunda parte), parr 169

⁷⁹ *Ibid*, cap VIII, secc B

⁸⁰ *Ibid*, parr 190

60. La Comisión examinó el informe preliminar del Relator Especial en sus sesiones 2520.ª a 2523.ª, celebradas del 28 de abril al 1.º de mayo de 1998.

1. INTRODUCCION DEL INFORME PRELIMINAR DEL RELATOR ESPECIAL

61. El informe preliminar planteaba una serie de cuestiones básicas, inherentes al tema, respecto de las cuales el Relator Especial solicitaba la opinión de la Comisión. Esas cuestiones se dividían en dos categorías generales: *a)* el carácter jurídico de la protección diplomática y *b)* el carácter de las normas que rigen la protección diplomática.

a) El carácter jurídico de la protección diplomática

i) Origen de la protección diplomática

62. El Relator Especial, haciendo referencia al informe del Grupo de Trabajo sobre la protección diplomática, observó que el tema de la «Protección diplomática» entrañaba fundamentalmente una labor de codificación y que su origen consuetudinario se reflejaba en el *dictum* del asunto *Concessions Mavrommatis en Palestine*⁸¹. Al referirse a la historia de la institución de la protección diplomática, el Relator Especial hizo alusión a ciertas críticas que había suscitado en el pasado la protección diplomática. Entre otras, la afirmación de que la institución de la protección diplomática, era discriminatoria porque sólo los Estados poderosos podían ejercerla contra los más débiles. Según esa crítica, la protección diplomática no era de carácter igualitario porque la

⁸¹ La CPJI declaró que

«Al tomar el partido de uno de los suyos, al poner en movimiento en su favor la acción diplomática o la acción judicial internacional, ciertamente ese Estado hace valer su propio derecho, el derecho que tiene de hacer respetar en la persona de sus nacionales el derecho internacional

»Segun este punto de vista, no procede preguntarse si el litigio tiene su origen en un interes privado, cosa que por lo demas ocurre en un gran numero de controversias entre Estados Desde el momento en que el Estado hace suya la causa de uno de sus nacionales seguida ante un tribunal internacional, para este ultimo el unico demandante es el Estado »

(Fallo n º 2, 1924, C P J I, série A, n º 2, pag 12)

posibilidad de que una persona lograra que su causa fuera objeto de atención en el plano internacional dependía del Estado al que esa persona estaba unida por el vínculo de la nacionalidad. Otra crítica era la de que la protección diplomática había servido de pretexto para la injerencia en los asuntos de ciertos países⁸². El Relator Especial observó que la doctrina Calvo⁸³ se había planteado con el fin de impedir los abusos y permitía que los extranjeros conviniesen en regirse por el principio de la igualdad con los nacionales, sujetos exclusivamente a la jurisdicción de los tribunales del país.

63. El Relator Especial explicó que el elemento esencial en la protección diplomática era la controversia surgida entre un Estado que hubiese acogido a un extranjero y ese extranjero cuando se le hubiesen denegado sus derechos con el consiguiente perjuicio. Si el nacional extranjero no tuviese la posibilidad de internacionalizar la controversia y sacarla del ámbito del derecho interno, el Estado del que era nacional podía, a su discreción, hacer suya esa reclamación operando en ella una verdadera «novación», dado que sólo un Estado podía hacer valer la responsabilidad de otro. En su opinión, esta concepción clásica se fundaba en gran medida en una ficción jurídica porque lo que servía de fundamento para la responsabilidad del Estado de acogida y para evaluar la reparación debida al Estado de la nacionalidad era el daño causado al nacional extranjero⁸⁴.

64. El Relator Especial observó además que, al formular en el artículo 22 del proyecto de artículos sobre responsabilidad de los Estados el principio del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna⁸⁵, la Comisión había tenido en cuenta los debates de la doctrina en cuanto a si la norma en juego era «procesal» o «sustantiva». La Comisión optó por la segunda solución y, por consiguiente, la responsabilidad del Estado de acogida sólo podría hacerse valer una vez que la persona hubiese agotado los recursos de la jurisdicción interna. Sin embargo, a juicio del Relator Especial, del comentario de la Comisión no quedaba claro cómo el agotamiento de los procedimientos internos podía transformar ese derecho en un derecho del Estado de la nacionalidad, de manera de volver a la lógica de la protección diplomática.

⁸² Véase la opinión individual del magistrado Padilla Nervo en el asunto *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited*, sentencia de 5 de febrero de 1970, en que señaló

«La historia de la responsabilidad de los Estados en materia de trato de los extranjeros es una serie de abusos, injerencias ilegales en el ordenamiento interno de los Estados débiles, reclamaciones injustificadas, amenazas e incluso agresiones militares so pretexto del ejercicio de los derechos de protección y la imposición de sanciones para obligar a un gobierno a hacer las reparaciones exigidas»

[C I J Recueil 1970, págs. 3 y ss., en particular pag. 246 Véase también *Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991* (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta S 92 V 5), pag. 104]

⁸³ Véase *Anuario* 1956, vol. II, págs. 203 y 204, doc. A/CN.4/96

⁸⁴ Véase *Usine de Chorzów*, fondo, fallo n.º 13, 1928, C P J I, serie A, n.º 17, pag. 28

⁸⁵ Véase el artículo 22 con su comentario en *Anuario* 1977, vol. II (segunda parte), págs. 32 a 54

65. El Relator Especial hizo referencia también a la evolución de los últimos tiempos, en que los Estados han reconocido, mediante acuerdos, el derecho del Estado de la nacionalidad a adoptar medidas, incluido el recurso ante una instancia arbitral, para hacer valer los derechos acordados por un tratado a sus nacionales, o en que se ha otorgado a las personas acceso directo a los procedimientos internacionales de arbitraje. El Relator Especial opinó que la evolución señalada y el hecho de que se reconociera en alguna medida la personalidad jurídica de las personas como beneficiarios directos del derecho internacional permitirían formular interrogantes doctrinales más claros con respecto a la pertinencia de la concepción clásica de la protección diplomática.

ii) *Reconocimiento de los derechos de la persona en el plano internacional*

66. El Relator Especial mencionó la aparición de un gran número de tratados multilaterales que reconocían a la persona el derecho a protección, independientemente de la intervención de los Estados y directamente por la propia persona mediante el acceso a foros internacionales. A ese respecto se refirió al derecho de petición. Mencionó además el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales que creaban obligaciones *erga omnes* y un interés de parte de todos los Estados⁸⁶. Esa evolución junto con la proliferación de acuerdos de fomento y protección de las inversiones bilaterales y la creación de órganos de reclamación⁸⁷, en cuya virtud el nacional de un Estado puede presentar una reclamación contra otro Estado, crearon un marco jurídico distinto de la noción tradicional de protección diplomática.

67. El Relator Especial señaló que, en general, el derecho interno de los Estados no prevé ningún «derecho» a la protección diplomática de los nacionales. Observando las novedades aparecidas en algunas constituciones recientes en las que el derecho a la protección diplomática parece haberse concedido a los nacionales, consideró que esas disposiciones expresaban más un deber moral que una obligación jurídica, ya que la decisión que adoptara en la materia el Estado estaría influenciada por consideraciones políticas y las relaciones diplomáticas entre los Estados interesados.

iii) *Los derechos que entraña la protección diplomática*

68. El Relator Especial declaró que se ha comprobado que el Estado tiene un derecho «procesal», al que puede renunciar, a plantear una reclamación internacional para proteger a un nacional suyo cuando haya sufrido un daño

⁸⁶ Asunto de la *Barcelona Traction* (véase la nota 82 *supra*), pag. 32, párrs. 33 y 34

⁸⁷ Por ejemplo, el caso del Tribunal de Reclamaciones Iran-Estados Unidos, establecido por el Acuerdo de Argel, de 20 de enero de 1981 [véase *RGDIP* (París), vol. 85 (1981), pag. 139], y el procedimiento de arbitraje previsto en el Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados

como resultado de una violación del derecho internacional. Con cargo a la opinión tradicional de la protección diplomática, el Estado está haciendo valer su propio derecho al apoyar la reclamación de su nacional. Una perspectiva más contemporánea parece indicar que el Estado es simplemente un representante de un nacional suyo y tiene un interés jurídicamente protegido en el plano internacional. Según que se opte por el derecho del Estado o por el derecho del nacional, se haría hincapié o bien en una costumbre sumamente antigua, que da a la soberanía más de lo que le corresponde, recurriendo incluso a una ficción, o bien en el desarrollo progresivo de la costumbre, teniendo en cuenta la realidad mediante el reconocimiento internacional de los derechos humanos. La opción elegida tendrá consecuencias prácticas para la formulación de las disposiciones relativas a este tema.

b) *La cuestión de las normas «primarias» y «secundarias»*

69. El Relator Especial pidió la orientación de la Comisión sobre si el tema debería limitarse a las normas secundarias, como recomendó el Grupo de Trabajo sobre la protección diplomática en el 49.º período de sesiones, o si podía ser más flexible ya que, a su juicio, el derecho internacional no podía dividirse en compartimentos estancos de normas «primarias» y normas «secundarias». Recordando que la recomendación del Grupo de Trabajo y su aprobación por la Comisión se debían al estancamiento a que llegó la Comisión en su primer intento de codificar el tema de la responsabilidad de los Estados tratando, en conjunto, la responsabilidad del Estado por daños causados a la persona o bienes de extranjeros⁸⁸, el Relator Especial sugirió otro planteamiento, según el cual la Comisión se limitaría a las normas secundarias y examinaría las normas primarias sólo en el contexto de las categorías generales y, cuando fuera necesario, con miras a la codificación apropiada de las normas secundarias. Entre los ejemplos figuraban la situación del vínculo de nacionalidad de las personas naturales o jurídicas o los fundamentos de exoneración de responsabilidad basados en la conducta de la persona reclamante. En consecuencia, no sería la concesión de nacionalidad lo que se examinase, sino su aplicabilidad a otro Estado. Análogamente, no sería el cumplimiento por la persona de la legislación de los países de acogida lo que se examinase, sino las circunstancias en las que la conducta de la persona constituía fundamento para exonerar al Estado de acogida.

70. El Relator Especial sugirió también cambiar el título del tema por «Protección diplomática de la persona y de los bienes», que parecía más en consonancia con su contenido. El nuevo título aclararía también la distinción entre este tema y los relativos a las relaciones diplomáticas y consulares.

2. RESUMEN DEL DEBATE

a) *Observaciones generales*

71. Hubo acuerdo general en que el tema trataba una cuestión compleja y de gran importancia práctica y que difícilmente había otro tema que estuviera tan maduro para la codificación como la protección diplomática y sobre el que hubiera un conjunto de normas imperativas comparativamente tan sólido.

72. Se señaló que gran parte del derecho internacional de la protección diplomática se había forjado al extenderse las ideas políticas sociales y económicas de Europa y Norteamérica a otras partes del mundo. Al desarrollar el derecho hacia la aplicación universal había que tratar de evitar el uso excesivo de materiales anticuados e, inversamente, había una necesidad constante de modernización y de tener en cuenta las actitudes de los Estados más nuevos.

73. Se señaló que la finalidad original de la institución de la protección diplomática había sido mitigar las desventajas e injusticias a que habían estado sometidas las personas naturales y jurídicas. Por tanto, lejos de ser una institución opresiva, la protección diplomática había rectificado al menos en parte las injusticias de un sistema que reducía a la persona, y específicamente a la persona privada, a la categoría no de sujeto del derecho internacional sino de víctima de las violaciones de ese derecho. La protección diplomática tampoco era «esencialmente discriminatoria». Era discriminatoria en su ejercicio que, por definición, era casi exclusivamente prerrogativa de los Estados más poderosos. Por tanto, era importante no generalizar excesivamente.

74. Se señaló que podría ser conveniente formular directrices o normas —como la nacionalidad, la reclamación fundada, la denegación de justicia o la violación de derechos humanos fundamentales— con miras a impedir los abusos del poder discrecional del Estado extranjero de proporcionar protección diplomática.

75. También se expresaron otras opiniones en el sentido de que, pese a algunos abusos cometidos en la historia de la protección diplomática, la institución de la protección diplomática se había utilizado frecuentemente entre Estados de poder igual incluso dentro de la misma región.

b) *La noción consuetudinaria de protección diplomática*

76. Algunos miembros no estuvieron de acuerdo con la idea de que un interés jurídico de parte de un Estado en la suerte de sus nacionales entrañaba una ficción jurídica. Afirmaron que no era en absoluto errónea la noción de que un Estado pudiera tener un interés de esa naturaleza. La protección diplomática era una noción jurídica lo mismo que los conceptos de posesión y propiedad eran nociones jurídicas. Por esa razón la protección diplomática en el marco del asunto *Mavrommatis*⁸⁹

⁸⁸ Véase *Anuario... 1997*, vol. II (segunda parte), nota 242.

⁸⁹ Véase la nota 81 *supra*.

no debería considerarse una ficción. Otros miembros no estaban persuadidos de que la analogía con una ficción jurídica formulada por el Relator Especial fuera errónea. A su juicio, el derecho estaba hecho de ficciones o, dicho en otras palabras, de reconstrucciones normativas de la realidad.

77. Se opinó también que independientemente de su denominación —ficción, novación, sustitución— se trataba de un planteamiento teórico que no era pertinente al desarrollo normativo del tema. La principal cuestión, como había acertadamente destacado el Relator Especial, era quién era el titular del derecho ejercido por medio de la protección diplomática: ¿el Estado de la nacionalidad o las víctimas perjudicadas? Evidentemente la respuesta, según esta opinión, debía ser siempre el Estado, y en principio sus poderes al respecto eran discrecionales. La protección diplomática siempre había sido una prerrogativa soberana del Estado como sujeto del derecho internacional. Si hubiera sido de otra forma no se habría concertado un acuerdo después de la segunda guerra mundial para pagar indemnización por los bienes que habían sido nacionalizados.

78. Respecto de la cuestión de si al ejercer la protección diplomática el Estado está haciendo valer su propio derecho o el derecho de un nacional lesionado, se señaló también que una persona vinculada por la nacionalidad a un Estado formaba parte de su población y, por tanto, era uno de los elementos integrantes del Estado. La protección de sus nacionales era una obligación fundamental del Estado, en el mismo plano que la preservación de su territorio o la salvaguardia de su soberanía. Al mismo tiempo el Estado defendía los derechos e intereses específicos del nacional que había sido «perjudicado» por otro Estado. Por tanto, no cabía trazar una distinción rígida entre los derechos del Estado y los derechos de sus nacionales. Las dos series de derechos eran complementarias y podían defenderse conjuntamente. Se señaló además que un Estado en general tenía interés en procurar que sus nacionales fueran tratados justamente en un Estado extranjero, pero era exagerado sugerir que, cuando un nacional era perjudicado en un Estado extranjero, también resultaba perjudicado el Estado de origen. En la práctica los daños se miden en relación con el daño sufrido por la persona y no por el Estado, como si el perjuicio causado a la persona fuera en realidad la causa de la acción.

79. Se dijo también que era importante determinar quién tenía un interés jurídico directo e inmediato, así como los atributos y facultades para plantear una reclamación internacional. Según una opinión, el Estado no tenía tal interés directo o inmediato. Si fuera así, los derechos en cuestión serían ineluctables y no podrían ser ejercidos a discreción del Estado. Por ejemplo, los acuerdos sobre la protección de inversiones extranjeras conferían a las personas, tanto naturales como jurídicas, capacidad jurídica para presentar una reclamación internacional. Lo mismo sucedía en el caso de la cláusula Calvo, por la cual el extranjero declinaba contractualmente la protección diplomática de su Estado de origen. También en este caso era evidente que sólo la persona tenía un interés directo e inmediato en la reclamación. Por consiguiente, el debate sobre la ficción jurídica respecto del titular de esos derechos no conducía a ninguna parte y la Comisión

debería centrarse en los derechos e intereses jurídicos que se estaban protegiendo.

80. Según otra opinión, el Estado ejercía sustitutivamente un derecho originalmente conferido a la persona. Por consiguiente, habría que distinguir claramente entre el ejercicio del derecho protegido y el derecho en sí. El Estado tiene el poder discrecional de ejercer la protección diplomática, pese a que los derechos protegidos no son los del Estado sino los de la persona perjudicada. El Relator Especial convenía también en que esta distinción entre la titularidad del derecho y su ejercicio podría ser útil para armonizar el derecho consuetudinario en esta cuestión y las nuevas tendencias.

81. En este contexto se dijo que la Comisión tal vez deseara reexaminar la cuestión del derecho discrecional del Estado a la protección diplomática sin que existiera el derecho de la persona. Por otra parte, se expresó también la opinión de que al decidir si ejercer o no la protección diplomática respecto de un caso determinado el Estado tenía que evaluar cuestiones como el interés general del Estado en su política exterior y no simplemente el interés del ciudadano individual que hubiera resultado perjudicado como consecuencia de un acto ilícito de otro Estado. De aquí que el ejercicio de la protección diplomática debiera dejarse a la discreción del Estado.

82. Se observó que, dada la complejidad de la cuestión, sería inadecuado recargar el tema de conceptos teóricos. Por ejemplo, la cuestión de reconocer que la persona tenía la condición de sujeto del derecho internacional era muy polémica y no debía plantearse en esta etapa. Sería mejor atenerse a la práctica, en particular la práctica judicial, según la cual la persona es tratada como beneficiaria del derecho internacional.

c) Relación entre derechos humanos y protección diplomática

83. En cuanto a la relación entre derechos humanos y protección diplomática, se hicieron varias observaciones que expresaron cautela en asimilar ambas instituciones o establecer una jerarquía entre ellas.

84. Se señaló que si bien era cierto que la normativa de la protección diplomática había existido mucho antes de que aparecieran los derechos humanos como término técnico en el derecho internacional, los dos planteamientos existían paralelamente y la potencialidad de cada uno coincidía sólo parcialmente con la del otro. Prescindir de la protección diplomática en favor de los derechos humanos significaría en algunos casos privar a las personas de una protección de que habían gozado antes. Naturalmente, los derechos humanos podían servir ahora para reforzar la protección diplomática ejercida por el Estado de la nacionalidad. Algunos países, por ejemplo, siempre que era posible habían invocado un argumento de derechos humanos al ejercer la protección diplomática, ya que una reclamación basada en los derechos humanos era claramente más sugestiva para muchos Estados que una basada en una norma mínima internacional que había sido una manzana de la discordia a lo largo de todo el siglo XIX y de la primera mitad del XX. A este respecto, se

observó que el tradicional criterio *Mavrommatis* respecto de la protección diplomática tenía sus ventajas y no debería descartarse sin considerar detenidamente lo que se requería para hacer efectivos los derechos individuales. Se señaló que podía permitirse que el criterio de los derechos humanos influyera en el ulterior debate de la Comisión del tema caso por caso, pero que al adoptar ese criterio la Comisión no debía seguir dudando del fundamento mismo de la protección diplomática.

85. Se observó que el sistema de derechos humanos funcionaba de la misma forma que los principios de la protección diplomática: la condición de admisibilidad era que el reclamante agotara los recursos de la jurisdicción interna y los Estados tenían la facultad discrecional de asumir o auspiciar una reclamación en nombre de una persona o sociedad. La práctica de la Comisión Europea de Derechos Humanos era muy parecida. Había habido importantes casos de principio en los que una persona había decidido retirar su reclamación, pero la Comisión Europea había rehusado considerar retirada tal reclamación porque había un interés objetivo en mantener las normas europeas de orden público. Por tanto, la Comisión no debería adoptar falsas polaridades entre derechos humanos y protección diplomática. El sistema de protección diplomática no debería descartarse en tanto no se dispusiera de un sustituto efectivo.

86. Se observó también que los derechos humanos y la protección diplomática eran totalmente diferentes y que un examen más a fondo de la cuestión revelaría que la protección diplomática se había referido tradicionalmente a derechos estrictamente patrimoniales, en tanto que los derechos humanos concernían a la esencia misma de la libertad personal. Entre los derechos tradicionalmente comprendidos dentro de la protección diplomática figuraban el trato de la nación más favorecida y las obligaciones de cumplimiento del contrato impuestas a las empresas, aspectos que no formaban parte de las preocupaciones básicas de los derechos humanos tradicionales. Esta opinión no fue compartida por otros miembros de la Comisión. Se señaló que, si bien en la práctica la protección diplomática se invocaba con más frecuencia en los casos en que se habían violado derechos patrimoniales, también podía ejercerse igualmente en otros casos. Por tanto, sería demasiado restrictivo suponer que la protección diplomática trataba exclusivamente de los daños a los bienes.

87. Se expresó también la opinión de que sería posible coordinar la protección diplomática y las exigencias de los derechos humanos. Esta cuestión era particularmente pertinente en el caso de las personas jurídicas, zona ambigua que ni la Comisión ni otros órganos habían explorado a fondo, contentándose simplemente con citar el *obiter dictum* un tanto oscuro de la CIJ en el asunto de la *Barcelona Traction*⁹⁰. Se señaló además que no era coincidencia que, en el sistema europeo de protección de los derechos humanos, los derechos más próximos a los de las personas jurídicas, a saber, los derechos de propiedad, no se trataran en el Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (en adelante «Convenio europeo de derechos humanos») sino en un protocolo separado. Por tanto, parecía estar

ganando terreno un nuevo criterio que constituiría un aspecto crucial del estudio que había de hacer el Relator Especial. A este respecto, sin embargo, se señaló que la Convención americana sobre derechos humanos: «Pacto de San José de Costa Rica» sentaba el principio de que nadie podía ser privado arbitrariamente de sus bienes, pero ese principio estaba íntimamente vinculado con los derechos humanos relacionados con las garantías procesales.

88. Se observó que la diferencia entre los procedimientos de petición en los casos de derechos humanos y la protección diplomática no era tan acusada como parecía. En algunos casos, un elemento de protección diplomática podía ser un ingrediente adicional en un procedimiento de petición de derechos humanos. Por ejemplo, en el asunto *Soering*⁹¹, el Gobierno de Alemania había presentado una reclamación al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en nombre de su nacional. La doctrina reconocía también que existía cuando menos una relación teórica entre ambos temas.

89. Se señaló que, si un perjuicio causado a un nacional extranjero implicaba la violación de un derecho reconocido como derecho humano, nada podía impedir que el Estado de origen del nacional extranjero asumiera o auspiciara su reclamación. En algunos países la práctica había respaldado este criterio. Si el daño causado a extranjeros en forma de violaciones de los derechos humanos se excluía del ámbito de aplicación de la protección diplomática, el extranjero que no tuviera acceso a un órgano internacional de derechos humanos no dispondría de remedio eficaz. Sin embargo, en la mayoría de las violaciones de derechos humanos de extranjeros, como la detención ilícita o los malos tratos, no había procedimientos internacionales disponibles y, por consiguiente, era esencial confirmar el derecho del Estado de origen a ejercer la protección diplomática.

90. Al analizar la relación entre derechos humanos y protección diplomática se destacó una situación de violación de derechos humanos en un régimen determinado, en que la asunción de la reclamación por el Estado en virtud de ese régimen no correspondía al ámbito de la protección diplomática.

91. El Relator Especial destacó que nunca había tratado de contrastar la protección diplomática con los derechos humanos. Simplemente había afirmado que el concepto de protección diplomática, que era anterior al de derechos humanos, ya no podía estudiarse sin tener debidamente en cuenta la evolución de los derechos humanos en los últimos años. Eran los países en transición democrática los que tenían mayor interés en fortalecer los derechos humanos y, por tanto, en asegurar que se tuvieran en cuenta las personas en los actos del Estado.

d) Condiciones para el ejercicio de la protección diplomática

92. Se dijo que las condiciones necesarias para la protección diplomática se habían fijado en la sentencia del

⁹⁰ Véase la nota 82 *supra*

⁹¹ Tribunal Europeo de Derechos Humanos, *Série A arrêts et décisions*, vol. 161, decisión de 26 de enero de 1989 y fallo de 7 de julio de 1989, Consejo de Europa, Estrasburgo, 1989

asunto *Concessions Mavrommatis en Palestine*. La primera condición era que debía probarse que se había causado un daño a un nacional; que el daño constituía una violación del derecho internacional; que el daño era imputable al Estado contra el que se presentaba la reclamación y, por último, que existía un nexo causal entre el daño causado y la imputación del daño. Por tanto, en una reclamación internacional de protección diplomática había tres protagonistas principales: el sujeto cuya persona, bienes o derechos habían sido perjudicados; el Estado causante del daño y el Estado que asumía o auspicaba la reclamación. La segunda condición para el ejercicio de la protección diplomática era que los sujetos perjudicados no hubieran podido obtener satisfacción por medio de recursos que dieran al Estado la oportunidad de evitar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales mediante la oportuna reparación.

93. Se señaló que el fundamento del agotamiento previo de los recursos de la jurisdicción interna era empírico y que era discutible que hubiera un principio de riesgo implícito según el cual no era necesario agotar los recursos de la jurisdicción interna a falta de toda conexión voluntaria anterior con la jurisdicción correspondiente⁹². Se expresó también la opinión de que el requisito de agotar los recursos de la jurisdicción interna acarreaba otra consecuencia, a saber, que el modelo de la subrogación no podía aplicarse a la protección diplomática, ya que había un cambio fundamental de la naturaleza del derecho. Se señaló además que la Comisión tendría que abordar la cuestión de si el recurso a un órgano internacional para proteger los derechos humanos debía considerarse un «recurso de la jurisdicción interna», aun cuando una simple interpretación textual no permitía responder afirmativamente a la pregunta.

94. En cuanto a los recursos de la jurisdicción interna, se planteó la cuestión de si el criterio mínimo del trato concedido a un extranjero con arreglo al derecho internacional debería ser el único criterio. ¿No debería definirse el criterio de trato mediante referencia al derecho interno a fin de evitar conferir un estatuto privilegiado a los extranjeros? Ciertamente la aplicación de cualquiera de los dos criterios suscitaría controversias dadas las diferencias culturales, sociales, económicas y jurídicas que

podían existir entre el Estado de acogida y el Estado extranjero.

95. Se señaló que los inversores extranjeros se encontraban en una posición privilegiada respecto de los nacionales, ya que para la protección de sus derechos podían recurrir a tres procedimientos —los recursos de la jurisdicción interna, la protección diplomática y el arbitraje internacional— en tanto que los nacionales sólo podían disponer de los recursos de la jurisdicción interna.

96. Se señaló también que, al ejercer la protección diplomática, el Estado que defendía a sus nacionales no podía recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. Por tanto, una importante contribución que la Comisión podía aportar al examinar el tema era señalar de qué medios disponían los Estados para hacer efectivos sus derechos y los derechos de sus nacionales en el marco de la protección diplomática.

97. Se planteó la cuestión de saber si un Estado podía ejercer la protección diplomática paralelamente a un recurso internacional entablado directamente por la persona perjudicada o si el Estado sólo podía ejercer la protección diplomática después de que se hubieran agotado todos los procedimientos internos de arreglo de controversias.

e) *La cuestión de las normas «primarias» y «secundarias»*

98. Se observó que no convenía examinar teorías y conceptos como la distinción entre normas primarias y secundarias antes de tratar las instituciones y normas de la protección diplomática. Esas cuestiones podían debatirse cuando surgieran en contextos específicos. Se consideró que la protección diplomática en sentido amplio tenía un significado claro: las cuestiones importantes eran la admisibilidad de la reclamación y la normativa relativa a las condiciones previas que habían de cumplirse antes de presentar la reclamación. A este respecto debería seguirse el informe del Grupo de Trabajo sobre protección diplomática en el 49.º período de sesiones⁹³.

99. Se dijo que, si bien la Comisión estaba tratando las normas secundarias y que causaría confusión si pretendiera otra cosa, la distinción entre normas primarias y normas secundarias no debería utilizarse como criterio absoluto. La clasificación de una norma como primaria o secundaria dependería de la naturaleza de la cuestión en cada ocasión concreta. Ahora bien, la cuestión no era de superposición sino de la doble función de la admisibilidad y el fondo con respecto, por ejemplo, a la norma de las «manos limpias», ciertas cuestiones de nacionalidad, y todo lo relativo a la aquiescencia y demora. Por consiguiente, en el marco de ese tema la Comisión no podía examinar las normas secundarias aisladamente. Debía también referirse a las normas primarias, ya que las normas secundarias, por ser procesales, eran los medios para hacer aplicar los derechos conferidos.

⁹² Véase, por ejemplo, el asunto *Incident aérien du 27 juillet 1955* (Israel c. Bulgaria), donde se formularon excepciones preliminares en respuesta a una objeción preliminar de Bulgaria en el sentido de que no se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna de Bulgaria. Israel arguyó que había un número importante de limitaciones a la aplicación de la norma del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna.

«Es esencial [] que exista un vínculo entre el individuo perjudicado y el Estado cuyas acciones se impugnan [] solamente se aplica la regla cuando el súbdito extranjero —la persona perjudicada— ha creado o se considera que ha creado una relación voluntaria, consciente y deliberada entre él y el Estado extranjero cuyas acciones se impugnan [] Las víctimas [en este caso] no tenían una relación voluntaria, consciente y deliberada con Bulgaria. Al contrario. La relación que tenían, si es que puede llamarse relación, era involuntaria, desconocida y totalmente impremeditada.»

(*C.I.J. Mémoires, Incident aérien du 27 juillet 1955*, págs. 531 y 532.) La Corte declaró que no era competente por otra razón y no se pronunció sobre las cuestiones planteadas como excepciones preliminares, entre ellas el requisito del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna.

⁹³ Véase la nota 79 *supra*.

100. En cuanto a qué derecho regía la protección diplomática, hubo acuerdo general en que era el derecho internacional. A este respecto se señaló que algunos gobiernos se comprometían con sus nacionales en sus constituciones a ejercer la protección diplomática y que, en el plano internacional, debería considerarse un derecho humano fundamental y deberían crearse mecanismos apropiados para garantizar su aplicación. También se expresó la opinión de que esas normas nacionales no afectaban al poder discrecional del Estado de ejercer la protección diplomática.

101. Se señaló también que había margen para desarrollar progresivamente y modernizar significativamente el derecho de la protección diplomática. Incluso si se tomaba como punto de partida el derecho estatal, debería ser posible, con miras al desarrollo progresivo del derecho, fortalecer la posición de la persona en el marco de la protección diplomática, particularmente en lo concerniente a la indemnización.

102. Se dijo que el estudio de la protección diplomática debía incluir el estudio de los medios para ejercerla. Los mecanismos tradicionales de arreglo pacífico de controversias, en particular la negociación pero también la mediación, los buenos oficios y el arbitraje, deberían considerarse, así como la cuestión de las contramedidas en el contexto de la protección diplomática.

103. En cuanto al título del tema, se dijo que tal vez podría hacerse más preciso, pero que podía dejarse para más tarde a la luz del proyecto que había de prepararse.

f) *La relación entre el tema de la protección diplomática y el tema de la responsabilidad de los Estados*

104. Se señaló que era importante recordar que la protección diplomática era sólo una parte del vasto campo de la responsabilidad internacional. Como medio de dar efecto a la responsabilidad del Estado, creaba una relación entre dos Estados: el Estado «protector» y el Estado contra el que se ejercía la acción, considerado responsable de un hecho internacionalmente ilícito que había causado un perjuicio a un nacional del Estado «protector». Aunque el actual hincapié en la protección de los derechos humanos era correcto, no debería oscurecer el hecho de que la relación de Estado a Estado era un elemento esencial para determinar la naturaleza de la protección diplomática. A este respecto, se señaló también que los temas de la protección diplomática y la responsabilidad de los Estados estaban relacionados a nivel de razonamiento, ya que el Estado respondía de toda violación del derecho internacional que hubiera cometido o se le hubiera atribuido, como se decía en la primera parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados⁹⁴. Si se cumple esa primera condición, surgen varias consecuencias (segunda parte del proyecto), la principal de las cuales es la obligación de dar reparación. Cuando la obligación de reparar se debe a

una persona privada que, con raras excepciones, no tiene capacidad para actuar en el plano internacional, entra en juego la protección diplomática y así resulta ser una extensión, una consecuencia y un componente del derecho de la responsabilidad de los Estados.

105. Se señaló también el problema de tratar las cuestiones del daño directo a los Estados que, aunque claramente no forman parte del mandato de la Comisión, en la práctica solían estar indisolublemente ligadas con las cuestiones de la protección diplomática. A veces un caso privado podía representar un interés tanto directo como indirecto del Estado. Ejemplo de ello era el incidente del *Rainbow Warrior*⁹⁵, en el que Nueva Zelandia presentó una reclamación por violación de su soberanía, y en nombre de los Países Bajos respecto de un fotógrafo que había perdido su vida en el incidente, el cual fue considerado de nacionalidad neerlandesa a los efectos del arreglo. También el incidente de Chernobyl había supuesto pérdidas económicas directas para personas privadas de varios Estados, así como la posibilidad de que los propios Estados plantearan reclamaciones por daños directos a su espacio aéreo, si lo deseaban. Esos ejemplos implicaban la protección diplomática real o potencial respecto de intereses privados. El hecho de que no concernieran exclusivamente a intereses privados no debería ponerlos fuera del tema que estaba examinando la Comisión.

g) *Ámbito del tema*

106. Se dijo que debería considerarse la posibilidad de conceder la protección diplomática a los nacionales de un Estado que hubieran sufrido daños, no cuando se encontraban en el extranjero sino mientras estaban en su propio Estado, como consecuencia de un hecho internacionalmente ilícito causado por una misión diplomática extranjera o por los oficiales de esa misión que gozaran de inmunidad jurisdiccional y, por consiguiente, no pudieran ser puestos a disposición de los tribunales nacionales. No había razón para que un Estado que protegía a sus nacionales cuando resultaban perjudicados en el extranjero como consecuencia de una violación del derecho internacional en esas circunstancias no lo hicieran también si resultaban lesionados cuando se encontraban en territorio nacional.

3. ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO DE TRABAJO

107. En su 2534.^a sesión, celebrada el 22 de mayo de 1998, la Comisión estableció un grupo de trabajo de composición abierta, presidido por el Sr. M. Bennouna, Relator Especial sobre el tema, para que examinara las posibles conclusiones que pudieran extraerse del debate en cuanto al enfoque del tema y para dar orientación con respecto a las cuestiones que deberían tratarse en el

⁹⁴ Véase el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente por la Comisión en primera lectura en *Anuario 1996*, vol II (segunda parte), doc A/51/10, cap III, secc D

⁹⁵ Naciones Unidas, *Recueil des sentences arbitrales*, vol XIX, págs 197 y ss

segundo informe, que el Relator Especial presentaría a la Comisión en su 51.º período de sesiones.

108. El Grupo de Trabajo celebró dos sesiones: los días 25 y 26 de mayo de 1998. En lo que respecta al planteamiento del tema, el Grupo de Trabajo convino en lo siguiente:

a) El planteamiento de la protección diplomática desde el punto de vista del derecho consuetudinario debía ser la base para la labor de la Comisión sobre el presente tema.

b) El tema trataría de las normas secundarias del derecho internacional relacionadas con la protección diplomática; las normas primarias se examinarían sólo en el caso de que la aclaración de esas normas fuese esencial a título de orientación para una clara formulación de una norma secundaria concreta.

c) El ejercicio de la protección diplomática es un derecho que incumbe al Estado. En el ejercicio de ese derecho el Estado debe tener en cuenta los derechos e intereses de sus nacionales respecto de los cuales ejerce la protección diplomática.

d) La labor de protección diplomática debe tener en cuenta el desarrollo del derecho internacional, que reconoce y protege cada vez más los derechos de las personas y les proporciona un acceso más directo, pero también indirecto, a los foros internacionales para que puedan hacer efectivos sus derechos. En el contexto del presente tema, el Grupo de Trabajo opinó que los efectos directos y concretos de esa evolución se debían examinar a la luz de la práctica de los Estados y en la medida en que guar-

dan relación con las cuestiones concretas pertinentes al tema, como el requisito del vínculo de la nacionalidad.

e) El derecho discrecional del Estado a ejercer la protección diplomática no obsta a que el Estado asuma respecto de sus nacionales el compromiso de ejercer ese derecho. En este contexto, el Grupo de Trabajo tomó nota de que algunos ordenamientos jurídicos internos reconocían el derecho de sus nacionales a la protección diplomática de su gobierno.

f) El Grupo de Trabajo consideró que sería útil pedir a los gobiernos que proporcionaran a la Comisión el texto de las leyes nacionales más importantes, las decisiones de sus tribunales y la práctica de los Estados pertinentes a la protección diplomática.

g) El Grupo de Trabajo recordó la decisión adoptada en su 49.º período de sesiones de completar la primera lectura del tema a fines del presente quinquenio⁹⁶.

109. En lo que respecta al segundo informe del Relator Especial, el Grupo de Trabajo sugirió que se centrara en las cuestiones señaladas en el capítulo I del esquema propuesto por el Grupo de Trabajo establecido en el 49.º período de sesiones, titulado «Base de la protección diplomática».

110. En su 2544.ª sesión, celebrada el 9 de junio de 1998, la Comisión consideró el informe del Grupo de Trabajo y lo hizo suyo.

⁹⁶ Véase la nota 80 *supra*.

Capítulo VI

ACTOS UNILATERALES DE LOS ESTADOS

A.—Introducción

111. En su 48.º período de sesiones, celebrado en 1996, la Comisión consideró que el tema de los «Actos unilaterales de los Estados» era uno de los tres temas idóneos para la codificación y el desarrollo progresivo⁹⁷. En ese mismo año la Asamblea General, en el párrafo 13 de su resolución 51/160, invitó a la CDI a que examinara el tema e indicara su alcance y contenido atendidas las observaciones formuladas en el curso del debate en la Sexta Comisión y las observaciones que los gobiernos presentasen por escrito. En su 49.º período de sesiones, celebrado en 1997, la Comisión decidió incluir en su programa el tema «Actos unilaterales de los Estados»⁹⁸. La Asamblea General hizo suya la decisión de la Comisión en el párrafo 8 de su resolución 52/156. También en su 49.º período de sesiones la Comisión nombró al Sr. Víctor Rodríguez Cedeño Relator Especial del tema.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones

112. La Comisión tuvo ante sí el primer informe del Relator Especial sobre el tema (A/CN.4/486) y lo examinó en sus sesiones 2524.^a a 2527.^a, celebradas entre el 5 y el 8 de mayo de 1998.

1. INTRODUCCIÓN DEL PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

113. El Relator Especial dijo que su primer informe tenía carácter preliminar, a modo de introducción al tema. Se proponía presentar un informe sustantivo a tiempo para el período de sesiones siguiente de la Comisión. El presente informe reflejaba una gran parte de la doctrina, la jurisprudencia y la práctica de los Estados, así como las observaciones formuladas por los gobiernos el año anterior en la Sexta Comisión (véase A/CN.4/483, secc.F). Además, se basaba en las conclusiones incluidas en el informe del Grupo de Trabajo establecido por la CDI en su 49.º período de sesiones⁹⁹.

⁹⁷ *Anuario* 1996, vol II (segunda parte), doc A/51/10, párr 248 y anexo II, adición 3

⁹⁸ Véase *Anuario* 1997, vol II (segunda parte), párr 221

⁹⁹ *Ibid.*, cap IX, secc B

El Relator Especial explicó que su objetivo principal al preparar el informe había sido hacer un planteamiento sistemático del estudio del tema, de acuerdo con la metodología propuesta por el Grupo de Trabajo.

114. El Relator Especial señaló que la CPJI y la CIJ habían examinado en varias ocasiones los actos unilaterales de los Estados. A veces, como en los asuntos del *Statut juridique du Groenland oriental*¹⁰⁰ y de los *Essais nucléaires*¹⁰¹, esos tribunales habían llegado a la conclusión de que los actos unilaterales de que conocían eran vinculantes en virtud del derecho internacional, con independencia de que pudieran considerarse o no comprendidos en el ámbito del derecho de los tratados. Otras veces, en cambio, habían concluido que esos actos sólo tenían carácter político y carecían de efectos jurídicos, como en los asuntos *Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali)*¹⁰² y *Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique)*¹⁰³. Sin embargo, no podía haber duda, a la luz de esa jurisprudencia —e igualmente de la práctica de los Estados y la doctrina—, de que los actos unilaterales existían como fenómeno de derecho internacional.

115. El Relator Especial estimaba que no sería posible iniciar la elaboración de normas de derecho internacional que rigieran los actos unilaterales de los Estados sin definir esos actos antes debidamente o, al menos, dar los elementos de una definición.

116. Siendo así, el principal objetivo de este primer informe había sido llegar a una definición de acto estrictamente unilateral, con miras a facilitar la futura preparación de informes más detallados que contuvieran normas relativas a la realización, validez formal, efectos, inter-

¹⁰⁰ Fallo, 1933, C P J I , série A/B, n ° 53, págs 22 y ss , en particular págs 36 y 37, 57 y 58 y 69 a 73

¹⁰¹ *Essais nucléaires (Australie c France)*, fallo, C I J Recueil 1974, pag 253, párrs 34 a 51, y *Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c France)*, *ibid*, pag 457, párrs 35 a 53 Véase también *Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991* (publicación de las Naciones Unidas, n ° de venta S 92 V 5), págs 133 y 134

¹⁰² Fallo C I J Recueil 1986, pag 554, párrs 38 a 40 Véase tambien *Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991* (publicacion de las Naciones Unidas, n ° de venta S 92 V 5), pag 223

¹⁰³ Fondo, fallo, C I J Recueil 1986, pag 14, párrs 167 a 171 y 257 a 262 Véase también *Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991* (publicacion de las Naciones Unidas, n ° de venta S 92 V 5), pag 210

pretación, invalidez, duración, modificación y terminación de esos actos.

117. En lo que se refiere a los elementos de una definición, el Relator Especial explicó que consideraba necesario determinar primero los actos que quedaban fuera del alcance del tema y que por consiguiente debían excluirse del estudio.

118. Luego era necesario, dijo, exponer los criterios para determinar la categoría de actos que debían ser objeto de estudio por la Comisión. En opinión del Relator Especial, esos actos eran los actos unilaterales de los Estados de carácter «estricto» o «puramente» unilateral. Explicó que había utilizado esa terminología en su primer informe a fin de distinguir los actos cuyo estudio proponía de los actos unilaterales de carácter no autónomo o dependiente que debían quedar excluidos del estudio por estar ya regulados por las normas vigentes de derecho internacional.

119. Con respecto a la primera de esas tareas, el Relator Especial destacó que había seleccionado algunas categorías de actos unilaterales para su exclusión del estudio: concretamente, actos políticos unilaterales, actos jurídicos unilaterales de organizaciones internacionales y actitudes, actos y conducta de los Estados que, aunque voluntarios, no se realizaban con intención de producir efectos específicos de derecho internacional.

120. Examinando primero los actos políticos, el Relator Especial manifestó que, en su opinión, debían quedar excluidos del ámbito del estudio que estaba emprendiendo la Comisión. Sugirió que un acto podía caracterizarse como puramente político si producía únicamente efectos políticos y no tenía ninguna consecuencia en derecho internacional. Sin embargo, no era fácil determinar el carácter de un acto realizado por un Estado. De hecho, era muy posible que un acto aparentemente político, realizado fuera del marco de negociaciones internacionales, totalmente en un contexto político y sin ninguna de las formalidades propias de un acto jurídico internacional, pudiera ser vinculante, sin embargo, en derecho internacional para el Estado que lo realizara. Que tuviera carácter político o jurídico dependía de la intención del Estado; correspondería a los tribunales y cortes internacionales determinar cuál había sido esa intención. Todo ello se deducía claramente del fallo de la CIJ en los asuntos de los *Essais nucléaires*¹⁰⁴.

121. El Relator Especial agregó que los actos unilaterales de carácter puramente político eran un fenómeno muy común y tenían con frecuencia importancia considerable en las relaciones internacionales. Por medio de esos actos los Estados podían contraer compromisos políticos que regularan su conducta en el plano internacional; aunque el incumplimiento de esos compromisos no diera lugar a responsabilidad en virtud del derecho internacional y pudiera no suponer ninguna sanción jurídica, estaría en juego la responsabilidad política del Estado y se verían afectadas su credibilidad y su participación en los asuntos internacionales. Indudablemente, los compromisos

puramente políticos no podían considerarse en pie de igualdad con los de carácter jurídico, pero tenían un rasgo común en la medida en que ambos regían de forma muy real la conducta de los Estados en sus relaciones internacionales.

122. En lo que se refiere a los actos jurídicos unilaterales de las organizaciones internacionales, el Relator Especial sugirió que debían considerarse también como situados fuera del ámbito del tema.

123. El Relator Especial señaló que había un acervo cada vez mayor de prácticas relacionadas con los actos de las organizaciones internacionales. Muchos de esos actos adoptaban la forma de resoluciones que, a su vez, podían reducirse a dos tipos básicos: recomendaciones y decisiones. Los actos unilaterales de una organización que adoptaban la forma de resoluciones decisorias, como las relativas a la actuación de la organización o las dirigidas a algunos de sus órganos auxiliares, eran jurídicamente vinculantes. En cambio, los que adoptaban la forma de recomendaciones y se dirigían a los Estados no eran vinculantes en derecho. Sin embargo, con frecuencia tenían gran importancia en la formación de normas de derecho internacional consuetudinario. Otra categoría de actos unilaterales de organizaciones internacionales era la integrada por los actos realizados por la más alta autoridad administrativa de la organización. Comprendían no sólo los actos de orden interno, sino también los relativos a uno o más Estados o a la comunidad internacional en su conjunto. Además, en opinión del Relator Especial, sería difícil elaborar normas que fueran comunes a los actos unilaterales de los Estados y a los de las organizaciones internacionales.

124. El Relator Especial confiaba en que, de la breve exposición hecha, resultaría claro que el tema de los actos unilaterales de las organizaciones internacionales era complejo y exigía un examen especial.

125. El Relator Especial propuso que se excluyeran también del estudio los actos unilaterales de los Estados que daban origen a responsabilidad internacional, tema que la Comisión estaba examinando ya sobre la base del primer informe del Relator Especial sobre la responsabilidad de los Estados, presentado por el Sr. James Crawford, Relator Especial (A/CN.4/490 y Add.1 a 7), y el primer informe sobre la prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas, presentado por el Sr. Pemmaraju Sreenivasa Rao, Relator Especial (A/CN.4/487 y Add.1).

126. Al ocuparse del capítulo I de su primer informe el Relator Especial subrayó la distinción que se hacía entre los actos jurídicos formales, por una parte, y las normas jurídicas creadas por medio de dichos actos, por otra. Su opinión era que la Comisión debía centrarse en los actos unilaterales como actos jurídicos formales, es decir, como procedimientos o métodos para crear normas jurídicas, en particular obligaciones jurídicas de los Estados que los realizaban. Sugirió que el contenido de las normas jurídicas así creadas debía considerarse inherente al estudio de la Comisión.

127. El Relator Especial destacó el examen de diversos actos jurídicos sustantivos que se hacía en el capítulo I de

¹⁰⁴ *Essais nucléaires (Australie c. France)* (véase la nota 101 *supra*), párrs. 43 a 45, 48, 50 y 51.

su informe. Se había hecho ese examen a fin de determinar qué actos quedaban dentro de la esfera del derecho de los acuerdos internacionales y qué actos no y, por ello, podía decirse que necesitaban normas especiales que regularan sus efectos.

128. Los actos unilaterales relacionados con el derecho de los tratados, como la firma, ratificación, formulación de reservas e incluso realización de declaraciones interpretativas, quedaban claramente dentro de la esfera de los tratados y se regían por las normas del derecho de los tratados, en particular las establecidas en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (denominada en adelante «Convención de Viena de 1969») y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales (denominada en adelante «Convención de Viena de 1986»).

129. El Relator Especial propuso que se excluyeran del ámbito del estudio los siguientes actos unilaterales: los actos que contribuyeran a la formación de la costumbre; los actos que constituyeran el ejercicio de una facultad conferida por un tratado o por una norma específica de derecho consuetudinario (por ejemplo, la proclamación por un Estado de una zona marítima frente a sus costas); los actos que no consistieran en el ejercicio de facultades jurídicas preexistentes, sino que supusieran más bien el ejercicio de una libertad de derecho internacional (por ejemplo la aprobación de disposiciones legales que tipificaran penalmente ciertas actividades que podían realizar los extranjeros en el extranjero), y los actos que crearan o dieran origen a una relación convencional (por ejemplo la oferta y la aceptación).

130. Pasando a examinar el *estoppel*, el Relator Especial señaló que era una norma de prueba que tenía su origen en los sistemas jurídicos del *common law*, pero había pasado ahora a la doctrina y la jurisprudencia del derecho internacional. Sin embargo, aunque los tribunales internacionales, en cierto número de ocasiones, habían examinado la doctrina del *estoppel*, rara vez habían recurrido a ella para basar decisiones (por ejemplo, en el asunto *Corvaia* de 1903 entre Italia y Venezuela¹⁰⁵). Además, la jurisprudencia consideraba la doctrina del *estoppel* sólo en la forma restrictiva del llamado «*estoppel* por representación». Esto era evidente en decisiones como las de los asuntos *Statut juridique du Groenland oriental*¹⁰⁶, *Plateau continental de la mer du Nord*¹⁰⁷, *Temple de Préah Vihear*¹⁰⁸, *Nottebohm*¹⁰⁹, *Barcelona*

*Traction Light and Power Company, Limited*¹¹⁰ y *Sentence arbitrale rendue par le roi d'Espagne le 23 décembre 1906*¹¹¹.

131. El Relator Especial dijo que el *estoppel* no constituía un fenómeno de interés directo para el estudio de los actos unilaterales. Un *estoppel* entrañaba actos o conducta de un Estado que daban lugar a ciertas expectativas por parte de otro Estado, sobre la base de las cuales, este otro Estado actuaba de una forma que lo perjudicaba. Aunque la conducta del Estado autor de la representación podía parecer, a primera vista, algo similar al acto jurídico unilateral, de hecho tenía un carácter muy diferente. La conducta que daba lugar a un *estoppel* podía consistir en un acto o en una actitud pasiva, como el silencio. Además, no había necesidad de que esa conducta se realizara con intención de producir efectos jurídicos. Un verdadero acto unilateral, en cambio, era un acto jurídico positivo y formal, realizado precisamente con intención de producir efectos jurídicos. Por otra parte, un acto jurídico unilateral, como una promesa, obligaba jurídicamente al Estado inmediatamente después de realizado el acto. En cambio, el elemento más importante de un *estoppel* era la conducta del Estado al que se hacía la representación: es decir, la conducta de ese otro Estado que confiaba en la representación que le había hecho el primer Estado. Por ello, en el caso del *estoppel*, los efectos jurídicos no se derivaban de la voluntad del Estado que hacía la representación sino de la confianza que ponía en ella el Estado al que se hacía. La conducta de este otro Estado era de importancia fundamental. En el caso de un acto jurídico unilateral, en cambio, como una promesa, la conducta del beneficiario carecía, analíticamente, de toda importancia para determinar su carácter vinculante, como dejaron en claro las decisiones de la CIJ en los casos de los *Essais nucléaires*¹¹². El Relator Especial añadió que algunos autores opinaban que, en los asuntos *Barcelona Traction*¹¹³, *Emprunts serbes*¹¹⁴ y *Plateau continental de la mer du Nord*¹¹⁵, el *estoppel* se había tratado como medio especial de establecer una relación convencional. También por esa razón debía excluirse del ámbito del estudio que la Comisión estaba iniciando.

132. El Relator Especial propuso asimismo que se excluyeran del estudio otras formas de conducta determinadas que no eran actos jurídicos formales, pero que, sin embargo, podían tener efectos en derecho internacional. Así ocurría, por ejemplo, con el silencio, cuando un

¹⁰⁵ Naciones Unidas, *Recueil des sentences arbitrales*, vol. X (n.º de venta 60 V 4), págs. 609 y ss., en particular pag. 633.

¹⁰⁶ Véase la nota 100 *supra*.

¹⁰⁷ Fallo, *C I J Recueil* 1969, pag. 3, párrs. 27 a 33. Véase también *Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991* (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta S 92 V 5), pag. 100.

¹⁰⁸ Fondo, fallo, *C I J Recueil* 1962, págs. 6 y ss., en particular págs. 27 a 33, especialmente pag. 32. Véase también *Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991* (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta S 92 V 5), pag. 81.

¹⁰⁹ Segunda fase, fallo, *C I J Recueil* 1955, págs. 4 y ss., en particular págs. 17 a 20. Véase también *Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-*

1991 (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta S 92 V 5), pag. 46.

¹¹⁰ Excepciones preliminares, fallo, *C I J Recueil* 1964, págs. 6 y ss., en particular págs. 24 y 25. Véase también *Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991* (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta S 92 V 5), pag. 93.

¹¹¹ Fallo, *C I J Recueil* 1960, págs. 192 y ss., especialmente págs. 209 a 214. Véase también *Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991* (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta S 92 V 5), pag. 77.

¹¹² *Essais nucléaires (Australie c. France)* (véase la nota 101 *supra*), párrs. 43 y 50.

¹¹³ Véase la nota 110 *supra*.

¹¹⁴ Fallo n.º 14, 1929, *C P J I, série A*, n.º 20, págs. 37 a 39.

¹¹⁵ Véase la nota 107 *supra*.

Estado no protestaba contra una reclamación jurídica hecha en su contra. El Relator Especial explicó que el hecho de que un Estado no protestara contra una reclamación o situación no suponía necesariamente una intención por su parte de crear efectos jurídicos, concretamente el de hacer que se le pudiera oponer esa reclamación o situación. Además, el silencio no era un acto estricta o puramente unilateral, porque no podía, por sí mismo, tener efectos jurídicos o crear una nueva relación jurídica, dado que presuponía necesariamente para su eficacia la realización de un acto o conducta anteriores por parte de otro Estado, a los que podía considerarse como respuesta.

133. El Relator Especial dijo que, en su opinión, consideraciones análogas se aplicaban a la notificación. Con independencia de que fuera o no un acto jurídico, la notificación no podía producir efectos jurídicos por sí misma. Más bien, presuponía para su eficacia la realización de otro acto por otro sujeto de derecho internacional.

134. El Relator Especial explicó que el capítulo II de su primer informe trataba de los criterios que había tenido en cuenta para determinar el carácter estrictamente unilateral del acto jurídico.

135. En su opinión, un acto estrictamente unilateral era una simple expresión de voluntad de uno o más Estados. Por ello, los actos unilaterales podían ser de carácter individual o colectivo.

136. El Relator Especial señaló que en su informe había descrito esos actos como «heteronormativos», ya que producían efectos jurídicos con respecto a sujetos de derecho internacional que no habían participado en su realización. Sin embargo, en su opinión, ese criterio era insuficiente para distinguir los actos que eran de carácter puro o estrictamente unilateral. Para ese fin era necesario pensar no sólo en la simple atribución del acto sino también en su autonomía. Para ser clasificado como estrictamente unilateral un acto tenía que ser autosuficiente en sus consecuencias jurídicas; es decir, tenía que producir efectos jurídicos con independencia de cualquier otra manifestación de voluntad, anterior, simultánea o posterior, de otro sujeto de derecho internacional. Si no fuera tan independiente en la producción de efectos jurídicos, no sería de carácter auténticamente unilateral, sino que quedaría comprendido en la esfera de los tratados.

137. El Relator Especial sugirió que la autonomía de la obligación creada por un acto unilateral era un criterio decisivo para determinar su carácter estrictamente unilateral. Todo acto jurídico creaba derechos y obligaciones, y un acto unilateral creaba naturalmente una obligación para el Estado que lo realizaba y un derecho a favor de uno o más Estados ajenos a su realización. Sin embargo, en el caso de los actos estrictamente unilaterales, la obligación no surgía cuando era aceptada ni en el momento en que el Estado que era su beneficiario realizaba otra forma de conducta determinada. Surgía cuando el Estado que realizaba el acto unilateral quería que surgiera. Un Estado podía asumir una obligación de esa forma, ejerciendo la facultad de autolimitación que le confería el derecho internacional.

138. El Relator Especial dijo que la autonomía de la obligación creada por medio de un acto estrictamente unilateral tenía importantes consecuencias prácticas. Cuando una corte o un tribunal internacionales consideraba que un acto era estrictamente unilateral, examinaba la formulación del acto y no la conducta del Estado con respecto al cual se realizaba y al que confería derechos. Lo mismo ocurría cuando una corte o un tribunal trataban de determinar los efectos jurídicos exactos de un acto estrictamente unilateral¹¹⁶.

139. El Relator Especial señaló que el capítulo II examinaba también la base jurídica del carácter vinculante de los actos unilaterales de los Estados. En virtud del derecho de los tratados, todo tratado debía cumplirse de buena fe. Dada la necesidad de confianza, fiabilidad y seguridad mutuas en las relaciones internacionales, y de certidumbre jurídica internacional, en su opinión debía considerarse también la buena fe como fundamental para el carácter vinculante de los actos unilaterales de los Estados¹¹⁷.

140. El Relator Especial sugirió que el carácter vinculante de los actos estrictamente unilaterales podía explicarse asimismo por remisión a la facultad de autolimitación de que gozaban los Estados en derecho internacional: en otras palabras, por su capacidad para someterse a sí mismos, en el ejercicio de su soberanía, a obligaciones jurídicas internacionales. Esas obligaciones no tenían que someterse necesariamente al principio de reciprocidad y, por ello, podían ser totalmente unilaterales en su forma y tener carácter autónomo. En consecuencia, podía decirse que el carácter vinculante de un acto jurídico unilateral de un Estado se basaba en la intención del Estado que lo realizaba y no en ningún interés jurídico que otro Estado podía tener en el cumplimiento de las obligaciones que pretendía crear.

141. El Relator Especial pasó a recordar que el principio *pacta sunt servanda* era la base del carácter vinculante de los tratados, como se deducía claramente del artículo 26 de la Convención de Viena de 1969. Sugirió que podía decirse que un principio paralelo, como el de *promissio est servanda*, fundamentaba el carácter vinculante de los actos unilaterales de promesa. Se podía recurrir también a principios más generales, como el de *acta sunt servanda* o, en el caso de las declaraciones unilaterales, el de *declaratio est servanda*.

142. Sobre la base de las consideraciones anteriores, el Relator Especial presentó a la Comisión, en el párrafo 170 de su informe, las partes componentes de una definición de acto unilateral a los efectos del estudio que la Comisión había iniciado. Como allí se decía, una declaración estrictamente unilateral podía considerarse como expresión autónoma de una voluntad clara e inequívoca, hecha explícita y públicamente por un Estado con el fin de crear una relación jurídica —en particular obligaciones jurídicas internacionales— entre él mismo y uno o más Estados que no participaban en su elaboración, sin que fuera necesario que esos Estados la aceptaran o se

¹¹⁶ *Essais nucléaires (Australie c. France)* (vease la nota 101 *supra*), párrs 44, 45, 50 y 51

¹¹⁷ *Ibid.*, párrs 46 y 51

comportaran ulteriormente de una forma que supusiera esa aceptación.

143. El Relator Especial señaló que esa definición se limitaba a las declaraciones unilaterales y que los actos unilaterales que no adoptaban esa forma quedaban excluidos de su ámbito. Para explicar esa limitación el Relator Especial dijo que, en su opinión, la declaración unilateral era el instrumento básico que empleaban los Estados para realizar las transacciones que decidían efectuar por medio de actos unilaterales. En otras palabras, la declaración unilateral era al derecho de los actos unilaterales lo que el tratado al derecho internacional de los tratados. Siendo así, todo documento definitivo que la Comisión pudiera adoptar sobre el tema de los actos unilaterales de los Estados debía limitarse, en su opinión, a los actos unilaterales que fueran también declaraciones unilaterales.

144. Para concluir, el Relator Especial señaló que era evidente que los actos unilaterales de los Estados existían en derecho internacional. Además, resultaba claro que esos actos eran auténticamente autónomos, en el sentido de que tenían un carácter estrictamente unilateral y su eficacia jurídica no dependía de que se produjeran otras manifestaciones de voluntad. El examen de esos actos por la Comisión era tanto de interés práctico como de considerable importancia política, ya que los Estados recurrían cada vez más a ellos en sus relaciones internacionales.

145. Se consideró posible y conveniente iniciar la elaboración de normas que regularan el funcionamiento de las declaraciones unilaterales, y el Relator Especial sugirió que la Comisión volviera a constituir el Grupo de Trabajo establecido en su período de sesiones anterior a fin de que examinara el alcance y el contenido de la labor que debía realizarse.

2. RESUMEN DEL DEBATE

146. Los miembros de la Comisión encomiaron el primer informe del Relator Especial. Se dijo que el tema era importante. Era también uno de los temas más difíciles de los que se había ocupado la Comisión hasta la fecha.

a) Observaciones generales

147. Durante el debate algunos miembros expresaron dudas sobre si era posible en derecho internacional que un acto unilateral de un Estado, por sí mismo, modificase las relaciones jurídicas entre ese Estado y algún otro Estado que no hubiera participado en la elaboración del acto. O bien era necesario el acuerdo de ese otro Estado, o al menos que éste realizara alguna clase de acto en respuesta o sobre la base del acto unilateral de que se trataba.

148. Otros miembros, sin embargo, señalaron que la doctrina de los actos unilaterales tenía fundamentos sólidos en la doctrina de derecho internacional, la jurisprudencia de la CIJ y la práctica de los Estados. Se observó que la Asamblea General había presupuesto la existencia

de esa doctrina cuando, en su resolución 52/156, había hecho suya la decisión de estudiar el tema que la Comisión había adoptado en su período de sesiones anterior. Algunos miembros observaron a ese respecto que los Estados tenían dudas a veces sobre el carácter vinculante de actos unilaterales específicos realizados a su favor por otros Estados. Se señaló también que los Estados preferían que las transacciones realizadas a su favor por medio de actos unilaterales adoptaran, de ser posible, la forma de tratado. No obstante, reconocieron y aceptaron desde luego que los actos unilaterales, por sí mismos, podían producir efectos jurídicos en derecho internacional.

149. En lo referente a las relaciones entre los actos unilaterales y las fuentes de derecho internacional enumeradas en el Artículo 38 del Estatuto de la CIJ, un miembro opinó que, aunque en dicha disposición no se hacía referencia expresa a los actos unilaterales, éstos quedaban incluidos no obstante, implícitamente, en el ámbito del apartado *b* del párrafo 1. Otros miembros, sin embargo, estimaron que ese párrafo no contenía ninguna referencia, ni siquiera implícita, a los actos unilaterales. Al mismo tiempo, algunos miembros observaron que el párrafo 1 del Artículo 38 del Estatuto de la CIJ no contenía una lista exhaustiva de las fuentes de derecho internacional y que, a pesar de su omisión, los actos unilaterales constituían sin lugar a dudas una de esas fuentes. Otros miembros, en cambio, coincidieron con el Relator Especial en que los actos unilaterales eran fuente no de derecho internacional sino de obligaciones internacionales. Un miembro, sin embargo, dijo que distinguir entre fuentes de derecho internacional y fuentes de obligaciones internacionales era ilusorio, en tanto que otro señaló que la cuestión de si los actos unilaterales constituían una fuente de derecho internacional exigía mayor examen.

150. Con respecto a la base del carácter vinculante de los actos unilaterales en derecho internacional, varios miembros expresaron la opinión de que debía encontrarse en el principio de buena fe, así como en la conveniencia de fomentar condiciones de seguridad, confianza y fiabilidad en las relaciones internacionales. En apoyo de esa opinión se hizo referencia a los fallos de la CIJ en los asuntos de los *Essais nucléaires*¹¹⁸. En consecuencia, se dijo que no era necesario recurrir a elaborar un principio propio de los actos unilaterales, como *acta sunt servanda*, *promissio est servanda* o *declaratio est servanda*. Aunque estaba de acuerdo con esta conclusión, un miembro dijo que la fuente del carácter vinculante de los actos unilaterales estribaba más bien en la soberanía de los Estados.

b) Ámbito del tema

151. Aunque algunos miembros indicaron que era necesario determinar o fijar los límites del tema, se señaló también que esos límites no debían ser manifestamente estrechos o restrictivos. A la inversa, se dijo que no era necesario que la Comisión emprendiera el examen de

¹¹⁸ Véase la nota 101 *supra*.

todas las clases de actos que podían quedar comprendidos en el ámbito del tema y que podía muy bien seleccionar sólo algunos para su estudio.

152. En cuanto a los límites sugeridos por el Relator Especial, varios miembros opinaron que, al proponer a la Comisión que se limitase a estudiar los actos estricta o puramente unilaterales, había fijado al tema, en general, unos límites demasiado estrechos.

153. Al hablar de las sugerencias del Relator Especial en cuanto a categorías determinadas de actos que debían excluirse del ámbito del tema, aunque hubo acuerdo general en que los actos unilaterales de las organizaciones internacionales quedaban fuera de ese ámbito, algunos miembros estimaron que podía ser útil hacer referencia a esos actos para ayudar a analizar los actos unilaterales de los Estados. Sin embargo, se señaló que esa referencia debía limitarse a los actos externos de las organizaciones internacionales y no incluir sus actos internos.

154. Hubo acuerdo general con la sugerencia del Relator Especial de que los actos unilaterales de los Estados que sólo tuvieran consecuencias políticas quedasen fuera de los límites del tema.

155. Con respecto a la distinción entre actos «jurídicos» unilaterales y actos «políticos» unilaterales, se reconoció en general que con frecuencia era difícil determinar a qué categoría pertenecía un acto determinado. Según una opinión, la respuesta dependía de la intención del Estado que realizara el acto. Sin embargo, se dijo también que, aunque la intención expresa o evidente del autor del acto era indudablemente determinante, también era totalmente posible que un acto unilateral, incluida una promesa, fuera jurídicamente vinculante o produjera consecuencias jurídicas sin que hubiera indicios claros de que esa había sido la intención del Estado autor.

156. Hubo coincidencia general con la opinión del Relator Especial según la cual el acto unilateral del Estado, en la medida en que podía ser contrario a las obligaciones que le incumbían con arreglo al derecho internacional y dar lugar a una responsabilidad internacional, no debería ser estudiado por la Comisión en el contexto del tema actual. También hubo acuerdo general con el Relator Especial en que los actos unilaterales comprendidos en el ámbito del derecho de los tratados —como la firma, la ratificación, la denuncia y la formulación de reservas— quedaban fuera de los límites del tema. En la medida en que un acto internacional contribuía a la formación de una norma de derecho internacional consuetudinario, hubo acuerdo, una vez más, en que no estaba comprendido en el tema. Se expresó una opinión semejante respecto de los actos unilaterales que constituían el ejercicio de una facultad conferida por una norma del derecho consuetudinario o por un tratado, tal como el acto por el cual un Estado establecía una zona marítima. Asimismo se mencionaron, a este respecto, las declaraciones por las que se aceptaba la competencia obligatoria de la CIJ en cumplimiento del párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto de la Corte. Igualmente hubo acuerdo en que los actos unilaterales que por su carácter y sus efectos eran puramente internos, incluidos los que

se realizaban en cumplimiento de las obligaciones internacionales de un Estado, quedaban fuera del marco del tema.

157. Sin embargo, en cuanto a si la Comisión debía estudiar el silencio del Estado en la medida en que ese silencio podía dar lugar a una alteración de la posición del Estado en el derecho internacional o ser causa de que pudiera oponerse al Estado una situación jurídica determinada, hubo divergencia de opiniones. Si bien algunos miembros coincidieron con el Relator Especial en que se excluyera este tema, otros opinaron que la Comisión debía estudiar el silencio y la aquiescencia. En la medida en que podían crear efectos jurídicos reconocidos por el derecho internacional, se trataba de fenómenos importantes que, aunque sólo fuera por razones prácticas, resultaría difícil excluir del estudio. También se dijo que el silencio, aunque no constituía un acto jurídico en el sentido estricto y formal de esta expresión, podía considerarse un acto unilateral, por lo menos hasta cierto punto, pues podía tenerse por la expresión de la intención, por parte del Estado interesado, de asumir obligaciones jurídicas o de aceptar una situación jurídica con la que se enfrentaba. A este respecto, un miembro hizo hincapié en que la Comisión debía estudiar no sólo los casos de silencio que suponían inacción por parte del Estado que se enfrentaba con una reivindicación o una situación determinada, sino también aquellos en que ese Estado observaba una conducta de la que podía deducirse su aceptación de esa reivindicación o situación.

158. Hubo también diversidad de opiniones en cuanto al *estoppel*.

159. Por una parte, se coincidió con el Relator Especial en que la Comisión no debía estudiar el *estoppel*. A modo de explicación se dijo que, para que hubiese lugar a aplicar la regla de los actos propios, era necesario que un Estado realizase un acto u observase cierta conducta y que otro Estado realizase un acto o adoptase cierta conducta en respuesta a aquéllos. El primer acto o la primera conducta no podían, por sí solos y sin los segundos, dar lugar a consecuencias jurídicas. En tales circunstancias, la regla de los actos propios no debía ser estudiada en el marco del tema actual. También se dijo que la aplicación del *estoppel* no requería necesariamente la realización de un acto con el propósito de generar efectos jurídicos y, por esa razón también, no debía ser estudiado por la Comisión.

160. Por otra parte, se afirmó que existía un nutrido cuerpo de jurisprudencia sobre el tema de los actos propios, que la doctrina revestía una importancia considerable en la práctica del derecho internacional y que, por consiguiente, debía incluirse la regla, aunque sólo fuera por razones prácticas, en el ámbito del estudio que la Comisión había emprendido. Aun cuando el estudio se concentrara únicamente en los actos unilaterales autónomos —es decir, en los actos que por sí mismos generaban consecuencias jurídicas— podía hacerse una excepción con respecto a la regla de los actos propios por esas razones. Además, se dijo que el análisis de la doctrina de los actos propios podría resultar útil para que la Comisión tuviera una visión más completa de las formas de actos unilaterales que sin duda alguna estaban comprendidas dentro de los parámetros del tema.

161. Por lo que concernía a las declaraciones unilaterales hechas por el agente de un Estado en un proceso ante un tribunal internacional, ciertos miembros se manifestaron en desacuerdo con el Relator Especial y sugirieron que la Comisión las estudiara. Se señaló, a este respecto, que ciertas decisiones judiciales y laudos arbitrales que se citaban con frecuencia en la literatura referente a los actos unilaterales se relacionaban con actos de ese mismo tipo.

162. Un miembro expresó la opinión, contraria a la del Relator Especial, de que los actos de notificación debían incluirse en el ámbito del estudio.

163. También se expresó una opinión favorable al estudio de los actos unilaterales que pudiesen constituir una prueba de la actitud del Estado acerca de algún otro acto o algún hecho o situación.

164. En cuanto a los actos que el Relator Especial incluía en su informe entre los que quedaban dentro del ámbito del tema, hubo acuerdo general en que el estudio abarcara los actos unilaterales de promesa, reconocimiento, renuncia y protesta. Un miembro opinó igualmente que la Comisión debía emprender el estudio de los actos de desistimiento.

c) Definición y elementos de los actos unilaterales

165. En cuanto a la sugerencia del Relator Especial de que la Comisión intentase primero redactar una definición del acto unilateral, se expresaron diversas opiniones.

166. Por una parte, se dijo que esa tarea era crucial para establecer los límites del tema y determinar el ámbito apropiado de la tarea de la Comisión. Al mismo tiempo se observó que toda definición que se redactase no habría de tomarse demasiado estrictamente ni entenderse en el sentido de que fijaba los parámetros del tema de una manera rígida o inflexible. Más bien debía utilizarse para contribuir a orientar la labor de la Comisión y determinar su tema central. Algunos miembros declararon, a este respecto, que la Comisión podría utilizar como punto de partida la definición que el Relator Especial proponía en el párrafo 170 de su informe.

167. Por otra parte, se dudó de que fuera acertado, o incluso viable, intentar una definición del «acto unilateral». Se dijo que los actos unilaterales de los Estados eran de carácter tan diverso que resultaba difícil descubrir cualquier uniformidad en el tema. Por consiguiente era dudoso que el tema constituyese una cuestión unificada que admitiera una definición única, amplia, de todos los actos que abarcaba. Antes bien, debía considerarse que el tema era de carácter compartimentado y comprendía varios tipos o categorías de actos unilaterales que diferían unos de otros en cuanto a sus propiedades y características. Toda definición que intentase trascender esas categorías habría de formularse a un nivel de abstracción demasiado alto para ser de utilidad; por lo demás, cualquier definición sería incompleta y omitiría inevitablemente ciertos actos unilaterales. Según este último punto de vista, sería mejor determinar simplemente ciertas categorías de actos que se considerasen susceptibles de

estudio y pasar directamente al examen de las normas que fuesen apropiadas para cada una de ellas.

168. Con respecto a los elementos de la definición del acto unilateral propuestos por el Relator Especial, ciertos miembros coincidieron con él en sugerir que la Comisión se concentrara en las declaraciones unilaterales. Algunos otros miembros, al tiempo que reconocían que las declaraciones constituían el núcleo del tema, consideraron que la Comisión debía estar dispuesta a examinar otros medios, menos formales, por los cuales un Estado podía vincularse unilateralmente (a ese respecto se hizo una mención especial del silencio y la aquiescencia y de la regla de los actos propios). Otros miembros estuvieron en desacuerdo con ese planteamiento y señalaron que el tema que la Asamblea General había pedido a la Comisión que estudiara era el de los «actos unilaterales del Estado» y no las «declaraciones unilaterales». Por consiguiente, la Comisión debía examinar los actos unilaterales del Estado que no entrañaban la formulación de una declaración, de la misma manera que debía estudiar las declaraciones unilaterales. Asimismo, debía examinar los actos unilaterales que constituían una línea de conducta. A este respecto, se observó que los actos del Estado que no revestían la forma de una declaración podían producir efectos idénticos a los que se desprendían de una declaración, por ejemplo los actos que constituían un reconocimiento implícito.

169. Varios miembros de la Comisión concordaron con la idea del Relator Especial de que un acto unilateral debía encerrar una expresión clara de la voluntad o la intención del autor de crear efectos jurídicos determinados o de alterar su situación jurídica en el derecho internacional. Otros manifestaron su desacuerdo, diciendo que, si bien podía ser necesario, en el caso de ciertos tipos de actos unilaterales, que hubiese una intención por parte de los autores de los actos de lograr con ellos ciertos efectos jurídicos, no ocurría lo mismo en el caso de otros actos. De hecho, la jurisprudencia parecía indicar que los Estados podían realizar un acto unilateral sin saberlo. Por ejemplo, un tribunal internacional podía considerar que una declaración unilateral que contenía una promesa era vinculante para su autor en derecho internacional, aunque ese Estado sostuviera que no tenía intención de asumir tal obligación cuando realizó el acto.

170. También se expresaron diversas opiniones, que reflejaban esta divergencia de pareceres, acerca de la utilidad del concepto de acto jurídico que proponía el Relator Especial.

171. En cuanto al elemento de publicidad que, según indicaba el Relator Especial, constituía una característica definitoria del acto unilateral, se expresó la opinión de que, si bien parte de la jurisprudencia hacía hincapié en este factor, había por lo menos una decisión judicial que indicaba que no constituía una condición previa de la eficacia jurídica del acto unilateral y que una promesa unilateral, por ejemplo, podía comprometer jurídicamente al Estado que la hacía, aunque se hiciera a puerta cerrada. La publicidad del acto unilateral tenía que ver con la prueba de su existencia y de la intención con que se realizaba, así como con la identificación de sus beneficiarios. En cambio, se opinó que el acto unilateral, para alterar la situación jurídica del Estado que lo realizaba

frente a otro Estado, tenía que ponerse en conocimiento de ese otro Estado. Esto era lo que se quería dar a entender con el sugerido elemento de publicidad.

172. Se manifestaron diversos pareceres por lo que se refería a la sugerencia del Relator Especial de que el ámbito del estudio se limitara a los actos unilaterales autónomos, es decir, a los actos unilaterales que por sí mismos podían producir efectos en derecho internacional y que para este fin no dependían ni de la realización de otro acto por otro Estado ni de la ausencia de actuación.

173. Varios miembros opinaron que la Comisión debía efectivamente limitar su labor a los actos unilaterales de ese tipo.

174. Algunos miembros observaron que algunos actos unilaterales, pese a su capacidad para alterar por sí mismos las relaciones jurídicas de los Estados que los realizaban, podían provocar reacciones por parte de otros Estados. Esas reacciones no podían pasarse por alto cuando se trataba de determinar los efectos jurídicos que cabría atribuir a los actos. Ello era tanto más cierto cuanto que esas reacciones podrían incluso afectar la clasificación de los actos como actos unilaterales. En esa medida, la Comisión no debía eludir el análisis del fenómeno de la oferta y la aceptación. Se observó que los actos unilaterales se realizaban frecuente, cuando no generalmente, en el contexto de negociaciones internacionales. De hecho, era raro encontrarse con un acto unilateral que no hubiese sido solicitado por otro Estado o que no se hubiese hecho en respuesta a una declaración o conducta de otro Estado. Se expresó la opinión de que este telón de fondo de las negociaciones internacionales era importante para un análisis apropiado de los actos unilaterales.

175. También se dijo que no era evidente que la capacidad autónoma de un acto para generar consecuencias jurídicas fuese un factor crucial en cuanto a determinar si debía o no ser estudiado en el contexto del tema actual. Había ciertos tipos de actos que no eran autónomos en el sentido en que había usado la palabra el Relator Especial, pero que, a pesar de ello, los especialistas consideraban en general pertenecientes a la esfera de los actos unilaterales, y había buenas razones para que la Comisión los estudiara, dada su importancia práctica y teórica.

176. Otros miembros de la Comisión opinaron que, si bien el estudio debía centrarse principalmente en los actos unilaterales autónomos, la Comisión debía estar preparada, al mismo tiempo, para rebasar esos actos y emprender el examen, por lo menos, de ciertos actos unilaterales que no eran capaces de producir efectos jurídicos por sí mismos. Se mencionaron particularmente a este respecto la regla de los actos propios y el silencio y la aquiescencia.

d) Planteamiento del tema

177. Varios miembros concordaron con la sugerencia del Relator Especial de que la Comisión concentrase la atención en el acto unilateral en cuanto acto «formal» —es decir, en el acto unilateral como instrumento o procedimiento para producir consecuencias jurídicas (*instru-*

mentum)— más que en el acto «sustantivo», es decir, en la transacción u operación jurídica para cuya realización se utilizaba un acto unilateral (*negotium*). Otros miembros pensaban que no era posible hacer una distinción entre el acto formal y el acto sustantivo en la forma propuesta por el Relator Especial. El acto y la transacción jurídica que realizaba eran indisolubles, y el primero no tenía significado jurídico independientemente de la segunda.

178. Según una opinión, las diferencias que existían entre los diversos tipos de transacción que pudiesen realizarse por medio de un acto unilateral no eran tales que impidiesen la elaboración de una normativa única de los actos unilaterales, así como las diferencias que existían entre los acuerdos internacionales no habían impedido la codificación de una normativa única de los tratados. Según esa opinión, la Comisión debía limitarse a identificar y enunciar normas que fuesen aplicables a los actos unilaterales en general, cualquiera que fuese la transacción a que se refirieran esos actos.

179. Varios miembros pensaban que el planteamiento sugerido por el Relator Especial no estaba bien fundamentado ya que daba por supuesto que el tema de los actos unilaterales era de carácter unitario y que era posible aplicar a los actos unilaterales un cuerpo único de normas, independientemente del tipo de transacción para cuya realización se utilizasen esos actos. La misma cuestión —por ejemplo las circunstancias en las que, llegado el caso, un acto podía ser objeto de revocación— tenía un significado o una importancia práctica diferente según la categoría particular del acto considerado, una promesa, por ejemplo, o un acto de reconocimiento o una protesta. Por tanto, difícilmente podía admitir la misma solución en cada caso. Según este punto de vista, la Comisión no debía tratar de estudiar el tema como un todo único, ni elaborar normas que fuesen aplicables a todas las formas de acto unilateral que estaban comprendidas en su ámbito. Ello no haría sino llevar inevitablemente a la formulación de normas a un nivel de abstracción demasiado alto para ser útiles. En vez de ello, la Comisión debía proceder a examinar, una por una, las categorías o los tipos de actos unilaterales a cuyo tratamiento decidiese dedicarse, y a determinar las normas y dilucidar las cuestiones propias de cada categoría o tipo. Se señaló que, aunque podrían delimitarse ciertas normas comunes a todos los actos unilaterales, existían normas peculiares de cada categoría de acto unilateral y estas normas debían ser estudiadas asimismo por la Comisión.

180. Hubo miembros que dudaron de que fuese viable alguno de estos planteamientos del tema. En su opinión, había ciertas esferas del derecho internacional en que las normas referentes a los actos unilaterales estaban bien establecidas. Por supuesto, era lícito tratar de extrapolar de esas esferas normas aplicables a los actos unilaterales en general. Sin embargo, era dudoso que este planteamiento fuese posible. Antes bien, era probable que, conforme se pasaba de una rama sustantiva del derecho internacional a otra, variasen y se modificasen las normas que regulaban las condiciones y los efectos, incluso de los actos unilaterales por los que se efectuaba la misma clase de transacción. Así, la Comisión podía, a lo sumo, emprender la elaboración de normas sobre los

actos unilaterales en determinados campos sustantivos del derecho internacional, como el derecho de los conflictos armados, el derecho de la energía nuclear, el derecho ambiental, y así sucesivamente.

181. En cuanto a los materiales en que la Comisión debía basarse para elaborar el derecho de los actos unilaterales, un miembro observó que en esta esfera el derecho se basaba en gran parte en unas cuantas decisiones judiciales que, por lo demás, eran muy confusas en cuanto al cuadro que presentaban. La Comisión tendría que someter esos casos a un análisis minucioso para darles sentido. Varios miembros, si bien reconocieron que el análisis de la jurisprudencia sería ciertamente necesario, observaron que el derecho de los actos unilaterales no se basaba únicamente en una casuística, sino también en un cuerpo considerable de práctica estatal, anterior a las decisiones modernas y mejor conocidas en este campo. Esto tendría que examinarse igualmente. Además, si bien se había criticado la forma en que el derecho se había aplicado a los hechos en algunas de esas decisiones modernas, éstas formaban parte de la jurisprudencia acerca de los actos unilaterales y ahora los Estados se basaban en el derecho tal como había sido enunciado. No sería lícito, por consiguiente, poner en duda el valor de esas decisiones en cuanto precedentes. Varios miembros mencionaron también las normas del derecho de los tratados que podían resultar sumamente útiles en la elaboración de normas sobre cuestiones análogas en el derecho de los actos unilaterales.

182. A ese respecto se sugirió que la Secretaría facilitase a la Comisión en el siguiente período de sesiones una recopilación de los pasajes pertinentes de las decisiones de la CIJ que guardaban relación con el estudio del tema. También se sugirió que los miembros de la Comisión comunicasen al Relator Especial ejemplos pertinentes sacados de la práctica de sus Estados respectivos.

183. Pese a la existencia de esas diversas fuentes, algunos miembros observaron que aún no existía ninguna teoría coherente de los actos unilaterales y que, en consecuencia, la labor de la Comisión participaría más de la naturaleza del desarrollo progresivo que de una simple codificación.

184. Varios miembros hicieron referencia a las cuestiones o los problemas particulares que la Comisión habría de tratar al elaborar el derecho de los actos unilaterales del Estado. En particular, se mencionaron las normas aplicables a la imputación de los actos unilaterales, las condiciones que habían de satisfacerse para que existiese un acto unilateral del Estado, incluidos cualesquiera requisitos de forma, las normas aplicables a la interpretación de los actos unilaterales, los efectos de los actos unilaterales, incluidas las normas que determinaban la identificación del Estado o los Estados cuyas relaciones jurídicas con el Estado autor quedaban alteradas o afectadas por el acto, las normas que reglamentaban la validez de los actos unilaterales y las circunstancias y la manera como podrían modificarse, terminarse o revocarse. Asimismo, con respecto al silencio y a la doctrina de los actos propios, se mencionó la definición de las circunstancias que el Estado debía crear para que el silencio o la representación de otro Estado diera lugar a efectos jurídicos, y, en cuanto a la protesta, se dijo que la Comisión

habría de aclarar las circunstancias en que podía ser útil que un Estado formulase una protesta.

185. Varios miembros hicieron observaciones acerca del problema de la revocación de las promesas unilaterales. Algunos advirtieron que la capacidad del Estado para revocar una promesa unilateral debía depender, por lo menos en parte, de su intención cuando realizó ese acto. Por ejemplo, si su intención era que la promesa fuese revocable, la revocación debería ser posible, en las condiciones o con las limitaciones que ese Estado se hubiese impuesto a sí mismo a ese respecto. En apoyo de esta conclusión se hizo referencia a la decisión de la CIJ en la fase jurisdiccional del asunto *Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci* (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique)¹¹⁹. A la inversa, si el Estado que hiciera la promesa hubiese tenido la intención de que fuese irrevocable, la revocación no debería, en principio, ser posible. Con respecto a los casos en que no fuese posible determinar ninguna intención por parte del Estado declarante, un miembro opinó que, como las relaciones jurídicas creadas por una promesa unilateral no eran, por su naturaleza, recíprocas, debía presumirse que esa promesa era revocable a voluntad por el Estado que la hubiera hecho.

186. Sin embargo, varios miembros se opusieron a esta conclusión, observando que, si así fuera, el carácter vinculante de dichos actos en derecho internacional sería totalmente ilusorio y no resultarían protegidas las expectativas de los Estados en cuyo favor se hubiesen realizado los actos. En cambio, se advirtió que, si había de presumirse que las promesas unilaterales eran de duración indefinida y no susceptibles de revocación sin el consentimiento del Estado o los Estados en cuyo favor se hubiesen hecho, los Estados se resistirían siempre a hacer tales promesas. De no ser así, se hallarían obligados, en ciertas circunstancias, a retractarse. Por consiguiente, debería preverse cierta capacidad —aunque no ilimitada— de revocación por parte del Estado que hacía tales promesas.

187. Se sugirió, a este respecto, que se buscase orientación sobre este tema en las normas generales del derecho de los tratados. La CIJ, en la fase jurisdiccional del asunto *Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci*¹²⁰, había usado analogías de ese campo del derecho para analizar la cuestión del retiro y la modificación de declaraciones unilaterales hechas en virtud del párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto de la Corte. De igual modo, se sugirió que se hicieran referencias a las normas enunciadas en los artículos 34 a 37 de la Convención de Viena de 1969, en particular al párrafo 2 del artículo 37.

¹¹⁹ Competencia y admisibilidad, fallo, *C I J Recueil* 1984, págs 392 y ss, en particular pág 418 Véase también *Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991* (publicación de las Naciones Unidas, n° de venta S 92 V 5), pág 188

¹²⁰ *Ibid*

e) *Forma definitiva del trabajo de la Comisión*

188. Varios miembros coincidieron con el Relator Especial en que era prematuro decidir la forma que habría de darse al trabajo de la Comisión sobre el tema. Al mismo tiempo, se formularon varias opiniones al respecto y se hizo observar que la cuestión no debía aplazarse, puesto que la forma que se eligiera influiría en la manera como la Comisión haría su trabajo.

189. Por una parte, varios miembros dijeron que el trabajo de la Comisión probablemente habría de revestir la forma de un proyecto de artículos con comentarios o que, por lo menos, esa era una de las posibilidades. Esa forma de proceder sería útil para generar una mayor estabilidad y seguridad en las relaciones internacionales. Otros miembros, sin embargo, consideraron que sería difícil codificar de esa manera el derecho del tema y que intentar hacerlo podría causar problemas a la Comisión e incluso resultar inconveniente para los Estados. En particular, esa forma de proceder podría limitar la libertad de maniobra de los diplomáticos y reducir la flexibilidad de lo que resultaba ser un mecanismo importante en las relaciones internacionales y cuya característica más útil era su falta de formalismo. Algunos de los defensores de esa tesis no excluían la posibilidad de que la Comisión, en definitiva, preparase un proyecto de artículos sobre el tema, pero consideraron que no debería emprender esa tarea por el momento y que, en todo caso al principio, debía limitarse a estudiar el tema con mayor detalle o, si no, dedicarse a producir un trabajo de otro tipo.

190. Por otra parte, varios miembros dijeron que el trabajo de la Comisión, tanto al principio como al final, debía revestir la forma de un estudio expositivo. Otros, en cambio, señalaron que la misión de la Comisión no era de carácter doctrinal.

191. Otra de las opiniones expresadas era que el trabajo de la Comisión debía revestir la forma de directrices.

3. ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO DE TRABAJO

192. En el actual período de sesiones la Comisión tuvo ante sí el primer informe de su Relator Especial y lo examinó en sus sesiones 2524.^a a 2527.^a

193. Tras examinar el informe la Comisión decidió en su 2527.^a sesión reconstituir el Grupo de Trabajo sobre los actos unilaterales de los Estados¹²¹.

194. El Grupo de Trabajo celebró dos sesiones, el 18 y el 19 de mayo de 1998. En cuanto al ámbito del tema, se aprobó en general el planteamiento adoptado por el Relator Especial en su informe, planteamiento que estaba en consonancia con el esquema aprobado por la Comisión en su 49.º período de sesiones¹²² y que limitaba el tema a los actos unilaterales de los Estados realizados con la finalidad de producir efectos jurídicos internacionales.

Se excluían, pues, los actos que no producían efectos jurídicos, los actos unilaterales del Estado relacionados con un régimen jurídico concreto y los actos de otros sujetos de derecho internacional, como los actos de las organizaciones internacionales.

195. Hubo diversidad de opiniones en cuanto a si el ámbito del tema abarcaba los actos unilaterales de los Estados realizados con respecto a sujetos de derecho internacional distintos de los Estados o *erga omnes* y si, con arreglo al tema actual, los efectos de los actos unilaterales realizados respecto de los Estados podían extenderse también a otros sujetos de derecho internacional. Se consideró, sin embargo, que de momento se podía proseguir la labor sin adoptar ninguna decisión definitiva al respecto, sin perjuicio de que la cuestión fuese examinada posteriormente por el Relator Especial y por el pleno de la Comisión y se dilucidara oportunamente.

196. Acerca de la forma que debía revestir la labor de la Comisión sobre el tema se consideró, en general, que lo más apropiado consistiría en elaborar un proyecto de artículos con comentarios. Ello ofrecería las ventajas de la concisión, la claridad y la sistematización de un ejercicio de codificación, sin prejuzgar necesariamente el rango jurídico que finalmente se atribuyese al proyecto, es decir, el de una convención, unas directrices, una reafirmación o cualquier otra modalidad.

197. Teniendo en cuenta los debates sostenidos en la Comisión así como en el Grupo de Trabajo, se consideró que el Relator Especial tal vez estaba ya en situación de preparar varios proyectos de artículo: uno, sobre el ámbito, en el que se declarase que los artículos se aplicarían a los actos unilaterales del Estado; otro, sobre los términos empleados, serviría para enunciar que un acto unilateral [una declaración] era una expresión autónoma [inequívoca] y clara de la voluntad del Estado que producía efectos jurídicos internacionales, y un tercer artículo en el que se dispusiera que los artículos no se aplicarían a los actos unilaterales del Estado vinculados con un acuerdo internacional preexistente, como, por ejemplo, los actos regidos por el derecho de los tratados, por el derecho del mar, por los procedimientos arbitrales o judiciales internacionales o por cualquier otro régimen jurídico específico, ni tampoco a los actos de sujetos de derecho internacional distintos del Estado, pero que no sería óbice para que se aplicaran a ellos las normas enunciadas en el proyecto de artículos que les fuesen aplicables con arreglo al derecho internacional, independientemente del proyecto de artículos.

198. También se reconoció en general en el Grupo de Trabajo que el desarrollo de ciertos aspectos relacionados con el elemento de la anterior definición que se refería a la «finalidad de producir efectos jurídicos» quedaba perfectamente dentro del ámbito del tema, pero también correspondía a alguna otra sección del proyecto de artículos, tal como la que tratase de los efectos de los actos unilaterales. Ésta abarcaría el estudio de los posibles efectos del acto, como la creación de obligaciones internacionales para el Estado que lo realizaba (a saber, la promesa), la renuncia a sus derechos y la declaración del carácter oponible o no oponible de la reivindicación de otro Estado o de una situación jurídica determinada (por ejemplo el reconocimiento o la protesta). También abar-

¹²¹ Véase la composición del Grupo de Trabajo en el párrafo 8 *supra*.

¹²² *Anuario* 1997, vol. II (segunda parte), cap. IX, secc. B 3

caría la cuestión de la necesidad, para que el acto produjese efectos jurídicos, de que el destinatario lo aceptase o se comportase ulteriormente de una manera que indicase tal aceptación.

199. Asimismo se consideró, habida cuenta de las opiniones expresadas en sesión plenaria, que el Relator Especial debería examinar en su momento la cuestión de la doctrina de los actos propios y la cuestión del silencio a fin de determinar qué normas podían formularse a ese respecto en el contexto de los actos unilaterales del Estado.

200. En cuanto a la labor futura del Relator Especial, el Grupo de Trabajo recomienda que la Comisión pida al Relator Especial que, cuando prepare su segundo informe, presente un proyecto de artículos sobre la definición de los actos unilaterales y el ámbito de los artículos basándose en las consideraciones contenidas en el presente informe del Grupo de Trabajo. También

podría avanzar en el examen del tema concentrándose en los aspectos referentes a la elaboración y las condiciones de validez de los actos unilaterales [las declaraciones] de los Estados, en particular la cuestión relativa a los órganos competentes para que el Estado se comprometa unilateralmente en el plano internacional y la cuestión de las posibles causas de invalidez de la expresión de voluntad del Estado¹²³.

201. En su 2543.^a sesión, celebrada el 8 de junio de 1998, la Comisión examinó e hizo suyo el informe del Grupo de Trabajo.

¹²³ El Grupo de Trabajo también consideró si el tema debía limitarse al estudio de las declaraciones unilaterales de los Estados. Algunos miembros eran partidarios de limitar el ámbito del tema a las declaraciones, como proponía el Relator Especial en su primer informe, pero otros opinaron que el ámbito del tema era más amplio que el de las declaraciones y debía abarcar otras expresiones unilaterales de la voluntad del Estado bajo la denominación general de actos unilaterales.

Capítulo VII

RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS

A.—Introducción

202. En su primer período de sesiones, en 1949, la Comisión eligió la responsabilidad de los Estados entre los temas que, a su juicio, eran idóneos para la codificación. En respuesta a la resolución 799 (VIII) de la Asamblea General, de 7 de diciembre de 1953, en la que se pedía a la Comisión que procediera, tan pronto como lo considerara oportuno, a la codificación de los principios de derecho internacional que regían la responsabilidad de los Estados, la Comisión, en su séptimo período de sesiones, en 1955, decidió iniciar el estudio de la responsabilidad de los Estados y nombró al Sr. F. V. García Amador Relator Especial del tema. En los seis períodos de sesiones siguientes de la Comisión, de 1956 a 1961, el Relator Especial presentó seis informes sucesivos que trataban en conjunto de la cuestión de la responsabilidad por daños a las personas o los bienes de los extranjeros¹²⁴.

203. En su 14.º período de sesiones, en 1962, la Comisión creó una subcomisión encargada de preparar un informe preliminar con sugerencias sobre el ámbito y enfoque del futuro estudio¹²⁵.

204. En su 15.º período de sesiones, en 1963, la Comisión, tras haber aprobado por unanimidad el informe de la subcomisión, nombró al Sr. Roberto Ago Relator Especial del tema.

205. La Comisión, entre sus períodos de sesiones 21.º (1969) y 31.º (1979), recibió ocho informes del Relator Especial¹²⁶.

206. El plan general adoptado por la Comisión en su 27.º período de sesiones, en 1975, para el proyecto de artículos sobre el tema de la «Responsabilidad de los

Estados» preveía la siguiente estructura del proyecto de artículos: la primera parte se referiría al origen de la responsabilidad internacional; la segunda parte trataría del contenido, las formas y los grados de la responsabilidad internacional y una posible tercera parte, si la Comisión decidía incluirla, trataría de la cuestión de la solución de controversias y del modo de hacer efectiva la responsabilidad internacional¹²⁷.

207. La Comisión, en su 32.º período de sesiones, en 1980, aprobó provisionalmente, en primera lectura, la primera parte del proyecto de artículos, relativa al «origen de la responsabilidad internacional»¹²⁸.

208. En su 31.º período de sesiones la Comisión, habida cuenta de que el Sr. Ago había sido elegido magistrado de la CIJ, designó al Sr. Willem Riphagen Relator Especial del tema.

209. La Comisión, entre sus períodos de sesiones 32.º (1980) y 38.º (1986), recibió siete informes del Relator Especial¹²⁹ relativos a la segunda y tercera parte del proyecto¹³⁰.

¹²⁴ Véase un examen detallado de los antecedentes históricos del tema hasta 1969 en *Anuario* 1969, vol II, págs 240 y ss, doc A/7610/Rev I

¹²⁵ *Ibid*

¹²⁶ Los ocho informes del Relator Especial se reproducen como sigue

Primer informe *Anuario* 1969, vol II, pag 130, doc A/CN 4/217 y Add 1, y *Anuario* 1971, vol II (primera parte), pag 205, doc A/CN 4/217/Add 2,

Segundo informe *Anuario* 1970, vol II, pag 189, doc A/CN 4/233,

Tercer informe *Anuario* 1971, vol II (primera parte), pag 212, doc A/CN 4/246 y Add 1 a 3,

Cuarto informe *Anuario* 1972, vol II (primera parte), pag 75, doc A/CN 4/264 y Add 1,

Quinto informe *Anuario* 1976, vol II (primera parte), pag 3, doc A/CN 4/291 y Add 1 y 2,

Sexto informe *Anuario* 1977, vol II (primera parte), doc A/CN 4/302 y Add 1 a 3,

Septimo informe *Anuario* 1978, vol II (primera parte) doc A/CN 4/307 y Add 1 y 2,

Octavo informe *Anuario* 1979, vol II (primera parte), pag 3, doc A/CN 4/318 y Add 1 a 4 y *Anuario* 1980, vol II (primera parte), pag 15, doc A/CN 4/318/Add 5 a 7

¹²⁷ *Anuario* 1975, vol II, págs 60 a 64, doc A/10010/Rev I, párrs 38 a 51

¹²⁸ *Anuario* 1980, vol II (segunda parte), págs 25 a 61

¹²⁹ Los siete informes del Relator Especial se reproducen como sigue

Informe preliminar *Anuario* 1980, vol II (primera parte), pag 113, doc A/CN 4/330,

Segundo informe *Anuario* 1981, vol II (primera parte), pag 87, doc A/CN 4/344,

Tercer informe *Anuario* 1982, vol II (primera parte), pag 25, doc A/CN 4/354 y Add 1 y 2,

Cuarto informe *Anuario* 1983, vol II (primera parte), pag 3, doc A/CN 4/366 y Add 1,

Quinto informe *Anuario* 1984, vol II (primera parte), pag 1, doc A/CN 4/380,

Sexto informe *Anuario* 1985, vol II (primera parte), pag 3, doc A/CN 4/389,

Septimo informe *Anuario* 1986, vol II (primera parte), pag 1, doc A/CN 4/397 y Add 1

¹³⁰ En su 34.º período de sesiones (1982), la Comisión remitió los proyectos de artículo 1 a 6 de la segunda parte al Comité de Redacción

210. En su 39.º período de sesiones, en 1987, la Comisión nombró al Sr. Gaetano Arangio-Ruiz Relator Especial para que sucediera al Sr. Riphagen, cuyo mandato en calidad de miembro de la Comisión había expirado el 31 de diciembre de 1986. La Comisión, de sus períodos de sesiones 40.º (1988) a 48.º (1996), recibió ocho informes del Relator Especial, Sr. Arangio-Ruiz¹³¹.

211. Al concluir su 47.º período de sesiones la Comisión había aprobado provisionalmente, para su inclusión en la segunda parte, los proyectos de artículo 1 a 5¹³² y los artículos 6 (Cesación del comportamiento ilícito), 6 *bis* (Reparación), 7 (Restitución en especie), 8 (Indemnización), 10 (Satisfacción), 10 *bis* (Seguridades y garantías de no repetición)¹³³, 11 (Contramedidas aplicadas por el Estado lesionado), 13 (Proporcionalidad) y 14 (Contramedidas prohibidas)¹³⁴. También había recibido del Comité de Redacción un texto para el artículo 12 (Condiciones del recurso a las contramedidas). En su 47.º período de sesiones la Comisión había

aprobado también para su inclusión en la tercera parte el artículo 1 (Negociación), el artículo 2 (Buenos oficios y mediación), el artículo 3 (Conciliación), el artículo 4 (Tarea de la Comisión de Conciliación), el artículo 5 (Arbitraje), el artículo 6 (Atribuciones del Tribunal Arbitral) y el artículo 7 (Validez del laudo arbitral), así como el artículo 1 (Comisión de Conciliación) y el artículo 2 (El Tribunal Arbitral) del anexo.

212. En el 48.º período de sesiones de la Comisión el Sr. Arangio-Ruiz anunció su dimisión como Relator Especial. La Comisión concluyó la primera lectura de la segunda y tercera parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados y decidió, de conformidad con los artículos 16 y 21 de su estatuto, transmitir el proyecto de artículos aprobado provisionalmente por la Comisión en primera lectura¹³⁵, por conducto del Secretario General, a los gobiernos para que éstos formularan comentarios y observaciones, con el ruego de que dichos comentarios y observaciones se remitieran al Secretario General antes del 1.º de enero de 1998.

213. En su 49.º período de sesiones la Comisión estableció un Grupo de Trabajo sobre la responsabilidad de los Estados encargado de tratar las cuestiones relativas a la segunda lectura del proyecto¹³⁶, y nombró al Sr. James Crawford Relator Especial para el tema.

214. En el párrafo 3 de su resolución 52/156, la Asamblea General recomendó que, atendidos los comentarios y observaciones formulados por los gobiernos por escrito o verbalmente en los debates de la Asamblea, la Comisión continuara su labor sobre los temas de su actual programa, incluida la responsabilidad de los Estados, y en el párrafo 6 de la misma resolución recordó la importancia de que la Comisión conociera las opiniones de los gobiernos respecto del proyecto de artículos sobre responsabilidad de los Estados por ella aprobado en primera lectura en su 48.º período de sesiones.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones

215. En el actual período de sesiones la Comisión tuvo ante sí los comentarios y las observaciones recibidos de los gobiernos sobre la responsabilidad de los Estados (A/CN.4/488 y Add.1 a 3). También tuvo ante sí el primer informe del Relator Especial (A/CN.4/490 y Add.1 a 7). En el informe se examinaban cuestiones generales relacionadas con los proyectos de artículos, la distinción entre responsabilidad por «crímenes» y por «delitos», y los proyectos de artículo 1 a 15 de la primera parte. La Comisión examinó el informe en sus sesiones 2532.^a a 2540.^a, 2546.^a y 2547.^a y 2553.^a a 2558.^a, celebradas del

En su 37.º período de sesiones (1985), la Comisión decidió remitir los artículos 7 a 16 de la segunda parte al Comité de Redacción. En su 38.º período de sesiones (1986), la Comisión decidió remitir los proyectos de artículo 1 a 5 de la tercera parte y su anexo al Comité de Redacción.

¹³¹ Los ocho informes del Relator Especial se reproducen como sigue

Informe preliminar *Anuario* 1988, vol II (primera parte), pag 7, doc A/CN.4/416 y Add 1,

Segundo informe *Anuario* 1989, vol II (primera parte), pag 1, doc A/CN.4/425 y Add 1,

Tercer informe *Anuario* 1991, vol II (primera parte), pag 1, doc A/CN.4/440 y Add 1,

Cuarto informe *Anuario* 1992, vol II (primera parte), pag 1, doc A/CN.4/444 y Add 1 a 3,

Quinto informe *Anuario* 1993, vol II (primera parte), doc A/CN.4/453 y Add 1 a 3,

Sexto informe *Anuario* 1994, vol II (primera parte), doc A/CN.4/461 y Add 1 a 3,

Séptimo informe *Anuario* 1995, vol II (primera parte), doc A/CN.4/469 y Add 1 y 2,

Octavo informe *Anuario* 1996, vol II (primera parte), doc A/CN.4/476 y Add 1

En su 41.º período de sesiones (1989) la Comisión remitió al Comité de Redacción los proyectos de artículo 6 y 7 del capítulo II (Consecuencias jurídicas de los delitos internacionales) de la segunda parte del proyecto de artículos. En su 42.º período de sesiones (1990) la Comisión remitió los proyectos de artículo 8, 9 y 10 de la segunda parte al Comité de Redacción. En su 44.º período de sesiones (1992), la Comisión remitió al Comité de Redacción los proyectos de artículo 11 a 14 y 5 *bis* para su inclusión en la segunda parte del proyecto. En su 45.º período de sesiones (1993) la Comisión remitió al Comité de Redacción los proyectos de artículo 1 a 6 de la tercera parte y el anexo correspondiente. En su 47.º período de sesiones (1995), la Comisión remitió al Comité de Redacción los artículos 15 a 20 de la segunda parte que trataban de las consecuencias jurídicas de los hechos internacionalmente ilícitos calificados de crímenes en virtud del artículo 19 de la primera parte del proyecto y un nuevo artículo 7 que habría de incluirse en la tercera parte del proyecto.

¹³² Véase el texto de los artículos 1 a 5 (párr 1) en *Anuario* 1985, vol II (segunda parte), págs 26 y 27

¹³³ Véase el texto del párrafo 2 del artículo 1 y de los artículos 6, 6 *bis*, 7, 8, 10 y 10 *bis* y sus comentarios en *Anuario* 1993, vol II (segunda parte), págs 58 y ss

¹³⁴ Véase el texto de los artículos 11, 13 y 14 en *Anuario* 1994, vol II (segunda parte), pag 161, nota 454. El artículo 11 fue aprobado por la Comisión en la inteligencia de que tal vez hubiera que revisarlo a la luz del texto que se aprobara para el artículo 12 (ibid, párr 352)

¹³⁵ Véase el texto del proyecto de artículos aprobado provisionalmente por la Comisión en primera lectura en *Anuario* 1996, vol II (segunda parte), doc A/51/10, cap III, secc D. El texto de los proyectos de artículo 42 (párr 3), 47, 48 y 51 a 53 y sus comentarios figuran en ibid

¹³⁶ Véanse las directrices sobre el examen del proyecto de artículos en segunda lectura determinadas por la Comisión sobre la base de las recomendaciones del Grupo de Trabajo en *Anuario* 1997, vol II (segunda parte), párr 161

19 de mayo al 3 de junio, el 11 de junio y del 31 de julio al 7 de agosto de 1998.

216. La Comisión estableció un Grupo de Trabajo¹³⁷ para que asistiera al Relator Especial en el examen de las diversas cuestiones durante la segunda lectura de los proyectos de artículo.

217. En su 2547.^a sesión, celebrada el 11 de junio de 1998, la Comisión decidió remitir los proyectos de artículo 1 a 4 al Comité de Redacción. En su 2555.^a sesión, celebrada el 4 de agosto de 1998, la Comisión también decidió remitir los proyectos de artículo 5, 7, 8 y 10 al Comité de Redacción. En su 2558.^a sesión, celebrada el 7 de agosto de 1998, la Comisión decidió asimismo remitir los proyectos de artículo 9 y 11 a 15 *bis* al Comité de Redacción.

218. En su 2562.^a sesión, celebrada el 13 de agosto de 1998, la Comisión tomó nota del informe del Presidente del Comité de Redacción sobre los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8 *bis*, 9, 10, 15, 15 *bis* y A. La Comisión también tomó nota de la supresión de los artículos 2, 6 y 11 a 14.

1. PRESENTACIÓN POR EL RELATOR ESPECIAL DE ALGUNAS CUESTIONES GENERALES RELATIVAS AL PROYECTO DE ARTÍCULOS

219. El Relator Especial rindió homenaje a los Relatores Especiales anteriores por la labor que habían realizado en relación con un tema tan difícil y expresó su agradecimiento a la Comisión por encomendarle la segunda lectura del proyecto de artículos.

a) *La distinción entre normas «primarias» y «secundarias» de la responsabilidad de los Estados*

220. En la introducción de su primer informe se encontraba un breve esquema de la historia de los trabajos de la Comisión sobre la responsabilidad de los Estados y se examinaban algunas cuestiones generales. Una de ellas era la distinción entre las normas primarias y secundarias de la responsabilidad de los Estados. Esa distinción, que ha constituido la base de la labor de la Comisión sobre el tema desde el 15.º período de sesiones, en 1963, era esencial para la conclusión de sus trabajos. El propósito de las normas secundarias era establecer el marco dentro del cual se aplicarían las normas primarias en situaciones de infracción. Se trataba de una distinción coherente aunque a veces resultaba difícil hacerla en ciertos casos, y algunos de los artículos del proyecto, como el artículo 27 (Ayuda o asistencia de un Estado a otro Estado para la perpetración de un hecho internacionalmente ilícito), tal vez se apartaran un poco de ella. El Relator Especial indicó que el objetivo de la Comisión debería seguir siendo el fijado en el 15.º período de sesiones, crear el marco general dentro del cual regirían las normas sustantivas primarias de derecho internacional en el contexto de

la responsabilidad; resultaría más útil tener presente esa distinción al examinar determinados artículos a fin de evitar un largo debate general; tal vez hubiese buenas razones para incluir un artículo aunque éste pareciera establecer, por lo menos en parte, una norma primaria; además, sólo cuando la Comisión hubiese examinado el proyecto de artículos en su conjunto podría determinarse si había podido hacer una distinción coherente.

b) *Alcance del proyecto de artículos*

221. La segunda cuestión general consistía en determinar si actualmente el alcance del proyecto de artículos era suficientemente amplio. Refiriéndose a los comentarios y observaciones recibidos de los gobiernos, el Relator Especial señaló tres cuestiones que podrían analizarse con más detenimiento: a) la reparación, especialmente el pago de intereses; b) las obligaciones *erga omnes*, que actualmente se trataban en el párrafo 3 del artículo 40 (Significado de Estado lesionado), y c) la responsabilidad dimanada de la acción conjunta de los Estados.

c) *Inclusión de disposiciones detalladas sobre las contramedidas y el arreglo de controversias*

222. Por otra parte, el Relator Especial señaló que algunos gobiernos habían expresado preocupación con respecto a la inclusión de disposiciones detalladas sobre contramedidas en la segunda parte y sobre el arreglo de controversias en la tercera parte, y que la Comisión examinaría esas cuestiones en una etapa posterior de acuerdo con su calendario para el examen del tema.

d) *Relación entre el proyecto de artículos y otras normas de derecho internacional*

223. La tercera cuestión general se refería a la relación entre el proyecto de artículos y otras normas de derecho internacional. El Relator Especial señaló que algunos gobiernos consideraban que el proyecto de artículos no reflejaba plenamente su carácter subsidiario y, por lo tanto, habían sugerido que el artículo 37 (*lex specialis*) de la segunda parte del proyecto de artículos fuese establecido como principio general. Esa propuesta parecía ser válida, pero no podía aplicarse a los principios de *jus cogens*. El Relator Especial sugirió que la Comisión examinara el proyecto de artículos partiendo del supuesto de que cuando otras normas de derecho internacional, como los regímenes convencionales especiales, establecieran su propio marco en materia de responsabilidad, normalmente prevalecería ese marco.

e) *Forma que ha de adoptar el proyecto de artículos*

224. La última cuestión general se refería a la forma que había de adoptar el proyecto de artículos. Por lo general la Comisión no decidía cuál sería su recomendación al respecto hasta haber concluido el examen del

¹³⁷ La composición del Grupo de Trabajo figura en el párrafo 8 *supra*.

tema, aunque en ciertos contextos, como en el de las reservas a los tratados y la nacionalidad en relación con la sucesión de Estados, la decisión se había tomado con anterioridad. El proyecto de artículos sobre responsabilidad de los Estados había sido formulado como un conjunto de artículos redactados en términos neutros y no necesariamente como convención ni declaración. El Relator Especial reconocía que, si bien las cuestiones sobre el arreglo de controversias relacionadas con las contramedidas, que figuraban en la segunda parte, podían examinarse independientemente de la cuestión de la forma del proyecto de artículos, la Comisión debería adoptar una posición al examinar las disposiciones sobre el arreglo de controversias de la tercera parte que pudieran incluirse en una convención pero no en una declaración. El Relator Especial reconocía además que, aunque la Comisión optara por una convención, la cuestión de las disposiciones sobre el arreglo de controversias podría dejarse a una conferencia diplomática posterior. En la preferencia que manifestaron algunos gobiernos de que el proyecto de artículos no adoptara la forma de una convención influía claramente su preocupación con respecto al contenido del proyecto de artículos actual. La Comisión podía enfocar objetivamente la cuestión de la forma que había de adoptar el proyecto de artículos únicamente después de haber examinado el proyecto de artículos a la luz de acontecimientos ulteriores, de haber tomado una decisión sobre ciertas cuestiones esenciales y de haber procurado preparar un texto aceptable en general. El Relator Especial, al tiempo que tomaba nota del planteamiento dual propuesto por uno de los gobiernos, que consistía en aprobar una declaración de principios seguida de un proyecto de convención más detallado, como se había hecho en otros temas de derecho internacional, temía que no fuera aceptable para los gobiernos que se oponían a una convención y recomendó que se aplazara el examen de la cuestión ya que requeriría demasiado tiempo y no permitiría dedicarse plenamente al debate sobre el fondo del proyecto de artículos.

2. RESUMEN DEL DEBATE SOBRE CUESTIONES GENERALES

225. La Comisión celebró un breve debate sobre las cuestiones generales indicadas por el Relator Especial por las dos razones siguientes: a) la Comisión debería concentrarse en el actual período de sesiones en el concepto de crimen de Estado y los artículos de la primera parte, y b) esas cuestiones en gran medida no podrían resolverse en la etapa actual de los trabajos sobre el tema.

a) La distinción entre normas «primarias» y «secundarias» de la responsabilidad de los Estados

226. Se expresó la opinión de que la distinción entre normas primarias y secundarias, pese a todas sus imperfecciones, había facilitado considerablemente la labor de la Comisión al liberarla de la pesada carga de los debates teóricos sobre cuestiones como la existencia del daño o el elemento moral como condición de la responsabilidad. Al decidir dejar de lado el contenido específico de la norma «primaria» violada por el hecho ilícito la Comi-

sión no había querido hacer caso omiso de la distinción entre las diferentes categorías de normas primarias ni de las diversas consecuencias que podía entrañar su violación.

b) Alcance del proyecto de artículos

227. Con respecto al alcance del proyecto de artículos, se dijo que era necesario lograr un equilibrio entre las dos primeras partes del proyecto, reduciendo la extensión de la primera parte, que era excesivamente detallada, especialmente los artículos «negativos» sobre la atribución y algunos aspectos del capítulo III que se referían a la distinción entre las distintas normas primarias, y a la vez colmando las lagunas de la primera parte con respecto a cuestiones importantes como la acción conjunta de los Estados (obligación solidaria), y dando más peso a ciertos aspectos más bien superficiales de la segunda parte, que desestimaban cuestiones técnicas esenciales como el cálculo de los intereses, y que eran demasiado generales para atender las necesidades de los Estados. Se sugirió que, al examinar la primera parte del proyecto, se hiciera una cuidadosa distinción entre las disposiciones que estaban consagradas por la práctica de los Estados y las que no lo estaban con el fin de no suprimir disposiciones en las cuales ya se hubiesen basado algunos fallos o laudos arbitrales internacionales. Por otra parte, se sugirió que la Comisión examinara el alcance general del proyecto de artículos, incluida la cuestión del arreglo de controversias y la cuestión fundamental de los crímenes y que, teniendo en cuenta los comentarios de los gobiernos que los habían formulado, presentara varias opciones y recabara su parecer.

228. Con respecto al título del proyecto de artículos, se observó que «La responsabilidad de los Estados en el derecho internacional» era más preciso desde el punto de vista jurídico y destacaría el elemento de derecho internacional de esa responsabilidad.

c) Inclusión de disposiciones detalladas sobre las contramedidas y el arreglo de controversias

229. Hubo acuerdo general en que era importante examinar esas cuestiones detalladamente en una etapa posterior de los trabajos sobre el tema.

d) Relación entre el proyecto de artículos y otras normas de derecho internacional

230. Teniendo presente el fallo de la CIJ en el asunto *Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie)*¹³⁸, se dijo que era importante indicar claramente la relación entre el proyecto de artículos que elaboraría la Comisión y las disposiciones de la Convención de Viena de 1969. Se expresó además la opinión de que la idea de pasar a la

¹³⁸ Fallo, *C I J Recueil* 1997, pág. 7

primera parte del proyecto de artículos la disposición sobre *lex specialis* que figuraba en el artículo 37 de la segunda parte no era tan sencilla como se creía, ya que el régimen especial prevalecería únicamente si incluía una norma distinta.

e) *Forma que ha de adoptar el proyecto de artículos*

231. Con respecto a la forma que había de adoptar el proyecto, algunos miembros de la Comisión apoyaron la sugerencia del Relator Especial de comenzar a examinar la primera parte en el actual período de sesiones y aplazar la decisión sobre la forma que había de recomendar hasta el próximo período de sesiones. Se dijo que la Comisión debía abstenerse de entablar un debate sobre la forma que debía adoptar el proyecto de artículos, ya que ese debate de procedimiento podría ocultar diferencias esenciales; además, la Comisión no podía perder tiempo valioso que necesitaba para examinar el amplio tema de la responsabilidad de los Estados y, en todo caso, sería imposible solucionar de antemano la cuestión. Habida cuenta del estudio de temas similares en relación con la Convención de Viena de 1969, se consideró prematuro que la Comisión decidiera en el actual período de sesiones la forma definitiva que había de adoptar el proyecto de artículos, teniendo en cuenta especialmente que la orientación recibida de los gobiernos había sido escasa y poco concluyente.

232. Sin embargo, esos argumentos no sirvieron para convencer totalmente a otros miembros. Aunque se reconocía que la Comisión por lo general recomendaba la forma que debía adoptar su proyecto una vez concluido el examen de éste, se expresó la opinión de que la Comisión ya debía haber alcanzado esa etapa; no había razones para creer que la Comisión estaría en mejores condiciones de examinar el tema dentro de uno o dos años y el argumento fundamental para que la Comisión examinara de manera inmediata esta cuestión, en lugar de las disposiciones sobre el arreglo de controversias, era el vínculo que existía entre la forma del proyecto de artículos y las cuestiones que éste excluía o no desarrollaba en grado suficiente. Se sugirió no aplazar la decisión relativa a la forma definitiva del proyecto porque la forma determinaría tanto la estructura como el contenido del instrumento, y que, en vista del escepticismo expresado por algunos gobiernos en cuanto a la probabilidad de que en el futuro cercano se aprobara una convención sobre el tema, resultaría más conveniente aprobar una solución intermedia en forma de código de responsabilidad de los Estados en el marco del derecho internacional, cuyo contenido sería similar a una convención, pero se asemejaría a una declaración de la Asamblea General en la medida en que fuese vinculante.

233. Se dijo que no era esencial preparar un tratado, puesto que el efecto positivo de un instrumento se derivaba de su contenido y no de su forma. Además, la forma de tratado tenía desventajas con respecto a las distintas aplicaciones del derecho, según el Estado fuese parte o no en él, a la rigidez de la redacción del tratado y a la posibilidad de que los Estados formularan reservas. Si bien cuando la Comisión inició sus trabajos sobre el tema la elaboración de una convención parecía ser el procedi-

miento más lógico, la experiencia posterior indicaba que podía haber opciones igualmente viables, en vista de la demora en la ratificación de convenciones, que permitía formular ciertas interpretaciones *a contrario*, y que, por lo tanto, debía considerarse la posibilidad de preparar un documento sin fuerza obligatoria, pero autorizado, que fuera aprobado por la Asamblea General.

234. Contó con cierto apoyo la posibilidad de preparar sucesivamente dos instrumentos, posiblemente uno en forma de declaración y otro en forma de convención, y se señaló que había un proyecto semejante en materia de derecho del espacio ultraterrestre. Se dijo que esos instrumentos podían adoptar la forma de una declaración general que estableciera principios esenciales del derecho de la responsabilidad de los Estados y una guía más detallada de la práctica de los Estados a fin de atender las necesidades de éstos. Se señaló, por una parte, que el primer documento podía establecer principios rectores en materia de responsabilidad de los Estados que se refirieran al contenido de la primera parte del proyecto de artículos e incorporaran algunas ideas de la segunda parte que ya se aceptaban en la práctica de los Estados, y que el segundo instrumento, consistiese o no en una convención, podría ser más detallado, incluiría posiblemente elementos de desarrollo progresivo y apuntaría a abarcar todos los aspectos de la responsabilidad de los Estados.

235. Se dijo, en cambio, que con esta posibilidad no quedaría asegurada la aprobación del segundo instrumento de fuerza obligatoria a menos que existiera un vínculo claro entre los dos instrumentos, lo que ocasionaría aún más demoras.

3. OBSERVACIONES FINALES DEL RELATOR ESPECIAL RELATIVAS AL DEBATE SOBRE CUESTIONES GENERALES

236. Tras el examen de la introducción de su informe, el Relator Especial observó que el proyecto de artículos no incluía una cláusula de definiciones generales, aunque en muchas partes del proyecto figuraban definiciones implícitas hábilmente encubiertas, incluida la propia definición de la responsabilidad de los Estados. En el capítulo II de su informe hacía referencia a las cuestiones terminológicas. Si bien la palabra «responsabilidad» ya estaba muy arraigada en el proyecto y en la doctrina como para cambiarla, el Relator Especial convino en que requería una explicación, tal vez en el comentario.

237. El Relator Especial también había venido considerando detenidamente la forma de presentar de la mejor manera posible la valiosa información contenida en los comentarios. Una solución posible consistía en preparar un comentario en dos partes, la primera más general y explicativa y la segunda más detallada. El contraste entre la primera y la segunda parte del proyecto, que con toda razón se había señalado, también resultaba evidente en los comentarios.

238. La Comisión debería recabar la opinión de los gobiernos respecto de todas las cuestiones durante todo el curso del examen del proyecto y tenerla debidamente en cuenta. Con respecto a la forma que había de adoptar

el proyecto, la Comisión bien podría decidir que el proyecto adoptara la forma de una declaración en lugar de una convención, teniendo en cuenta las pocas y diversas opiniones recibidas hasta ahora. Sin embargo, al tiempo de tener en cuenta la opinión de los gobiernos, la CDI deberá llegar a sus propias conclusiones, si es posible por consenso, sobre el procedimiento que debe seguirse. Esa conclusión deberá presentarse como opinión provisional a la Sexta Comisión y la CDI deberá tomar nota cuidadosamente de las reacciones que suscite.

239. Si bien el Relator Especial no se oponía a la propuesta de elaborar dos instrumentos sucesivos, probablemente en forma de una declaración y de una convención, consideraba que había que aclarar más esa posibilidad que, al parecer, requeriría cierta diferenciación entre los artículos más esenciales y menos esenciales del proyecto aunque no era necesario hacerla en el período de sesiones en curso. La CDI podría consultar esa opción con la Sexta Comisión y, desde luego, tener presente el consenso a que se llegara, tanto en sus propios debates como en los de la Sexta Comisión. Sin embargo, no era necesario que la CDI tomara una decisión al respecto en el período de sesiones en curso. Además, por la forma en que se había presentado el proyecto de artículos y la detallada labor realizada al respecto, en la etapa actual resultaría más fácil elaborar primero el texto detallado y extraer de él, si fuera necesario, una declaración más general con algunos principios básicos que volver a los elementos básicos y examinar principios generales, lo cual daría lugar a más demoras aún e implicaría dejar de lado la labor que ya se había realizado.

240. El Relator Especial expresó la esperanza de que, en el actual período de sesiones, la Comisión examinara los principios generales de la primera parte (arts. 1 a 4) junto con las disposiciones detalladas relativas a la atribución (arts. 5 a 15) que también planteaban cuestiones importantes de principio. Por el momento era preciso desarrollar el fondo del tema, en la inteligencia de que en el próximo período de sesiones el Relator Especial propondría un procedimiento para examinar la forma que había de adoptar el proyecto de artículos.

4. PRESENTACIÓN DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA DISTINCIÓN ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR «CRÍMENES» Y LA RESPONSABILIDAD POR «DELITOS»

a) Regulación de los crímenes de Estado en el proyecto de artículos

241. Según el párrafo 1 del artículo 19, el objeto de la obligación no tiene importancia alguna para determinar la existencia de una violación o de un acto ilícito. Este principio, que no admite duda, ha quedado de manifiesto ya en el artículo 1. En el párrafo 4 del artículo 19 se definía en términos residuales el delito internacional diciendo que era todo lo que no fuera un crimen. Por lo tanto, dependía de los párrafos 2 y 3.

242. En el párrafo 2 del artículo 19 se definía el crimen internacional como el hecho internacionalmente ilícito resultante de una violación por un Estado de una obliga-

ción internacional tan esencial para la salvaguardia de intereses fundamentales de la comunidad internacional que su violación estaba reconocida como crimen por esa comunidad en su conjunto. Esta definición tan circular tenía como precedente el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969. Si bien su carácter circular no era en sí mismo fatal para el artículo 19, el párrafo 2 planteaba problemas, como quedaba de manifiesto en el intento de la Comisión de hacer una aclaración en el párrafo 3.

243. El párrafo 3 del artículo 19 adolecía de los siguientes defectos: no definía los crímenes, era tan oscuro que resultaba imposible saber qué era un crimen, si algo lo era; tenía carácter meramente indicativo («puede resultar»); no era excluyente («en particular»); dejaba sujeto el concepto de crimen a una serie de salvedades al disponer que el párrafo 3 era aplicable sin perjuicio del párrafo 2 y de conformidad con las normas de derecho internacional en vigor (que de todas maneras eran la única base posible para aplicarlo); daba una serie de ejemplos que, en razón de esas salvedades, no eran para nada ejemplos y contradecía el párrafo 2 al introducir un nuevo criterio de la gravedad de la violación. En esencia, no era más que un sistema para calificar de «graves» ciertas violaciones *ex post facto*.

244. La Comisión había tratado de limitar su decisión de incluir el artículo 19 indicando en una nota al artículo 40 que el término «crimen» se había empleado para mantener la coherencia con el artículo 19 y que, para evitar la connotación penal de este término, se podían emplear expresiones como «un hecho ilícito internacional de carácter grave». Así pues, el término «crimen» evidentemente se había utilizado en el proyecto de artículos no en su sentido ordinario sino en algún sentido especial. Se definía el delito como todo lo que no era un crimen y se definía el crimen como algo especial que no era un delito, lo cual, por más que fuera cierto, no era muy útil.

245. En los sistemas jurídicos normalmente se define el crimen designado por medio de procedimientos determinados, como delito a la conducta y como delincuente a su actor, y atribuyéndole consecuencias especiales que se consideran propias del derecho penal. En el proyecto de artículos no había procedimientos definidos ni se atribuían a los crímenes consecuencias distintas.

b) Observaciones de los gobiernos sobre los crímenes de Estado

246. Las observaciones de los gobiernos acerca de los crímenes de Estado, hechas en los comentarios y observaciones recibidos de los gobiernos sobre la responsabilidad de los Estados, indicaban diversos grados de satisfacción o insatisfacción respecto del proyecto; varios gobiernos se oponían terminantemente al concepto de crimen y consideraban que podía destruir el proyecto de artículos en su integridad; a juicio de otros, en derecho internacional había una distinción cualitativa entre ciertas violaciones y esa distinción podía tenerse en cuenta de diversas maneras sin usar necesariamente el término «crimen». Otros gobiernos, si bien eran partidarios de la distinción, sostenían que, en su texto actual, el

proyecto de artículos no era satisfactorio porque no desarrollaba suficientemente la distinción desde el punto de vista de las consecuencias procesales del crimen.

c) *El derecho internacional vigente en materia de responsabilidad penal del Estado*

247. El artículo 19 del proyecto no había pasado a formar parte del derecho internacional, a diferencia de muchas otras disposiciones a las que se había hecho referencia en fallos de tribunales internacionales y en la doctrina. No había en la práctica caso alguno en que se hubiese aplicado el artículo, a diferencia de otros que eran parte del proyecto. El artículo 19 había dado lugar a un debate muy polémico entre los juristas y ni ellos ni los Estados estaban de acuerdo en cuanto a lo que había que hacer con ese texto. Así, la Comisión debería proceder a un minucioso debate sobre el artículo 19, que no ha reconsiderado desde que lo incluyó en el proyecto de artículos en 1976¹³⁹, hace más de 20 años.

248. En el período que medió entre las guerras mundiales, y tras el infructuoso experimento de la cláusula del Tratado de Versalles relativa a las culpas de guerra (lo más cerca a la criminalización de un Estado a que hubiese llegado la comunidad internacional), varios juristas cuyos trabajos fueron mencionados en el comentario habían tratado de desarrollar el concepto de crimen internacional de Estado y darle sentido. A diferencia de esa tradición doctrinal limitada, en el estatuto del Tribunal de Nuremberg¹⁴⁰ se preveía la sanción de individuos y no se calificaba de criminales a las Potencias participantes en esa guerra. Además, el Tribunal de Nuremberg había reconocido expresamente que los crímenes contra el derecho internacional eran perpetrados por personas y no por entes abstractos y que la única manera de hacer cumplir el derecho internacional consistía en sancionar a quienes los perpetraban¹⁴¹.

249. Para 1976 parte de la doctrina había procedido a un considerable análisis de los crímenes, pero no había habido una autoridad judicial ni una práctica generalmente aceptada en el período de posguerra que corroborara la distinción. En principio, la evolución de los acontecimientos a partir de 1945 se había caracterizado por una regresión. Durante muchos años el precedente de Nuremberg no tuvo eco en otros juicios penales internacionales, sino que lo que se difundió más bien fue la práctica del enjuiciamiento por tribunales estatales de ciertos crímenes en virtud de sistemas que se basaban en la cooperación judicial y en una extensión de la jurisdicción nacional. Es cierto que en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio se preveía la posibilidad de someter personas a un proceso

internacional por el crimen de genocidio, pero en su artículo IX, relativo a la responsabilidad del Estado, no se hacía referencia al crimen de Estado ni a la responsabilidad penal del Estado. Ni los intentos de definir el crimen de agresión, que era el que más posibilidades tenía en ese momento de ser calificado como crimen de Estado, ni la práctica del Consejo de Seguridad en la materia servían de apoyo para el concepto de crimen de Estado. La inexistencia de una práctica importante en apoyo del concepto de crimen en 1976 se encontraba tácitamente en el comentario del artículo 19¹⁴², que hacía referencia a tres fallos judiciales en favor del concepto de crímenes, dos relativos a contramedidas por actos que no eran crímenes y otro dictado en la causa de la *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited*, y que se refería a obligaciones *erga omnes* y no a crímenes¹⁴³. Es interesante que la CIJ haya tratado de incluir a las obligaciones *erga omnes* en el marco del derecho internacional general, como lo hizo en los asuntos *Timor oriental (Portugal c. Australia)*¹⁴⁴ y *Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie)*¹⁴⁵. Antes no había considerado que esas obligaciones creasen una categoría totalmente distinta y separada del resto del derecho. A juicio del Relator Especial, esta era la estrategia adecuada. El concepto de obligación *erga omnes* no servía de fundamento para una distinción entre crimen y delito, particularmente si se tenía en cuenta que muchos casos de incumplimiento de esas obligaciones no constituían crímenes según la definición del artículo 19.

250. A partir de 1976 se encuentra un gran debate sobre el artículo 19 en la bibliografía académica, fuente secundaria que por sí misma no constituye fuente de derecho internacional, en particular cuando no indica un consenso. Las fuentes primarias a partir de 1976, los tratados, las decisiones y la práctica del Estado tampoco servían de apoyo para el concepto del crimen de Estado. Las decisiones indicaban que la doctrina de la indemnización punitiva, requisito mínimo para un sistema de crímenes, no formaba parte del derecho internacional general. Según una decisión sobre la cuestión de un mandamiento de comparecencia ante la Sala de Apelaciones del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el asunto *Fiscal c. Tihomir Blaskic*¹⁴⁶, en el derecho internacional vigente el Estado no podía ser objeto de sanciones penales semejantes a las previstas en los orde-

¹⁴² Véase la nota 139 *supra*

¹⁴³ Segunda fase, fallo, *C I J Recueil* 1970, págs. 3 y ss, en particular pag. 32, párr. 33. Véase también *Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991* (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta S 92 V 5), pag. 104.

¹⁴⁴ Fallo, *C I J Recueil* 1995, pag. 90. Véase también *Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1992-1996* (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta S 97 V 7), pag. 90.

¹⁴⁵ Excepciones preliminares, fallo, *C I J Recueil* 1996, pag. 595. Véase también *Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1992-1996* (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta S 97 V 7), pag. 123.

¹⁴⁶ Fallo relativo a la demanda de la República de Croacia para el examen de la decisión de la Sala de Primera Instancia II, de 18 de julio de 1997, caso n.º IT-95-14-PT, Sala de Apelaciones, 29 de octubre de 1997, pag. 25.

¹³⁹ *Anuario* 1976, vol. II (segunda parte), págs. 94 y ss.

¹⁴⁰ Estatuto del Tribunal Militar Internacional, anexo al Acuerdo de Londres relativo al procesamiento y castigo de los grandes criminales de guerra de las Potencias europeas del Eje, de 8 de agosto de 1945 (Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol. 82, pag. 279).

¹⁴¹ *Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international Nuremberg, 14 novembre 1945-1er octobre 1946*, Nuremberg, 1949, vol. XXII, pag. 496.

namientos nacionales de justicia penal. El Consejo de Seguridad, si bien había establecido procedimientos para enjuiciar y sancionar a personas por crímenes con arreglo al derecho internacional, jamás había empleado el término «crimen internacional» en relación con el Estado y en el sentido del artículo 19; seguía muy renuente a emplear el término «agresión», incluso en el contexto de casos evidentes de uso ilícito de la fuerza, y había sido muy dispar en su condena de casos de conducta de Estados que cabría calificar de criminal.

d) *Relación entre la responsabilidad penal internacional de los Estados y ciertos conceptos afines*

251. El Relator Especial creía que las disposiciones relativas al crimen de Estado, tal como habían sido formuladas, obstaban a la tarea, más importante, de definir de manera más sistemática las consecuencias de las distintas categorías de obligación en la jerarquía de las normas sustantivas de derecho internacional generalmente reconocidas, incluidas las obligaciones *erga omnes* y las normas de *jus cogens*, que no admitían excepción. La Comisión debía tratar de asegurarse de que el proyecto de artículos enunciara minuciosamente las consecuencias de esas categorías de normas.

e) *Posibles planteamientos de la cuestión de los crímenes internacionales de los Estados*

252. El Relator Especial indicaba en el párrafo 70 de su informe cinco planteamientos posibles de la cuestión de los crímenes internacionales de los Estados: a) el planteamiento del actual proyecto de artículos; b) la sustitución por el concepto de «hecho ilícito excepcionalmente grave»; c) la elaboración de un completo régimen sobre la responsabilidad penal de los Estados en el proyecto de artículos; d) el rechazo del concepto de responsabilidad penal de los Estados, y e) la exclusión del concepto del proyecto de artículos, sin perjuicio del alcance general del proyecto de artículos y de la posibilidad de desarrollar más el concepto de «crimen de Estado» en otro texto.

253. La Comisión, al examinar esos planteamientos, debía tener presentes las limitaciones con que tropezaban tanto la comunidad internacional como ella misma. Las primeras hacían desaparecer en la práctica la posibilidad de imponer un sistema de crímenes que, en importantes aspectos, modificarían las disposiciones vigentes de la Carta de las Naciones Unidas. En cuanto a las segundas, la Comisión tenía como prioridad terminar el examen del tema en el quinquenio en curso.

254. El Relator Especial señaló que era importante saber si al emplear la palabra «crimen» la Comisión se proponía indicar la connotación general de un claro acto ilícito que suscitaba la condena de la comunidad internacional en su conjunto y que era distinto de otras formas de ilicitud desde el punto de vista de su carácter, las consecuencias especiales a que daba lugar y los procedimientos especiales a que estaba sujeto. A pesar de las muchas diferencias que había entre los sistemas nacionales y el internacional, no había que descartar por com-

pleto la analogía con el derecho interno y no había que emplear el término «crimen» en un sentido absolutamente anormal. Había que insistir en que, cada vez que los textos internacionales empleaban el término «crimen» (como solía ocurrir, si bien rara vez en relación con los Estados como tales), lo hacían con su connotación penal ordinaria.

255. En cuanto a las opciones que tenía a la vista la Comisión, la primera consistía en mantener el *statu quo* conservando las disposiciones del proyecto de artículos relativas a los crímenes. Sin embargo, esas disposiciones no establecían un sistema diferenciado y apropiado respecto de los crímenes: en la primera parte no se distinguía entre «crimen» y «delito» en las cuestiones relativas al origen de la responsabilidad internacional, como la imputación, la complicidad o el dolo o la culpa; en la segunda parte se encontraban algunas distinciones menores entre las consecuencias de los crímenes y de los delitos desde el punto de vista de no reconocer la situación ilícita originada por un crimen o ayudar a mantenerla, pero esas obligaciones no estaban debidamente restringidas a los crímenes, y en la tercera parte no se establecía un procedimiento concreto respecto de los crímenes, a pesar de su existencia en otros sistemas jurídicos y de los requisitos relativos a las garantías procesales que constituían una característica distintiva de la responsabilidad penal. El proyecto de artículos actual, al minimizar las consecuencias de los crímenes, tendía a hacer lo mismo con los delitos.

256. La segunda posibilidad que se indicaba en la nota del artículo 40 aprobado en primera lectura¹⁴⁷ consistía en reemplazar el concepto de crimen internacional por el de hecho ilícito excepcionalmente grave. Esta posibilidad admitía dos interpretaciones posibles y las dos causaban problemas. En primer lugar, sería equivalente a introducir de nuevo el concepto de crimen con otro nombre. La Comisión debería emplear el término «crimen» si efectivamente quería hacerlo. En segundo lugar, podría comprender una mayor variedad de hechos ilícitos graves sin referirse a una categoría separada de normas. En todo caso, el hecho de indicar que únicamente ciertas normas daban lugar a violaciones graves redundaría en desmedro de todo el resto del derecho internacional.

257. La tercera posibilidad consistía en tipificar la responsabilidad de los Estados admitiendo que existía el crimen de Estado y tratándolo como un crimen real que debía ser objeto de una condena, una regulación especial y un procedimiento especial y debía tener consecuencias especiales. Para ello habría que introducir importantes cambios en el proyecto actual a fin de elaborar una definición suficiente de crimen, un sistema colectivo de investigación, un procedimiento para determinar la culpa del Estado, un sistema de sanciones y, en última instancia, un sistema para que el Estado que hubiera perpetrado el crimen expiara su culpa.

258. La cuarta posibilidad consistía en excluir por completo la posibilidad de un crimen de Estado, porque el sistema internacional actual no estaba preparado para ello, y someter el enjuiciamiento y la sanción de los

¹⁴⁷ Véase la nota 135 *supra*.

crímenes perpetrados por individuos al Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia¹⁴⁸ y al Tribunal Internacional para Rwanda¹⁴⁹ y, tal vez, a la futura corte penal internacional.

259. La quinta posibilidad consistía en separar la cuestión de la responsabilidad penal del Estado de las relativas al derecho general de las obligaciones a que se hacía referencia en el proyecto de artículos, reconociendo al mismo tiempo la posible existencia de crímenes y la consiguiente necesidad de establecer procedimientos adecuados para que la comunidad internacional los reprimiera. Este planteamiento sería compatible con prácticamente todos los sistemas jurídicos, que regulaban en forma separada la responsabilidad penal, y facilitaría la preparación de los procedimientos especiales que fueran necesarios en razón de las normas internacionales relativas a las garantías procesales.

5. RESUMEN DEL DEBATE SOBRE LA DISTINCION ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR «CRÍMENES» Y LA RESPONSABILIDAD POR «DELITOS»

260. El Relator Especial fue objeto de encomio por haber preparado un primer informe equilibrado e incisivo en el que se analizaban minuciosamente las cuestiones y las opciones relativas al crimen de Estado y que había dado lugar a un debate interesante y fructífero.

a) *Observaciones de los gobiernos sobre los crímenes de Estado*

261. Hubo acuerdo general en que era importante tener en cuenta las observaciones de los gobiernos al proceder a la segunda lectura del proyecto de artículos. En ese contexto, algunos miembros insistieron en que había que tener en cuenta la opinión negativa de diversos gobiernos respecto del concepto de crimen de Estado, la cual podría hacer que el resultado no fuese fructífero. Otros miembros, sin embargo, eran renuentes a extraer conclusiones de las diversas observaciones presentadas por un número reducido de Estados que no representaban necesariamente la opinión de la comunidad internacional.

b) *El derecho internacional vigente en materia de responsabilidad penal del Estado*

262. Se expresaron diversas opiniones en cuanto al grado en que el derecho internacional vigente servía de base para el concepto de crimen de Estado.

¹⁴⁸ Los documentos de referencia están reproducidos en *Documents de référence, 1995* (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta E/F 95 III P 1)

¹⁴⁹ Resolución 955 (1994) del Consejo de Seguridad, de 8 de noviembre de 1994, anexo

i) *La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia*

263. Se mencionó la jurisprudencia de la CIJ como prueba de que los crímenes de Estado formaban parte del corpus de derecho internacional y de que el concepto tenía cada vez mayor aceptación. A ese respecto, algunos miembros señalaron que los alegatos y la decisión preliminar en el asunto relativo a la *Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie)*¹⁵⁰ indicaban que el reconocimiento del genocidio como crimen de derecho internacional en el artículo I de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio no significaba que se tratara únicamente de crímenes perpetrados por agentes del Estado; el hecho de que en el artículo IV se hiciera referencia a la comisión de un acto de genocidio por un «gobernante» o un «funcionario» no excluía la responsabilidad de un Estado por los actos de sus órganos y en el artículo IX no se excluía forma alguna de responsabilidad del Estado, incluida la penal.

264. Otros miembros, en cambio, sostuvieron que esa causa no servía de indicación alguna, ni en las declaraciones de la Corte ni en los alegatos de las partes, de que la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio se refiriese a la responsabilidad de los Estados en el sentido penal de la palabra. Además, de los trabajos preparatorios se desprendía claramente que el artículo IX de la Convención no se refería a la responsabilidad del Estado por crímenes. Más bien el papel que cabía al régimen de la responsabilidad del Estado respecto del crimen de genocidio era más o menos semejante al del régimen de responsabilidad general, en particular para determinar la responsabilidad del Estado de reparar los perjuicios sufridos por las víctimas.

265. También se hizo referencia a la causa *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited*¹⁵¹ y a otros precedentes de la Corte en cuanto al reconocimiento de obligaciones *erga omnes*, como parte de un proceso de evolución que sentaba las bases para el concepto de crimen de Estado. Se señaló que el artículo 19 constituía una importante etapa en la evolución del derecho internacional de un primer sistema jurídico poco desarrollado a uno avanzado, del bilateralismo, que apuntaba a dar una reparación únicamente a la parte lesionada, a un sistema de multilateralismo, en el cual era posible que la comunidad reaccionara ante una transgresión de esos valores, y de la responsabilidad penal individual a la responsabilidad del Estado por crímenes con arreglo al derecho internacional. Este proceso de evolución había obedecido al propósito de desarrollar y consolidar, sobre la base de la institución de la responsabilidad internacional, el concepto de orden público internacional en interés de toda la comunidad de los Estados.

266. Se dijo en cambio que la jurisprudencia de la Corte en el asunto de la *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited* se refería al alcance de las

¹⁵⁰ Véase la nota 145 *supra*

¹⁵¹ Véase la nota 143 *supra*

obligaciones *erga omnes* y no a la responsabilidad penal del Estado. El reconocimiento implícito en la aceptación de obligaciones *jus cogens* o *erga omnes* era el de que las obligaciones internacionales podían tener como contraparte a la comunidad internacional en su conjunto y no ser únicamente bilaterales. Si bien cabía calificar el reconocimiento del interés de la comunidad de requisito previo para cualquier concepto de crimen o transgresión *jus cogens* o *erga omnes*, no se podía decir que para ello hubiese que inventar un concepto de crimen de Estado.

ii) *Derecho de los tratados*

267. Se señaló que, sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y de la práctica internacional, en el derecho de los tratados se habían calificado de actos ilícitos excepcionalmente graves la agresión, el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la paz, los crímenes de lesa humanidad, el *apartheid* y la discriminación racial. A medida que evolucionaba el derecho internacional y, en particular, la jurisprudencia internacional, gradualmente se configuraba el reconocimiento de que esos actos de los Estados correspondían a una categoría determinada de actos ilícitos.

iii) *Organizaciones internacionales*

268. Se sostuvo que en diversos órganos internacionales a menudo se hacía referencia a los intereses fundamentales de la comunidad internacional amenazados por un acto ilícito excepcionalmente grave o un «crimen».

iv) *Definición de la agresión*

269. En respuesta a las afirmaciones de que los crímenes de Estado no existían o no podían definirse, se mencionó la Definición de la agresión adoptada por la Asamblea General¹⁵². Otros miembros, sin embargo, no compartían la opinión de que esa resolución constituyese un reconocimiento de la responsabilidad del Estado por un crimen ni una definición del crimen de agresión cometido por un Estado desde el punto de vista del derecho penal. En todo caso, según esos miembros, como definición era manifiestamente defectuosa.

v) *Sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad*

270. Se expresaron opiniones discrepantes en cuanto a si las sanciones que en los últimos años venía imponiendo con cada vez mayor frecuencia el Consejo de Seguridad constituían una pena o se trataba de medidas adoptadas para restablecer la paz y la seguridad internacionales. A juicio de algunos miembros, el Capítulo VII

de la Carta de las Naciones Unidas había roto definitivamente la relación bilateral clásica en el derecho relativo a la responsabilidad y su tradicional unidad al autorizar al Consejo de Seguridad a que, en nombre de toda la comunidad internacional, aplicara medidas preventivas y represivas de carácter colectivo, incluida la fuerza armada, contra un Estado que hubiese amenazado o quebrantado la paz o hubiese perpetrado un acto de agresión. La facultad del Consejo para adoptar las medidas que considerase necesarias en contra de Estados Miembros en virtud de la Carta se basaba evidentemente en relaciones de responsabilidad, ya que el Consejo únicamente estaba facultado para adoptar medidas cuando un Estado quebrantara normas particularmente importantes de derecho internacional. En el caso de que un Estado cometiese una grave violación de obligaciones internacionales que constituyese una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, el Consejo estaba facultado para adoptar medidas preventivas o para recurrir a la fuerza¹⁵³. La autorización por el Consejo del bombardeo del Iraq fue mencionada como ejemplo de sanción penal y no civil.

271. A juicio de otros miembros, en cambio, había que distinguir entre la responsabilidad internacional por actos ilícitos particularmente graves, su contenido y sus consecuencias, por una parte, y las facultades que la Carta de las Naciones Unidas confería al Consejo de Seguridad para restablecer o mantener la paz y la seguridad internacionales, por la otra. El Consejo no actuaba en el contexto de la responsabilidad del Estado y no imponía sanciones o penas. El Consejo, frente a una situación que constituyese una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, estaba facultado para tomar las medidas, militares o no, que fueran adecuadas para rectificar la situación. Esas medidas podían ser contrarias a los intereses de un Estado que no hubiera cometido un acto ilícito o perjudicar a un Estado que hubiese cometido un acto contrario al derecho internacional. Las sanciones que imponían las Naciones Unidas en virtud del Capítulo VII de la Carta, así como las reparaciones de guerra y la llamada «indemnización punitiva», eran *sui generis* y no tenían nada que ver con la responsabilidad por crímenes.

vi) *Doctrina*

272. Se expresaron opiniones discrepantes en cuanto a las conclusiones que cabía extraer de las distintas opiniones que formulaban los académicos en la bibliografía sobre la cuestión.

vii) *Conclusiones relativas a la práctica estatal*

273. Algunos miembros llegaron a la conclusión de que el concepto de crimen de Estado no estaba establecido en el derecho internacional de la responsabilidad del Estado. No había fundamentos en derecho para hacer

¹⁵² Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1974, anexo

¹⁵³ Véase la resolución 678 (1990) del Consejo de Seguridad, de 25 de noviembre de 1990

una distinción cualitativa entre casos de incumplimiento de obligaciones internacionales. Hasta ahora el concepto de crimen internacional de Estado no tenía base en la práctica estatal, a diferencia del principio de la responsabilidad penal individual establecida por los Tribunales Militares Internacionales de Nuremberg¹⁵⁴ y de Tokio¹⁵⁵, el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Internacional para Rwanda, codificado en numerosos instrumentos internacionales y que pondría en práctica la futura corte penal internacional. No había una práctica estatal que corroborara el concepto de crimen de Estado, a diferencia de la evolución positiva de la responsabilidad individual que se había registrado a partir de la segunda guerra mundial. La jurisprudencia internacional no había recogido la distinción establecida en el artículo 19. Ningún Estado había comparecido jamás en calidad de persona jurídica, en contraposición a sus dirigentes, en una acción penal en su contra.

274. Según otros miembros, la existencia de normas de derecho internacional era esencial para proteger los intereses fundamentales de la comunidad internacional en su conjunto y en la actualidad se admitía en general que esas normas eran quebrantadas con bastante frecuencia. Se cometían en el plano internacional crímenes, con su connotación de violencia y condena por la opinión pública, que no podían ser calificados de delitos graves en forma pragmática, apropiada o exacta. La ausencia de fallos judiciales no significa que los crímenes no existieran sino simplemente que no había órganos competentes para conocer de ellos. Los conceptos de crimen y *jus cogens* existían pero prácticamente nunca se habían utilizado en la práctica, primordialmente porque eran pocas las normas que tenían características de esa índole y los casos de violaciones graves eran también escasos. Esto no significaba, sin embargo, que hubiese que hacer caso omiso de esas situaciones ya que el futuro del derecho internacional reposaba en esos conceptos y en la promesa de una sociedad basada en una mayor solidaridad. Aun en el supuesto de que las pruebas actuales se inclinaban hacia la opinión de que el derecho internacional no reconocía la delincuencia del Estado, ello no significaba que no fuese necesario o apropiado que la Comisión hiciera algo al respecto.

c) *Relación entre la responsabilidad penal de los Estados y ciertos conceptos afines*

i) *La responsabilidad penal individual en derecho internacional*

275. Se expresaron diversas opiniones en cuanto a si un Estado, a diferencia de un individuo, podía cometer un crimen en derecho internacional y si se podía hacer valer su responsabilidad al respecto. Algunos miembros sostenían que un Estado, en su calidad de persona jurídica o

de mera abstracción, no podía ser el autor directo de un crimen. El Estado actuaba por conducto de sus órganos, integrados por personas naturales. La responsabilidad por los crímenes debía recaer sobre quienes los planificaban y ejecutaban, incluidas las autoridades de los Estados. Esos miembros, refiriéndose al fallo del Tribunal de Nuremberg, recordaron que en él se indicaba que los crímenes contra el derecho internacional eran cometidos por individuos y no por entes abstractos. El principio de la responsabilidad penal individual era aplicable incluso a los jefes de Estado o de gobierno, lo que hacía posible someter a juicio a quienes, al más alto nivel, planificaban y ejecutaban crímenes, y hacía innecesario el concepto de crimen de Estado, cuyo alcance quedaría más reducido en razón del establecimiento de la corte penal internacional. Sería más útil desarrollar el concepto de la responsabilidad penal internacional de los individuos, materia en que se habían registrado novedades de importancia. La responsabilidad penal internacional de los individuos no servía de base para el «crimen de Estado». El intento de trazar una analogía entre la responsabilidad por el crimen de Estado y la responsabilidad por crímenes cometidos por individuos no era prudente y creaba malentendidos.

276. Según otros miembros, tanto individuos como Estados podían cometer ciertos crímenes internacionales y el planteamiento tradicional, basado en el de Nuremberg, era demasiado estrecho. La conducta de una persona podía dar lugar a la responsabilidad penal del Estado que representara; en esos casos, la responsabilidad debía recaer sobre el propio Estado en una u otra forma, como una indemnización punitiva o medidas que afectaran a su dignidad. Los crímenes enumerados en el artículo 19 eran consecuencia de la política del Estado y no de la conducta del individuo y no sería lógico castigar por esos actos exclusivamente al individuo. Naturalmente, la sanción penal no podía ser la misma en el caso de un individuo y en el de un Estado. Habida cuenta del desarrollo ulterior de la responsabilidad penal individual a partir de Nuremberg, no sería coherente negarse a reconocer la responsabilidad particularmente solemne que tenían los propios Estados respecto del mismo tipo de transgresión. Esa evolución era lógica y era conveniente porque apuntaba a salvaguardar los valores supremos de la humanidad, la paz y la justicia internacionales.

277. Según algunos miembros, había que mantener una clara distinción entre la responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual. Se señaló que, cuando un Estado cometía un crimen, la responsabilidad por él se imputaba a las autoridades del gobierno pero ello no significaba que la responsabilidad del Estado propiamente dicho fuese penal, como indicaba la causa *Fiscal c. Tihomir Blaskic*¹⁵⁶.

ii) *Normas imperativas de derecho internacional (jus cogens)*

278. Se expresaron distintas opiniones en cuanto a la relación entre las normas imperativas de derecho interna-

¹⁵⁴ Véase la nota 141 *supra*

¹⁵⁵ Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, *Documents on American Foreign Relations*, Princeton University Press, vol. VIII (julio de 1945-diciembre de 1946), 1948, págs. 354 y ss

¹⁵⁶ Véase la nota 146 *supra*

cional (*jus cogens*) y la responsabilidad penal del Estado. Según algunos miembros, los dos conceptos estaban estrechamente vinculados entre sí, como indicaba la similitud entre la definición de *jus cogens* que figuraba en el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 y la definición de crimen de Estado que se encontraba en el párrafo 2 del artículo 19 del proyecto. Sin embargo, ello no significaba que una infracción del *jus cogens* implicara necesariamente un crimen internacional o que las consecuencias de una infracción del *jus cogens* eran necesariamente las mismas de las consecuencias de un crimen internacional. La Comisión no había prestado suficiente atención a esta cuestión en la primera lectura y debía hacerlo en la segunda. Otros miembros, si bien estaban de acuerdo en que la Comisión debía examinar si el proyecto de artículos tenía suficientemente en cuenta las normas de *jus cogens*, no lo estaban en que hubiera un vínculo entre esas normas y la responsabilidad penal de los Estados y sostenían que no había tal. Se dijo que la Comisión debía examinar el concepto de *jus cogens* en relación con los actos ilícitos excepcionalmente graves y no con los crímenes de Estado.

iii) Obligaciones erga omnes

279. Se expresaron distintas opiniones en cuanto a si había que desarrollar más en el proyecto de artículos la cuestión de las obligaciones *erga omnes*. Según varios miembros, había importantes diferencias respecto de las consecuencias jurídicas de la transgresión de una obligación *erga omnes* que el proyecto no tenía suficientemente en cuenta. Entre las sugerencias para mejorar el proyecto se contaba la de prever un régimen adecuadamente gradual de responsabilidad para el caso de las obligaciones *erga omnes* y establecer las consecuencias jurídicas de su transgresión en el contexto de regímenes distintos y equilibrados. Algunos miembros insistieron también en la importancia de tener presente, al examinar esas consecuencias, que, si bien todas las normas de *jus cogens* eran por definición *erga omnes*, no todas las normas *erga omnes* eran necesariamente imperativas ni revestían importancia fundamental para la comunidad internacional.

280. Otros miembros expresaron preocupación por la posibilidad de dar primacía en el proyecto a las consecuencias de las obligaciones *erga omnes* o de detallar más esas consecuencias. Señalaron que las obligaciones de esa índole constituían únicamente uno de tres tipos de normas que formaban círculos concéntricos más pequeños, a saber, las obligaciones *erga omnes*, las normas de *jus cogens* y los crímenes internacionales. Se dijo también que el principio *erga omnes* básicamente se refería al interés y al *locus standi* de los Estados en un determinado asunto que pudiera dar lugar a problemas desde el punto de vista del derecho de un Estado: a) interponer una acción para proteger un interés público colectivo de la comunidad, de resultados de lo cual podría haber una proliferación de acciones judiciales y una mayor renuencia de los Estados a aceptar la jurisdicción de la CIJ; b) hacer valer un interés jurídico en reivindicar el interés colectivo de la comunidad fuera del ámbito judicial, como en foros internacionales, por ejemplo; c) adoptar, unilateral o conjuntamente, contramedidas contra el

Estado o los Estados transgresores; d) de no haber control judicial, autodesignarse policía de la comunidad internacional, y e) reclamar una indemnización sin haber sufrido perjuicios materiales.

281. Varios miembros insistieron en la necesidad de examinar minuciosamente la relación entre obligaciones *erga omnes*, normas de *jus cogens* y actos ilícitos excepcionalmente graves o crímenes de Estado cuando se estudiaran las consecuencias del acto ilícito internacional. Se sugirió revisar los actuales artículos del proyecto para determinar si había que reorganizarlos o reformularlos, especialmente respecto de la atribución del acto ilícito, las circunstancias excluyentes de la ilicitud, la determinación del Estado perjudicado, los derechos y las obligaciones de otros Estados, las formas de indemnización, el funcionamiento de los mecanismos de autoayuda, la solución de controversias y la relación entre el régimen general de responsabilidad y los regímenes especiales.

282. Algunos miembros, al tiempo que reconocían la relación entre el concepto de crimen de Estado y los de *jus cogens* y *erga omnes*, sostenían que en el proyecto había que referirse al concepto de crimen de Estado porque no era sinónimo de los otros dos y no había que restarle importancia al reemplazarlo por una especie de ellos o relegarlo a la calidad de tal.

d) Posibles planteamientos de la cuestión de los crímenes internacionales de los Estados

i) Cuestiones preliminares

a. El concepto de la responsabilidad «objetiva»

283. Se expresó apoyo al concepto de responsabilidad «objetiva» como base sólida y fundamental de todo el proyecto. Se señaló que la Comisión había hecho algo realmente revolucionario al separar la responsabilidad del Estado del planteamiento bilateralista tradicional, que estaba subordinado al daño, para optar en cambio por un planteamiento objetivo basado en la transgresión de una norma y en el cual la responsabilidad del Estado se asemejaba más al sistema de orden público que se encontraba en el derecho interno moderno. Se dijo que la Comisión debía ahora dar el segundo paso que quedaba para llevar a la práctica la revolución conceptual en el campo en que más necesario era, el de las transgresiones del derecho internacional que constituían delitos contra la comunidad internacional en su conjunto. Se dijo que el concepto de responsabilidad objetiva sería un claro reconocimiento de que existía la ilicitud internacional y que los Estados debían respetar el derecho internacional por más que, al no hacerlo, no perjudicaran intereses concretos de otro Estado y por más que una transgresión no causara un daño directo a otro sujeto de derecho internacional. En suma, existía una sociedad internacional fundada en el derecho. Se señaló además que el carácter «objetivo» de la responsabilidad era más evidente en el contexto de los crímenes internacionales porque era allí donde había que proteger los intereses generales y «objetivos» de la comunidad internacional en su conjunto. Se

dijo que no cabía esperar que la inclusión del perjuicio como uno de los elementos constitutivos de un acto ilícito o la referencia a alguna forma de culpa o dolo (en otras palabras, de un elemento de intencionalidad) diera mayor claridad o estabilidad a las relaciones internacionales, habida cuenta de la índole subjetiva de esos conceptos.

b. El carácter de derecho civil o de derecho penal de la responsabilidad del Estado

284. Se expresaron distintas opiniones en cuanto al carácter del derecho de la responsabilidad del Estado y sus consecuencias para la cuestión de los crímenes de Estado. Según algunos miembros, el concepto de crimen de Estado era incompatible con el carácter de derecho civil de la responsabilidad del Estado. Según otros, el derecho de la responsabilidad del Estado, que regía las relaciones entre iguales soberanos, no era penal ni civil sino más bien internacional y de carácter *sui generis*. Otros miembros indicaron que el derecho de la responsabilidad del Estado podía avanzar en el futuro hacia una separación de la responsabilidad civil y la responsabilidad penal.

c. Analogía con el derecho interno

285. Se expresaron distintas opiniones en cuanto a las consecuencias de la analogía con el derecho interno en el contexto de la cuestión de la responsabilidad penal del Estado. Según algunos miembros, la analogía con el derecho interno podía ser útil para desarrollar el concepto de responsabilidad penal del Estado y se mencionó el desarrollo del concepto de responsabilidad penal de las sociedades en algunos sistemas jurídicos y el establecimiento de normas internacionales en relación con el proceso penal. Ello no significaba que la Comisión debiera partir de una idea preconcebida de crimen sobre la base del derecho interno ni de que todos y cada uno de los aspectos del derecho interno fueran pertinentes en el contexto internacional. Según otros miembros, el derecho penal interno no servía de base alguna para el «crimen de Estado» y había que descartar la idea de hacer valer la responsabilidad penal del Estado a fin de evitar una confusión con conceptos de derecho interno que eran aplicables únicamente a individuos y no podían ser asimilados en derecho internacional.

d. Aplicabilidad del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y de otros regímenes especiales

286. Se manifestaron opiniones discrepantes en cuanto a la relación entre el proyecto de artículos y los regímenes especiales, tales como el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. En atención a las observaciones formuladas acerca del riesgo de injerirse en la responsabilidad que cabía al Consejo de Seguridad respecto de las cuestiones de su competencia, se dijo que la tipificación de la conducta del Estado no redundaría en desmedro de la función del Consejo ya que nadie había propuesto que

se modificara su responsabilidad primordial por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Mientras el Consejo se ocupaba de los aspectos políticos de esos crímenes, el régimen de la responsabilidad del Estado debía ocuparse de sus aspectos jurídicos. Además, la práctica del Consejo no había sido coherente respecto de esas situaciones, y en muchos casos, los miembros permanentes del Consejo, al ejercer el derecho de veto, habían impedido que la comunidad internacional tomara medidas eficaces contra Estados involucrados en la comisión de crímenes internacionales.

287. Al mismo tiempo se dijo que era importante comprender que el derecho internacional vigente ofrecía regímenes especiales más completos para hacer frente a las transgresiones enumeradas en el artículo 19, como el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas en el caso de la agresión, el régimen de derechos humanos y la red de tratados sobre medio ambiente. Por lo tanto, la Comisión debía adoptar un planteamiento prudente en que se diera carácter subsidiario o supletorio al futuro sistema de consecuencias jurídicas de la transgresión de obligaciones para con la comunidad que fuesen objeto de regímenes concretos. Se dijo además que el régimen de responsabilidad del Estado no debía ocupar un lugar prominente en la acción de la comunidad internacional encaminada a reprimir crímenes de Estado tan odiosos como la agresión, el genocidio o los crímenes de guerra; el Consejo de Seguridad era la institución política autorizada para adoptar medidas en virtud del artículo VIII de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio o en virtud del Capítulo VII de la Carta y las deficiencias de este sistema sólo podían ser corregidas por las propias Naciones Unidas y no mediante un régimen de responsabilidad del Estado. La necesidad o la utilidad del concepto de crimen era menor habida cuenta de las disposiciones de la Carta relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a la forma decidida en que estaba actuando el Consejo de conformidad con el Capítulo VII de la Carta.

ii) *Planteamiento del proyecto de artículos actual*

a. Definición de crimen de Estado en el artículo 19

288. Por una parte, la definición de crimen de Estado en el artículo 19 fue calificada de confusa, circular, carente de la precisión que exigía el derecho penal, inútil a los efectos de procesar individuos o Estados e incierta por depender del reconocimiento posterior de la comunidad internacional. Por la otra, se advirtió que toda definición era necesariamente difícil, en cierto modo arbitraria e incompleta; que la definición del artículo 19 no era más imprecisa o incompleta que la de «norma imperativa de derecho internacional general» (*jus cogens*) que se encontraba en el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 y que podía sostenerse que el artículo 19 era más claro y explícito porque daba ejemplos que aclaraban la definición. Se dijo además que la técnica jurídica utilizada en el artículo 19, enunciar un criterio general respecto de los crímenes para enumerar luego los más obvios, era imperfecta pero no inusitada. Se mencionó otra posibilidad propuesta por el Relator Especial en el

párrafo 48 del primer informe, la de definir los crímenes por referencia a sus características procesales distintas o a sus consecuencias y de definir los delitos como el incumplimiento de una obligación que sólo dará lugar a un derecho de indemnización o restitución y no a multas u otras sanciones.

289. En relación con el párrafo 2 del artículo 19, se dijo que, para cumplir el requisito del reconocimiento de la comunidad internacional en su conjunto, se necesitaba una decisión unánime de los Estados, que sería difícil si no imposible de lograr, o el acuerdo de elementos esenciales de la comunidad internacional que no estaban claramente indicados. Se propuso cambiar esa disposición por la siguiente: «El hecho internacionalmente ilícito resultante del incumplimiento por un Estado de una obligación esencial para la salvaguardia de intereses fundamentales de la comunidad internacional en su conjunto tendrá consecuencias jurídicas concretas».

290. Se señaló que el reconocimiento de esta categoría de hechos ilícitos debía mantenerse en el párrafo 2, pero que el párrafo 3 debía simplemente suprimirse. Se consideró improcedente el requisito adicional de la gravedad («violación grave») del párrafo 3, dada la gravedad inherente del hecho a que se refería el párrafo 2. En respuesta a las críticas formuladas contra el párrafo 3 del artículo 19, que se trataría de una simple enumeración de crímenes indeterminados incompatible con el párrafo 2, se dijo que el proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad¹⁵⁷ se limitaba a enumerarlos sin definirlos expresamente.

291. En cuanto al apartado *a* del párrafo 3, algunos miembros de la Comisión dijeron que la agresión había sido reconocida como crimen de Estado; que era una infracción gravísima del derecho internacional que sólo podían cometer Estados y no individuos, y que por eso el proyecto de artículos debía ocuparse de estas gravísimas infracciones del derecho internacional. Otros sostuvieron en cambio que la agresión no debía ser el primer ejemplo de crimen de Estado porque, como consecuencia de las funciones que en la Carta de las Naciones Unidas se asignaban al Consejo de Seguridad, el proyecto de artículos no podía definirla; el proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad no definía la agresión por la enorme dificultad que ello entrañaba; la resolución de la Asamblea General sobre la cuestión¹⁵⁸ era un texto político y no un instrumento jurídico; la agresión era cometida por personas que actuaban en nombre del Estado y empleando sus medios y, por último, nunca se había juzgado por agresión a un Estado y sí en cambio a sus dirigentes, como en el caso de Nuremberg.

292. En relación con el párrafo 4 se dijo que había que hacer una distinción más clara entre crímenes internacionales y delitos internacionales en función de la gravedad de la infracción, a fin de evitar que se equiparara la infracción de una cláusula arancelaria internacional a la agresión o al genocidio. Por otra parte, algunos miem-

bro dijeron que no correspondía emplear las expresiones «crimen» y «delito», vinculadas al derecho penal, para referirse a cuestiones ajenas a éste. Esas expresiones tenían connotaciones de derecho penal interno extrañas al ámbito internacional, pues la responsabilidad de los Estados no era ni civil ni penal sino internacional. También se expresaron dudas acerca de la expresión «delito». El Relator Especial observó que la expresión «delito» no podía emplearse en el sentido del artículo 19 sin introducir de nuevo el concepto de crimen.

b. Regulación de los crímenes de Estado en la primera parte

293. Se dijo que las disposiciones de la primera parte (salvo el artículo 19) se habían redactado exclusivamente en relación con los «delitos» y se había extendido su aplicación a los «crímenes» a falta de otra solución. La Comisión nunca había considerado si no era preciso formular de nuevo algunas disposiciones de la primera parte, como las relativas a las circunstancias que excluían la ilicitud. La cuestión de las características propias de las «normas secundarias» relacionadas con la infracción de las «normas primarias» esenciales para la salvaguardia de los intereses fundamentales de la comunidad internacional en su conjunto debía plantearse en relación con todo el proyecto. Algunos artículos de la primera parte no podían aplicarse fácilmente al incumplimiento de obligaciones multilaterales y menos aún al incumplimiento de obligaciones *erga omnes*, categoría más amplia que la contenida en el párrafo 2 del artículo 19, dada la distinción «cualitativa» entre las normas *erga omnes* según tuvieran o no el carácter de normas imperativas. No obstante, habida cuenta del carácter «técnico» de las normas contenidas en la primera parte, se planteó la cuestión de si seguía siendo necesario, o en qué casos lo era, hacer una distinción «cualitativa» entre las normas *erga omnes* según su «contenido».

294. Se dijo también que la Comisión había redactado la primera parte del proyecto en el contexto de un régimen general de responsabilidad que evitara la fragmentación en regímenes diferentes; que no había puesto de manifiesto debidamente el concepto de crímenes de los Estados sentando cuidadosamente las bases de dos regímenes, y que debía revisar las disposiciones de la primera parte para conseguir una mayor armonía entre las diversas partes del proyecto; a ese respecto se hizo referencia al párrafo 77 y a la nota correspondiente del primer informe del Relator Especial.

295. Se dijo además que los artículos 1 y 19 tenían un mismo fundamento y debían leerse conjuntamente y que toda modificación del artículo 19 afectaría automáticamente a los artículos precedentes.

c. Concepto de Estado lesionado

296. Hubo acuerdo general en que la Comisión debía examinar más detenidamente la definición de Estado lesionado que figuraba en el artículo 40, sobre todo en relación con las obligaciones *erga omnes*, el *jus cogens*

¹⁵⁷ Véanse el texto de los artículos y sus comentarios aprobados por la Comisión en su 48.º período de sesiones en *Anuario... 1996*, vol. II (segunda parte), doc. A/51/10, párr. 50.

¹⁵⁸ Véase la nota 152 *supra*.

y, posiblemente, los crímenes de Estado o los hechos ilícitos excepcionalmente graves. También hubo acuerdo general en que estos conceptos no coincidían y debían examinarse por separado para evitar confusiones.

297. Se dijo que el párrafo 3 del artículo 40 materializaba el interés de la comunidad internacional en que se reaccionara contundentemente ante el incumplimiento de las obligaciones por ella impuestas, pues consideraba «lesionados» a todos los Estados y les reconocía todas las reacciones posibles en caso de «crímenes», inclusive el derecho de adoptar contramedidas, lo que aumentaba notablemente el riesgo de que se cometieran abusos. No era incompatible con el interés de la comunidad internacional en que se reaccionara contundentemente ante el incumplimiento de las obligaciones por ella impuestas que se reconociera la posibilidad de reacciones distintas a los Estados según su «proximidad» con la infracción de que fueran víctimas. Como aproximación importante a una solución, podía modificarse la redacción del artículo 40 de manera que distinguiera tres categorías de Estados lesionados, como hacía el artículo 60 de la Convención de Viena de 1969.

d. Consecuencias de los crímenes de Estado

298. Según algunos miembros de la Comisión, las consecuencias nimias, incorrectas y confusas establecidas en el proyecto de artículos, entre las que no figuraban penas, indemnizaciones punitivas, multas u otras sanciones, no permitían justificar el concepto de crimen de Estado. Se consideró insustancial que se ampliara el derecho de restitución, que podía poner en peligro la independencia política del Estado infractor, y que al mismo tiempo se rechazara la solución más correcta de la indemnización punitiva. La obligación de no prestar ayuda se consideró irrisoria y la de cooperar se calificó de ineficaz en la práctica. Se dijo que era incorrecto dar a entender que las obligaciones de no reconocimiento y no complicidad fueran consecuencias propias de los hechos ilícitos calificados de crímenes.

299. Se señaló, por el contrario, que el hecho de que la Comisión no pudiera establecer el régimen de los «crímenes» no podía atribuirse únicamente a la complejidad de las cuestiones derivadas del incumplimiento de obligaciones esenciales para la salvaguardia de intereses fundamentales de la comunidad internacional, y menos aún a la ausencia de esta clase de infracciones en la vida internacional, sino que era consecuencia principalmente del planteamiento incoherente de la Comisión que, tras ocuparse de las infracciones «ordinarias» o «delitos», no había dedicado atención suficiente a los «crímenes» en la primera lectura. Se observó asimismo que, en la primera lectura, la Comisión se había ocupado en primer lugar de las consecuencias de los crímenes y los delitos indistintamente y luego de las consecuencias propias de los crímenes, con lo que se habían redactado disposiciones inadecuadas. Se sugirió que en la segunda lectura del proyecto la Comisión examinara artículo por artículo cada acción que se considerara que reunía las condiciones de crimen con arreglo al artículo 19 con miras a determinar

si le sería aplicable el régimen de normas secundarias que habría de preparar la Comisión y en qué medida.

300. Según algunos miembros de la Comisión, en la segunda lectura ésta debía trazar una distinción sistemática entre las consecuencias de los crímenes y los delitos en lugar de interrumpir el examen de las consecuencias de los crímenes. Era necesario hacer una distinción cualitativa, cuando menos a efectos de la reparación, pues la indemnización pecuniaria era inadecuada en el caso de crímenes graves como el genocidio. Se propuso que el proyecto de artículos trazara una cuidadosa distinción entre las dos clases de responsabilidad, estableciera un régimen separado para la infracción de normas fundamentales para la salvaguardia de la comunidad internacional en su conjunto, que no se encontraba en los artículos 51 a 53, y llenara otras lagunas, como eran quién podía denunciar la infracción, cuál era el procedimiento para determinar que se había cometido una infracción grave y cómo y por quién se impondrían las penas correspondientes. Se propuso también que la Comisión tratara de establecer consecuencias distintas para los crímenes, teniendo en cuenta los aspectos procesales y las garantías procesales de los Estados delincuentes, tal vez en un capítulo separado que podría ser facultativo y ofrecer a la comunidad internacional las máximas opciones posibles. Se dijo además que algunas de las consecuencias que debían haberse reservado a los crímenes se habían aparejado a los simples delitos, por ejemplo las disposiciones sobre las contramedidas. Asimismo, la Comisión había pasado por alto las consecuencias fundamentales del concepto de crimen, a saber: a) la indemnización punitiva, cuya existencia en el derecho internacional demostraba el párrafo 2 del artículo 45, y b) el rechazo de la inmunidad de Estado de los individuos que hubieran cometido infracciones graves como funcionarios de él, a fin de que los tribunales penales internacionales pudieran juzgarlos.

301. En relación con el artículo 53 se propuso que la Comisión desarrollara las muy limitadas pero no baladíes consecuencias de los crímenes internacionales establecidas en el artículo 53 del proyecto, a fin de hacerlas más válidas y convincentes. Se dijo que el apartado a del artículo 53 ponía de manifiesto una diferencia fundamental entre las consecuencias de los crímenes y los delitos; en efecto, en el caso de los primeros, todos los Estados, incluido el que había sufrido el crimen directamente, tenían la obligación de no reconocer la licitud de la situación por él creada. Se expresaron dudas acerca de que alguien pudiera oponerse a la obligación de no reconocer la licitud de la situación creada por un crimen internacional o de no prestar asistencia al Estado que lo hubiera cometido a fin de mantener la situación creada por dicho crimen. Sin oponerse al no reconocimiento de las consecuencias derivadas de los llamados crímenes de Estado, se expresó preocupación por las consecuencias *a contrario*, por ejemplo, cuando se adquirían territorios por el uso de la fuerza en legítima defensa. La obligación de no reconocer la licitud de la situación creada por un crimen internacional fue calificada además de manifiestamente insuficiente, por ejemplo en los casos de genocidio. Asimismo, se dijo que las obligaciones de no reconocimiento y cooperación para eliminar las consecuencias del crimen ponían de manifiesto un espíritu de solidari-

dad creciente entre los miembros de la comunidad internacional y un intento de actuar como comunidad con arreglo al concepto de orden público internacional, lo cual era una evolución positiva de la obligación de solidaridad entre los Estados. Se dijo que el concepto de comunidad basada en la solidaridad se estaba afianzando lentamente y debía tenerse en cuenta al formular disposiciones jurídicas que habían de regular relaciones entre Estados.

iii) *Sustitución por el concepto de «hecho ilícito excepcionalmente grave»*

302. Algunos miembros de la Comisión apoyaron la propuesta de sustituir el concepto de crímenes de los Estados por el de «hecho ilícito excepcionalmente grave» que, en su opinión, era más acorde con el carácter internacional o *sui generis* de la responsabilidad de los Estados y evitaba la confusión originada por la analogía con el derecho interno y las connotaciones penales que habían complicado el examen del tema. Otros opinaron que el concepto de «crimen de Estado» no tenía connotaciones penales intrínsecas, pues las palabras tenían la acepción que les daba un ordenamiento jurídico determinado, la terminología no era importante y la expresión «crimen de Estado» podía sustituirse por otra siempre que se mantuviera la idea fundamental del párrafo 2 del artículo 19. Se propuso sustituir la expresión «crimen» por «infracción de una norma esencial para la comunidad internacional en su conjunto» o incluso por la infracción de una norma de *jus cogens*. A juicio de otros, la expresión «crimen de Estado» había adquirido cierto sentido y grado de aceptación, que cambiar la terminología podía llevar a trivializar el concepto, que éste debía equipararse al de crimen en derecho interno y que, en la medida de lo posible, las graves consecuencias que éste normalmente entrañaba en derecho interno debían ser aplicables al crimen de Estado.

303. Se formularon varias opiniones y propuestas sobre la manera en que la Comisión podía desarrollar este planteamiento. Se dijo que eliminar del tema de la responsabilidad la categoría de los hechos ilícitos especialmente graves era un retroceso inaceptable en el establecimiento de un orden internacional más justo y equitativo, que la Comisión debía seguir examinando esa categoría especial de hechos ilícitos excepcionalmente graves y establecer con la mayor claridad posible los criterios para determinar esos hechos y las normas específicas de responsabilidad a ellos aplicables, y que el concepto básico que sustentaba la especial gravedad de esos hechos ilícitos, que según el párrafo 2 del artículo 19 era la necesidad de salvaguardar los intereses fundamentales de la comunidad internacional en su conjunto, debía mantenerse sin criminalizar la responsabilidad internacional.

304. Se señaló además que la Comisión no podía desoír la necesidad de dotar de un mecanismo sancionador suficiente a las normas del derecho internacional que consagraban intereses fundamentales de la comunidad internacional; que la Comisión debía establecer un régimen de responsabilidad diferenciada que comprendiera una regulación adecuada de la responsabilidad de los

Estados por el incumplimiento grave de obligaciones esenciales para la comunidad integrada por dos elementos: una obligación *erga omnes* que alcanzara a todos los Estados y una norma de *jus cogens* que no pudieran modificar los Estados *inter se*, y que el párrafo 2 del artículo 19 podía ser un buen punto de partida para establecer, en lugar de los crímenes, el nuevo concepto de las obligaciones internacionales respecto de la comunidad internacional.

305. Se dijo que, en realidad, más que meros crímenes y delitos había grados de responsabilidad según cuáles fueran las normas primarias infringidas, y que era necesario un análisis más profundo para determinar las diversas consecuencias desde el punto de vista de la codificación de las normas correspondientes. Una solución más adecuada sería determinar el grado de responsabilidad con arreglo a la clase de norma infringida en lugar de ocuparse de la cuestión de los crímenes, que había entrabado más que impulsado los trabajos en un tema que requería precisión jurídica. Se dijo que era importante distinguir las categorías de hechos ilícitos que un Estado podía cometer en transgresión de diversas obligaciones internacionales y, sobre todo, determinar las consecuencias jurídicas de las distintas categorías de hechos ilícitos. También se consideró necesario distinguir los grados de las obligaciones, desde las aplicables a las relaciones entre los sujetos de derecho hasta las que afectaban a los intereses esenciales de la comunidad internacional, pues sus consecuencias jurídicas eran diferentes. Mientras en el contexto de las relaciones entre sujetos de derecho el ejercicio de la acción correspondía al Estado lesionado y el daño y el nexo causal eran elementos constitutivos del régimen de responsabilidad, lo mismo que la indemnización o la reparación requerida, en caso de infracción de una norma esencial o de superior grado el ejercicio de la acción correspondía a la comunidad, no era indispensable haber sufrido un daño directo y la sanción era la consecuencia de la infracción. Se dijo también que sería más útil que hubiera una continuidad en los grados de la infracción, desde la infracción menor de una obligación bilateral hasta la infracción material, mucho más grave, de una obligación frente a todos los Estados. El Relator Especial señaló que no convenía que la labor en la materia se sujetara a una rígida dicotomía entre crímenes y delitos, sobre todo porque un mismo hecho podía tener una u otra calificación en relación con personas o entidades diferentes.

iv) *Establecimiento de un régimen completo de responsabilidad penal del Estado en el proyecto de artículos*

306. Algunos miembros de la Comisión eran partidarios de que el proyecto desarrollara el concepto de crimen de Estado, para lo que no veían obstáculo alguno puesto que la primera lectura se había basado en la existencia de esos crímenes. Opinaron que la Comisión podía definir el contenido del concepto de «crimen de Estado» y formular el régimen correspondiente con arreglo a su mandato vigente, que no estaba limitado a ciertos aspectos de la responsabilidad de los Estados, pero no consideraban necesario desarrollar los cinco elementos previstos en el planteamiento del Relator Especial. La afirmación de que era preciso desarrollar los cinco

elementos del régimen de la responsabilidad penal de los Estados se basaba en una idea preconcebida del concepto de «crimen» que suponía incorrectamente que el régimen del derecho internacional debía ser absolutamente idéntico al del derecho interno; no tenía en cuenta las diferencias entre la sociedad internacional y las sociedades nacionales y no reconocía que las expresiones tenían el significado que les daba el ordenamiento jurídico a que pertenecían. Se señaló que no era la intención de la Comisión tipificar la conducta de los Estados en el mismo sentido que el derecho interno y que el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados no comprendía, en sentido estricto, elementos penales. Se calificó de utópico un régimen de responsabilidad de los Estados que incluyera dichos elementos.

307. Otros miembros de la Comisión no apoyaron este planteamiento por las razones aducidas en apoyo de los planteamientos examinados en los párrafos 302 a 305 ó 312 a 318.

a. Definición exacta de crimen de Estado (*nullum crimen sine lege*)

308. Se dijo que era tarea difícil dar una definición exacta del crimen de Estado. Se sugirió que era suficiente dar una definición general del concepto y que era innecesario definir sus elementos.

b. Institución y procedimiento adecuados para investigar y determinar la comisión de crímenes por los Estados

309. Algunos miembros de la Comisión señalaron que ésta debía examinar cuáles eran la institución y el procedimiento adecuados para determinar objetivamente la comisión de crímenes por los Estados. Se consideró necesario establecer un procedimiento o régimen especial que colmara los legítimos deseos de la comunidad internacional de disponer de un mecanismo de protección, ya que en el plano internacional no había aún una autoridad legislativa, judicial o policial que declarara la responsabilidad penal de los Estados o hiciera cumplir el derecho penal. También se consideró necesario establecer un mecanismo institucional adecuado para determinar objetivamente la comisión de un crimen o delito, cuestión que no debía quedar librada al criterio subjetivo del Estado lesionado, a fin de evitar el riesgo de que el concepto de crimen de Estado sirviera para que los fuertes abusaran de los débiles.

310. Otros consideraron utópico establecer esa institución o procedimiento en la comunidad internacional actual, que carecía de una autoridad central que determinara e imputara la responsabilidad penal, un procedimiento para establecer la comisión de un crimen por un Estado, un mecanismo comúnmente aceptado para determinar la existencia de un crimen y la reacción jurídica necesaria, un aparato dotado de jurisdicción penal sobre los Estados autorizado a imponer sanciones y una institución que pudiera hacer cumplir esas sanciones. Se afirmó que la justicia penal presuponía la existencia de una autoridad judicial encargada de decidir si se había cometido

una infracción y de determinar la culpabilidad, pero que era sumamente difícil trasladar el concepto penal de crimen al ámbito del derecho internacional, dada la falta de las instituciones y los mecanismos antes mencionados, que era consecuencia de la máxima *par in parem non habet imperium*. Se dijo que el anterior Relator Especial, Sr. Arangio-Ruiz, había tratado de incluir la institución de una autoridad competente e independiente que se encargara de calificar los hechos como crímenes, pero que el régimen complejo que se había propuesto para tramitar las acusaciones de crímenes contra los Estados había sido rechazado por la Comisión por inviable, contrario a la Carta de las Naciones Unidas y ajeno a su mandato.

311. Se propuso que, puesto que la comunidad de los Estados se basaba todavía esencialmente en un sistema descentralizado, caracterizado por la reciprocidad y fundado en la competencia exclusiva de los Estados para hacer cumplir la ley de acuerdo con sus intereses individuales, los Estados tuvieran la obligación de adoptar las medidas necesarias para que se juzgara al Estado infractor en una comunidad internacional sujeta al imperio de la ley.

c. Garantías procesales adecuadas

312. Se advirtió que si se mantenía el concepto de crímenes de los Estados habría que incorporar, en un proyecto sobre el derecho general de obligaciones, diversas normas procesales referentes a, por ejemplo, un posible fiscal, un procedimiento de denuncia, normas relativas a la defensa y la prueba, la detención, las fianzas y la puesta en libertad, así como una autoridad judicial internacional con poder vinculante para determinar la culpabilidad y las penas, lo que llevaría a resultados caóticos. Se advirtió también que, aunque era necesario tener en cuenta los aspectos procesales del concepto de crímenes de los Estados, no podría garantizarse el respeto a las garantías procesales.

d. Sanciones adecuadas

313. Se opinó que las consecuencias propias de la responsabilidad civil, como la indemnización, no eran adecuadas para reparar los daños causados por ciertas infracciones graves, como el genocidio, y que todo régimen de reparación comprendía la indemnización punitiva. Se propuso que la Comisión examinara minuciosamente las prácticas de los Estados y las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad contra Estados como Sudáfrica durante el *apartheid*, el Iraq y la Jamahiriya Árabe Libia antes de descartar la posibilidad de que un Estado pudiera ser considerado delincuente a efectos de su castigo.

314. Se opinó además que las sanciones que el Consejo de Seguridad imponía como institución política a fin de mantener la paz y la seguridad internacionales no podían compararse a las penas que aplicaban los órganos judiciales. Como se dijo en fallos recientes del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y de la Corte Inter-

americana de Derechos Humanos, el Estado, por definición, no podía ser objeto de sanciones penales como las establecidas en las leyes penales internas. Se opinó que la indemnización efectiva y la ejemplar o punitiva nacían de los delitos y del derecho de obligaciones general, mientras que las penas nacían de los crímenes; que era inútil calificar un hecho de crimen si no acarreaba una sanción penal; que algunos hechos internacionalmente ilícitos eran más graves que otros pero eso no los convertía necesariamente en crímenes, y que los hechos internacionalmente ilícitos de carácter grave podían repararse mediante una indemnización acorde con su gravedad.

315. Algunos miembros de la Comisión objetaron que todo intento de castigar a los Estados por sus crímenes, en lugar de castigar a los dirigentes de los Estados responsables de esos crímenes, podía dar lugar en la práctica a un castigo colectivo. Se dijo que castigar a Estados no democráticos suponía castigar a un pueblo inocente y obligar a varias de sus generaciones a soportar la carga de la culpa por hechos en los que podían no haber participado en absoluto. Otros, sin embargo, no consideraban inaceptable la posibilidad de adoptar medidas punitivas contra los Estados. Se propuso que se prestara mayor atención a la población de los Estados que padecía las consecuencias de la vulneración del derecho internacional por otros Estados y que no tenían ninguna posibilidad de influir en los dirigentes de éstos o fiscalizarlos. Se advirtió también que en, la práctica, las medidas que adoptaba el Consejo de Seguridad castigaban a toda la población.

e. Rehabilitación

316. Se opinó que el quinto elemento, relativo a que no se estigmatizara a un Estado como criminal, ignoraba la realidad actual. Se opinó también que el concepto de crímenes de los Estados no podía incorporarse en el proyecto sobre la responsabilidad de éstos, pues era injusto que los Estados sucesores heredaran hechos calificados de crímenes.

v) *La cuestión del rechazo del concepto de responsabilidad penal de los Estados*

317. Varios miembros de la Comisión opinaron que el concepto de crímenes de los Estados era innecesario e inviable por las razones aducidas en relación con el proyecto (véanse párrs. 288 a 301 *supra*). En su opinión, el concepto de crímenes de los Estados estaba intrínsecamente viciado; no tenía validez jurídica; no podía justificarse en principio; la mayoría de las tendencias del derecho internacional lo contradecían; no era esencial en la labor de la Comisión; no se había abordado correctamente en el artículo 19 y subsanar los errores retrasaría considerablemente la labor sobre el tema; no sería aceptable ni se respetarían las garantías procesales sin una institución judicial que decidiera si un Estado había cometido un crimen, institución que la comunidad internacional no estaba dispuesta a aceptar, y exacerbaría los

conflictos entre los Estados, que serían más propensos a tacharse mutuamente de criminales.

318. En cambio, otros miembros de la Comisión eran partidarios de mantener el concepto de crímenes de los Estados por las razones siguientes: el concepto de crímenes de los Estados en el sentido de infracciones excepcionalmente graves que afectaban a la comunidad internacional en su conjunto y no podían repararse por una simple indemnización no era nuevo y sus orígenes se remontaban al siglo XIX; las expresiones «delito» y «crimen» ya formaban parte de la conciencia pública y del conjunto normativo del derecho internacional y la responsabilidad de los Estados; el concepto de crímenes de los Estados era parte de la evolución del derecho internacional y del desarrollo de la comunidad internacional puestos de manifiesto por conceptos conexos como los de obligaciones *erga omnes*, *jus cogens* y solidaridad internacional; el concepto de crímenes de los Estados tenía una importante función disuasoria que debía reforzarse abordándolo en el proyecto de artículos; de hecho, los Estados cometían a menudo crímenes y algunos Estados estaban actualmente sujetos a condiciones que permitían calificarlos en la práctica de Estados criminales; la supresión del concepto de crímenes de los Estados sería un retroceso, ignoraría importantes tendencias del derecho internacional y sería perjudicial para la regulación de este tema y para el imperio de la ley en las relaciones internacionales.

vi) *Exclusión del concepto del proyecto de artículos*

319. Algunos miembros eran partidarios de que el tema del concepto de los crímenes de los Estados se regulara separadamente en el futuro a fin de que la Comisión pudiera tener en cuenta la evolución del derecho internacional. Se indicó que la Comisión no podía transformar el proyecto de artículos en un código general de la responsabilidad por «crímenes» y «delitos» de los Estados por tres razones: primera, que el proyecto de artículos regulaba fundamentalmente la responsabilidad civil, como lo demostraban los artículos 3 (Elementos del hecho internacionalmente ilícito del Estado), que trata de la responsabilidad por omisión o negligencia, 10 (Atribución al Estado del comportamiento de órganos que actúan excediéndose en sus atribuciones o en contra de instrucciones concernientes a su actividad), que trata de la responsabilidad por actos *ultra vires*, 27 (Ayuda o asistencia de un Estado a otro Estado para la perpetración de un hecho internacionalmente ilícito), que trata de la responsabilidad por complicidad a falta de intencionalidad o *mens rea*, y 29 (Consentimiento), que trata del consentimiento como circunstancia que excluía la ilicitud; segunda, que el proyecto de artículos no incluía los elementos esenciales de la justicia penal ni los principios esenciales del derecho penal y tercera, que el proyecto de artículos no desarrollaba plenamente el concepto de crímenes de los Estados. Por eso era preferible elaborar un código de responsabilidad general en el actual quinquenio y solicitar un nuevo mandato para comenzar a elaborar un código de la responsabilidad penal de los Estados en sentido estricto. Algunos miembros de la Comisión dudaron de que fuera necesario un nuevo mandato para

esta tarea. Otros opinaron que la supresión del artículo 19 no impedía que en el futuro se examinara el concepto de crímenes de los Estados y que no había motivo para fomentar este examen ni en el marco de la responsabilidad de los Estados ni en ningún otro.

320. Hubo divergencia de opiniones en cuanto a la inclusión y el posible contenido de una cláusula de salvaguarda si la Comisión decidía suprimir el concepto de crímenes de los Estados. Se propuso que en el proyecto se incluyera una cláusula de esa clase, parecida al artículo 4 del proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad¹⁵⁹, que indicara claramente que la Comisión reconocía la existencia de los crímenes de los Estados y no rechazaba el artículo 19. Como solución más adecuada se propuso que se indicara que la supresión del artículo 19 no impedía el futuro desarrollo del concepto de crímenes de los Estados fuera del proyecto de artículos como tema independiente encargado a la Comisión, mediante las prácticas de los Estados o mediante las prácticas de las organizaciones internacionales. Sin embargo, se dijo también que, si lo que se pretendía era evitar la conclusión *a contrario* de que la supresión del artículo 19 menoscababa la posible utilidad del concepto de crímenes en otras esferas, esa decisión no podía apoyarse en que la Comisión estuviera ocupándose únicamente del derecho de obligaciones general, que la mayoría de los ordenamientos jurídicos regulaban aparte de los crímenes.

321. Otros miembros se oponían a la exclusión del concepto relativo a la distinción entre delitos y crímenes del proyecto de artículos por razones ya explicadas, en particular en el párrafo 318.

6. OBSERVACIONES FINALES DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE EL DEBATE RELATIVO A LA DISTINCIÓN ENTRE RESPONSABILIDAD POR «CRÍMENES» Y «DELITOS»

322. El Relator Especial observó que el proyecto de artículos resultaba insatisfactorio en casi todos los aspectos de la regulación del extenso tema de las obligaciones multilaterales. Había acuerdo general en la Comisión en cuanto a que el tema de la responsabilidad de los Estados no se limitaba a la responsabilidad bilateral. No obstante, no se había mantenido la intención inicial de la Comisión cuando formuló el artículo 19 en 1976. En aquel entonces la Comisión había descartado expresamente que se abordaran los crímenes internacionales según el planteamiento del «mínimo común denominador», pero luego ese fue el planteamiento que se siguió. Incluso los partidarios de la distinción fundamental entre crímenes internacionales y delitos internacionales establecida en el párrafo 2 del artículo 19 no negaban que la Comisión se había apartado de su propósito.

323. Al examinar el proyecto de artículos en segunda lectura la Comisión se enfrentó al grave problema de las diferencias de opinión respecto del artículo 19. En la situación actual sería poco constructivo resolver la cuestión por votación, pues las distintas opiniones tenían un apoyo considerable. El desacuerdo entre los miembros de

la Comisión era evidente, y una votación, además de muy poco deseable, no solucionaría el problema. El Relator Especial entendió la preocupación expresada por la permanente búsqueda de fórmulas de transacción, pero éstas eran inevitables en órganos deliberantes como la Comisión. Ésta podría elaborar fórmulas de transacción que pudieran servir de base para el posterior debate entre los Estados, como lo demostraban las que había adoptado respecto de la futura corte penal internacional.

324. La excepcional riqueza del debate sobre el tema había puesto de manifiesto la complejidad de los problemas planteados por el artículo 19 y la vigencia de las cuestiones planteadas por el párrafo 2. Para ilustrar ante todo la complejidad del concepto de crímenes de los Estados, el Relator Especial aludió a los casos en que un mismo hecho podía ser considerado como «crimen» contra un Estado y como «delito» contra otro porque las consecuencias del hecho les afectaban en grados diversos. En cuanto al párrafo 2, se convino en que había obligaciones frente a la comunidad internacional que debían reconocerse debidamente en el proyecto de artículos. Del planteamiento del «mínimo común denominador» el proyecto heredó el defecto de tratar de hecho las formas multilaterales de responsabilidad como formas bilaterales: el párrafo 3 del artículo 40 transformó la llamada obligación multilateral en una serie de obligaciones bilaterales, lo que creó un gravísimo problema, no sólo teórico sino práctico, al autorizar a Estados que podían considerarse lesionados en sentido general y que no eran los principales afectados a adoptar medidas unilaterales. Esta cuestión había colocado al anterior Relator Especial en un callejón sin salida después de tres años de trabajo y había influido en su dimisión. Ni la Comisión ni el Grupo de Trabajo habían hallado solución al grave problema procesal de autorizar a los Estados individualmente a representar los intereses de la comunidad internacional sin ninguna fiscalización.

325. En resumen, el Relator Especial deseaba destacar cinco cuestiones importantes. Primera: no se consideraba adecuada la distinción entre crímenes internacionales y delitos internacionales, que había sido objeto de numerosas críticas, como la de que introducía las equívocas connotaciones de derecho penal de la expresión «crimen» y la inconveniencia de la analogía con el derecho interno. La Comisión parecía dispuesta a estudiar formas de solucionar el problema distintas del establecimiento de una distinción categórica entre crímenes y delitos.

326. Segunda: había consenso en cuanto a la pertinencia de las categorías establecidas de obligaciones de *jus cogens* y *erga omnes* y en cuanto a que la primera categoría tenía un alcance más limitado que la segunda. La CIJ había formulado el concepto de las obligaciones *erga omnes* en su sentencia sobre el asunto de la *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited*¹⁶⁰ en el contexto de la distinción esencial de normas muy importantes. Verdaderamente los ejemplos dados por la Corte en sus famosos fundamentos eran normas que actualmente se consideraban *jus cogens*. No había sido el propósito de la Corte indicar que la existencia de obligaciones *erga omnes* dependía de la existencia de instrumentos multilaterales o que las disposiciones de los

¹⁵⁹ Véase la nota 157 *supra*.

¹⁶⁰ Véase la nota 143 *supra*.

instrumentos multilaterales se aplicaban necesariamente *erga omnes*. Estas dos nociones modernas de las obligaciones de los Estados eran ciertamente parte del desarrollo progresivo del derecho y podían tener repercusiones importantes en el tema de la responsabilidad de los Estados.

327. Tercera: había consenso en cuanto a que el actual proyecto de artículos no desarrollaba suficientemente esos conceptos fundamentales, sobre todo el artículo 40, que sin duda tendría que redactarse de nuevo. Otra cuestión que se planteó fue si en el campo de las obligaciones *erga omnes* o de las normas de *jus cogens* debía distinguirse entre infracciones más graves y menos graves. Esta distinción tenía ciertamente sentido en relación con las obligaciones *erga omnes*, pero su conveniencia no era tan clara respecto de las normas de *jus cogens*. En relación con cualesquiera normas podía plantearse la cuestión del umbral: ¿cuál tenía que ser el alcance de un hecho para que se calificara de genocidio, por ejemplo, o de crimen de lesa humanidad? Pero era muy difícil sostener que el derecho internacional distinguía dentro de esas categorías entre crímenes de lesa humanidad o genocidio de carácter «grave» y de otro carácter. A este respecto el párrafo 3 del artículo 19 era fuente de confusiones.

328. Cuarta: había consenso en que el proyecto de artículos originaba problemas de aplicación importantes que debían examinarse más a fondo, como el de la solución de controversias y el de las relaciones entre los Estados directamente lesionados y los demás. A este respecto había que subrayar que las víctimas directas de la vulneración de las normas más importantes, como las que prohibían el genocidio o reconocían el derecho de libre determinación, eran normalmente los pueblos y no otros Estados. La vulneración de los derechos fundamentales de los pueblos o grupos humanos planteaba inevitablemente graves problemas de representación y agudizaba las dificultades de distinguir entre Estados directamente y menos directamente lesionados. A causa de estas dificultades de aplicación, que no debían menospreciarse, el régimen general de la responsabilidad de los Estados era en cierta medida subsidiario, y no sólo en relación con el supuesto de responsabilidad más patente, la agresión, que se regulaba expresamente en la Carta de las Naciones Unidas. Ciertamente, en relación con las obligaciones colectivas de carácter esencial, las normas de la responsabilidad de los Estados podían incluso tener efectos negativos y no meramente positivos, como, por ejemplo, impedir que uno o varios Estados aplicaran unilateralmente medidas coercitivas. Una vez reconocido un interés colectivo, el problema era velar por que las medidas coercitivas que se aplicaran conservaran un carácter colectivo, cosa que no garantizaba el artículo 40. Por eso, la Comisión debía examinar de nuevo estos problemas teniendo en cuenta la propuesta de varios de sus miembros de que se adoptara un régimen más diferenciado, distinguiendo, por ejemplo, entre cesación y reparación dentro de los derechos de los Estados lesionados.

329. Quinta: los dos grupos de la Comisión que habían expresado opiniones distintas en cuanto a que el artículo 19 no preveía una categoría penal distinta y a que en el grado de evolución actual del derecho internacional el concepto de «crímenes de los Estados» en sentido penal apenas gozaba de reconocimiento, habían apoyado la

propuesta, que la propia Comisión había aprobado en 1976, de considerar que la responsabilidad de los Estados era en cierto sentido un tema uniforme, aunque en él se distinguiera entre las obligaciones de interés para la comunidad internacional en su conjunto y las obligaciones de interés para uno o varios Estados. El Relator Especial seguía firmemente convencido de que en el futuro la comunidad internacional podría elaborar un verdadero régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluidos los Estados. La mayoría de los miembros de la Comisión habían rechazado esa hipótesis y eran partidarios de una doble vía: por un lado, desarrollar el concepto de la responsabilidad penal individual mediante la actuación de los tribunales especiales y la futura corte penal internacional complementada con la de los tribunales internos, y, por otro, desarrollar en el marco de la responsabilidad de los Estados el concepto de responsabilidad por infringir las normas más importantes para la comunidad internacional en su conjunto.

330. En cuanto a la posibilidad de establecer una verdadera tipificación penal de la conducta de los Estados, que había sido calificada de utópica, el Relator Especial puso de relieve que no era una mera cuestión terminológica y que si la Comisión volvía a examinarla en el futuro debía aparejar a esas conductas consecuencias penales auténticas por conducto de procedimientos auténticos.

7. CONCLUSIONES PROVISIONALES DE LA COMISIÓN RESPECTO DEL PROYECTO DE ARTÍCULO 19

331. Tras el debate, y teniendo en cuenta los comentarios del Relator Especial, se observó que no había consenso respecto de la cuestión del tratamiento de los «crímenes» y «delitos» en el proyecto de artículos y que era necesario trabajar más acerca de las posibles maneras de tratar las cuestiones sustanciales planteadas. En consecuencia, se convino en lo siguiente: a) sin perjuicio de las opiniones de ningún miembro de la Comisión, se dejaría de lado el proyecto de artículo 19 por el momento mientras la Comisión procedía a considerar otros aspectos de la primera parte; b) debería considerarse si el desarrollo sistemático en el proyecto de artículos de conceptos fundamentales, como obligaciones (*erga omnes*), normas imperativas (*jus cogens*) y una posible categoría de las infracciones más graves de la obligación internacional podría ser suficiente para resolver todas las cuestiones planteadas por el artículo 19; c) esa consideración tendría lugar, en primera instancia, en el Grupo de Trabajo establecido con respecto a este tema, así como en el segundo informe del Relator Especial, y d) en caso de que no se llegue a un consenso con este proceso de nueva consideración y debate, la Comisión volvería sobre las cuestiones planteadas en el primer informe acerca del proyecto de artículo 19 con miras a adoptar una decisión a su respecto.

8. INTRODUCCIÓN POR EL RELATOR ESPECIAL DE LOS PROYECTOS DE ARTÍCULO 1 A 4 DE LA PRIMERA PARTE

332. El Relator Especial señaló que su primer informe trataba dos cuestiones relacionadas con el proyecto de

artículos sobre responsabilidad de los Estados: cuestiones de terminología que se habían planteado respecto de los artículos en su conjunto y recomendaciones relativas a los principios generales establecidos en los artículos 1 a 4 del capítulo I de la primera parte.

a) *Observaciones generales sobre la segunda lectura*

333. La Comisión iniciaba el examen sustantivo en segunda lectura de los artículos sobre la responsabilidad de los Estados; a este respecto, cabía hacer dos observaciones: en primer lugar, la práctica de la Comisión era no adoptar un proyecto de artículo en forma definitiva en segunda lectura hasta que se hubieran aprobado todos los proyectos de artículo, dado que éstos debían ser considerados como un todo. En segundo lugar, la Comisión examinaba los proyectos de artículo de la primera parte, en particular los capítulos I y II, sin perjuicio de cualquier conclusión a la que se pudiera llegar con respecto al artículo 19. Si se adoptase una noción de hechos internacionalmente ilícitos cometidos por un Estado en su sentido propio, habría que efectuar en la primera parte más modificaciones de fondo de lo que se había previsto en esta etapa.

b) *Cuestiones de terminología*

334. El Relator Especial señaló que los proyectos de artículo no contenían cláusulas de definiciones. En cambio, el proyecto especificaba que los términos tenían el significado requerido. La cuestión de una posible cláusula de definiciones podría volver a examinarse en una etapa ulterior. Señaló también que la terminología utilizada en los proyectos de artículo había sido puesta en tela de juicio e hizo referencia a los cuadros incluidos en el informe que contenían los equivalentes, en todos los idiomas de trabajo, de varios términos clave.

335. Aunque la expresión «hecho internacionalmente ilícito» tenga su equivalente directo en cinco de los idiomas de trabajo de las Naciones Unidas, la versión en idioma ruso se acerca más a la expresión «hecho internacionalmente ilegal». El término «hecho internacionalmente ilícito» se ha usado abundantemente en el debate general sobre responsabilidad y debe mantenerse. Quizá hubiera que reconsiderar la versión rusa.

336. Sugirió que se sustituyese la oración «Estado que ha cometido un hecho internacionalmente ilícito» por «Estado infractor», por dos razones. En primer lugar, la oración es mucho más breve. En segundo lugar, el uso del tiempo pasado implica que el hecho ilícito ya se ha terminado, pero los proyectos de artículo también se aplican claramente a los hechos ilícitos de carácter continuado. Señaló que la CIJ, en el asunto *Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie)*¹⁶¹, había utilizado el término «Estado infractor».

337. Los términos «lesión» y «daño» también requieren aclaración. El proyecto de artículos se refiere al «Estado lesionado», no a la lesión, y define el término en el artículo 40 diciendo que se emplea para hacer referencia a un Estado que ha sufrido *injuria*, una lesión en el sentido más amplio posible. En ninguna parte del proyecto de artículos se indica que «lesión» es un término correlativo de «daños»: un Estado puede haber sufrido daños sin haber sido lesionado, y viceversa. La palabra «daños» se usa en el proyecto de artículos para referirse al daño real sufrido, y se hace una distinción entre daño económicamente valorable y daño moral. Ese concepto general de daño, que abarca tanto los daños económicamente valorables como los daños morales, debe distinguirse del término «lesión», con el significado de *injuria* o acto ilegal como tal. Otras cuestiones de terminología dimanantes de la segunda parte podrían examinarse a su debido tiempo.

c) *Cláusulas generales y de salvaguardia*

338. El proyecto de artículos contiene tres cláusulas de salvaguardia, los artículos 37, 38 y 39, pero ninguno de éstos se encuentra en la primera parte. Se ha expresado la opinión de que esas cláusulas de salvaguardia se deberían aplicar en general al proyecto de artículos, especialmente el artículo 37. La aplicación del artículo 39 al proyecto de artículos en su conjunto también podría aliviar algunas de las dificultades que plantea ese artículo. El Relator Especial, si bien estuvo de acuerdo en principio con esas sugerencias, propuso que se aplazara el examen de la cuestión de las cláusulas generales y de salvaguardia hasta que se examinasen esos artículos en la segunda parte.

d) *Título del capítulo I de la primera parte*

339. El Relator Especial indicó que el Comité de Redacción podría examinar la sugerencia de sustituir el título de la primera parte, «Origen de la responsabilidad internacional», por «Base de la responsabilidad», ya que la palabra «origen» es poco común y tiene una connotación más amplia que un mero estudio de las cuestiones de responsabilidad; podría entenderse que se refiere a cuestiones históricas más amplias, como en la frase «orígenes de la Revolución Francesa».

e) *Artículo 1*

340. Esta disposición tiene por objeto abarcar todas las conductas internacionalmente ilícitas que constituyen una violación de una obligación internacional, ya sea que deriven de una acción positiva o de una omisión o del incumplimiento de una obligación de hacer. No hay ninguna necesidad general de culpa o daño para que un Estado incurra en responsabilidad por un hecho internacionalmente ilícito. Más bien, las cuestiones del daño o la culpa se refieren a las normas primarias. En efecto, un requisito general de daño para las obligaciones internacionales convertiría a todos los tratados en disposiciones

¹⁶¹ Véase la nota 138 *supra*.

provisionales que los Estados podrían ignorar si consideraran que sus actos no causarían daños materiales a otros Estados. Además, las violaciones en ciertos campos del derecho internacional, como los derechos humanos, por lo general no entrañan daño para otros Estados.

341. Hay tres características importantes asociadas con la ausencia de un requisito general de culpa o daño que mitigan las legítimas preocupaciones de los Estados sobre las reclamaciones vejatorias, la interferencia de Estados no interesados, etc. En primer lugar, hay normas del derecho internacional en las que el daño es un elemento esencial de la obligación; se trata simplemente de que no todas las normas son de este tipo. En segundo lugar, la cuestión de los Estados lesionados en forma menos directa o de una multiplicidad de Estados lesionados constituye una cuestión separada que se planteó en la segunda parte. En tercer lugar, el daño es ajeno a la responsabilidad, por ejemplo, en cuanto a la cantidad y la forma de la reparación o la proporcionalidad de las contramedidas.

342. Si bien el proyecto de artículos tiene por objeto tratar el tema de la responsabilidad de los Estados, la primera parte no se limita a la responsabilidad de los Estados respecto de otros Estados y deja abierta la cuestión de las entidades distintas de los Estados a las que afecta esa responsabilidad. Ahora bien, no hay nada en la doctrina ni en la jurisprudencia que indique que las normas secundarias que rigen la responsabilidad de los Estados respecto de otras personas en el derecho internacional se basarían en condiciones esencialmente diferentes de las que se aplicarían en el caso de la responsabilidad respecto de otros Estados. Ahora bien, la responsabilidad de un Estado es siempre correlativa de los derechos de uno o más Estados o personas. Esto excluye la posibilidad de una responsabilidad abstracta, es decir, de una responsabilidad en el vacío. Aunque el alcance de la segunda parte se limita a los derechos de los Estados lesionados, es preferible, a los fines de la primera parte, establecer la noción de la responsabilidad en términos «objetivos», de conformidad con la posición adoptada desde hace mucho tiempo por la Comisión.

343. Por lo tanto, el Relator Especial recomendó que el artículo 1 se aprobara sin modificaciones, con sujeción al ulterior examen de su relación con el concepto de «Estado lesionado» definido en el artículo 40 y aplicado en la segunda parte. Señaló también que muchas de las observaciones relativas al artículo 1 se aplicaban también al artículo 3.

f) Artículo 2

344. Esta disposición expresa una verdad obvia que nunca ha sido objetada en ninguna instancia. Su denegación equivaldría a negar el principio de la igualdad de los Estados y de todo el sistema de derecho internacional. Asimismo, el artículo no trata directamente el tema de la responsabilidad internacional, sino más bien la posibilidad de que exista esa responsabilidad. Este es un ejemplo de la tendencia a un perfeccionamiento exagerado, que es uno de los problemas con que tropieza el proyecto de

artículos. El Relator Especial recomendó la supresión de esta disposición innecesaria.

g) Artículo 3

345. El artículo 3 era importante por razones estructurales y por lo que no decía. En particular, omitía cualquier otra condición general para la responsabilidad fuera de las mencionadas en sus apartados *a* y *b*. Aunque la palabra inglesa *act* no connotaba normalmente a la vez hecho y omisión como la palabra francesa *fait*, el artículo 3 dejaba perfectamente en claro que «hecho» se utilizaba en el sentido de hecho y omisión. La propuesta de incluir «actos jurídicos», o más bien «actos de derecho», en el apartado *a* era innecesaria, puesto que la actual redacción ya comprendía actos de derecho y esta cuestión podía esclarecerse en el comentario. Así, el artículo 3 podía igualmente adoptarse sin modificación.

h) Artículo 4

346. La proposición que figuraba en el artículo 4 se había afirmado repetidamente en el derecho internacional, comenzando con el arbitraje en el caso del «Alabama»¹⁶². Como lo había señalado en muchas ocasiones la CPJI, la caracterización de un hecho como ilícito era una función autónoma del derecho internacional que no dependía de la caracterización por el derecho nacional y no estaba afectada por la caracterización del mismo hecho como lícito con arreglo al derecho nacional. Ello no significaba que el derecho interno fuese improcedente para la caracterización de una conducta como ilícita; por el contrario, bien podía ser precedente en diversas formas. Observando que no se presentaba crítica alguna al artículo en las observaciones y comentarios recibidos de los gobiernos, el Relator Especial recomendó que se aprobara sin modificación.

347. Para concluir, el Relator Especial propuso que la Comisión, luego de un debate, remitiese los artículos 1 a 4 al Comité de Redacción con la recomendación de que los artículos 1, 3 y 4 se aprobaran sin modificación y que el artículo 2 se suprimiera. El Comité de Redacción también podría considerar la posibilidad de cambiar el orden de los artículos, de modo que el artículo 3 precediera al artículo 1, y de modificar el título de la primera parte.

¹⁶² Sentencia de 14 de septiembre de 1872 (véase la nota 31 *supra*), pág. 889

9. RESUMEN DEL DEBATE SOBRE LOS PROYECTOS
DE ARTÍCULO 1 A 4 DE LA PRIMERA PARTE

a) *Cuestiones de terminología*

348. Se expresaron ciertas dudas con respecto a la propuesta de utilizar la expresión «Estado infractor», dadas sus posibles connotaciones. De igual modo, la expresión «Estado responsable» tampoco era totalmente satisfactoria. Se sugirió que en francés podría utilizarse la expresión *État mis en cause*.

b) *Título del capítulo I de la primera parte*

349. Se expresó apoyo a la propuesta de modificar el título. Se sugirió que en la versión en francés la palabra *basis* se tradujera como *les fondements*.

c) *Artículo 1*

350. Hubo apoyo a la idea de que se mantuviera el artículo 1 sin modificación.

351. Se expresó una triple objeción al concepto de daño en apoyo a la propuesta del Relator Especial de no incluir un requisito separado de daño. En primer lugar, un requisito especial de daño crearía confusión *a posteriori* con respecto a las normas primarias que a menudo no contenían un requisito de dicha índole, especialmente en términos económicos o materiales. En segundo lugar, el concepto más global de *injuria* y el Estado lesionado era preferible habida cuenta de la evolución del derecho internacional desde la segunda guerra mundial, que indicaba que podía haber responsabilidad sin que se demostrara un daño especial. En tercer lugar, insistir demasiado en el concepto de daño redundaría en perjuicio del útil concepto de daño moral, especialmente en la esfera de los derechos humanos.

352. Con respecto al requisito de «culpa», se observó que en inglés *fault* o *culpa* no siempre incluía un elemento de intención (*dolus*) y, por consiguiente, la expresión «culpa o intención» podría ser útil en el comentario.

353. Se observó también que, si se había de mantener el concepto de la responsabilidad penal del Estado, la cuestión de la culpa como requisito general tendría que debatirse de nuevo y la cuestión de intención culpable (*mens rea*) tendría que tratarse en el contexto de la responsabilidad de los Estados.

354. El Relator Especial observó que el artículo 1 no mencionaba expresamente el concepto de culpa, pero que, paradójicamente, ese concepto parecía estar presente en la expresión utilizada en el texto francés. El problema no surgía en inglés, ya que el término *wrongful* no tenía necesariamente la connotación peyorativa de «culpa». El Comité de Redacción podría considerar la posibilidad de utilizar el término «Estado responsable», que ofrecería las ventajas aparejadas de evitar cualquier connotación negativa y de ser conciso.

d) *Artículo 2*

355. Hubo diferentes opiniones con respecto a la supresión propuesta de este artículo. Se sugirió que en el comentario se explicara la razón de su supresión a fin de evitar cualquier malentendido.

356. El Relator Especial sugirió que la idea que servía de base a esta disposición, la importante idea de la igualdad de los Estados ante la ley, podía reflejarse en un preámbulo de los proyectos de artículo, al igual que en el comentario.

e) *Artículo 3*

357. Se expresó la opinión de que no sólo debía ser atribuible al Estado un comportamiento consistente en una acción u omisión según el derecho internacional, como se disponía en el apartado a, sino que también había que evaluar la violación de la obligación internacional mencionada en el apartado b a la luz del derecho internacional, y que ello no quedaba afirmado expresamente. Por consiguiente, se sugirió que el artículo dijera:

«Hay hecho internacionalmente ilícito de un Estado según el derecho internacional cuando:

»a) Un comportamiento consistente en una acción u omisión es atribuible al Estado;

»b) Ese comportamiento constituye una violación de una obligación internacional del Estado.»

f) *Artículo 4*

358. Se observó que la segunda oración no indicaba claramente que el derecho interno debía ajustarse a las disposiciones del derecho internacional y que esta oración debía sustituirse por una redacción más neutral, como: «el derecho interno no podrá a este respecto tener precedencia sobre el derecho internacional».

10. INTRODUCCIÓN POR EL RELATOR ESPECIAL
DE LOS PROYECTOS DE ARTÍCULO 5 A 8 Y 10
DEL CAPÍTULO II DE LA PRIMERA PARTE

a) *Introducción*

359. El Relator Especial señaló que en el capítulo II se establecían los requisitos para que un comportamiento fuera atribuible al Estado con arreglo al derecho internacional. Los artículos de ese capítulo debían interpretarse en el contexto del artículo 3, que establecía los dos requisitos esenciales de la responsabilidad del Estado: a) una acción u omisión atribuible al Estado, y b) una violación de una obligación internacional del Estado. El capítulo II abordaba el primero de esos requisitos.

360. Aunque los proyectos de artículo del capítulo II se habían examinado a fondo, era tranquilizador observar que su estructura básica y muchas de sus formulaciones no habían sido puestas en entredicho por la práctica de

los Estados ni fallos judiciales en los últimos 20 años. Más que introducir modificaciones de fondo sustanciales, los cambios propuestos en los proyectos de artículo tenían por objeto, en su mayor parte, aclarar ciertos aspectos y abordar algunos problemas nuevos.

361. El Relator Especial señaló la conveniencia de ocuparse de los artículos 5 a 8 y 10, relativos a las condiciones ordinarias y generales de atribución, antes de abordar los artículos 9 y 11 a 15, referentes a determinados problemas especiales, incluida la propuesta de un nuevo artículo 15 *bis*.

b) *Observaciones de los gobiernos*

362. Las observaciones de los gobiernos sobre los artículos 5 a 15 tenían bastante trascendencia y se examinaban a fondo en el primer informe.

363. Varios gobiernos indicaron que la base de atribución debía ser suficientemente amplia para que el Estado no pudiera eludir su responsabilidad apoyándose en definiciones formales de sus órganos constitutivos, habida cuenta sobre todo de la tendencia reciente, cada vez más extendida, a delegar funciones públicas, como el mantenimiento de prisiones, en el sector privado. En cambio, ningún gobierno había sostenido hasta la fecha que las condiciones de atribución debieran definirse de manera más restrictiva.

c) *Práctica reciente de los Estados*

364. Desde la aprobación de los artículos del capítulo II en el decenio de 1970 se habían registrado importantes decisiones y otras prácticas pertinentes en esa esfera del derecho internacional. Era importante velar por que se tuvieran plenamente en cuenta todas las novedades sustanciales.

d) *Terminología*

365. El Relator Especial observó que la Comisión había decidido emplear el término «atribución» en lugar de «imputabilidad». El Comité de Redacción podría preferir emplear esta segunda expresión, dada su utilización en sentencias posteriores de la CIJ y otros tribunales, lo cual podría significar que el término «atribución» no había tenido aceptación. Sin embargo, el Relator Especial prefirió mantener el término «atribución» porque ponía de manifiesto el carácter jurídico del proceso, mientras que la expresión «imputabilidad», al menos en inglés, comportaba innecesariamente un elemento de ficción.

366. El Relator Especial también propuso que se sustituyera el título del capítulo II, «El “hecho del Estado” en el derecho internacional», por «La atribución de un comportamiento al Estado según el derecho internacional», para que estuviera en consonancia con el artículo 3 y no evocara el concepto específico de «hecho de

Estado» reconocido en algunos ordenamientos jurídicos nacionales.

e) *Principios básicos del concepto de atribución*

367. El Relator Especial destacó ciertos principios básicos del concepto de atribución, a saber, la responsabilidad limitada del Estado, la distinción entre el sector estatal y no estatal, la unidad del Estado, el principio de *lex specialis*, según el cual los Estados podían acordar que sus relaciones mutuas se rigieran por otros principios, y la distinción entre atribución e incumplimiento de una obligación, que revestía importancia fundamental.

f) *Artículo 5*

368. Pese a la propuesta de un gobierno de que se sustituyera el término «órgano» por «órgano o agente», el Relator Especial prefirió mantener la distinción entre órganos y agentes, que se abordaban por separado en los artículos 5 y 8 porque merecían un tratamiento diferente.

369. Aun reconociendo que el derecho interno tenía una importancia decisiva para determinar si una persona o entidad debía considerarse un órgano del Estado, el Relator Especial apoyó la propuesta de varios gobiernos de que se suprimiera la referencia al derecho interno para que no pareciera que éste era necesariamente el criterio decisivo, y ello por varias razones. En primer lugar, porque el derecho interno, considerado aisladamente, podría inducir a error, pues en muchos ordenamientos la práctica y la costumbre también desempeñaban una función importante. En segundo lugar, porque el derecho interno podía no ofrecer una clasificación exhaustiva de los órganos del Estado, y ciertamente podía no utilizar el término «órgano» en el mismo sentido que el derecho internacional a los efectos de la responsabilidad del Estado. En tercer lugar, porque, en algunos casos, la calificación restrictiva de los «órganos» por el derecho interno podía equivaler a un intento de eludir la responsabilidad, lo cual era incompatible con el principio contenido en el artículo 4. La pertinencia del derecho interno como criterio importante podría explicarse en el comentario.

g) *Artículo 6*

370. Más que una norma de atribución, ese artículo explicaba el alcance del término «órgano» utilizado en el artículo 5. Aclaraba que los órganos del Estado podían pertenecer al poder constituyente, legislativo, ejecutivo, judicial o a otro poder, que sus funciones podían tener un carácter internacional o interno y que era indiferente la posición que ocuparan en la organización del Estado. Aunque toda incertidumbre sobre estas cuestiones ya se había resuelto mucho antes de 1945, al menos dos tenían la importancia suficiente para merecer un reconocimiento expreso. El artículo 6 confirmaba además que toda actuación de un órgano del Estado en calidad de tal era atribuible al Estado, sin limitación alguna por razón

de las competencias del órgano. A los efectos de la atribución de un comportamiento al Estado, no debía haber limitación o distinción alguna, a diferencia de lo que sucedía en otras esferas del derecho, como el de la inmunidad estatal.

371. Era, sin embargo, innecesaria la referencia del artículo 6 a la no pertinencia de la distinción entre las funciones de carácter internacional e interno, pues indicaba una división demasiado categórica entre el ámbito «internacional» y el «interno». La cuestión era suficientemente obvia e indiscutible, por lo que bastaría abordarla en el comentario.

372. La referencia a la posición «superior o subordinada» de un órgano era demasiado restrictiva porque podía interpretarse en el sentido de excluir a los órganos intermedios o independientes y a los autónomos. El Relator Especial consideró que era preferible aclarar la disposición haciendo referencia a todos los órganos del Estado «cualquiera que sea su posición en la organización del Estado».

373. El Relator Especial recomendó que los artículos 5 y 6 se mantuvieran, con los cambios de redacción propuestos, y que se refundieran en uno solo, pues el segundo era en realidad una aclaración del primero más que una norma específica de atribución.

h) Artículo 7

374. El párrafo 1 establecía el principio reconocido de que el comportamiento de un órgano de una entidad pública territorial formaba parte de la estructura del Estado, aunque gozara de autonomía dentro del Estado. Sin embargo, esa norma podía suprimirse porque el artículo 5, cuya formulación era más clara, atribuía los hechos de esas entidades al Estado.

375. El párrafo 2 se refería a las entidades que no formaban parte del Estado pero que ejercían prerrogativas del poder público, situación esta que tenía una importancia práctica cada vez mayor dada la reciente tendencia a la delegación de esas prerrogativas en entidades del sector privado. Los gobiernos no habían formulado ninguna crítica a esa disposición; en todo caso, el interés se centraba en que la disposición fuera lo suficientemente amplia para abarcar la proliferación de esas entidades. Sin embargo, la disposición actual parecía comprender las diversas dificultades, especialmente si se relacionaba con el artículo 8. El Relator Especial recomendó que se mantuviera esa disposición y que el concepto de prerrogativas del poder público se aclarara en el comentario, de manera que se tuviera en cuenta la práctica más reciente.

i) Artículo 8

376. Cuando una entidad actuaba por cuenta del Estado cumpliendo instrucciones expresas, sus actos eran claramente atribuibles al Estado en virtud del apartado *a*. Se planteó la cuestión de si el comportamiento también debía atribuirse al Estado cuando la entidad actuara bajo

la dirección y el control de éste. La jurisprudencia posterior servía en parte de base para sustituir la autorización expresa por un control efectivo más amplio. El Relator Especial recomendó que se aclarara el párrafo a fin de que abarcara los casos tanto de instrucciones expresas como de control directo y efectivo, cuando existiera un nexo con el acto de que se tratara. Por otra parte, la disposición no debía redactarse de manera tan amplia que pudiera llegar a abarcar las actividades de las empresas estatales, que de hecho no actuaban bajo la dirección o el control del Estado.

377. El apartado *b* comprendía el caso excepcional, pero importante, de una persona o entidad que ejerciera prerrogativas del poder público en defecto de autoridades oficiales efectivas. Sin embargo, la formulación de esa disposición era algo paradójica, ya que sugería que un comportamiento potencialmente ilícito atribuible al Estado estaba, sin embargo, «justificado». El Relator Especial recomendó que se mantuviera esa disposición, pero con una enmienda aclaratoria consistente en sustituir el término «justificaban» por «requerían».

j) Artículo 10

378. Ese artículo se refería a las situaciones de comportamiento no autorizado o que supusieran una extralimitación de competencia, pero que era atribuible al Estado siempre que se hubiera actuado «en calidad» de entidad pública. El derecho de los tratados adoptaba un criterio estricto con respecto a la medida en que los Estados podían basarse en su derecho interno para evadir sus obligaciones internacionales; con mayor razón, ese debía ser el criterio por el que se rigiera el derecho de la responsabilidad de los Estados. La jurisprudencia posterior y las observaciones de los gobiernos ponían de manifiesto la existencia de un apoyo general a ese principio. El Relator Especial recomendó que se mantuviera la disposición; sin embargo el Comité de Redacción podría considerar la posibilidad de utilizar la frase «haya actuado en esa calidad o amparándose en ella» a fin de abarcar el concepto de la capacidad aparente, y enmendar la última frase para que dijera «aunque, en el caso de que se trate, el órgano o la entidad se hayan excedido en su competencia o hayan contravenido las instrucciones concernientes a su ejercicio», con fines de mayor claridad y para que concordara con la propuesta de supresión de la referencia al derecho interno en el artículo 5.

11. RESUMEN DEL DEBATE SOBRE LOS PROYECTOS DE ARTÍCULO 5 A 8 Y 10 DEL CAPÍTULO II DE LA PRIMERA PARTE

a) Observaciones generales

379. Se expresó amplio apoyo al planteamiento general del Relator Especial con respecto a los artículos contenidos en el capítulo II de la primera parte. Se expresó satisfacción por el hecho de que no se hubieran introducido cambios profundos o de gran alcance en el proyecto, el cual había sido objeto de la aprobación de los más altos órganos judiciales y había merecido amplia aceptación.

b) Terminología

380. Se apoyó el mantenimiento del término «atribución» frente al de «imputabilidad» recomendado por el Relator Especial.

381. Por el contrario, algunos miembros se preguntaron si no sería más apropiado el concepto de «imputabilidad» en casos como los contemplados en el artículo 10 o en el de responsabilidad indirecta. También se expresó apoyo al término «imputabilidad» a la luz de la jurisprudencia pertinente. Se indicó que ambas expresiones podrían utilizarse en el proyecto de artículos y comentario, según procediera.

c) Título del capítulo II

382. Se respaldó la propuesta de nuevo título del capítulo por considerar que indicaba con más precisión su contenido y que era una forma de evitar toda posible confusión con la doctrina del «hecho de Estado».

d) Artículo 5

383. Algunos miembros propusieron que se suprimiera la referencia al derecho interno por considerar que era confusa y podía inducir a error, y que en cambio se aclarara la cuestión en el comentario. Se expresó la opinión de que no debía sobreestimarse la importancia del papel que desempeñaba el derecho interno en la determinación de la estructura del Estado ya que el derecho internacional desempeñaba una función decisiva a ese respecto a los efectos de la responsabilidad internacional del Estado, como se desprendía de la jurisprudencia pertinente citada en el primer informe. Otro caso en el que no se había tenido en cuenta el derecho interno era el de los bantustanes en el antiguo régimen del *apartheid* en Sudáfrica. Aunque, en virtud del derecho de ese Estado, los bantustanes habían sido clasificados como independientes y no como «órganos del Estado», la comunidad internacional y los tribunales nacionales de terceros Estados habían hecho caso omiso de esa clasificación y la habían rechazado. La supresión propuesta contó con apoyo por razones de seguridad jurídica, pero también se expresó la opinión de que la expresión «derecho interno» era suficientemente amplia para abarcar la práctica y los usos jurídicos.

384. Sin embargo, se manifestó considerable preocupación por la propuesta supresión dada la esencial importancia del derecho interno en la determinación de los órganos de un Estado. Se observó que éstos sólo podían ser definidos por el derecho interno. También se señaló que la referencia era la razón de ser de ese artículo, que era compatible con el derecho de los Estados a determinar su propia estructura interna a falta de una definición *a priori* de la estructura del Estado por el derecho internacional. Se expresaron distintas opiniones con respecto a la pertinencia del principio de la libre determinación y la personalidad jurídica del Estado a ese respecto.

385. Hubo también diferentes opiniones en cuanto a si la supresión de la referencia al derecho interno se justificaba por la posibilidad de que algunos Estados intentarían evadir su responsabilidad basándose en sus estructuras jurídicas internas y, en particular, en cambios introducidos en ellas *ex post facto*, pero se indicó que esos asuntos estaban suficientemente cubiertos por los artículos 4, 7 y 8.

386. Se dudó de la necesidad de la frase introductoria propuesta «Para los fines de los presentes artículos»; por otra parte, se señaló que la atribución a los efectos de la responsabilidad del Estado era diferente de la relacionada con el derecho de los tratados o con actos unilaterales.

387. Si bien se expresó apoyo al mantenimiento de la frase final del artículo 5, también se consideró que era innecesaria y excesivamente restrictiva. Se manifestaron distintas opiniones con respecto a la propuesta de reformulación de esa frase. Por otra parte, la nueva formulación también se consideró que servía de aclaración útil en términos más neutrales. Un miembro preguntó si era necesario y útil hacer referencia a las funciones y la posición de los órganos del Estado. Según ese punto de vista, el artículo 6 podía simplemente suprimirse y quedar comprendido en el comentario.

388. Se indicó que, en la cláusula de definiciones propuesta, sería útil definir el término «Estado» en el sentido de «cualquier Estado según el derecho internacional, independientemente de su estructura u organización y de que fuera unitario, federal o de otro tipo». También se señaló que la referencia a la estructura misma del Estado que figuraba en el artículo 7 debía tenerse en cuenta en la referencia a una entidad del Estado en el artículo 5. Se indicó asimismo que el concepto de entidad del Estado podría aclararse en el comentario.

e) Artículo 6

389. Hubo apoyo a la propuesta del Relator Especial de que se suprimiera el artículo 6 y se refundiera con el artículo 5. Sin embargo, también se expresó la opinión de que debía mantenerse el artículo 6 debido a la importancia del principio en él contenido.

f) Artículo 7

390. Se expresó acuerdo en la importancia atribuida por el Relator Especial a la necesidad de abordar el complejo problema de la delegación de funciones del Estado en el sector privado, y un miembro planteó si debía abordarse esa cuestión en el párrafo 2 del artículo 7 o en otra parte. Se indicó que era difícil definir *a priori* las funciones de un Estado a causa de la constante evolución de las funciones reservadas al sector público y las delegadas en el sector privado. También se destacaron tres situaciones diferentes en ese proceso evolutivo: a) el Estado mantenía el monopolio de sus funciones, al mismo tiempo que delegaba el ejercicio de algunas de ellas en entidades públicas o privadas; b) el Estado renunciaba enteramente

a sus funciones y las confiaba al sector privado; y c) el Estado conservaba sus funciones, pero al mismo tiempo permitía que el sector privado ejerciera funciones paralelas para fomentar la competencia.

391. Se expresaron distintas opiniones con respecto a la propuesta supresión de la referencia a entidades públicas territoriales. Algunos miembros subrayaron la importancia de incluir entidades públicas territoriales como las unidades constitutivas de un Estado federal, que no eran lo mismo que los órganos del Estado. Se consideró especialmente importante confirmar que los actos de esos órganos eran atribuibles al Estado sobre la misma base que los realizados por órganos del gobierno central, aun cuando gozaran de la máxima autonomía y tuvieran una condición jurídica independiente suficiente para actuar en su propio nombre en el plano internacional, por ejemplo, celebrando acuerdos. También se señaló el caso de las entidades regionales de un Estado que podían celebrar acuerdos transfronterizos. Se consideró que el asunto era suficientemente importante para que se incluyera en el artículo objeto de examen. El problema de una posible superposición con el artículo 5 podía resolverse incluyendo la referencia a las entidades públicas territoriales en el propio artículo 5. Sin embargo, se consideró que el hecho de abordar esta cuestión en ese artículo podría comportar una redacción complicada, reducir la claridad del artículo y tener implicaciones *a contrario* poco aconsejables.

392. Se indicó que sería preferible utilizar el término «funciones», que era más amplio que el de «prerrogativas del poder público», o por lo menos aclarar el empleo de esta última expresión en el comentario. Se señaló que, por el contrario, el reemplazo de la expresión «funciones» por «prerrogativas del poder público» podría hacer que los lectores creyeran que el proyecto de artículos se refería a *acta jure gestionis*, lo que no era claro en sí mismo y en todo caso debía dejarse en claro en el comentario.

393. Al apoyar el mantenimiento de la disposición contenida en la frase final se indicó que dicha disposición podría aclararse añadiendo las palabras «se establezca que» después de «siempre que».

g) Artículo 8

394. Algunos miembros de la Comisión opinaron que los supuestos contemplados debían aclararse tanto en el texto del artículo como en el comentario. Era importante asegurarse de que la disposición fuera suficientemente amplia para comprender hechos como los juzgados por la CIJ en el caso *Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique)*¹⁶³ y los casos de desapariciones en América Latina, que planteaban problemas de prueba especialmente difíciles y en los que era obviamente difícil o imposible obtener evidencia de que habían mediado instrucciones concretas. Se señalaron las situaciones en que los Estados alentaban a personas o grupos de personas a

cometer hechos ilícitos, o los facilitaban, sin darles instrucciones formales expresas, o incluso sin ejercer un control directo sobre ellos.

395. Se expresó apoyo a la propuesta del Relator Especial de que se modificara el apartado *a* del artículo 8 para que incluyera el criterio del control, y se puso de relieve el diverso grado de control suficiente que se requería en las distintas situaciones jurídicas concretas. Aun apoyando el texto propuesto, se planteó la cuestión de si comprendería los casos en que un Estado creaba un Estado títere sujeto a su control político cuando no había un control militar manifiesto y, según el derecho interno del primer Estado, éste no era responsable del Estado títere. Se subrayó que los «Estados títeres» no debían equipararse a las entidades públicas territoriales.

396. Por otra parte, se objetó que la aclaración propuesta podía, en contra de los propósitos en que se basaba, dar origen a una norma de atribución más restrictiva y rígida, que haría más difícil determinar la responsabilidad. En respuesta a la objeción de que la nueva redacción pudiera ser demasiado restrictiva, se destacaron dos factores complementarios: el nuevo proyecto de artículo 15 *bis* y la responsabilidad del Estado por no impedir acciones de personas o grupos de personas que no le fueran atribuibles.

397. Se consideró preferible mantener la expresión «justificaban» del apartado *b* del artículo 8.

398. Se planteó la cuestión de si el uso de la expresión «de hecho» en los apartados *a* y *b* del artículo 8 era necesario. Por otra parte, se señaló que por lo menos el apartado *a* del artículo 8 se refería a casos de autoridad *de facto* y, por tanto, la oración era útil.

h) Artículo 10

399. Se opinó que este artículo no debía hacer referencia a las entidades públicas territoriales.

400. Se consideró que era preferible mantener la expresión «competencia», sin perjuicio de que se aclarara en el comentario, en lugar de la expresión «autoridad», que podía ser más limitada. Se advirtió además que el equivalente francés del término «competencia» designaba el poder ejercido de conformidad con la ley en oposición al poder ejercido de hecho.

12. OBSERVACIONES FINALES DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE EL DEBATE RELATIVO A LOS PROYECTOS DE ARTÍCULO 5 A 8 Y 10 DEL CAPÍTULO II DE LA PRIMERA PARTE

401. En cuanto al título del capítulo II, el Relator Especial observó que había consenso con respecto a la modificación propuesta.

402. En cuanto al artículo 5, era preciso responder a la grave preocupación expresada por algunos gobiernos impidiendo que un Estado eludiera su responsabilidad por la actuación de entidades que fueran realmente órga-

¹⁶³ Véase la nota 103 *supra*.

nos suyos porque el derecho interno no las calificara como tales o incluso las calificara erróneamente. A ese respecto, había que reconocer la función complementaria que desempeñaba el derecho interno e internacional en la definición del concepto de órgano de un Estado. Por una parte, el término «órgano» tenía un significado específico en el derecho internacional. Por la otra, el concepto de órgano del Estado dependía en gran medida de la estructura interna de éste, determinada por su derecho interno, incluidas la práctica y la convención dentro de ese Estado.

403. Se consideró conveniente emplear la expresión «haya actuado en esa calidad» y en el artículo 5 para subrayar la distinción entre los órganos del Estado ordinarios a que se refería el artículo 5 y las entidades especiales a que se refería el párrafo 2 del artículo 7.

404. En relación con el artículo 6, su refundición con el artículo 5 parecía contar con amplio apoyo.

405. Con respecto al artículo 7, las entidades públicas territoriales se encuadraban mejor en el artículo 5 para evitar toda posible superposición entre esas disposiciones al abordar las preocupaciones expresadas en relación con la propuesta de suprimir el párrafo 1 del artículo 7. Además, era evidente que el comportamiento de las entidades comprendidas en el párrafo 2 del artículo 7 requería sin duda un examen más detallado.

406. En relación con el artículo 8, era preciso velar por que el apartado *a* tuviera la suficiente amplitud y precisión, dadas la importancia de esa disposición y las cuestiones planteadas por la jurisprudencia posterior. La propuesta de aclaración del apartado *a* del artículo 8 pretendía ampliar, no restringir, la fórmula anterior, teniendo especialmente en cuenta el examen de las cuestiones planteadas en el caso *Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci*. No obstante, el Comité de Redacción podía examinar si era preferible otra formulación.

407. Parecía no haber objeciones al apartado *b* del artículo 8, que era un principio establecido reconocido por la jurisprudencia. No obstante, debía examinarse si el proyecto de título del artículo 8 reflejaba con precisión su contenido.

408. Aunque el artículo 10 establecía un principio universalmente reconocido, su redacción podía mejorarse, y a ese respecto se habían hecho valiosas sugerencias en el debate.

13. INTRODUCCIÓN POR EL RELATOR ESPECIAL DE LOS PROYECTOS DE ARTÍCULO 9 Y 11 A 15 *BIS* DEL CAPÍTULO II DE LA PRIMERA PARTE

a) Introducción

409. El Relator Especial señaló que cuatro de esos artículos disponían que el comportamiento no era atribuible al Estado a menos que en otros artículos se dispusiera otra cosa. La redacción negativa de esos cuatro artículos carecía de contenido, dado que en virtud del artículo 3

era necesario que el comportamiento fuera atribuible al Estado. Cabe también preguntarse por qué se indican algunos elementos particulares, especialmente en los artículos 12 y 13, como base para la «no atribución». Esos artículos son en gran medida innecesarios y deben suprimirse.

410. Los restantes artículos se refieren a cuatro problemas especiales relativos, respectivamente, a la atribución con respecto al órgano de un Estado que actúa en nombre de otro Estado (artículos 9 y 12), organizaciones internacionales que actúan en nombre de un Estado (artículos 9 y 13), movimientos insurreccionales (artículos 9 y 15) y otros casos (artículos 11 y 15 *bis*).

411. Las recomendaciones del Relator Especial tienen por objeto conservar todo el contenido sustantivo de esos artículos y hacer algunas adiciones para tener en cuenta la práctica de los Estados desde su aprobación.

b) Artículos 9 y 12

412. El artículo 9 dispone que, cuando un Estado pone uno de sus órganos a disposición de otro Estado, el comportamiento de ese órgano se atribuirá al Estado receptor. Los ejemplos que se citan en el primer informe reflejan la práctica relativamente diversa que se ha seguido hasta ahora. Como se subraya en el comentario, ese es un concepto restringido que exige que el órgano se haya puesto realmente a disposición de otro Estado; implica que el órgano debe estar realizando los fines del Estado receptor, y también que, al menos a nivel de política si no de detalle, debe estar efectivamente bajo el control de ese Estado. Esta disposición, limitada pero útil, debe mantenerse en la medida en que se refiere a órganos de Estados.

413. El artículo 12 tiene una redacción negativa innecesaria; debe ser suprimido y las cuestiones que plantea se deben tratar en el comentario al artículo 9.

c) Artículos 9 y 13

414. El artículo 9 trata también de situaciones en que un órgano de una organización internacional se pone a disposición de un Estado. Fue difícil encontrar ejemplos de casos de ese tipo que, al menos según algunas organizaciones internacionales, incluidas las propias Naciones Unidas, eran inconcebibles. El Relator Especial señaló que en los últimos años se habían planteado varias cuestiones complejas relativas a la responsabilidad de los Estados en relación con organizaciones internacionales. Esas cuestiones, sin embargo, deben tratarse en el contexto del derecho de las organizaciones internacionales. Por lo tanto, recomendó que se suprimiera del proyecto ese elemento y que se agregara una cláusula de excepción (artículo A) en la que se aclarara que los proyectos de artículos se aplicaban sin perjuicio de la responsabilidad de una organización internacional o de un Estado con respecto al comportamiento de una organización internacional.

415. El artículo 13 constituye el segundo caso de texto negativo y debe suprimirse.

d) *Artículos 14 y 15*

416. El artículo 15 contiene dos normas positivas de atribución relativas a los movimientos insurreccionales. En ese caso parece razonable comenzar con la premisa negativa de que, como regla general, los actos de un movimiento insurreccional no son atribuibles a un Estado, con sujeción a dos excepciones; los anteriores artículos 14 y 15 se combinarían en uno solo. En cuanto a los casos excepcionales, es importante hacer una distinción entre el caso excepcional en que un movimiento insurreccional se convierte en el nuevo gobierno del Estado, por una parte, y los casos en que el movimiento insurreccional pasa a formar parte de un gobierno de reconciliación nacional, por la otra. Si el gobierno de un Estado sólo puede incorporar elementos de un movimiento de oposición ilegal en un nuevo gobierno a expensas de asumir todas las responsabilidades del movimiento de oposición, ello tendería a desalentar las medidas encaminadas a resolver los conflictos y lograr la reconciliación nacional. Por lo tanto, la excepción debe aplicarse sólo en el caso restringido en que el movimiento de oposición derrota y sustituye al gobierno del Estado de que se trate.

417. El Relator Especial propuso que la excepción se limitara sólo al «comportamiento de un órgano de un movimiento insurreccional» que se ha «establecido»; no debe aplicarse al comportamiento no coordinado de sus partidarios.

418. En los documentos se ha criticado el artículo 15 por entenderse que no llega a establecer una distinción entre los movimientos nacionales de liberación y otros movimientos insurreccionales que no cuentan con ninguna condición jurídica o reconocimiento internacional. Esta crítica no tiene en cuenta las diferencias entre la cuestión de la atribución y la cuestión de las obligaciones que incumben a ciertos movimientos, especialmente aquellos cuya condición jurídica superior podría acarrear mayores responsabilidades en virtud del derecho internacional humanitario. Esa cuestión podría abordarse en el comentario.

e) *Artículos 11 y 15 bis*

419. El artículo 11 es el cuarto artículo de redacción negativa innecesario que debe ser suprimido, y el extenso comentario de fondo se debe incorporar al comentario del artículo 15 *bis*. Además, el artículo 11 es problemático porque indica que el comportamiento de las personas no es atribuible al Estado, lo que no siempre es el caso. Es importante indicar claramente el alcance limitado que tiene la atribución del comportamiento de personas a los Estados, pero esto se debe hacer de otra forma.

420. El artículo 15 *bis* está concebido para casos en que el comportamiento de las personas es luego adoptado o reconocido por el Estado como comportamiento propio,

como en el asunto *Concession des phares de l'Empire ottoman*¹⁶⁴ o el asunto *Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran*¹⁶⁵. Es importante hacer una distinción entre el comportamiento que fue sólo respaldado en términos de una aprobación general y el comportamiento que fue en realidad adoptado por el Estado en el sentido estricto del artículo 15 *bis*; las palabras «adopta o reconoce ese Estado [como propio]» tienen ese sentido. De hecho, esos casos se producen con bastante frecuencia.

14. RESUMEN DE LAS DELIBERACIONES
SOBRE LOS PROYECTOS DE ARTICULO 9 Y 11 A 15 *BIS*

421. Muchos miembros respaldaron la supresión de los textos negativos y la racionalización del texto por considerar que se trataba de mejoras importantes.

a) *Artículo 9*

422. Algunos miembros pusieron de relieve la necesidad de asegurar que ese artículo fuese lo suficientemente amplio para abarcar diversas situaciones. Una cuestión que se planteó fue si el artículo 9 comprendía los casos en que un Estado ejercía relaciones consulares en interés o en nombre de otro Estado. Se expresó la opinión de que ese artículo debía tratar el fenómeno relativamente común de la representación parcial de un Estado por otro en una zona limitada a fin de aclarar la responsabilidad de los Estados representantes y representados. Se expresó la opinión de que quizá fuese necesario examinar más a fondo las complejas situaciones en que un órgano ejercía funciones dentro de su propia jurisdicción en nombre de otro Estado.

423. También se planteó la cuestión de si el artículo debía abarcar los casos en que un Estado debía actuar en cumplimiento de una decisión de una organización internacional.

424. Se expresó apoyo a la propuesta de mantener el artículo sin hacer referencia a las organizaciones internacionales y a la cláusula de excepción propuesta con respecto a las organizaciones internacionales.

b) *Artículo 11*

425. Se expresó también apoyo a la propuesta supresión del artículo por considerarlo innecesario.

¹⁶⁴ Decisión de 24/27 de julio de 1956 (Francia c. Grecia), Naciones Unidas, *Recueil des sentences arbitrales*, vol. XII (n.º de venta 63 V 3), págs. 161 y ss.

¹⁶⁵ Fallo, *C I J Recueil 1980*, pág. 3. Véase también *Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991* (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta S 92 V 5), pág. 145.

c) Artículo 12

426. También respecto de este artículo se apoyó la propuesta de suprimirlo por considerarlo innecesario. Por otra parte, se expresó la opinión de que el artículo debía ser redactado de nuevo para tener en cuenta los puntos planteados en los párrafos 246 a 252 del primer informe del Relator Especial.

d) Artículo 13

427. Se expresó apoyo a la propuesta de suprimir el artículo por considerar que era innecesario y que esta medida estaba en consonancia con el alcance del proyecto indicado en el artículo 1, otorgándose importancia a la inclusión de la propuesta cláusula de excepción.

428. Se expresaron dudas acerca de la propuesta supresión de este artículo, poniéndose de relieve dos problemas relativos a la relación entre los Estados y las organizaciones internacionales. En primer lugar, se planteaba el problema de los Estados que trataban de atribuir al Estado de la sede la responsabilidad por actos cometidos por organizaciones internacionales dentro de su territorio. En segundo lugar, se planteaba el problema de un Estado no miembro que reconocía la responsabilidad de una organización internacional, lo que a su vez entrañaba el reconocimiento implícito de su personalidad o condición jurídica. Se consideró que si esas cuestiones no se trataban, era esencial incluir la cláusula de excepción propuesta.

429. Según otra opinión, el proyecto se refería exclusivamente a la responsabilidad de los Estados y, por lo tanto, no era pertinente especificar la exclusión de la responsabilidad de las organizaciones internacionales.

e) Artículos 14 y 15

430. Se expresó acuerdo con la propuesta fusión de los artículos 14 y 15.

431. Algunos miembros dudaron del uso del término «movimiento insurreccional». Se opinó que el término era anticuado; además, el comentario no reflejaba las prácticas de descolonización desde el decenio de 1960. También se opinó que en el artículo no se distinguía entre los movimientos insurreccionales y los movimientos de liberación nacional que habían conseguido un reconocimiento y un estatuto internacionales.

432. También se observó que, aunque se aplicara el mismo régimen de responsabilidad a un movimiento insurreccional y a un movimiento de liberación nacional, no se podían equiparar ambos términos debido a la connotación negativa del primero y la positiva del último. Se sugirió que debían considerarse las consecuencias que podía tener, a efectos de la responsabilidad, el reconocimiento de un movimiento insurreccional o un movimiento de liberación nacional, posiblemente en la segunda parte del proyecto. También se sugirió que se tratara de acuñar un nuevo término.

433. Se señaló que había diversas manifestaciones de lucha civil, desde los disturbios internos hasta la violencia de las masas, en el contexto de un movimiento insurreccional, o incluso en un gobierno *de facto* establecido en parte del territorio de un Estado. Era preciso delimitar claramente esas distintas manifestaciones. Se opinó que la responsabilidad del Estado estaba en función del control efectivo, no del control legítimo, como se indicaba en la opinión consultiva de la CIJ en el asunto *Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité*¹⁶⁶ y que, en consecuencia, la cuestión del estatuto de los movimientos insurreccionales quedaba fuera del alcance del tema; introducirlo equivaldría únicamente a complicar la tarea y plantear dificultades totalmente innecesarias. El proyecto debía tratar las cuestiones jurídicas relativas a la atribución del comportamiento en términos generales, a fin de que abarcara una variedad de casos, en vez de centrarse en cuestiones políticas relativas a movimientos insurreccionales.

434. Se sugirió que los términos «movimiento insurreccional» y «movimiento de liberación nacional» eran en gran medida anticuados, y que debía observarse la debida cautela al eliminar estos términos y sustituirlos por otro nuevo, que también podía quedar rápidamente anticuado. Por consiguiente, se sugirió mantener el término «movimiento insurreccional» a falta de una alternativa conveniente y que tuviera el mismo alcance.

435. Con respecto al párrafo 1, se observó que el Estado en cuyo territorio se producían los hechos podía ser responsable por no impedir los actos de un movimiento insurreccional realizados en su territorio contra otro Estado. Incluso aunque no pudiera hacerse responsable al Estado por los actos del movimiento insurreccional, sí que podría ser responsable por sus propias omisiones al no impedir que fuerzas incontroladas causaran daños en ciertos casos. También se indicó que el Estado debía ser responsable cuando algunas facciones del gobierno participaran de algún modo con el grupo rebelde que causó perjuicios a otro Estado o a terceros, o le prestara cualquier tipo de apoyo, y que el proyecto debía tratar las distintas variantes, de ser posible en un artículo separado.

436. En contraste, se opinó que era imposible tratar todas las variantes y que el artículo debía limitarse a establecer los límites de la atribución del comportamiento al Estado en el caso de movimientos insurreccionales; las cuestiones restantes las abarcarían las normas primarias. También se dijo que constituía un error conceptual referirse a la responsabilidad de los Estados por el comportamiento de un movimiento insurreccional; a diferencia de la responsabilidad del Estado por omisión, al no tomar las medidas preventivas necesarias, y que dichos asuntos podían tratarse adecuadamente en el comentario.

437. Hubo apoyo a la idea de mantener el párrafo 3 del artículo 15, sobre la responsabilidad de los mismos

¹⁶⁶ Véase la nota 20 *supra*.

movimientos insurreccionales. Se expresaron dudas respecto de la supresión propuesta de la cláusula de salvedad en el párrafo 3 y la posibilidad de no tener en cuenta la pertinencia de dichas cuestiones en los últimos años y su influencia, entre otras cosas, en el desarrollo del derecho internacional humanitario.

438. En los casos en que el comportamiento de un movimiento insurreccional era atribuible al Estado, debía considerarse la posibilidad de tratar aquellos casos en que el movimiento insurreccional se convirtiera en parte del nuevo gobierno o éste le concediera un cierto grado de autonomía dentro de la estructura estatal.

439. Se sugirió que debía considerarse la inclusión de una cláusula de salvedad para asegurar que hubiera una claridad absoluta en cuanto al papel continuo de las normas primarias, especialmente las relativas a las obligaciones de resultado de un Estado con respecto a los movimientos insurreccionales. Dependiendo de la naturaleza de la obligación, a menudo un Estado no se veía liberado de su responsabilidad por causas de insurrección o contienda civil.

440. Se expresó preocupación con respecto al nuevo artículo 15 propuesto, cuyo párrafo 1 se consideraba poco claro, por considerar innecesaria la referencia al movimiento insurreccional que lograba convertirse en el nuevo gobierno, habida cuenta del artículo 15 *bis*, considerándose también innecesarias y poco pertinentes las referencias a por lo menos algunos de los artículos anteriores.

441. Se planteó la cuestión relativa al uso del término «establecido» en el epígrafe del párrafo 1 del nuevo artículo 15 propuesto. Se sugirió que la frase «establecido en oposición» resultaba de por sí evidente e innecesaria. También se opinó que el término «establecido» debía interpretarse en el sentido de referirse al momento en que un movimiento insurreccional ejercía un control efectivo sobre parte del territorio de un Estado, y que la responsabilidad del Estado continuaba hasta ese momento.

f) Artículo 15 bis

442. Se expresó apoyo al artículo propuesto porque cubría una importante laguna en el proyecto. No obstante, se observó que el artículo 15 *bis* debía ocuparse de los casos en que el reconocimiento del comportamiento anterior equivalía a una forma de reconocimiento de la situación existente, por ejemplo, cuando tenía un valor probatorio, en oposición a los casos en que la adopción del comportamiento ocurría *de novo* sin ninguna participación anterior por parte del Estado.

443. Se sugirió que este artículo podría redactarse de nuevo con una formulación positiva. También se sugirió que debía incluirse una cláusula de salvedad relativa a la responsabilidad de los movimientos insurreccionales o los movimientos de liberación nacional, posiblemente como párrafo 2 del artículo 15 *bis* o artículo 15 *ter*.

444. Se planteó la cuestión de la necesidad de esta disposición y el uso de la palabra «o» en vez de «y» en la frase final.

15. OBSERVACIONES FINALES DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE EL DEBATE RELATIVO A LOS PROYECTOS DE ARTÍCULO 9 Y 11 A 15 *BIS*

445. El Relator Especial observó que los numerosos comentarios que se habían formulado habían resultado útiles para aclarar la comprensión general de los artículos. Señaló que los artículos creaban pocos problemas importantes de principio, con la posible excepción del artículo 15.

446. Hubo acuerdo general en el sentido de que la responsabilidad de las organizaciones internacionales y de los Estados por actos de organizaciones internacionales eran cuestiones importantes que merecían ser estudiadas en sí mismas pero que planteaban problemas que iban más allá de cuestiones de atribución de responsabilidad. El enfoque más sensato sería excluirlos del actual proyecto. Esta exclusión hacía necesaria una cláusula de salvedad, ya que se planteaban cuestiones de atribución de responsabilidad. Se había sugerido que esa cláusula debía abarcar los actos realizados en el contexto de una organización internacional, además de los actos de la organización internacional misma. Por otra parte, los Estados podían asumir responsabilidades individuales en el contexto del comportamiento que tuviera lugar en el foro de una organización internacional, y era preciso reconocer esa distinción.

447. El artículo 9 había contado con la aprobación general. Aunque algunos ejemplos de órganos puestos a disposición de otro Estado podían considerarse vestigios del colonialismo, había otros ejemplos en que el consentimiento de los Estados interesados había sido libremente otorgado. La omisión de este artículo crearía problemas sobre el alcance del artículo 5.

448. Había acuerdo general en el sentido de que las formulaciones negativas contenidas en los artículos 11 a 14 resultaban innecesarias y debían suprimirse, pudiendo incluirse cualquier elemento útil en los comentarios. El problema relativo al comportamiento de un Estado en el territorio de otro Estado requería ulterior examen, posiblemente en el capítulo IV de la primera parte.

449. También había acuerdo general sobre la fusión propuesta de los artículos 14 y 15. El Comité de Redacción debía considerar si el nuevo artículo 15 debía formularse en términos negativos o positivos. Habida cuenta del apoyo general a que se mantuviera la referencia a las entidades gubernamentales territoriales en el artículo 5, debía considerarse la posibilidad de establecer una relación entre los artículos 5 y 15. El Relator Especial aún creía que el término «establecido» era necesario para indicar un umbral a los movimientos insurreccionales a efectos de la aplicación del artículo 15, y a fin de distinguir entre las entidades gubernamentales territoriales y las administraciones *de facto* abarcadas por los artículos 5 y 15, respectivamente.

450. Las cuestiones de terminología planteadas con respecto a los términos «movimientos insurreccionales» y «movimientos de liberación nacional» debían ser examinadas en el Comité de Redacción. Tal vez fuera necesario incluir un breve artículo de introducción en el proyecto para indicar que su ámbito de aplicación se

limitaba a la responsabilidad de los Estados y no se extendía, por ejemplo, a la responsabilidad de los movimientos insurreccionales.

451. Finalmente, hubo acuerdo general respecto de la necesidad del nuevo artículo 15 *bis* propuesto.

Capítulo VIII

LA NACIONALIDAD EN RELACIÓN CON LA SUCESIÓN DE ESTADOS

A.—Introducción

452. En su 45.º período de sesiones, celebrado en 1993, la Comisión decidió incluir en su programa el tema titulado «La sucesión de Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de las personas naturales y jurídicas»¹⁶⁷. La Asamblea General, en el párrafo 7 de su resolución 48/31 hizo suya la decisión de la Comisión en la inteligencia de que la forma definitiva que se diese a la labor sobre el tema se decidiría después de haberse presentado un estudio preliminar a la Asamblea. En su 46.º período de sesiones, celebrado en 1994, la Comisión nombró al Sr. Václav Mikulka Relator Especial del tema¹⁶⁸.

453. En sus períodos de sesiones 47.º (1995) y 48.º (1996) la Comisión examinó los informes primero y segundo del Relator Especial¹⁶⁹. La Comisión estableció en su 47.º período de sesiones un Grupo de Trabajo sobre la sucesión de Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de las personas naturales y jurídicas al que confió el mandato de determinar las cuestiones derivadas del tema, categorizar las estrechamente relacionadas con él, orientarlas en cuanto a las cuestiones que cabría estudiar más provechosamente, dadas las preocupaciones del momento, y presentarle un calendario de actividades¹⁷⁰. El Grupo de Trabajo concluyó su tarea de estudio preliminar del tema en el 48.º período de sesiones.

454. La Comisión decidió en su 48.º período de sesiones recomendar a la Asamblea General que tomara nota de la terminación del estudio preliminar del tema y que pidiera a la Comisión que emprendiese el estudio sustantivo del tema titulado «La nacionalidad en relación con la sucesión de Estados» de conformidad con el plan de acción que proponía, el cual preveía, entre otras cosas: *a*) que el examen de la cuestión de la nacionalidad de las personas naturales se separaría del de la nacionalidad de las personas jurídicas y se daría prioridad al primero, y *b*) que la decisión sobre la manera de proceder con respecto a la cuestión de la nacionalidad de las personas jurídicas

se adoptaría al terminar los trabajos de la nacionalidad de las personas naturales y a la luz de las observaciones que la Asamblea General invitara a los Estados a presentar sobre los problemas prácticos planteados a este respecto por una sucesión de Estados¹⁷¹. La Asamblea General hizo suyas las recomendaciones de la Comisión en el párrafo 8 de su resolución 51/160.

455. En su 49.º período de sesiones, celebrado en 1997, la Comisión examinó el tercer informe del Relator Especial¹⁷², que contenía un proyecto de artículos con sus comentarios sobre la cuestión de la nacionalidad de las personas naturales en relación con la sucesión de Estados. En el mismo período de sesiones la Comisión aprobó en primera lectura un proyecto de preámbulo y una serie de 27 proyectos de artículo sobre la nacionalidad de las personas naturales en relación con la sucesión de Estados¹⁷³. La Asamblea General, en el apartado *a* del párrafo 2 de su resolución 52/156, señaló a la atención de los gobiernos que era importante que dispusiera de sus opiniones sobre el proyecto de artículos y les encareció que presentaran sus comentarios y observaciones por escrito antes del 1.º de octubre de 1998.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones

456. En el actual período de sesiones la Comisión tuvo ante sí el cuarto informe del Relator Especial (A/CN.4/489), que trataba de la segunda parte del tema, a saber, la cuestión de la nacionalidad de las personas jurídicas en relación con la sucesión de Estados, que presentó en su 2544.ª sesión, el 9 de junio de 1998.

457. El Relator Especial señaló que, si se procediese en el actual período de sesiones a un intercambio preliminar de opiniones sobre las diversas maneras posibles de abordar la segunda parte del tema, se facilitaría la decisión que habría de adoptar la Comisión a este respecto, sobre todo en vista de que hasta entonces los gobiernos no habían presentado ninguna observación por escrito en respuesta a la solicitud contenida en la resolución 52/156 de la Asamblea General. Por consiguiente, después de

¹⁶⁷ *Anuario* 1993, vol II (segunda parte), pag 105, doc A/48/10, parr 440

¹⁶⁸ *Anuario* 1994, vol II (segunda parte), pag 189, doc A/49/10, parr 382

¹⁶⁹ *Anuario* 1995, vol II (primera parte), doc A/CN.4/467 y *Anuario* 1996, vol II (primera parte), doc A/CN.4/474, respectivamente

¹⁷⁰ *Anuario* 1995, vol II (segunda parte), pag 34, doc A/50/10, parr 147

¹⁷¹ *Anuario* 1996, vol II (segunda parte), doc A/51/10, parr 88

¹⁷² *Anuario* 1997, vol II (primera parte), doc A/CN.4/480 y Add 1

¹⁷³ *Anuario* 1997, vol II (segunda parte), cap IV, secc C

trazar un panorama general de los debates que se habían verificado hasta entonces sobre ese tema tanto en la CDI como en la Sexta Comisión, el Relator Especial había planteado en su cuarto informe varias cuestiones acerca de la orientación que habría de darse a la labor sobre la nacionalidad de las personas jurídicas y sugería que se examinasen esas cuestiones en el marco de un grupo de trabajo.

458. En su 2530.^a sesión, el 14 de mayo de 1998, la Comisión estableció un Grupo de Trabajo¹⁷⁴ encargado de examinar la orientación que habría de darse al estudio de la segunda parte del tema a fin de facilitar la decisión de la Comisión a este respecto. Las conclusiones preliminares del Grupo de Trabajo, que la Comisión examinó en su 2544.^a sesión, se incluyen en los párrafos 460 a 468 *infra*.

459. Durante el examen de las conclusiones preliminares del Grupo de Trabajo varios miembros manifestaron su preferencia por la segunda opción, es decir, el estudio de la condición de las personas jurídicas en relación con la sucesión de Estados, y alentaron al Relator Especial a que siguiera examinándola en su próximo informe sobre esta parte del tema de la nacionalidad en relación con la sucesión de Estados.

CONCLUSIONES PRELIMINARES DEL GRUPO DE TRABAJO

460. La segunda parte del tema «La nacionalidad en relación con la sucesión de Estados» incluye el problema de la nacionalidad de las personas jurídicas, que la Comisión no ha estudiado todavía. En opinión del Grupo de Trabajo, tal como se define el tema actualmente, las cuestiones comprendidas en la segunda parte son demasiado específicas y la necesidad práctica de resolverlas no resulta evidente. Además de considerar la posibilidad de sugerir a la Comisión que no iniciara la labor sobre esa parte del tema, el Grupo de Trabajo estimó útil examinar otras posibilidades, que se deducen del capítulo III del cuarto informe del Relator Especial. Estuvo de acuerdo en que, en principio, había dos posibilidades de ampliar el ámbito del estudio de los problemas comprendidos en la segunda parte del tema, como se explica a continuación. Esas posibilidades exigirían una nueva formulación del mandato para esa parte del tema.

461. La primera posibilidad consistiría en ampliar el estudio de la cuestión de la nacionalidad de las personas jurídicas, más allá del contexto de la sucesión de Estados, a la cuestión de la nacionalidad de las personas jurídicas en el derecho internacional en general. Como el concepto de la nacionalidad de las personas jurídicas no era conocido en todos los sistemas jurídicos, sería conveniente que la Comisión examinara también conceptos semejantes, sobre la base de los cuales se determina normalmente la existencia de un vínculo análogo al de la nacionalidad.

462. La ventaja de ese método sería que contribuiría a aclarar el concepto general de la nacionalidad de las personas jurídicas en las relaciones internacionales. También permitiría a la Comisión seguir examinando en forma más sistemática los problemas que ha encontrado al estudiar los temas de la responsabilidad de los Estados, la protección diplomática y la nacionalidad en relación con la sucesión de Estados.

463. Los problemas que podría encontrar la Comisión al elegir este método serían que, por la gran diversidad de derechos nacionales al respecto, la Comisión se encontraría con problemas similares a los ya surgidos al examinar el tema de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes. Existiría también cierta duplicación con el tema de la protección diplomática. Además, ese estudio se prestaría más a un análisis teórico que a la elaboración de normas de aplicabilidad práctica inmediata. Sin embargo, no debe subestimarse sobre todo que la tarea sería enorme. Sería difícil mantener el estudio dentro de límites en que resultara fácil tratarlo.

464. La segunda posibilidad consistiría en mantener el estudio dentro del contexto de la sucesión de Estados, pero yendo más allá del problema de la nacionalidad para incluir otras cuestiones, como la condición de las personas jurídicas (en particular los derechos y obligaciones inherentes a su capacidad, incluidos los que determinan el tipo de persona jurídica, etc.) y, posiblemente, también las condiciones de actuación de las personas jurídicas derivadas de la sucesión de Estados.

465. La ventaja de este método sería, en opinión del Grupo de Trabajo, que contribuiría a aclarar una esfera más amplia del derecho de la sucesión de Estados.

466. Al elegir este método la Comisión se encontraría con el problema de la diversidad de derechos nacionales al respecto. Una vez ampliado en esta dirección, resultaría difícil además hacer una nueva delimitación del tema.

467. Si se continúa la labor con cualquiera de las posibilidades, la Comisión tendrá que decidir por otra parte qué categorías de «personas jurídicas» quedarían comprendidas en el estudio, a qué relaciones jurídicas se limitaría éste y cuál podría ser el resultado de la labor de la Comisión sobre esta parte del tema.

468. A falta de observaciones positivas de los Estados, la Comisión tendría que llegar a la conclusión de que los Estados no están interesados en el estudio de la segunda parte del tema. En su informe a la Asamblea General sobre la labor realizada en el período de sesiones, la Comisión debería recordar a la Asamblea General la conveniencia de conocer la respuesta de los Estados a la pregunta formulada en el párrafo 5 de la resolución 52/156 de la Asamblea. En particular, la Asamblea debería invitar a los Estados que hubieran experimentado una sucesión de Estados que indicaran, por ejemplo, cómo se determinó la nacionalidad de las personas jurídicas y qué clase de trato se dio a las que, como consecuencia de la sucesión de Estados, se convirtieron en personas jurídicas «extranjeras».

¹⁷⁴ Véase la composición del Grupo de Trabajo en el párrafo 8 *supra*

Capítulo IX

LAS RESERVAS A LOS TRATADOS

A.—Introducción

469. En su 45.º período de sesiones, celebrado en 1993, la Comisión decidió incluir en su programa el tema titulado «La ley y la práctica en materia de reservas a los tratados»¹⁷⁵. La Asamblea General, en el párrafo 7 de su resolución 48/31, hizo suya la decisión de la Comisión, en la inteligencia de que la forma definitiva que se diese a la labor sobre el tema se decidiría después de haberse presentado un estudio preliminar a la Asamblea.

470. En su 46.º período de sesiones, celebrado en 1994, la Comisión nombró al Sr. Alain Pellet Relator Especial de ese tema¹⁷⁶.

471. En su 47.º período de sesiones, celebrado en 1995, la Comisión recibió y examinó el primer informe del Relator Especial sobre el tema¹⁷⁷.

472. Al terminar el examen del informe por la Comisión, el Relator Especial resumió las conclusiones que había extraído de los debates de la Comisión sobre el tema; esas conclusiones se referían al título del tema, que debería modificarse para que dijera «Las reservas a los tratados», a la forma del resultado del estudio, a la manera flexible en que deberían realizarse los trabajos de la Comisión sobre el tema y al consenso en la Comisión en el sentido de que no debían modificarse las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena de 1969, la Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de tratados (en adelante denominada «Convención de Viena de 1978») y la Convención de Viena de 1986¹⁷⁸. Esas conclusiones constituían, a juicio de la Comisión, el resultado del estudio preliminar solicitado por la Asamblea General en sus resoluciones 48/31 y 49/51.

473. También en el 47.º período de sesiones, la Comisión, de conformidad con su práctica anterior¹⁷⁹, autorizó al Relator Especial a preparar un cuestionario detallado en relación con las reservas a los tratados para conocer la práctica de los Estados y las organizaciones

internacionales, en particular las depositarias de convenciones multilaterales, y los problemas con que tropezaban¹⁸⁰. Ese cuestionario se envió a sus destinatarios por conducto de la Secretaría. La Asamblea General tomó nota, en el párrafo 4 de su resolución 50/45, de las conclusiones de la Comisión e invitó a ésta a continuar su labor en la forma indicada en el informe, invitando también a los Estados a contestar el cuestionario¹⁸¹.

474. En su 48.º período de sesiones, celebrado en 1996, la Comisión tuvo ante sí el segundo informe del Relator Especial sobre el tema¹⁸². El Relator Especial había unido a su segundo informe un proyecto de resolución sobre las reservas a los tratados multilaterales normativos, incluidos los de derechos humanos, destinado a la Asamblea General, con el fin de puntualizar y aclarar los datos jurídicos sobre ese problema¹⁸³. Sin embargo, por falta de tiempo, la Comisión no pudo examinar el informe ni el proyecto de resolución, aunque algunos miembros pudieron expresar sus opiniones sobre el informe. Por consiguiente, la Comisión decidió aplazar el debate sobre el tema hasta el siguiente período de sesiones¹⁸⁴.

475. En su 49.º período de sesiones, celebrado en 1997, la Comisión tuvo ante sí de nuevo el segundo informe del Relator Especial sobre el tema.

476. Tras finalizar su debate la Comisión aprobó las conclusiones preliminares sobre las reservas a los tratados multilaterales normativos, incluidos los tratados de derechos humanos¹⁸⁵.

477. La Asamblea General, en su resolución 52/156, tomó nota de las conclusiones preliminares de la Comisión sobre las reservas a los tratados multilaterales normativos, incluidos los tratados de derechos humanos, así como de la invitación cursada a todos los órganos establecidos en virtud de tratados multilaterales de carácter normativo que desearan hacerlo a que presentaran obser-

¹⁷⁵ Véase la nota 167 *supra*.

¹⁷⁶ *Anuario* 1994, vol II (segunda parte), pag 189, párr 381.

¹⁷⁷ *Anuario* 1995, vol II (primera parte), doc A/CN.4/470.

¹⁷⁸ *Ibid* (segunda parte), pag 111, párr 487.

¹⁷⁹ Véase *Anuario* 1983, vol II (segunda parte), pag 91, párr 286.

¹⁸⁰ Véase *Anuario* 1995, vol II (segunda parte), pag 111, párr 489.

¹⁸¹ Al 30 de junio de 1998, 32 Estados y 22 organizaciones internacionales habían respondido al cuestionario.

¹⁸² *Anuario* 1996, vol II (primera parte), doc A/CN.4/477 y Add 1 y A/CN.4/478.

¹⁸³ *Ibid* (segunda parte), doc A/51/10, párr 136 y nota 238.

¹⁸⁴ Un resumen del debate figura en *ibid*, cap VI, secc B, en particular párr 137.

¹⁸⁵ *Anuario* 1997, vol II (segunda parte), párr 157.

vaciones por escrito sobre esas conclusiones y al mismo tiempo recordó a los gobiernos la importancia que revestía para la Comisión contar con las opiniones de los gobiernos acerca de las conclusiones preliminares.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones

478. En el actual período de sesiones la Comisión tuvo ante sí el tercer informe del Relator Especial sobre el tema (A/CN.4/491 y Add.1 a 6), en el que se hacía hincapié en la definición de reservas (y declaraciones interpretativas) a los tratados. La Comisión examinó ese informe en sus sesiones 2541.^a, 2542.^a, 2545.^a, 2548.^a y 2549.^a a 2552.^a, celebradas los días 4, 5, 10 y 12 de junio y 27 a 30 de julio de 1998.

479. En sus sesiones 2542.^a, 2545.^a, 2548.^a y 2550.^a a 2552.^a, celebradas los días 5, 10 y 12 de junio y 28 a 30 de julio de 1998, respectivamente, la Comisión decidió transmitir al Comité de Redacción los proyectos de directriz 1.1 (Definición de reservas), 1.1.1 (Formulación conjunta de una reserva), 1.1.2 (Momento de formulación de una reserva), 1.1.3 (Reservas formuladas con ocasión de una notificación de aplicación territorial), 1.1.4 (Objeto de las reservas), 1.1.5 (Declaraciones encaminadas a aumentar las obligaciones de su autor), 1.1.6 (Declaraciones encaminadas a limitar las obligaciones de su autor), 1.1.7 (Reservas de no reconocimiento), 1.1.8 (Reservas de alcance territorial), 1.2 (Definición de las declaraciones interpretativas) y 1.4 (Alcance de las definiciones)¹⁸⁶.

¹⁸⁶ El texto de las directrices propuesto por el Relator Especial era el siguiente

«1.1 Definición de reservas

«1.1 Se entiende por “reserva” una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado o por una organización internacional al firmar, ratificar, confirmar oficialmente, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, o al hacer una notificación de sucesión en un tratado, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado o a esa organización

«1.1.1 Formulación conjunta de una reserva

«El carácter unilateral de las reservas no es obstáculo para la formulación conjunta de una reserva por varios Estados u organizaciones internacionales

«1.1.2 Momento de formulación de una reserva

«Una reserva puede formularse por un Estado o una organización internacional cuando ese Estado o esa organización expresa su consentimiento en quedar obligado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales

«1.1.3 Reservas de alcance territorial

«Una declaración unilateral hecha por un Estado con ocasión de una notificación de aplicación territorial de un tratado, por la cual ese Estado se propone excluir o modificar el efecto jurídico de algu-

480. En sus sesiones 2556.^a a 2558.^a, celebradas del 5 al 7 de agosto de 1998, la Comisión examinó y aprobó el informe del Comité de Redacción sobre los proyectos de directriz 1.1 (Definición de reservas), 1.1.1 [1.1.4] (Objeto de las reservas), 1.1.2 (Casos en que pueden for-

nas disposiciones del tratado en su aplicación al territorio de que se trate, constituye una reserva

«1.1.4 Objeto de las reservas

«Una reserva puede referirse a una o varias disposiciones de un tratado o, de forma más general, a la manera en que el Estado se propone aplicar el conjunto del tratado

«1.1.5 Declaraciones encaminadas a aumentar las obligaciones de su autor

«Una declaración unilateral hecha por un Estado o una organización internacional, por la que ese Estado o esa organización acepta compromisos que van más allá de las obligaciones que le impone un tratado, no constituye una reserva [y se rige por las normas aplicables a los actos jurídicos unilaterales], aunque esa declaración se haga con ocasión de la expresión por ese Estado o esa organización de su consentimiento en quedar vinculado por el tratado

«1.1.6 Declaraciones encaminadas a limitar las obligaciones de su autor

«Una declaración unilateral hecha por un Estado o una organización internacional en el momento en que ese Estado o esa organización expresa su consentimiento en quedar vinculado por un tratado y por la cual su autor se propone limitar las obligaciones que le impone el tratado y los derechos que éste crea para las otras Partes constituye una reserva, salvo si equivale a añadir al tratado una disposición nueva

«1.1.7 Reservas de no reconocimiento

«Una declaración unilateral por la que un Estado se propone excluir la aplicación de un tratado entre él y uno o varios Estados a los que no reconoce constituye una reserva, cualquiera que sea la fecha en que se haga

«1.1.8 Reservas de alcance territorial

«Una declaración unilateral por la que un Estado se propone excluir la aplicación de un tratado o de algunas de sus disposiciones en un territorio en el que ese tratado sería aplicable en ausencia de tal declaración constituye una reserva, cualquiera que sea la fecha en que se haga

«1.2 Definición de las declaraciones interpretativas

«La expresión “declaración interpretativa” se refiere a una declaración unilateral, independientemente de su enunciado o denominación, hecha por un Estado o por una organización internacional, por la cual ese Estado o esa organización procuran definir o aclarar el sentido o el alcance que el declarante atribuye al tratado o a algunas de sus disposiciones

«1.4 Alcance de las definiciones

«La definición de una declaración unilateral como reserva o declaración interpretativa se formula sin perjuicio de su legalidad con respecto a las normas relativas a las reservas y a las declaraciones interpretativas, cuya aplicación está subordinada a la declaración »

mularse las reservas), 1.1.3 [1.1.8] (Reservas de alcance territorial), 1.1.4 [1.1.3] (Reservas formuladas con ocasión de una notificación de aplicación territorial), 1.1.7 [1.1.1] (Reservas formuladas conjuntamente), así como un proyecto de directriz, sin título ni número, sobre la relación entre definición y legalidad de las reservas. El texto de estos proyectos de directrices y de los comentarios se reproduce en la sección C.

1. PRESENTACION POR EL RELATOR ESPECIAL DE SU TERCER INFORME

481. Al presentar su tercer informe el Relator Especial reconoció los aspectos delicados y difíciles de este tema desde el punto de vista de la técnica jurídica. Su informe está dividido en dos capítulos. El primero está dedicado a los trabajos anteriores de la Comisión sobre el tema y el segundo a la definición de reservas (y declaraciones interpretativas) así como a las reservas (y las declaraciones interpretativas) a los tratados bilaterales.

a) Trabajos anteriores de la Comisión sobre el tema y respuestas de los Estados y los órganos consultados

482. El Relator Especial hizo referencia a las decisiones anteriores de la Comisión¹⁸⁷ y recordó las dos principales: en primer lugar, en principio y salvo que se plantee la necesidad, la Comisión no pondrá en tela de juicio las disposiciones de las Convenciones de Viena de 1969, 1978 y 1986, limitándose a cubrir las lagunas y, si es posible, suprimir las ambigüedades y aclarar puntos dudosos. En segundo lugar, se atenderá a la elaboración de una Guía de la práctica, conjunto de directrices que aportarán precisiones a las disposiciones existentes y colmarán las lagunas; si es necesario, se anexarán a esa Guía cláusulas tipo relativas a las reservas que la Comisión recomendará a los Estados y a las organizaciones internacionales que las incluyan, según proceda, en los tratados que concierten en el futuro.

483. El Relator Especial destacó en los párrafos 9 a 30 de su tercer informe el seguimiento dado a su segundo informe y sobre todo a la acogida que habían tenido las conclusiones preliminares de la Comisión relativas a las reservas a los tratados multilaterales de carácter normativo, incluidos los tratados de derechos humanos. Recordó que durante los debates sobre las conclusiones preliminares, aprobadas sin votación, había habido dos corrientes de opinión. Por una parte, una gran mayoría de Estados consideró que la Comisión ya había avanzado mucho al reconocer que los órganos de fiscalización de los derechos humanos podían hacer observaciones y formular recomendaciones sobre la legitimidad de las reservas hechas por los Estados¹⁸⁸ y al instar a los Estados a que cooperasen con los órganos de fiscalización y tuvieran debidamente en cuenta sus recomendaciones. Por

otra parte, el segundo grupo deseaba que la Comisión fuera más allá y reconociese que esos mismos órganos de fiscalización tenían el derecho de sacar conclusiones de sus comprobaciones a semejanza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (causa *Belilos c. Suisse*)¹⁸⁹

484. Según el Relator Especial, esa divergencia de opiniones se ajusta a la división de los Estados en el seno de la Sexta Comisión, pero en base a otras diferencias. Aproximadamente la mitad de los Estados que expresaron su opinión aprobaron las conclusiones preliminares, mientras que la otra mitad se manifestó reservada, estimando que únicamente los Estados tenían competencia no sólo para sacar conclusiones sobre la ilegitimidad de una reserva sino también para comprobarla. El Relator Especial está convencido de que la Comisión cumple su misión cuando presenta a los Estados soluciones alternativas progresistas, si eso corresponde a tendencias deseables y ya razonablemente avanzadas. No obstante, señaló a la atención de la Comisión la oposición manifestada por los Estados a las propuestas que algunos de sus miembros preconizaban en el seno de los órganos de derechos humanos.

485. El Relator Especial dijo también que, hasta la fecha, sólo la Presidenta del Comité de Derechos Humanos le había hecho llegar sus primeras observaciones, que se reproducen en el párrafo 16 de su tercer informe, sobre el párrafo 12 de las conclusiones preliminares, en las que señalaba, a ese respecto, que los órganos de fiscalización universales contribuían también en la misma capacidad que los órganos regionales al desarrollo de la práctica y de las normas aplicables.

486. El Relator Especial ha señalado, no obstante, que sería prematuro reanudar las deliberaciones sobre las conclusiones preliminares, que deberían volver a ser examinadas por la Comisión; sería prudente que ésta esperase, por una parte, las opiniones que ha solicitado de los órganos de derechos humanos y de los Estados¹⁹⁰, insistiendo de nuevo en el envío de respuestas, y por otra parte, el examen del problema de la legitimidad de las reservas y las reacciones a ese respecto.

487. El Relator Especial manifestó su gran satisfacción por el interés que habían demostrado los Estados por los trabajos de la CDI acerca de las reservas a los tratados. Ese interés se puso de manifiesto no sólo en el gran número de intervenciones en la Sexta Comisión sino también en la labor realizada a este respecto por el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano y por el Comité de Asesores Jurídicos sobre Derecho Internacional Público, que había creado un grupo de especialistas en reservas a los tratados internacionales (párrafos 27 a 30 del tercer informe)¹⁹¹.

¹⁸⁹ Tribunal Europeo de Derechos Humanos, *Série A arrêts et décisions*, vol 132, fallo de 29 de abril de 1988, Consejo de Europa, Estrasburgo, 1988

¹⁹⁰ Hasta la fecha han respondido cuatro Estados (China, Liechtenstein, Monaco y Suiza)

¹⁹¹ Vease Consejo de Europa, Comité de Ministros, 612ª reunión de Delegados ministeriales, doc CM(97)187, parr 15, y decision 612/10 2 de 16 de diciembre de 1997

¹⁸⁷ Vease la nota 178 *supra*

¹⁸⁸ Vease el párrafo 5 de las conclusiones preliminares sobre las reservas a los tratados multilaterales normativos, incluidos los tratados de derechos humanos (nota 185 *supra*)

488. El elevado número de respuestas recibidas de Estados (32) y de organizaciones internacionales (22) al cuestionario sobre el tema es también una muestra de ese interés¹⁹². El Relator Especial hubiera deseado que más Estados y organizaciones internacionales hubieran respondido al cuestionario, pero lamenta sobre todo la falta de respuesta, hasta la fecha, de las Comunidades Europeas, que además de depositarias son también parte en numerosos tratados multilaterales.

489. El informe tiene dos capítulos: el primero trata de la definición de las reservas a los tratados y de las declaraciones interpretativas, y el segundo de las reservas y las declaraciones interpretativas a los tratados bilaterales. Por falta de tiempo, el Relator Especial ha debido suspender el examen de «las alternativas a los tratados», como se había propuesto inicialmente.

b) Definición de las reservas a los tratados

490. El Relator Especial ha tomado como punto de partida la definición de reservas que dan las Convenciones de Viena de 1969, 1978 y 1986, y, para comenzar, la Convención de Viena de 1969 y, particularmente, el apartado *d* del párrafo 1 del artículo 2. Al recordar la labor preparatoria de la adopción de esa definición (párrafos 52 a 67 del tercer informe) destaca tres puntos:

a) La cuestión de la definición de las reservas fue examinada someramente en la redacción de la Convención de Viena de 1969;

b) Junto con el Sr. James Brierly, el primer Relator Especial, se tomó como base una definición contractual de las reservas, entendiéndose como ofertas hechas a las otras partes contratantes, para llegar a la idea de una declaración unilateral;

c) La definición de las reservas se fue alejando progresivamente de la definición de declaraciones interpretativas y de las respuestas a estas últimas. El último Relator Especial, Sir Humphrey Waldock, consideró que las declaraciones interpretativas correspondían al capítulo relativo a la interpretación.

491. El Relator Especial ha señalado que la codificación en las Convenciones de Viena de 1978 y 1986 tuvo influencia en la definición misma de las reservas (apartado *j* del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena de 1978 y apartado *d* del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena de 1986).

492. El resultado de esas aportaciones sucesivas es que ninguna de las tres Convenciones de Viena (1969, 1978 y 1986) da una definición completa de las reservas y por esta razón el Relator Especial ha elaborado un texto compuesto en el párrafo 81 de su tercer informe en el que se combinan esas aportaciones. Esta definición, que él ha denominado la «definición de Viena», podría figurar a la cabeza del primer capítulo de la Guía de la práctica.

493. Al analizar los antecedentes históricos y los elementos de esa definición, el Relator Especial recuerda en el párrafo 52 de su tercer informe que fue aprobada sin debate doctrinario o político importante y que en las Convenciones de Viena de 1969, 1978 y 1986 figura bajo el título «Términos empleados» (y no «Definiciones») para dejar bien en claro que las definiciones se habían adoptado sólo a los fines de la «presente Convención». Con todo, la práctica de los Estados y la jurisprudencia la han consagrado sin preocuparse por determinar si las Convenciones de Viena eran o no aplicables como tal en las situaciones para las cuales recurrían a esa definición. Por lo tanto, los Estados la invocan expresamente en su práctica *inter se* constantemente cuando reclasifican una declaración interpretativa como reserva o en los alegatos de los asuntos contenciosos. En cuanto a la jurisprudencia, basta con recordar, entre otras cosas, el asunto de la *Délimitation du plateau continental entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République française* (asunto del Mar de Iroise)¹⁹³ en 1977, el asunto *Temeltasch*¹⁹⁴ planteado ante la Comisión Europea de Derechos Humanos en 1982 y la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1983¹⁹⁵.

494. El Relator Especial ha indicado que la doctrina actual se inclina casi unánimemente por la definición de Viena, que ha adquirido una especie de título de nobleza y constituye el punto de partida obligatorio de todo examen de la definición de las reservas, aun cuando algunos autores siguen proponiendo su propia definición. No obstante, según el Relator Especial persisten todavía algunos problemas y sería muy conveniente que la Comisión los resolviera dando más precisión a la definición de Viena y completándola.

495. Con tal fin el Relator Especial ha señalado que la definición de Viena consta de tres elementos formales; se trata de una declaración unilateral, formulada en el momento en que el Estado o la organización internacional expresa su consentimiento a considerarse vinculado por el tratado, cualquiera que sea su enunciado o denominación, y de un elemento fundamental, a saber, que la reserva tiene por objeto excluir o modificar los efectos jurídicos de algunas disposiciones del tratado.

i) Declaración unilateral

496. Esta calidad formal no siempre es evidente. El primer Relator Especial, Sr. James Brierly, tenía más bien una concepción «contractual» (o «convencional») de la reserva, considerando que se trataba de un acuerdo entre las partes por el cual éstas limitaban los efectos del

¹⁹³ Decisiones de 30 de junio de 1977 y 14 de marzo de 1978, Naciones Unidas, *Recueil des sentences arbitrales*, vol. XVIII (n° de venta E/F 80 V 7)

¹⁹⁴ Consejo de Europa, Comisión Europea de Derechos Humanos, *Décisions et rapports*, demanda n° 9116/80, *Temeltasch c. Suisse*, vol. 31, Estrasburgo, 1983, págs. 120 a 137, en particular pag. 130, párr. 69

¹⁹⁵ *Restricciones a la pena de muerte* (arts. 4.2 y 4.4 Convención americana sobre derechos humanos), opinión consultiva OC-3/83 de 8 de septiembre de 1983, Serie A. Fallos y Opiniones, n° 3, párr. 60

¹⁹² Véase *Anuario* 1997, vol. II (segunda parte), párrs. 48 y 64, respectivamente

tratado en su aplicación a una o a varias de ellas¹⁹⁶. Más tarde, este concepto incompatible con el régimen de Viena fue descartado. Si bien los artículos pertinentes no dicen nada sobre la forma que debe tener esa declaración, el Relator Especial opina que necesariamente debe hacerse por escrito, como lo dispone además expresamente el artículo 23 de las Convenciones de Viena de 1969 y de 1986. Asimismo, ha advertido que no es conveniente adoptar una visión demasiado formalista de este «unilateralismo» de las reservas, haciendo referencia tanto a las reservas concertadas por Estados a los que unen relaciones particulares como a las reservas formuladas conjuntamente por diversos Estados¹⁹⁷. Por lo tanto, sería conveniente que en la Guía de la práctica se señalase que esas prácticas no son incompatibles con la definición de reservas y que ese es el objeto del proyecto de directriz 1.1.1.

ii) *Momento en que se formula la reserva*

497. El Relator Especial ha señalado que la larga enumeración de momentos en que se pueden formular las reservas que sigue a las definiciones de Viena no es ni exhaustiva ni demasiado rigurosa. Si bien hay en esa lista elementos derivados del régimen jurídico de las reservas, el hincapié que se hace en el momento tiene por objeto impedir que las posibles partes en un tratado formulen reservas en cualquier momento, lo que crearía una gran inseguridad en las relaciones contractuales. Con todo, convendría precisar que esta enumeración del apartado d del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena de 1969 es esencialmente igual a la del artículo 11 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 y ese es el objeto del proyecto de directriz 1.1.2.

iii) *Reservas de alcance territorial*

498. A este respecto, el Relator Especial recordó que la reserva se puede hacer también en el momento de la declaración de aplicación del tratado a un territorio que, por sí misma, no constituye por cierto una reserva. Esta práctica ya está consagrada sin que se hayan suscitado objeciones, y esto lo ha llevado a formular el proyecto de directriz 1.1.3. Por otro lado, como se desprende del artículo 29 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986, cuando un Estado hace declaraciones con el objeto de excluir de la aplicación de un tratado a una parte del territorio, lo que procura es «excluir o modificar» el efecto jurídico que el tratado hubiera tenido normalmente y, según el Relator Especial, esas declaraciones constituyen verdaderas reservas, *rationae loci* (proyecto de directriz 1.1.8).

iv) *Enunciado o denominación*

499. El último elemento formal de la definición de Viena, que tiene que ver con el rechazo del «nominalismo jurídico» y se desprende de la expresión «cualquiera que sea su enunciado o denominación», está consagrado desde hace mucho tiempo en la práctica y se refiere más que nada a las declaraciones interpretativas, pero no requiere ningún proyecto de directriz en particular.

v) *Exclusión o modificación de los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado*

500. Este elemento sustantivo de la definición de Viena, que es de carácter teleológico (la reserva tiene por objeto «excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado o a esa organización»), plantea problemas técnicos complejos.

501. Un primer grupo de problemas se deriva de la expresión «ciertas disposiciones», en la que se ha propuesto sustituir, equivocadamente a juicio del Relator Especial, «disposiciones» por «obligaciones» (párrafos 71 a 86 del tercer informe)¹⁹⁸. Por otro lado, hay en la práctica reservas transversales que no se refieren a ninguna disposición en particular pero que, por ejemplo, tratan de la forma en que el Estado o la organización internacional que sea el autor de la reserva tiene la intención de aplicar el tratado, ya sea en su conjunto o en relación con la exclusión de ciertas categorías de personas de la aplicación del tratado. Esa práctica se refleja en el proyecto de directriz 1.1.4.

502. Un segundo grupo de problemas dimana de la finalidad que persigue el autor de la reserva. El Relator Especial ha señalado que esta es la característica que separa a las reservas de las declaraciones o de las reservas de no reconocimiento, las cuales en realidad no constituyen reservas propiamente dichas, porque sus autores no desean producir ningún efecto sobre el tratado en sí mismo, sino excluir la aplicación del tratado en sus relaciones con la parte no reconocida. Por el contrario, constituyen verdaderas reservas cuando sus autores aclaran que no aceptan ninguna relación contractual con la entidad que no reconocen, lo que tiene una consecuencia directa sobre la aplicación del tratado entre las dos partes. Este tipo de declaraciones unilaterales se puede formular en el momento en que la entidad no reconocida pasa a ser parte en el tratado, es decir, después de que el autor ha expresado su consentimiento a considerarse vinculado por el tratado (proyecto de directriz 1.1.7).

vi) *«Excluir o modificar»—Reservas «extensivas»*

503. El alcance preciso de la expresión «reservas extensivas» plantea problemas muy delicados y se ha

¹⁹⁶ *Yearbook* 1950, vol II, págs 238 y 239, doc A/CN.4/23, párr 84

¹⁹⁷ Por ejemplo, los Estados de la Unión Europea que hacen, si no reservas, al menos declaraciones interpretativas u objeciones conjuntas

¹⁹⁸ Por ejemplo P-H Imbert, *Les réserves aux traités multilatéraux*, París, Pedone, 1978, pág 18

prestado a controversias de doctrina (párrafos 71 a 86 del tercer informe). En particular, el Relator Especial se pregunta si esa expresión se refiere también a una extensión de los derechos o las obligaciones del autor de la cuestión, sobre la cual el debate teórico es poco claro. A su juicio, se trata de una obligación unilateral asumida por su autor de hacer más de lo que le impone el tratado, lo que no constituye una reserva en el sentido de la definición de Viena porque el fundamento de su posible fuerza obligatoria no dimana del tratado. La ratificación, la firma o la adhesión son sólo el momento en que el Estado hace una declaración de asumir una obligación unilateral y si esto hace que quede obligado es por los motivos indicados por la CIJ en los asuntos *Essais nucléaires*¹⁹⁹ (proyecto de directriz 1.1.5).

504. Por otro lado, cuando un Estado o una organización internacional desea limitar, mediante una reserva, las obligaciones que le impone el tratado y al mismo tiempo limitar los derechos de las otras partes contratantes en virtud del tratado, se trata sin duda de una reserva. Si, en efecto, un Estado no puede mediante una reserva imponer a los otros Estados partes en el tratado una obligación nueva en relación con las obligaciones del derecho internacional general, no cabe duda de que el Estado que hace la reserva puede, mediante esa reserva, negar a las otras partes en el tratado los derechos que éste les otorga pero no los derivados del derecho internacional en general. Por el contrario, el Estado no podrá «legislar» y tratar de imponer a los otros Estados, por medio de una reserva, obligaciones que no se deriven del derecho internacional general (proyecto de directriz 1.1.6).

c) Definición de las declaraciones interpretativas

505. Posteriormente el Relator Especial, al presentar la sección C del capítulo I de su tercer informe dedicada a la distinción entre reservas y declaraciones interpretativas, hizo tres observaciones generales:

a) En primer lugar, en las Convenciones de Viena de 1969, 1978 y 1986 no se hace referencia a la cuestión de las declaraciones interpretativas, aunque la Comisión examinó esa cuestión en 1956 y 1962, al elaborar su proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados. Pese a llevar aparejados inconvenientes como la inexistencia de directrices e indicaciones sobre las declaraciones interpretativas, ello tiene la ventaja de que no existe «ortodoxia» en esta materia, a diferencia de lo que ocurre en el caso de las reservas. De esta forma la Comisión podrá introducir innovaciones en función de las convicciones de sus miembros y de las necesidades de la sociedad internacional contemporánea;

b) En segundo lugar, la práctica habitual en este ámbito (véanse los párrafos 231 a 234 del tercer informe) es que los Estados utilicen las declaraciones interpretativas con la misma frecuencia que las reservas. Se trata de una práctica muy antigua que se remonta al Acta Final

del Congreso de Viena de 1815²⁰⁰ y que se desarrolló paralelamente a la forma convencional multilateral;

c) En tercer lugar, dos complejos factores dificultan la definición de las declaraciones interpretativas: i) las incertidumbres terminológicas y ii) la política exterior y la estrategia jurídica de los Estados. En lo referente al primer factor, se plantea la cuestión de saber si el hecho de analizar por un método binario las declaraciones unilaterales que inciden en el tratado respecto del cual se formulan, oponiendo «reservas» a «declaraciones interpretativas», obedece a un exceso de racionalismo cartesiano. Si bien parece que en varios idiomas se ha adoptado ese método binario, en otros, como por ejemplo en el inglés, se ha adoptado en cambio un enfoque mucho más diversificado. Sin embargo, ninguno de los Estados, incluidos los países de habla inglesa, ni de las organizaciones internacionales que han respondido a los cuestionarios puso en duda la clasificación de las declaraciones unilaterales relativas a los tratados en dos categorías.

506. Lo mismo cabe decir de las incertidumbres terminológicas; los Estados no matizan en absoluto sus declaraciones o utilizan expresiones retorcidas o ambiguas (véanse los párrafos 255 a 259 del tercer informe).

507. Esa utilización tiene justamente su origen en la segunda dificultad: si bien en ocasiones se emplean esas locuciones por descuido, con mucha frecuencia se utilizan deliberadamente, ya sea para soslayar una prohibición de formular reservas, ya sea, como lo señaló un Estado en su respuesta al cuestionario, para evitar la mala impresión que podía generar la formulación de una reserva.

508. Al destacar que las declaraciones interpretativas se definieron durante la labor preparatoria de la Convención de Viena de 1969 de manera «negativa» indicando que no eran reservas, el Relator Especial señaló que había elaborado una definición positiva siguiendo un método empírico (proyecto de directriz 1.2). Esa definición contiene en primer lugar elementos comunes a las reservas y a las declaraciones interpretativas; en los dos casos se trata de una declaración unilateral, independientemente de su enunciado o denominación.

i) Formulación conjunta de una declaración interpretativa

509. La formulación conjunta constituye uno de los puntos comunes entre las reservas y las declaraciones interpretativas; sin embargo, la práctica no estaba bien establecida en lo relativo a las últimas. Véase al respecto el párrafo 268 del tercer informe (proyecto de directriz 1.2.1).

¹⁹⁹ Véase la nota 101 *supra*.

²⁰⁰ *British and Foreign State Papers, 1814-1815* (Londres), vol. II (1839), págs. 3 y ss.

ii) *Enunciado y denominación; formulación de una declaración interpretativa cuando estén prohibidas las reservas*

510. El Relator Especial se refirió al rechazo del nominalismo en la definición tanto de las reservas como de las declaraciones interpretativas («cualquiera que sea su enunciado o denominación») y se preguntó si no convendría tomar al pie de la letra lo que dijeran los Estados y mantener las denominaciones que asignaran a las declaraciones unilaterales que formularan en relación con los tratados (como había recomendado el Japón en 1969 o como sugirió un miembro de la Comisión en su 49.º período de sesiones, en 1997). No obstante, reconoció que ese método se apartaría mucho de la práctica y sería como si la Comisión dictara disposiciones legales, lo cual no era su función. Por ello adoptó un método más pragmático basándose sobre todo en la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y propuso que se tuviera en cuenta que, si bien el título de una declaración interpretativa no constituía prueba de su carácter jurídico, creaba una presunción —aunque no irrefutable—, sobre todo cuando el autor llamaba a ciertas declaraciones «reservas» y a otras «declaraciones interpretativas» (proyecto de directriz 1.2.2).

511. Asimismo, parece que cuando un tratado prohíbe la formulación de reservas, cabe presumir, también de modo no irrefutable, que el autor de la declaración interpretativa al respecto ha actuado de buena fe y se trata efectivamente de una declaración interpretativa (proyecto de directriz 1.2.3).

iii) *Declaraciones interpretativas condicionales*

512. Este tipo particular de declaración interpretativa se plantea cuando el Estado o la organización internacional que la formula supedita a ella su consentimiento a considerarse obligado por el tratado de que se trate, de la misma forma que el autor de una reserva supedita a ella su obligación²⁰¹.

513. Este tipo de declaración se acerca mucho más a las reservas que las declaraciones interpretativas simples, ya que el elemento temporal es aquí esencial, mientras que no sucede así en el caso de las declaraciones interpretativas simples. Por otra parte, si hay dudas respecto del alcance de las declaraciones interpretativas y su naturaleza, condicional o no, es necesario atenerse a la regla general de interpretación enunciada en el artículo 31 de la Convención de Viena de 1969 y, llegado el caso, completarla recurriendo a los medios complementarios previstos en el artículo 32 del mismo instrumento (proyecto de directriz 1.2.4).

²⁰¹ El Relator Especial citó el ejemplo de una declaración de este tipo formulada por Francia al firmar el Protocolo Adicional II del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe [véase Ratificación del Protocolo Adicional II (Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol. 936), pág. 420]

iv) *Declaraciones de política general y declaraciones informativas*

514. En cuanto a la primera categoría, se trata de declaraciones relativas al mismo tema que el tratado mediante las cuales no se pretende interpretarlo sino exponer la política del autor en lo referente al tema del tratado (proyecto de directriz 1.2.5).

515. La segunda categoría está integrada por las declaraciones informativas mediante las cuales su autor indica de qué modo se propone cumplir sus obligaciones en el plano interno sin que ello tenga incidencia alguna en los derechos y obligaciones de los demás Estados (proyecto de directriz 1.2.6).

516. En ninguno de los dos casos se trata ni de reservas ni de declaraciones interpretativas.

v) *Distinción entre reservas y declaraciones interpretativas*

517. Las declaraciones interpretativas se distinguen de las reservas en dos aspectos: a) el elemento temporal, es decir, el momento en que puede formularse la declaración, y b) el elemento teleológico, es decir, el objetivo previsto por el autor de la declaración. Este último es el elemento esencial de la distinción. Si bien la reserva tiene por objeto excluir o modificar el efecto jurídico de la aplicación al autor de las disposiciones del tratado, la declaración interpretativa únicamente tiene por objeto interpretar el tratado o algunas de sus disposiciones, es decir, precisar o aclarar su sentido y su alcance, como lo ha destacado en varias ocasiones la jurisprudencia de la CPIJ y la CIJ. Por consiguiente, la interpretación no pone en tela de juicio la vigencia de las disposiciones a las cuales se refiere ni su efecto jurídico. El Relator Especial señaló que ello derivaba directamente de la definición de las declaraciones interpretativas (proyecto de directriz 1.2), pero que, si la Comisión lo consideraba preferible, se podría repetir en directrices todavía más explícitas (proyectos de directriz 1.3.0 y 1.3.0 bis), especificando los criterios tanto de las reservas como de las declaraciones interpretativas. Si bien hay ventajas y desventajas tanto en especificar los criterios como no hacerlo, en la Guía de la práctica debería señalarse esta cuestión a la atención de los Estados.

518. En cuanto al elemento temporal, el Relator Especial consideró que, a diferencia de las reservas²⁰², no era necesario incluirlo en la definición general de las declaraciones interpretativas (salvo de las declaraciones interpretativas condicionales). En efecto, si bien las reservas tienen que ver con la concertación del tratado, las declaraciones interpretativas están relacionadas con su interpretación, que, a su vez, es un elemento de su aplicación, y a ese respecto el Relator Especial coincide con su pre-

²⁰² El Relator Especial consideró asimismo que la inclusión del elemento temporal en la definición de las reservas había sido desafortunada y que más bien se debía a motivos de política jurídica relacionados con la estabilidad de las relaciones convencionales y la unidad de los tratados

decesor, Sir Humphrey Waldock, que afirmaba que podían formularse declaraciones interpretativas en cualquier momento, durante las negociaciones o en la firma, la ratificación, o más adelante, durante la aplicación práctica posterior.

vi) *Método de aplicación de la distinción entre reservas y declaraciones interpretativas*

519. El Relator Especial señaló que, de hecho, debía recurrirse al método previsto en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena de 1969, consistente en la mera aplicación de la regla general de interpretación de los tratados. Sobre la base de la práctica de los Estados, pero, sobre todo, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Arbitraje en la causa del Mar de Iroise, las declaraciones unilaterales debían interpretarse de buena fe siguiendo el sentido que había que atribuir a sus términos en su contexto, sin perjuicio de verificar el resultado que podría producir este método recurriendo a los medios complementarios de interpretación, especialmente en el curso de los trabajos preparatorios (proyecto de directriz 1.3.1).

vii) *Alcance de las definiciones*

520. Al señalar el hecho de que durante las deliberaciones de la Comisión sobre la definición de las reservas se habían planteado numerosas cuestiones relativas a su legitimidad, el Relator Especial precisó que definir no significaba reglamentar y que todas las definiciones que figuraban en la primera parte de la Guía de la práctica no afectaban su régimen jurídico y, en particular, de su legitimidad. Una reserva (o una declaración interpretativa) puede ser legítima o ilegítima, pero sigue siendo una reserva o una declaración interpretativa. Precisamente, el hecho de que la declaración unilateral de que se trate sea una reserva o una declaración interpretativa permite determinar su legitimidad (proyecto de directriz 1.4).

2. RESUMEN DEL DEBATE

521. Con respecto a los proyectos de directriz 1.1.5 y 1.1.6, relativos al problema de las llamadas reservas «extensivas», algunos miembros señalaron que eran muy poco usuales los ejemplos de declaraciones encaminadas a aumentar las obligaciones de su autor [como la declaración del representante de la Unión Sudafricana en relación con el GATT²⁰³ citada por el Relator Especial (véase el párrafo 208 del tercer informe)]; las declaraciones de ese tipo podrían ser, ora una propuesta de extensión de un tratado que los otros Estados tal vez aceptaran o no, ora una declaración interpretativa consistente en una interpretación extensiva, aunque fuera errónea, de las obligaciones de su autor en virtud del tratado. En rela-

ción con el proyecto de directriz 1.1.6, algunos miembros observaron que se limitaba a ofrecer una definición *a contrario* de las reservas, sobre todo teniendo en cuenta el principio de reciprocidad que se aplicaba rigurosamente en materia convencional, y que se asemejaba mucho a la definición general de las reservas. Por otra parte, muchos miembros declararon que en realidad era imposible «añadir una nueva disposición a un tratado» mediante una sencilla declaración unilateral.

522. Otros miembros recordaron los problemas que había provocado la formulación de los proyectos de directriz 1.1.5 y 1.1.6. Se citó el caso hipotético de una reserva formulada a determinado tratado mediante la cual se suspendiera la aplicación de un régimen general derivado del derecho internacional: esa reserva surtiría el efecto de establecer nuevamente obligaciones derivadas del derecho internacional general. Por otra parte, en el caso de un tratado en el que se prohibieran las reservas pero se permitiera la formulación de declaraciones de carácter «transitorio» destinadas a reducir el alcance y la naturaleza de las obligaciones impuestas por el tratado (por ejemplo el reciente Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional²⁰⁴), cabría preguntarse si ese instrumento creaba dos regímenes, uno aplicable a las reservas y otro a las declaraciones, o solamente se trataba de una opción ofrecida a los Estados. También se expresó la opinión de que los dos proyectos podrían fusionarse en una sola directriz concerniente en esencia a la «modificación» del propio tratado (y no de sus efectos) mediante una declaración que no constituyera reserva. Para algunos miembros, los problemas que planteaban ambos proyectos de directriz tenían un alcance mucho más amplio que el de simples problemas de redacción. En realidad, no consideraban convincente la distinción plasmada en los proyectos de directriz 1.1.5 y 1.1.6 entre las declaraciones unilaterales que constituían reservas y las que no las constituían. En el ámbito de la teoría del derecho no había diferencia sustancial entre una declaración encaminada a aumentar las obligaciones de su autor y otra encaminada a limitarlas. Por consiguiente, dado que en la definición de Viena sólo se hablaba de «modificar» cabía preguntarse si había alguna razón para excluir de la definición de reserva las declaraciones encaminadas a aumentar las obligaciones de su autor, las cuales, en virtud del efecto de la reciprocidad y en determinados casos, podrían dar por resultado también un aumento de las obligaciones de las otras partes.

523. Por el contrario, otros miembros consideraron que los dos proyectos de directriz podrían resultar muy útiles para la Guía de la práctica, particularmente en el caso de declaraciones destinadas a aumentar las obligaciones de su autor que se presentaran yuxtapuestas a declaraciones encaminadas a limitar las obligaciones de su autor y que, por consiguiente, constituyeran reservas. Aunque en la presente etapa no era necesario pronunciarse sobre la naturaleza de las primeras o sobre si se regían por las normas aplicables a los actos jurídicos unilaterales, sería posible aclarar así el concepto de reserva. En este sentido se recordó también la posibilidad de sustituir determina-

²⁰³ Véase Protocolo de modificación de ciertas disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, pág. 39

²⁰⁴ A/CONF 183/9

das obligaciones dimanantes de tratados por otras más o menos equivalentes²⁰⁵.

524. Al resumir el debate el Relator Especial subrayó en primer lugar el verdadero sentido de los términos utilizados en la definición de Viena. Parecía inexacto afirmar que una reserva estuviera encaminada a limitar el efecto jurídico de las disposiciones de un tratado. El término empleado era «modificar», y de ello se derivaba el problema de las reservas extensivas.

525. En segundo lugar, el Relator Especial consideraba que las declaraciones encaminadas a aumentar las obligaciones de su autor constituían actos jurídicos unilaterales aun cuando muchos miembros estimaban que la Comisión no debía pronunciarse a la sazón sobre su naturaleza. La cuestión era saber si un Estado podía, mediante una reserva, aumentar las obligaciones de otros Estados: a su juicio, era preciso establecer una distinción entre dos aspectos muy diferentes:

a) El primero consistía en saber si mediante una reserva podían aumentarse aquellas obligaciones de las partes que se derivaban normalmente del tratado. Sin duda, en tal caso se trataba de la función normal de toda reserva encaminada a neutralizar determinadas disposiciones del tratado;

b) El segundo aspecto tenía que ver con la posibilidad de que el Estado que formulaba la reserva aumentara las obligaciones de las otras partes contratantes, no sólo en relación con el tratado mismo sino además en relación con el derecho internacional general. Difícilmente cabría suponer que un Estado pudiese modificar el derecho internacional consuetudinario a su favor mediante la formulación de una reserva. No parecía razonable considerar que una «reserva» modificativa pudiese dar lugar al aumento de los derechos del Estado que la formulase y de las obligaciones de los otros Estados contratantes en oposición al derecho internacional consuetudinario; además, calificar tales prácticas como «reservas» tendría efectos muy graves para los pequeños Estados en desarrollo: dado que carecían de servicios jurídicos bien organizados, después de transcurrido algún tiempo se consideraría que las habían aceptado y, de esta manera, quedarían obligados en virtud de una especie de «legislación» impuesta desde el exterior.

526. En tercer lugar, el Relator Especial observó que varias declaraciones unilaterales denominadas «reservas» por su autor (por ejemplo la reserva de Israel a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, que tenía por objeto añadir el Escudo de David a los emblemas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja²⁰⁶), ya fuera que estaban encaminadas a aumentar o a disminuir las obligacio-

nes de los otros Estados contratantes, eran en realidad propuestas de enmienda que sólo entraban en vigor cuando eran aceptadas por las otras partes. Habida cuenta de la aceptación tácita de las reservas, el problema consistía en saber si tales «reservas» lo eran en realidad.

527. En lo que respecta al proyecto de directriz 1.1.7, varios miembros, sin dejar de reconocer la utilidad práctica que revestía la aclaración del carácter de las declaraciones de no reconocimiento, se preguntaron si éstas verdaderamente constituían reservas. Dichos miembros señalaron que, en realidad, lo que se excluía entre la parte que hacía la declaración y la parte no reconocida era la aplicación del tratado en su conjunto y no las disposiciones particulares de éste, lo cual no estaba en consonancia con la letra de la definición de Viena. Por otra parte, se señaló que toda reserva presuponía una relación convencional o contractual entre la parte que hacía la reserva y las demás partes en el tratado, mientras que en el caso de las declaraciones de no reconocimiento lo que no se reconocía era precisamente la capacidad contractual de una de las partes. Por consiguiente, dichas declaraciones pertenecían más al ámbito del reconocimiento o de las declaraciones interpretativas que al ámbito del derecho de los tratados y, en especial, al de las reservas. Estas últimas se hacían simplemente en el momento de expresar el consentimiento a considerarse vinculado por el tratado. También se señaló que esta cuestión rebasaba el ámbito del derecho de los tratados y entraba en un ámbito eminentemente político, donde era preciso distinguir entre el no reconocimiento de los Estados, los gobiernos y las organizaciones internacionales. Puesto que la práctica de este tipo de declaración estaba suficientemente extendida, no era conveniente utilizar una calificación «preventiva» que desalentara una mayor participación de los Estados en los tratados.

528. Según otro punto de vista, este proyecto de directriz se alejaba considerablemente del régimen de Viena y podría dar a entender que la Comisión tenía el propósito de incluir, dentro del régimen de reservas, el mayor número posible de situaciones. A ese respecto, se señaló que si las declaraciones podían hacerse en cualquier momento se estaría cada vez más lejos de las características «clásicas» de las reservas. Por otra parte, estas declaraciones podrían producir efectos diversos en función del tipo de tratados (como, por ejemplo, los tratados restringidos) respecto de los cuales se hubieran formulado. También se señaló que el hecho de clasificar estas declaraciones como reservas y tratar de aplicar el régimen correspondiente a éstas podría, en algunos casos, producir resultados absurdos, por ejemplo, en el caso en que las reservas estuvieran prohibidas por el tratado o cuando la totalidad de las partes no se reconocieran entre ellas.

529. A juicio de algunos de los miembros, la cuestión debería plantearse de manera inversa, es decir, habría que determinar si una reserva podría excluir la aplicación del tratado en su totalidad entre dos partes; de ser así, debía dilucidarse si ello obedecía necesariamente a un no reconocimiento. Por lo demás, se indicó la posibilidad de vincular dichas declaraciones a las «ofertas» o los acuerdos *inter se*. Se indicó también la posibilidad de seguir examinando este aspecto o de estudiarlo juntamente con las declaraciones interpretativas.

²⁰⁵ Se recordó el caso de una reserva formulada por el Japón al Convenio sobre la ayuda alimentaria, de 1971 (en virtud del cual las partes contratantes se comprometían a proporcionar trigo a determinados países), de conformidad con la reserva, el Japón, que no era productor de trigo, indicó que proporcionaría una cantidad de arroz equivalente en términos «monetarios» a la cantidad de trigo que le habría correspondido suministrar (Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol. 800, pág. 197).

²⁰⁶ Véase Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol. 75, págs. 437 a 439.

530. Otros miembros dijeron que éstas eran declaraciones unilaterales, *sui generis*, «declaraciones de exclusión», o declaraciones que producían efectos asimilados a las reservas que cabían igualmente en la Guía de la práctica (quizá en un anexo de ésta), puesto que expresaban una realidad irrefutable. También se expresó la opinión de que éstas eran declaraciones de rechazo de la capacidad de la entidad no reconocida para entablar relaciones convencionales derivadas principalmente de la concertación de los tratados, y que en el proyecto de directriz debía indicarse que dichas declaraciones no constituían reservas.

531. Por otro lado, a juicio de algunos miembros esas declaraciones constituían verdaderas reservas en razón de que tenían por objeto modificar el efecto jurídico del tratado, lo cual era propio de la reserva. No obstante, el régimen general de las reservas no sería enteramente aplicable a dichas declaraciones: el tratado, en su conjunto, estaba excluido y el momento de su formulación podía variar. A ese respecto, los miembros de la Comisión recordaron que aun cuando el reconocimiento constituyera una cuestión política, producía efectos jurídicos.

532. Al resumir las deliberaciones el Relator Especial señaló que se habían planteado cinco problemas principales:

a) Primeramente, un problema filosófico: aun cuando se tratara de una cuestión «política» como, al parecer, creían varios miembros, en su opinión era necesario examinar la cuestión procurando definir sus consecuencias en el plano jurídico;

b) Independientemente del hecho de que solía llamarseles corrientemente «reservas», lo que constituiría una indicación en ese sentido, el Relator Especial no comprendía la razón por la que las reservas no podían formularse *rationae personae* o *rationae materiae* o *rationae loci*. Por otra parte, si podía excluirse la aplicación de un tratado en su totalidad entre dos partes mediante la presentación de una objeción, el Relator Especial se preguntaba la razón por la cual no podía hacerse lo propio mediante una reserva. Atenerse estrictamente a la expresión «ciertas disposiciones» que figuraba en la definición de Viena era, a su parecer, demasiado formalista;

c) No obstante, el Relator Especial reconoció que, aun cuando se las calificase como reservas, algunas características del régimen de las reservas (objeciones, etc.) no eran aplicables a este respecto;

d) También faltaba resolver el problema del momento exacto en que podían hacerse dichas declaraciones; si se quería salvaguardar la estabilidad de las relaciones convencionales, sería sin duda conveniente precisar que dichas declaraciones podían hacerse en el momento en que la entidad no reconocida pasara a ser parte en un tratado en lugar de que pudiera hacerlo en cualquier momento;

e) Dado que las «calificaciones» *sui generis* no eran satisfactorias, al concluir el debate el Relator Especial, al contrario de lo que pensaba inicialmente, se inclinaba a considerar que, si no se trataba de reservas, podría tratarse de declaraciones similares a las declaraciones de política general o a las declaraciones hechas respecto del

tratado y que no tenían efectos jurídicos sobre la aplicación de éste, pero, aun así, no estaba seguro de ello.

533. En cuanto a la presentación de la sección C del capítulo I del informe, relativa a las declaraciones interpretativas, varios miembros expresaron su acuerdo con la observación del Relator Especial de que en el ámbito de las declaraciones interpretativas reinaba un gran desorden terminológico, y creían que los proyectos de directriz 1.2 y 1.2.2 solucionaban ese problema y contribuían a evitar situaciones vagas y ambiguas. Según un punto de vista, además del problema de la terminología, la definición cumplía una función esencial en la determinación de la legitimidad de una declaración unilateral. No obstante, los miembros se hicieron eco de la opinión del Relator Especial, que pensaba que era conveniente definir primero la declaración interpretativa antes de abordar la cuestión de su legitimidad. Se señaló también que el régimen de Viena no descartaba totalmente el problema de las declaraciones interpretativas, pues las reglas generales de interpretación previstas en él eran aplicables a dichas declaraciones. No obstante, la distinción entre declaraciones interpretativas y reservas solía ser muy difícil. También se señaló que las reglas generales de interpretación enunciadas en la Convención de Viena de 1969 tenían por objeto aclarar el sentido de un acuerdo de voluntades entre dos o más partes y que la Comisión debería examinar si era posible trasladarlas a las declaraciones interpretativas, es decir, a las declaraciones unilaterales.

534. Otros miembros se preguntaron si era necesario estudiar detalladamente las declaraciones interpretativas y llegaron a la conclusión de que era preciso hacerlo; sobre ese particular, subrayaron que era preciso definir claramente los criterios por los cuales se podían distinguir de las reservas (todas las propuestas del Relator Especial, salvo quizá la propuesta del proyecto de directriz 1.2.1, relativa a la formulación conjunta de una declaración interpretativa, tenían precisamente por objeto definir los criterios a ese respecto). No obstante, se expresó la opinión de que las declaraciones interpretativas condicionales constituían verdaderas reservas y debían considerarse como tales, especialmente en lo relativo a su conformidad con el objeto y el fin del tratado.

535. En cuanto a las declaraciones interpretativas condicionales, cabía preguntarse si, en el caso de que otra de las partes contratantes hiciera una objeción, dichas declaraciones representarían un obstáculo para la entrada en vigor del tratado entre el Estado que hacía la declaración condicional y el Estado que planteaba la objeción.

536. En cuanto a la definición de las declaraciones interpretativas (proyecto de directriz 1.2), varios miembros consideraron que respondía adecuadamente a la necesidad de disipar los malentendidos en torno al concepto de declaración interpretativa. Se señaló asimismo que esta definición podría incluir su atributo negativo, a saber, que las declaraciones interpretativas no tienen por objeto ni modificar ni excluir el efecto jurídico de algunas disposiciones del tratado.

537. Otros miembros subrayaron que era preciso establecer un límite al alcance demasiado subjetivo de la

interpretación (denotado, sobre todo, por la expresión «que el declarante atribuye al tratado»), para lo cual debería indicarse que ésta debería ser conforme a la letra y al espíritu de la disposición pertinente del tratado.

538. Según otro punto de vista, las declaraciones interpretativas solían hacerse en relación con las condiciones de la entrada en vigor del tratado (como en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar) y este elemento también podría incluirse en la definición.

539. El Relator Especial subrayó que, básicamente, una definición no entrañaba un contenido normativo propiamente dicho, pero que era un requisito previo indispensable para determinar la legitimidad de estas declaraciones unilaterales y para aplicar el régimen jurídico relativo a unas y otras. Evidentemente, el principal problema era determinar si el régimen jurídico podía aplicarse al ámbito de las declaraciones interpretativas y en qué medida. Sin embargo, era prematuro examinar esa cuestión. En opinión del Relator Especial, si bien en muchos casos el régimen de las declaraciones interpretativas condicionales podía ajustarse al de las reservas, al parecer, ambas nociones no podían asimilarse totalmente.

C.—Texto del proyecto de directrices sobre reservas a los tratados aprobado provisionalmente por la Comisión en primera lectura

1. TEXTO DEL PROYECTO DE DIRECTRICES

540. Se reproduce a continuación el texto de los proyectos de directriz 1.1, 1.1.1 [1.1.4], 1.1.2, 1.1.3 [1.1.8], 1.1.4 [1.1.3] y 1.1.7 [1.1.1], aprobados provisionalmente por la Comisión en primera lectura en su 50.º período de sesiones. Los números entre corchetes indican los números que las directrices tenían inicialmente en el tercer informe del Relator Especial.

LAS RESERVAS A LOS TRATADOS

GUÍA DE LA PRÁCTICA

1. Definiciones

1.1 Definición de reservas

Se entiende por «reserva» una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado o por una organización internacional al firmar, ratificar, confirmar oficialmente, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, o al hacer una notificación de sucesión en un tratado, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado o a esa organización.

1.1.1 [1.1.4] Objeto de las reservas²⁰⁷

Una reserva puede referirse a una o varias disposiciones de un tratado o, de manera más general, a la forma en que un Estado o

una organización internacional se propone aplicar el conjunto del tratado.

1.1.2 Casos en que puede formularse una reserva

Los casos en que puede formularse una reserva de conformidad con la directriz 1.1 abarcan todos los medios de expresar el consentimiento a quedar obligado por un tratado mencionados en el artículo 11 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales.

1.1.3 [1.1.8] Reservas de alcance territorial²⁰⁸

Una declaración unilateral por la cual un Estado se propone excluir la aplicación de un tratado o de algunas de sus disposiciones en un territorio en el que ese tratado sería aplicable en ausencia de tal declaración constituye una reserva.

1.1.4 [1.1.3] Reservas formuladas al notificar alguna aplicación territorial

Una declaración unilateral por la cual un Estado se propone excluir o modificar el efecto jurídico de algunas disposiciones de un tratado en su aplicación a un territorio respecto del cual el Estado hace una notificación de la aplicación territorial del tratado constituye una reserva.

1.1.7 [1.1.1] Formulación conjunta de una reserva

La formulación conjunta de una reserva por varios Estados u organizaciones internacionales no afecta al carácter unilateral de esa reserva.

[...]

La definición de una declaración unilateral como reserva se entiende sin perjuicio de la permisividad y de los efectos que pueda tener en virtud de las normas relativas a las reservas²⁰⁹.

2. TEXTO DEL PROYECTO DE DIRECTRICES CON COMENTARIOS

LAS RESERVAS A LOS TRATADOS

GUÍA DE LA PRÁCTICA

1. Definiciones

1.1 Definición de reservas

Se entiende por «reserva» una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado o por una organización internacional al firmar, ratificar, confirmar oficialmente, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, o al hacer una notificación de sucesión en un tratado, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado o a esa organización.

²⁰⁷ Se reexaminará este proyecto de directriz tomando en cuenta el debate sobre las declaraciones interpretativas, y se podrá formular nuevamente en caso necesario

²⁰⁸ Se revisará el texto del proyecto de directrices juntamente con la directriz 1.1.1 en el 51.º período de sesiones de la Comisión

²⁰⁹ El título y la ubicación de esta directriz se determinarán mas adelante

Comentario

1) La definición de reservas escogida por la Comisión no es más que el texto combinado de las definiciones que figuran en las Convenciones de Viena de 1969, 1978 y 1986, sin ninguna modificación.

2) Este método, que la Comisión se propone seguir en principio respecto de los otros capítulos de la Guía de la práctica, está en consonancia con la posición que adoptó en su 47.º período de sesiones²¹⁰ y que confirmó en su 49.º período de sesiones²¹¹ según la cual no corresponde modificar las disposiciones pertinentes de las Convenciones de Viena de 1969, 1978 y 1986. Esta orientación fue aprobada en general durante las deliberaciones sobre el tema de las reservas a los tratados que tuvieron lugar en la Sexta Comisión de la Asamblea General.

3) En el apartado *d* del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena de 1969 figura la siguiente definición de reserva:

Se entiende por «reserva» una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado

4) Esta definición reproduce el texto aprobado por la Comisión en su 18.º período de sesiones en su proyecto de artículos definitivos sobre el derecho de los tratados²¹² y no dio lugar a debates prolongados ni en el seno de la Comisión²¹³ ni en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados²¹⁴. El texto de la definición fue utilizado en las Convenciones de Viena de 1978 y 1986²¹⁵, sin que se suscitara discusiones.

5) Por otra parte, conviene tener presente que en el apartado *j* del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención

de Viena de 1978 y en el apartado *d* del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena de 1986 no sólo se reproduce pura y simplemente el texto del apartado *d* del párrafo 1 del artículo 2 de la definición de la Convención de Viena de 1969 sino que se añade una aclaración que se consideró necesaria en razón del objeto de los dos instrumentos:

a) En la Convención de Viena de 1978 se aclara que se puede formular una reserva en el momento en que el Estado hace «una notificación de sucesión en un tratado»;

b) En la Convención de Viena de 1986 se agrega que una organización internacional puede hacer una reserva cuando expresa su consentimiento a considerarse obligada por un tratado mediante un acto de confirmación formal.

6) Son estas diferencias las que hicieron necesaria la inclusión, a los fines de la Guía de la práctica, de un texto combinado que incluyese las modificaciones de 1978 y de 1986 en lugar de reproducir pura y simplemente el texto de 1969.

7) Esta definición, que está consagrada en la jurisprudencia²¹⁶ y que los Estados utilizan en la práctica cuando hacen reservas o responden a las reservas formuladas por otras partes contratantes, también ha sido aprobada en general por la doctrina, aunque algunos autores han criticado algunos aspectos particulares y han sugerido algunas modificaciones o agregados²¹⁷.

8) Esta es también la posición de la Comisión aunque algunos de sus miembros han señalado las lagunas o las ambigüedades de la definición de Viena. En particular, se ha dicho:

a) Que esta definición mezcla elementos puramente de definición con otros que dimanar directamente del régimen jurídico de las reservas, sobre todo en cuanto al momento en que se puede hacer una reserva;

b) Que, por otra parte, la enumeración de esos momentos, aun después de las modificaciones efectuadas en 1978 y en 1986, es incompleta y no corresponde a la lista de modalidades de expresión del consentimiento a considerarse obligado, que figura en el artículo 11 de las Convenciones de Viena de 1969 y de 1986;

c) Que la definición debería completarse mencionando la forma en que se deben presentar las reservas, que necesariamente debe ser por escrito, y

²¹⁰ Véase la nota 178 *supra*

²¹¹ Véase *Anuario* 1997, vol II (segunda parte), párrs 116 a 123

²¹² Véase *Anuario* 1966, vol II, pág 189, doc A/6309/Rev I (Parte II)

²¹³ Véanse las definiciones propuestas por Brierly (*Yearbook* 1950, vol II, pág 238, doc A/CN.4/23), Fitzmaurice (*Anuario* 1956, vol II, pág 103, doc A/CN.4/101) y Waldock (*Anuario* 1962, vol II, pág 31, doc A/CN.4/144) y las propuestas del Comité de Redacción en el 14.º período de sesiones (*Anuario* 1962, vol I, 666.ª sesión, pág 256) y en el 17.º período de sesiones (*Anuario* 1965, vol I, 820.ª sesión, pág 319)

²¹⁴ Véanse *Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, primer período de sesiones, Viena, 26 de marzo al 24 de mayo de 1968* (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta S 68 V 7), *ibid*, *segundo período de sesiones, Viena, 9 de abril-22 de mayo de 1969* (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta S 70 V 6), e *ibid*, *períodos de sesiones primero y segundo, Viena, 26 de marzo-24 de mayo de 1968 y 9 de abril-22 de mayo de 1969* (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta S 70 V 5)

²¹⁵ Durante la elaboración de los proyectos de artículo de la Comisión sobre ese punto se propuso una simplificación de la definición, a fin de evitar la larga enumeración de momentos en que se puede hacer una reserva que figuraba en la definición de 1969 [véase *Anuario* 1974, vol II (primera parte), pág 299, doc A/9610/Rev I], no obstante, en su 33.º período de sesiones, la Comisión volvió a utilizar un texto tomado literalmente del de 1969 [véase *Anuario* 1981, vol II (segunda parte), págs 126 y 128]

²¹⁶ Véanse, por ejemplo, el laudo arbitral de 30 de junio de 1977 (nota 193 *supra*), págs 169 y 170, párrs 54 y 55 (el Tribunal arbitral comprobó que las partes habían aceptado que el apartado *d* del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena de 1969, en la que ninguno de los dos era Parte, definía correctamente las reservas y habían actuado según esa premisa), o la decisión de la Comisión Europea de Derechos Humanos del 5 de mayo de 1982 en la causa *Temeltasch* (nota 194 *supra*), págs 130 a 132, párrs 69 a 82

²¹⁷ Véanse sobre todo las definiciones propuestas por Imbert, *op cit* (nota 198 *supra*) y M M Whiteman, *Digest of International Law* (Washington DC), United States Printing Office, vol 14 (1970), pág 137, véase también F Horn, *Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties*, La Haya, TMC Asser Instituut, Amsterdam, Oxford, North-Holland, 1988, pág 83

d) Que debería aclararse que una reserva puede tener por objeto limitar los efectos jurídicos de las disposiciones a las que se refieren; para uno de los miembros, sólo puede tener ese efecto.

9) La Comisión, no obstante, ha considerado que esas objeciones no constituyen motivo suficiente para dudar de la definición de Viena, que podría y debería ser completada y aclarada en la Guía de la práctica, ya que ésta es precisamente su finalidad y su razón de ser.

10) Desde el momento en que la definición escogida a los fines de la Guía de la práctica es la que se desprende de las Convenciones de Viena de 1969, 1978 y 1986, el comentario del apartado d del párrafo 1 del artículo 2 del proyecto de artículo de la Comisión reproducido en la Convención de Viena de 1969 conserva toda su vigencia:

La definición de las reservas se hace necesaria porque los Estados, al firmar, ratificar, aceptar, aprobar un tratado o adherirse a él, suelen formular declaraciones acerca de cómo entienden algunos asuntos o sobre su interpretación de determinadas disposiciones. Tal declaración puede ser una mera aclaración de la actitud del Estado o puede ser equivalente a una reserva, según modifique o no la aplicación de las cláusulas del tratado ya aprobado o la excluya²¹⁸

11) Esta explicación demuestra claramente la función de las definiciones contenidas en esta primera parte de la Guía de la práctica²¹⁹: lo que se procura es distinguir las reservas de las otras declaraciones unilaterales que se hacen respecto de un tratado (de las cuales la categoría más importante es la de las declaraciones interpretativas), ya que unas y otras se rigen por regímenes jurídicos distintos.

12) Asimismo, conviene tener presentes los límites de toda empresa de este tipo: cualquiera sea la finalidad de definir las reservas y distinguirlas de otras declaraciones unilaterales que tienen algunos puntos en común con ellas, siempre subsistirá necesariamente un cierto grado de incertidumbre. Esta incertidumbre es inherente a la elaboración de cualquier definición, ya que se trata de una operación de interpretación que depende, en parte, de las circunstancias y en parte del contexto y que, inevitablemente, pone en juego la subjetividad del intérprete.

1.1.1 [1.1.4] *Objeto de las reservas*²²⁰

Una reserva puede referirse a una o varias disposiciones de un tratado o, de forma más general, a la

manera en que un Estado o una organización internacional se propone aplicar el conjunto del tratado.

Comentario

1) Tomada al pie de la letra, la definición de Viena (véase el proyecto de directriz 1.1 *supra*) parece excluir de la categoría general de reserva a las declaraciones unilaterales que no se refieren a una disposición determinada o a algunas disposiciones de un tratado, sino al texto en su conjunto. El proyecto de directriz 1.1.1 tiene por objeto tener en cuenta la práctica muy difundida de las reservas transversales en la interpretación de esta definición, cuya lectura estricta daría lugar a una interpretación sumamente limitada y contraria a la realidad.

2) El texto escogido por los autores de las Convenciones de Viena de 1969, 1978 y 1986 ha sido criticado, en primer lugar, en razón del vínculo que establece «entre la reserva y las disposiciones de una convención [...]». En efecto, una reserva no tiende a eliminar una *disposición* sino una *obligación*²²¹. Esta crítica no parece fundada en la medida en que se refiere a la definición que figura en el apartado d del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena de 1969, que procura aclarar que el objeto que busca el autor de la reserva es excluir o modificar los efectos jurídicos de las disposiciones del tratado a las que se refiere y no a las disposiciones propiamente dichas²²².

3) La segunda crítica hecha a este texto tiene que ver con la utilización de la expresión «ciertas disposiciones». Se ha dicho que el uso de esta expresión obedece al deseo muy encomiable de descartar las reservas demasiado generales e imprecisas que tienden a anular el carácter obligatorio del tratado²²³, consideración de la que cabe preguntarse si «tiene lugar en el artículo 2. Se refiere, en efecto, a la validez de las reservas. Ahora bien, el hecho de que una declaración entrañe consecuencias abusivas no significa que no se deba considerar como una reserva. Por otra parte, la práctica ofrece numerosos ejemplos de reservas perfectamente válidas que no se refieren a disposiciones particulares, como las que excluyen la aplicación de la totalidad del tratado en circunstancias bien determinadas»²²⁴.

²¹⁸ *Anuario* 1966, vol II, pág 209, doc A/6309/Rev 1 (Parte II), párrafo 11 del comentario al artículo 2

²¹⁹ El «Plan provisional del estudio» que figura en el párrafo 37 del segundo informe del Relator Especial (véase la nota 182 *supra*) comprende seis partes: I Unidad o diversidad del régimen jurídico de las reservas a los tratados multilaterales, objeto del capítulo II del segundo informe, II Definición de reserva, III Formulación y retirada de las reservas, de las aceptaciones y de las objeciones, IV Efectos de las reservas, de las aceptaciones y de las objeciones, V Situación de las reservas, de las aceptaciones y de las objeciones en caso de sucesión de los Estados, y VI Solución de controversias relacionadas con el régimen de las reservas

²²⁰ Este proyecto de directriz será examinado nuevamente a la luz de las deliberaciones relativas a las declaraciones interpretativas y podría ser redactado de nuevo si procediera (En cuanto a las condiciones de adopción de este proyecto, véase el párrafo 12 del comentario al proyecto de directriz 1.1)

²²¹ Imbert, *op cit* (nota 198 *supra*), pág 15

²²² El texto del párrafo 1 del artículo 21 de las Convenciones de Viena de 1969 y de 1986 es más discutible, ya que define los efectos jurídicos de las reservas como modificaciones de las disposiciones a las que se refiere

²²³ Véanse, por ejemplo, los comentarios del Gobierno de Israel acerca del proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados (*Anuario* 1965, vol II, pag 14, doc A/CN.4/177 y Add 1 y 2) o la declaración del representante de Chile en el primer período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados (nota 214 *supra*), *Actas resumidas de las sesiones plenarias y de las sesiones de la Comisión Plenaria*, pág 24, cuarta sesión de la Comisión Plenaria, part 5

²²⁴ Imbert, *op cit* (nota 198 *supra*), págs 14 y 15 En el mismo sentido, véase, por ejemplo R Szafarz, «Reservations to multilateral treaties», *Polish Yearbook of International Law*, vol III (1970), Varsovia, Ossolineum, 1972, pág 296

4) Es conveniente no confundir, por una parte, una reserva general caracterizada por la imprecisión y el carácter general de su contenido y, por otra parte, una reserva transversal, que tiene que ver con la forma en que el Estado o la organización internacional que la formula aplicará el tratado en su conjunto pero a la que no se aplica necesariamente la crítica de la imprecisión.

5) La práctica de las reservas transversales es extremadamente corriente y, como tal, jamás ha suscitado objeciones concretas. Se trata de las que excluyen o limitan la aplicación del tratado:

- a) A ciertas categorías de personas²²⁵;
- b) A objetos, especialmente vehículos²²⁶;
- c) O a ciertas situaciones²²⁷;
- d) O a ciertos territorios (véase el proyecto de directriz 1.1.3 *infra*);
- e) O en ciertas circunstancias determinadas²²⁸;

²²⁵ Véase, por ejemplo, la reserva hecha por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativa a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al personal de las fuerzas armadas y a los detenidos (Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol 1007, pág 396) o la presentada por Guatemala en relación con la aplicación de la Convención sobre formalidades aduaneras para la importación temporal de vehículos particulares de carretera sólo a personas físicas (*ibid*, vol 282, pag 347)

²²⁶ Véase, por ejemplo, la reserva de Yugoslavia en el sentido de que las disposiciones de la Convención relativa a la unificación de ciertas disposiciones sobre los abordajes en la navegación interior no se aplicarán a los barcos destinados exclusivamente al ejercicio del orden público (*ibid*, vol 572, pág 159) o la reserva de Alemania en el sentido de que la Convención relativa a la matriculación de buques de navegación interior no se aplicará a los barcos que navegan por lagos y que pertenecen a los ferrocarriles federales alemanes (*ibid*, vol 1281, pág 128).

²²⁷ Véase, por ejemplo, las reservas de la Argentina al Convenio Internacional de Telecomunicaciones (*ibid*, vol 1533, pag 122) relativas al posible aumento de su contribución y a la hipótesis de que las otras Partes no cumplan las obligaciones que han asumido (respuesta de la Argentina al cuestionario sobre las reservas), o la reserva hecha por Francia al proceder a la firma del Acuerdo regional relativo a la planificación del servicio de radionavegación marítima (radiofaros) en la Zona Marítima Europea, en 1985 [*Actas Finales de la Conferencia Administrativa Regional para la planificación del servicio de radionavegación marítima (radiofaros) en la Zona Marítima Europea* (publicación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Ginebra, 1986, pág 32)] relativa a las necesidades del buen funcionamiento del servicio de radionavegación marítima francés mediante la utilización del sistema multifrecuencia con mediciones de fase (respuesta de Francia al cuestionario sobre las reservas)

²²⁸ Véase la reserva hecha por Francia al Acta General (arreglo pacífico de desacuerdos internacionales) en el sentido de que «en adelante [dicha adhesión a esta Acta] no se aplicará a las diferencias relativas a los sucesos que se producen durante una guerra en la que [el Gobierno francés] se vea implicado» [*Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général* (publicación de las Naciones Unidas, n° de venta F 98 V 2), doc ST/LEG/SER E/16, cap II 29, pág 1046] El Reino Unido y Nueva Zelanda hicieron reservas similares (*ibid*, pags 1043 a 1045) Véanse también las reservas de la mayoría de los Estados Partes en el Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, según las cuales ese instrumento dejará de ser obligatorio de pleno derecho para el gobierno del Estado que hace la reserva respecto de todo Estado enemigo cuyas fuerzas armadas o sus aliados no respeten las prohibiciones prescritas en ese Protocolo [*Situación de los acuerdos multilaterales de regulación de armamentos y de desarme*, cuarta edición, 1992, vol 1 (publicación de las Naciones Unidas, n° de venta S 93 IX 11, vol 1), pags 10 a 17]

f) O por razones particulares relativas a la situación internacional de su autor²²⁹;

g) O a su derecho interno²³⁰.

6) Algunas de estas reservas suscitaban objeciones en razón de su carácter muy general y de su imprecisión²³¹ y puede que algunas de ellas sean consideradas ilícitas por alguno de los motivos establecidos en el artículo 19 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986. Sin embargo, esa ilegitimidad se deriva del régimen jurídico de las reservas y es un problema diferente del de la definición. Es más, la inclusión de las reservas generales en la categoría de reservas constituye el preámbulo indispensable para apreciar su validez con respecto a las normas relativas al régimen jurídico de las reservas; en primer lugar, una reserva ilegítima a) no deja de ser una reserva y b) sólo puede ser declarada ilegítima si se trata de una reserva.

7) Otro elemento en el sentido de una interpretación no literal de la definición de Viena se refiere al hecho de que ciertos tratados prohíben las reservas transversales o algunas categorías de entre ellas, en particular las reservas generales²³². Esta cláusula sería superflua (e inexplic-

²²⁹ Véanse, por ejemplo, las reservas hechas por Austria y Suiza a la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y sobre su destrucción (Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol 1015, págs 236 a 238), relativas a la preservación de su estatuto de neutralidad (respuesta de Suiza al cuestionario sobre las reservas), o la reserva hecha por Austria en el mismo sentido respecto de la Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles [*Traités multilatéraux* (nota 228 *supra*), cap XXVI 1, pág 920], o también las de los países miembros de la Comunidad Europea respecto de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, en el sentido de que las disposiciones de la Convención se ejecutarán con arreglo a sus obligaciones derivadas de las normas de los tratados que establecen las Comunidades Europeas en la medida en que se apliquen esas normas (*ibid*, cap XXVI 3, págs 934 a 936)

²³⁰ Véanse, por ejemplo, las reservas de los Estados Unidos de América, Italia y el Japón en el sentido de que esos países aplicarán el Convenio Internacional del Trigo, 1986 provisionalmente, dentro de los límites de la legislación nacional (Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol 1429, págs 167 y 206) o la reserva del Canadá a la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer «en relación con los derechos que corresponden a la competencia legislativa de las provincias» (*ibid*, vol 258, pág 425)

²³¹ Véanse, por ejemplo, las objeciones de numerosos países a la reserva hecha por las Maldivas a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, relativa a la sharia islámica [*Traités multilatéraux* (nota 228 *supra*), cap IV 8, págs 192 a 196], así como las reservas hechas por Egipto a la misma Convención (Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol 1429, pág 125) A este respecto, véase A Jenefsky, «Permissibility of Egypt's reservations to the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women», *Maryland Journal of International Law and Trade*, vol 15, n° 2 (1991), págs 199 a 223, y R Cook, «Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women», *Virginia Journal of International Law*, vol 30, n° 3 (1990), págs 643 a 716 Véanse también las objeciones de ciertos países [*Traités multilatéraux* (nota 228 *supra*), cap IV 1, págs 95 a 97] a la reserva de los Estados Unidos de América a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, relativa a la Constitución de los Estados Unidos (Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol 1518, pag 344)

²³² Este es el caso del párrafo 1 del artículo 64 del Convenio europeo de derechos humanos o el artículo XIX de la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas

cable) si las declaraciones unilaterales tendientes a modificar los efectos jurídicos de un tratado de manera general no constituyeran reservas.

8) La abundancia y la coherencia de la práctica de las reservas transversales (que no necesariamente son siempre reservas vagas y generales) y la ausencia de objeciones de principio contra este tipo de reservas reconocen una necesidad social que sería absurdo negar en nombre de una lógica jurídica abstracta. Por lo demás, la interpretación de normas jurídicas nunca es estática; el párrafo 3 del artículo 31 de la Convención de Viena de 1969 dispone que el que interprete una norma convencional debe tener en cuenta «juntamente con el contexto [...] b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado» y, como lo señaló enérgicamente la CIJ, todo principio jurídico debe ser interpretado en función de «la evolución que ha seguido ulteriormente el derecho internacional»²³³.

9) En consecuencia, parece que para evitar toda ambigüedad y controversia sería conveniente incluir en la Guía de la práctica la interpretación amplia que los Estados han dado efectivamente al texto aparentemente restrictivo de la definición de Viena en lo que se refiere a las reservas. En resumen, contrariamente a las inquietudes expresadas por ciertos miembros de la Comisión, la formulación utilizada no debería suscitar confusión con las declaraciones interpretativas, algunas de las cuales pueden, en efecto, indicar «la manera en que el Estado se propone aplicar el conjunto del tratado» pero dejando bien en claro que se trata únicamente de declaraciones unilaterales que, por lo demás, constituyen reservas que se ajustan a los requisitos de la definición de Viena; eso se desprende de las palabras «una reserva» utilizadas al comienzo del proyecto de directriz.

10) Es evidente que una definición de tal precisión no prejuzga de manera alguna la legitimidad (o ilegitimidad) de las reservas: ya sea que se refieran a ciertas disposiciones del tratado o al tratado en su conjunto, están sujetas a las normas de fondo relativas a la validez (o a la legitimidad) de las reservas.

11) A este respecto, la palabra «puede» utilizada en el proyecto de directriz 1.1.1 [1.1.4] debe ser interpretada no en el sentido amplio que implica que los Estados y las organizaciones internacionales «tienen el derecho de», sino desde un punto de vista puramente descriptivo, con el significado de que, de hecho, las declaraciones unilaterales que tengan ese carácter transversal son reservas, independientemente de su legitimidad. De ahí se deriva su inclusión en la primera parte de la Guía de la práctica consagrada exclusivamente a su definición, confirmada expresamente por el proyecto de directriz que se reproduce más adelante y que no tiene número en forma provisional.

12) Algunos miembros de la Comisión expresaron dudas acerca del texto del proyecto de directriz 1.1.1

[1.1.4]. A su juicio, ésta se aplicaba tanto a las declaraciones interpretativas como a las reservas transversales. Para otros miembros, ese temor no estaba justificado ya que, desde el comienzo, el proyecto de directriz indicaba que se trataba de «una reserva». No obstante, la Comisión decidió que la legitimidad de la definición sería «ensayada» a la luz de los debates relativos a las declaraciones interpretativas.

1.1.2 Casos en que puede formularse una reserva

Los casos en que puede formularse una reserva de conformidad con la directriz 1.1 abarcan todos los medios de expresar el consentimiento a quedar obligado por un tratado mencionados en el artículo 11 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales.

Comentario

1) El propósito de este proyecto de directriz es remediar el defecto de redacción de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986, en las que el apartado *d* del párrafo 1 del artículo 2, por un lado, y el artículo 11, por otro, no están formulados en los mismos términos, lo que puede dar origen a confusiones.

2) Como se indica en el párrafo 8 del comentario del proyecto de directriz 1.1, la inclusión en la definición de Viena de una enumeración de los casos en que pueden formularse las reservas se ha censurado, sobre todo por ser una enumeración incompleta y porque habría tenido mejor acomodo en los artículos de las Convenciones de Viena de 1969, 1978 y 1986 relativas al régimen jurídico de las reservas que en el artículo que las define.

3) Por ilógica que parezca en abstracto, la idea de incluir las limitaciones temporales de la posibilidad de formular las reservas en la definición misma de éstas se ha impuesto progresivamente²³⁴, habida cuenta de los graves inconvenientes que para la estabilidad de las relaciones jurídicas tendría un sistema que permitiera a las partes formular reservas en cualquier momento. Sería realmente el propio principio *pacta sunt servanda* el que estaría en peligro si las partes en un tratado pudieran en todo momento, mediante la formulación de reservas, cuestionar las obligaciones convencionalmente contraídas. Además, esto complicaría sobremanera las funciones del depositario.

4) No es menos cierto que la enumeración limitativa de los casos en que pueden formularse las reservas en las Convenciones de Viena de 1969, 1978 y 1986 se ha criti-

²³³ *Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, C.I.J. Recueil 1971* (véase la nota 20 *supra*), pág. 31, párr. 52.

²³⁴ Las definiciones más antiguas de las reservas no comprendían en general este elemento *ratione temporis*. Véanse, por ejemplo, las definiciones propuestas por D. H. Miller, *Reservations to Treaties: Their Effect, and the Procedure in Regard Thereto*, Washington D.C., 1919, pág. 76, D. Anzilotti, *Cours de droit international*, traducción francesa de G. Gidel, París, Sirey, vol. I, 1929, pág. 399; y R. Genet, «Les "réserves" dans les traités», *Revue de droit international et des sciences diplomatiques et politiques* (Ginebra), t. 10 (1932), pág. 103.

cado. Por una parte, porque la enumeración es incompleta, especialmente por no tener en cuenta inicialmente la posibilidad de formular reservas en virtud de sucesiones de Estados²³⁵, aunque la Convención de Viena de 1978 corrigió este defecto. Por otra parte, numerosos autores advirtieron que, en ciertos casos, era válida la formulación de reservas en momentos distintos de los previstos en la definición de Viena²³⁶ y, en particular, que un tratado podía reconocer expresamente la posibilidad de formular reservas en un momento distinto del de la firma o la manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado²³⁷.

5) No obstante, no parece conveniente reconocer expresamente esta posibilidad en la Guía de la práctica, porque aunque es bien cierto que un tratado puede admitirla, esa admisión es una norma convencional, una *lex specialis*, que deroga los principios generales establecidos por las Convenciones de Viena de 1969, 1978 y 1986, cuyo carácter es supletorio de la voluntad de las partes y no impide, por lo tanto, derogaciones de esta clase. La Guía de la práctica en materia de reservas tiene ese mismo carácter y no parece oportuno recordar en cada uno de sus epígrafes que los Estados y las organizaciones internacionales pueden dejarla sin efecto incluyendo en los tratados que concierten cláusulas de reserva sujetas a normas particulares.

6) Pero aun ateniéndose al derecho internacional general, la enumeración de los casos en que pueden formularse las reservas, según figura en el párrafo 1 del artículo 2 de las Convenciones de Viena de 1969, 1978 y 1986, no comprende todas las formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado. Sin embargo, es claro que la intención de esta norma es que el Estado pueda formular (o confirmar) reservas cuando manifiesta ese consentimiento y sólo entonces. No debe darse, pues, demasiada importancia a la letra de esa enumeración, que presenta lagunas y que, además, no está en consonancia con la del artículo 11 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986²³⁸.

7) La propia Comisión conocía perfectamente el problema cuando debatió el proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones

internacionales o entre organizaciones internacionales, ya que, en un primer momento, a propuesta de su Relator Especial, Sr. Paul Reuter, simplificó la definición de las reservas de manera que decía solamente que podían ser formuladas «por un Estado o por una organización internacional al firmar un tratado o al manifestar [...] su consentimiento en obligarse por un tratado»²³⁹, lo que era una remisión tácita al artículo 11 de la futura Convención. Sin embargo, por apartarse lo menos posible del texto de 1969, la Comisión acabó por calcar de éste su proyecto, renunciando así a una simplificación útil²⁴⁰.

8) Las diferencias de redacción entre el apartado *d* del párrafo 1 del artículo 2 y el artículo 11 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 consisten en que en el primero se omiten dos hipótesis previstas en el segundo: «el canje de instrumentos que constituyan un tratado», por una parte, y «cualquier otra forma que se hubiere convenido», por otra. Como advirtió un miembro de la Comisión, es muy poco verosímil que un tratado multilateral general pueda nacer de un intercambio de cartas. No obstante, esta hipótesis no puede descartarse totalmente, como tampoco que surjan otras formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado distintas de las enumeradas en el apartado *d* del párrafo 1 del artículo 11 de las Convenciones. Para evitar que se planteen problemas en estos casos el proyecto de directriz 1.1.2 aclara que no conviene dar mayor importancia a las diferencias de redacción entre esos dos artículos.

9) Cabe señalar que el objeto de esta directriz no es llenar las lagunas de la enumeración que hace la definición de Viena, en particular la omisión de las reservas formuladas al notificarse la aplicación territorial de un tratado, que es objeto del proyecto de directriz 1.1.4 [1.1.3]. De manera más general, la Comisión se propone examinar a fondo los problemas planteados por la formulación de reservas en el capítulo II de la Guía de la práctica.

10) A propuesta de uno de sus miembros, la Comisión se preguntó si, así como con el proyecto de directriz 1.1.2 había tratado de armonizar la definición de Viena con el artículo 11 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986, no debería igualmente aclarar que la expresión «notificación de sucesión en un tratado», que figura en el apartado *j* del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena de 1978, debe interpretarse exclusivamente a la luz de los artículos 17 y 18 de dicha Convención. No obstante, la Comisión consideró preferible hacer esta aclaración en la parte de la Guía de la práctica que se dedicará a la sucesión de Estados en materia de reservas a los tratados.

1.1.3 [1.1.8] *Reservas de alcance territorial*²⁴¹

Una declaración unilateral por la que un Estado se propone excluir la aplicación de un tratado o de algu-

²³⁵ Cf Szafarz, *op cit* (nota 224 *supra*), pag 295

²³⁶ Cf *ibid* y G Gaja, «Unruly treaty reservations», *Le droit international à l'heure de sa codification — Études en l'honneur de Roberto Ago*, Milán, Giuffrè, 1987, vol I, págs 307 y ss, en particular págs 310 a 313, D W Greig, «Reservations Equity as a balancing factor?», *The Australian Year Book of International Law*, 1995, vol 16, págs 21 a 172, en particular págs 28 y 29, Horn, *op cit* (nota 217 *supra*), págs 41 a 43, y P Reuter, *Introduction au droit des traités*, tercera edición corregida y aumentada por P Cahier, París, Presses Universitaires de France, 1995, pag 71

²³⁷ Véase principalmente Imbert, *op cit* (nota 198 *supra*), pag 12

²³⁸ El artículo 11 de la Convención de Viena de 1986 dice lo siguiente

«1 El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido

»2 El consentimiento de una organización internacional en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, un acto de confirmación formal, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido »

²³⁹ *Anuario* 1974, vol II (primera parte), pag 141, doc A/CN.4/279, véase también el párrafo 3 del comentario al apartado *d* del párrafo 1 del proyecto de artículo 2, *ibid*, pag 300, doc A/9610/Rev 1

²⁴⁰ Véase la nota 215 *supra*

²⁴¹ El texto de este proyecto de directriz volverá a examinarse junto con el proyecto de directriz 1.1.1 en el 51º período de sesiones de la Comisión

nas de sus disposiciones en un territorio en el que ese tratado sería aplicable en ausencia de tal declaración constituye una reserva.

Comentario

1) Como su título indica, este proyecto de directriz se refiere a las declaraciones unilaterales por las que un Estado²⁴² se propone excluir la aplicación total o parcial de un tratado *ratione loci*, es decir, consiente en la aplicación del tratado íntegramente *ratione materiae*, pero excluye del ámbito del tratado a uno o varios territorios que, por una u otra razón, están sometidos a su jurisdicción.

2) Antiguamente, esto sucedía sobre todo con las llamadas «reservas coloniales», o sea, declaraciones por las que las Potencias administradoras manifestaban su intención de aplicar o no un tratado o algunas de sus disposiciones a sus colonias o a algunas de ellas²⁴³. Habida cuenta del carácter residual del fenómeno colonial en la actualidad, estos casos apenas se plantean hoy. No obstante, puede ser útil determinar el carácter jurídico de esas declaraciones desde la perspectiva del derecho intertemporal, es decir, cuando se trata de determinar su licitud o su alcance en relación con un tratado que sigue en vigor aunque haya desaparecido la situación colonial que les dio origen.

3) La práctica de las reservas territoriales subsiste en situaciones no coloniales, como cuando un Estado excluye de la aplicación de un tratado todo o parte de su propio territorio²⁴⁴, o cuando, pudiendo obligarse inter-

nacionalmente respecto de un territorio determinado, no quiere hacerlo²⁴⁵.

4) Por más que se haya cuestionado²⁴⁶, estas declaraciones unilaterales son reservas en el sentido de la definición de Viena, pues, formuladas en uno de los momentos previstos, su objeto es excluir o modificar los efectos jurídicos de todo el tratado (véase el proyecto de directriz 1.1.1 [1.1.4] *supra*) o de algunas de sus disposiciones en su aplicación al Estado que las formula. En su defecto, el tratado se aplicaría a todo el territorio del Estado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986²⁴⁷. La exclusión o modificación parcial de la aplicación del tratado, que es la esencia misma de las reservas y que es el objeto de esas declaraciones, les confiere el carácter de verdaderas reservas.

5) Algunos miembros de la Comisión dudaron de esa afirmación aduciendo principalmente que las reservas territoriales sólo eran posibles si las autorizaba expresamente el tratado respecto del cual se formulaban. Esta es una interpretación muy restrictiva del artículo 29 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986, que no exige que el tratado regule expresamente esta cuestión y admite la posibilidad de su aplicación territorial parcial cuando ésta «se desprenda» del tratado o conste de otro modo. En todo caso, por una parte, esta objeción nace no de la definición de reserva sino de los requisitos de su validez, y, por otra, las declaraciones unilaterales formuladas en virtud de un tratado no son menos reservas por el hecho de que el tratado las autorice expresamente. Así se desprende, por ejemplo, del apartado *b* del artículo 19 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986, que prevé el caso de que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas. Pero si un tratado autoriza expresamente la formulación de reservas territoriales, no podría interpretarse, salvo que las partes hubieran manifestado claramente su voluntad contraria, que las demás reservas están prohibidas²⁴⁸.

²⁴² Por razones obvias, esta hipótesis no afecta prácticamente a las organizaciones internacionales, aunque pueda concebirse que una organización dotada de competencias territoriales formule reservas de esta clase.

²⁴³ Véanse las reservas de Bélgica (excluyendo el Congo belga y el territorio de Ruanda-Urundi) o la del Imperio británico (excluyendo todas las colonias, las posesiones, los protectorados o los territorios) o la de Francia (excluyendo todos los protectorados, las colonias, las posesiones o los territorios de ultramar sujetos a la soberanía o la autoridad de la República francesa) al Convenio sobre el régimen internacional de ferrocarriles [*Traités multilatéraux* . (nota 228 *supra*), cap II 27, pág 1040], o las declaraciones del Reino Unido excluyendo la aplicación de la Convención sobre el mar territorial y la zona contigua (Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol 516, pág 278), la Convención sobre la alta mar (*ibid* , vol 450, pág 164) y la Convención sobre pesca y conservación de los recursos vivos de la alta mar (*ibid* , vol 559, pág 287) a los «Estados del Golfo Pérsico» Véanse también las reservas que han acompañado la manifestación del consentimiento del Gobierno del Reino Unido en obligarse por numerosos tratados después de la proclamación ilegal de la independencia de Rhodesia del Sur entre 1965 y 1980 [como las reservas británicas al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales «las disposiciones del Pacto no se aplicarán a Rhodesia del Sur mientras no comunique al Secretario General de las Naciones Unidas que está en condiciones de garantizar que puede cumplir íntegramente las obligaciones que le impone el Pacto respecto de ese territorio» (*ibid* , vol 993, pág 83), y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (*ibid* , vol 999, pág 288), o a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (*ibid* , vol 660, pág 302)]

²⁴⁴ Como ejemplo de exclusión total de todo el territorio de un Estado, véase la reserva de los Estados Unidos de América al Acuerdo

sobre el transporte internacional de productos alimentarios perecederos y sobre la utilización de equipo especial para su transporte (ATP) (*ibid* , vol 1299, pág 355) y las objeciones planteadas por esta reserva (*ibid* , vol 1347, págs 342 y 344)

²⁴⁵ Como ejemplo antiguo, véase la declaración formulada por Dinamarca al ratificar el Convenio destinado a reglamentar ciertos conflictos de leyes en materia de letras de cambio y pagarés excluyendo a Groenlandia del campo de aplicación del Convenio (Sociedad de las Naciones, *Recueil des Traités*, vol CXLIII, pág 318) o, como ejemplo más reciente, las declaraciones formuladas por Noruega en 1985 por las que excluía de la aplicación de la Convención sobre la circulación vial (Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol 1393, pág 372) y la Convención sobre la señalización vial a los territorios de Svalbard y Jan Mayen (*ibid* , pág 375)

²⁴⁶ Véase por ejemplo F. Horn, *op cit* (nota 217 *supra*), págs 100 y 101

²⁴⁷ El artículo 29 de la Convención de Viena de 1969 dice «Un tratado será obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo»

²⁴⁸ Adviértase a este respecto que el apartado *b* del artículo 19 alude exclusivamente a los tratados que dispongan que «únicamente pueden hacerse determinadas reservas», por lo tanto, deja a salvo los casos en que los tratados autoricen la formulación de determinadas reservas sin que su enumeración sea taxativa

6) Se dijo también que sería difícil aplicar a las reservas territoriales el régimen jurídico general de las reservas y, especialmente, oponerse a ellas. Esto es cierto cuando el tratado las autoriza expresa o tácitamente, como según la mayoría de los miembros de la Comisión deberían hacer los tratados respecto de toda reserva territorial²⁴⁹. En tal caso, la imposibilidad de oponerse a esas reservas no nace de su objeto territorial sino de su carácter de reservas autorizadas por el tratado, y, en esto, las reservas territoriales no se diferencian de otros tipos de reservas autorizadas.

7) En suma, aun reconociendo que cuando su objeto es excluir o modificar la eficacia jurídica de ciertas disposiciones del tratado esas declaraciones son verdaderas reservas, algunos miembros de la Comisión cuestionaron que tuvieran ese carácter las declaraciones cuyo objeto era excluir totalmente la aplicación del tratado en un territorio determinado. No obstante, la Comisión consideró que no procedía distinguir entre reservas *ratione materiae* y reservas *ratione loci*, distinción que no resulta ni expresa ni tácitamente de la definición de Viena.

8) Huelga decir que las reservas territoriales deben formularse a más tardar cuando el Estado manifiesta su consentimiento en obligarse por el tratado cuya aplicación a un territorio determinado las reservas pretenden excluir totalmente, y, en esto, la definición de reserva territorial en nada se distingue de la definición general de reserva. Cosa distinta es que el Estado que tenga jurisdicción sobre determinado territorio quiera excluir o modificar parcialmente la aplicación del tratado a ese territorio: entonces, la reserva puede formularse no solamente cuando se firme el tratado o cuando se manifieste definitivamente el consentimiento en obligarse por él, sino también cuando el Estado extienda la aplicación del tratado a ese territorio, que anteriormente no estaba sujeto al tratado. Esta calidad especial *ratione temporis* de algunas reservas territoriales se examina en el proyecto de directriz 1.1.4 [1.1.3].

1.1.4 [1.1.3] *Reservas formuladas al notificar alguna aplicación territorial*

Una declaración unilateral por la cual un Estado se propone excluir o modificar el efecto jurídico de algunas disposiciones de un tratado en su aplicación a un territorio respecto del cual el Estado hace una notificación de la aplicación territorial del tratado constituye una reserva.

Comentario

1) Mientras que el proyecto de directriz 1.1.3 [1.1.8] se refiere al alcance *ratione loci* de determinadas reservas, el proyecto de directriz 1.1.4 [1.1.3] se refiere al ele-

mento temporal de la definición, al momento en que algunas de estas «reservas territoriales» pueden formularse.

2) Por regla general, el Estado formulará esas reservas cuando firme el tratado o manifieste su consentimiento definitivo en obligarse por él, y sólo entonces podrán formularse las reservas cuya finalidad sea excluir un territorio de la aplicación del tratado en su totalidad (véase el párrafo 8 del comentario al proyecto de directriz 1.1.3 [1.1.8] *supra*). No sucede lo mismo con las reservas cuyo objeto sea excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a un territorio al que éste no se aplicaba anteriormente.

3) Puede suceder que el ámbito de aplicación territorial de un tratado varíe con el tiempo porque el Estado decida extender su aplicación a un territorio sujeto a su jurisdicción al que el tratado no se aplicaba anteriormente, por ejemplo al retirar una reserva territorial (véase el proyecto de directriz 1.1.3 [1.1.8] *supra*), porque haya adquirido jurisdicción sobre el territorio después de la entrada en vigor del tratado, o por cualquier otra razón que, en todo caso, es independiente del derecho de las reservas al tratado. En tal caso, el Estado encargado de las relaciones internacionales del territorio puede extender pura y simplemente el tratado a ese territorio, pero también puede no querer hacerlo sino parcialmente, en cuyo caso acompañará a la notificación de la extensión de la aplicación territorial del tratado al depositario nuevas reservas relativas a ese territorio. No hay motivo alguno para impedirlo. Las restricciones de esta clase dificultarían la extensión territorial del tratado y serían innecesarias puesto que la declaración unilateral formulada en este caso se sujeta al régimen jurídico de las reservas y, consecuentemente, sólo es lícita si es compatible con el objeto y fin del tratado.

4) Como ejemplos de lo dicho cabe mencionar las reservas formuladas por el Reino Unido el 19 de marzo de 1962 al extender la aplicación de la Convención sobre el estatuto de los apátridas a Fiji, las Indias Occidentales y el Estado de Singapur²⁵⁰, o las reservas formuladas por los Países Bajos el 29 de julio de 1971 respecto de la aplicación territorial a Suriname de la Convención sobre el estatuto de los refugiados²⁵¹.

5) Pueden citarse ejemplos recientes de reservas formuladas con ocasión de una notificación de aplicación territorial: el 27 de abril de 1993 Portugal notificó al Secretario General de las Naciones Unidas su intención de extender a Macao la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta notificación se acompañó de reservas relativas al territorio²⁵². El 14 de octubre de 1996, el Reino Unido notificó al Secretario General su decisión de aplicar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discri-

²⁵⁰ Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol. 424, págs. 389 y 391

²⁵¹ *Ibid*, vol. 790, pag. 129

²⁵² *Traités multilatéraux* (nota 228 *supra*), cap. IV 3, págs. 126, 128 y 129, nota 16

²⁴⁹ Sin duda este extremo podría aclararse mediante una directriz ulterior de la Guía de la práctica en relación con el apartado b del artículo 19 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986

minación contra la mujer a Hong Kong, habida cuenta de determinadas reservas²⁵³. Estas reservas no provocaron ninguna reacción ni objeción de las demás partes en los instrumentos correspondientes.

6) Parece razonable aclarar, como se ha propuesto en doctrina²⁵⁴, que una declaración unilateral formulada por un Estado con ocasión de una notificación de aplicación territorial es una reserva si cumple además las condiciones establecidas en la definición de Viena complementada como antecede. Huelga decir que esta aclaración no prejuzga la cuestión de la licitud de esta clase de reservas.

1.1.7 [1.1.1] *Formulación conjunta de una reserva*

La formulación conjunta de una reserva por varios Estados u organizaciones internacionales no afecta al carácter unilateral de esa reserva.

Comentario

1) Una de las características fundamentales de las reservas es que se trata de declaraciones unilaterales²⁵⁵ y la mayoría de los miembros de la Comisión están convencidos de que ese elemento de la definición de Viena no está sujeto a excepciones aun si, formalmente, nada impide que varios Estados u organizaciones internacionales formulen una reserva conjunta, es decir, en un instrumento único dirigido al depositario de un tratado multilateral en nombre de varias partes.

2) La práctica de las reservas concertadas está bien establecida: es muy corriente que Estados que comparten tradiciones, intereses o ideologías comunes o Estados vecinos se pongan de acuerdo para formular reservas idénticas o similares a un tratado. Ése ha sido a menudo el caso de los países de Europa del Este que decían profesar el socialismo²⁵⁶, de los países nórdicos²⁵⁷ o de los Estados miembros del Consejo de Europa o de las Comu-

nidades Europeas²⁵⁸. Pero cada una de esas reservas no deja por ello de ser formulada individualmente por cada uno de los Estados interesados, por lo que no se plantean problemas en relación con la definición de Viena.

3) Sin embargo, durante el debate en torno al proyecto que se convertiría en el apartado d del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena de 1969, un miembro de la Comisión había destacado que una reserva no sólo podía ser concertada, sino también conjunta²⁵⁹. En aquel momento esa observación no encontró eco y, en la práctica, no parece que los Estados hayan recurrido, hasta el presente, a la práctica de formular reservas conjuntas²⁶⁰. Sin embargo, no se puede excluir esa posibilidad, tanto más probable cuanto que en la actualidad se pueden citar, a falta de reservas conjuntas, casos bastante frecuentes de:

a) Objeciones conjuntas a reservas formuladas por otras partes²⁶¹;

b) Declaraciones interpretativas conjuntas (que, por lo demás, no siempre se pueden distinguir fácilmente de las reservas *stricto sensu*)²⁶².

4) Por ello, no cabe excluir la posibilidad de que el problema se plantee en el futuro y la Comisión ha considerado conveniente tener en cuenta esa posibilidad en la Guía de la práctica.

5) La Comisión ha considerado que no había nada que objetar a la formulación conjunta de una reserva por varios Estados u organizaciones internacionales: es difícil comprender qué les impediría hacer conjuntamente lo que pueden hacer, sin duda alguna, por separado y en los mismos términos. Con la multiplicación de los mercados comunes y las uniones aduaneras y económicas, esta

²⁵⁸ Véanse, por ejemplo, las reservas de Alemania, Austria, Bélgica y Francia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ibid., vol 1103, pag 395, vol 1202, pag 397, y vol 1312, pag 330), o las declaraciones de todos los Estados miembros de la Comunidad Europea, formuladas en esa condición, a la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción (nota 229 *supra*)

²⁵⁹ Intervención del Sr Paredes (*Anuario*, 1962, vol I, 651ª sesión, pag 157, párr 87)

²⁶⁰ Las reservas formuladas por una organización internacional son imputables a ésta y no a sus Estados miembros, por lo que no podrían calificarse de reservas «conjuntas»

²⁶¹ Así, la Comunidad Europea y los nueve Estados miembros que la integraban en ese momento formularon objeciones, mediante un mismo instrumento, a las declaraciones hechas por Bulgaria y la República Democrática Alemana en relación con el párrafo 3 del artículo 52 del Convenio Aduanero relativo al Transporte Internacional de Mercancías al Amparo de los Cuadernos TIR, que daba a las uniones aduaneras o económicas la posibilidad de llegar a ser Partes (Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol 1102, pag 360, y vol 1110, pag 372)

²⁶² Véanse las declaraciones formuladas por la Comunidad Europea y sus Estados miembros, o por éstos únicamente, en relación con, por ejemplo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático [*Traités multilatéraux* (nota 228 *supra*), cap XXVII 7, pag 978], el Convenio sobre la Diversidad Biológica (ibid., cap XXVII 8, pag 983) o el Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios (ibid., cap XXI 7, págs 880 y 881)

²⁵³ Ibid., cap IV 8, pag 198, nota 11

²⁵⁴ Cf Szafarz, *op cit* (nota 224 *supra*), pag 295

²⁵⁵ Aunque, en el pasado, algunos autores hayan tenido una concepción «contractual» de la reserva (cf C Rousseau, *Principes généraux du droit international public*, Paris, Pédone, vol I, 1944, págs 290 y 291), véase también la definición propuesta por Brierly (nota 196 *supra*). La adopción de la Convención de Viena de 1969 silenció las controversias sobre ese punto

²⁵⁶ Véanse, por ejemplo, las reservas de Bulgaria, la Federación de Rusia, Hungría, Mongolia, la República Checa, la República Democrática Alemana y Rumania a la sección 30 de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, algunas de esas reservas han sido retiradas con posterioridad a 1989 [*Traités multilatéraux* (nota 228 *supra*), cap III 1, págs 40 a 44]

²⁵⁷ Véanse, por ejemplo, las reservas de Finlandia y Suecia a los artículos 35 y 58 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol 922, pag 279, y vol 1194, pag 397) o las de Dinamarca, Finlandia, Islandia y Suecia al artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ibid., vol 999, págs 290 a 293 y 299, y vol 1144, págs 386 y 387)

flexibilidad se impone, tanto más cuanto que es probable que los precedentes sentados por las objeciones o las declaraciones interpretativas conjuntas mencionadas anteriormente se reproducirán en materia de reservas, ya que esas instituciones a menudo comparten sus atribuciones con sus Estados miembros; no sería natural, entonces, exigir que éstos actúen separadamente de la institución a la que pertenecen. Por lo demás, en el plano teórico, esa práctica no sería en absoluto contraria al espíritu de la definición de Viena: un acto único que dimane de varios Estados puede considerarse unilateral por el hecho de que su destinatario o sus destinatarios no son partes de él²⁶³.

6) En el plano práctico, tales reservas conjuntas tendrían además la gran ventaja de simplificar la tarea tanto del depositario, que podría dirigir el texto de la reserva formulada conjuntamente a las otras partes sin tener que multiplicar las notificaciones, como de las otras partes, que podrían, si así lo desearan, responder con un instrumento único.

7) La Comisión se preguntó si no convendría ir más lejos y considerar la posibilidad de que se formulen reservas colectivas, por las cuales un grupo de Estados o de organizaciones internacionales contraerían la obligación no sólo de formular la reserva conjuntamente, sino también de retirarla o modificarla exclusivamente de manera conjunta, lo que significaría asimismo que las otras partes sólo podrían aceptarla o formular objeciones al respecto de modo uniforme. Aunque esta posibilidad fue defendida por uno de los miembros, parecía presentar más inconvenientes que ventajas:

a) En el plano práctico, haría más difícil la retirada de las reservas, que se considera a menudo como un «mal necesario»²⁶⁴, supeditando la renuncia a una reserva conjunta al acuerdo de todos los Estados u organizaciones internacionales que la hubieran formulado;

b) En el plano teórico, significaría que un grupo de partes podría imponer a las demás las reglas relativas a las reservas sobre las cuales se hubieran puesto de acuerdo, lo que es incompatible con el principio del efecto relativo de los tratados; en otras palabras, es posible que algunos Estados u organizaciones internacionales acuerden considerar que la reserva que formulan conjuntamente no podrá retirarse ni modificarse más que conjuntamente, pero dicho acuerdo sería *res inter alios acta* respecto de las otras partes contratantes en el tratado al que afecta la reserva.

8) Estas son las razones por las que la Comisión, aunque consideró la posibilidad de formular reservas conjuntas, quiso precisar que éstas no quedarían menos sujetas al régimen general de las reservas, gobernado en gran medida por su «unilateralidad», que esta formulación conjunta no podría modificar.

²⁶³ Se trata de lo que podría denominarse «actos unilaterales de partes múltiples», vease a ese respecto el primer informe del Relator Especial sobre los actos unilaterales de los Estados, Sr V Rodríguez Cedeño [*Anuario* 1998, vol II (primera parte), doc A/CN.4/486, párrs 79 y 133]

²⁶⁴ Vease la intervención del Sr Roberto Ago (*Anuario* 1965, vol I, 797ª sesión, pag 158, párr 38)

9) Conviene además precisar que la conjunción coordinante «u» («por varios Estados u organizaciones internacionales») utilizada en el proyecto de directriz 1.1.7 [1.1.1] no excluye en absoluto la posibilidad de que uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales formulen reservas conjuntamente, y debe interpretarse como «y/o». No obstante, la Comisión consideró que esta fórmula recargaría excesivamente el texto.

Directrices adicionales

[...]

La definición de una declaración unilateral como reserva se entiende sin perjuicio de la permisividad y de los efectos que pueda tener en virtud de las normas relativas a las reservas.

Comentario

1) El proyecto de directriz precedente fue aprobado por la Comisión de modo provisional. Su título y su lugar en la Guía de la práctica se determinarán con posterioridad. Asimismo, la Comisión estudiará la posibilidad de reunir en un mismo *caveat* las reservas, único objeto de la presente directriz, y las declaraciones interpretativas, que, en opinión de algunos miembros, plantean problemas idénticos.

2) Esta aprobación provisional se consideró necesaria para aclarar y precisar el alcance del conjunto de los proyectos de directrices relativos a la definición de las reservas adoptados hasta el momento y para resaltar su contenido particular.

3) Definir no es reglamentar. La definición como enunciación de las cualidades esenciales de un objeto²⁶⁵ tiene por función exclusiva determinar a qué categoría general pertenece una declaración. Sin embargo, esa clasificación no supone en absoluto que las declaraciones de que se trate sean o no válidas. Una reserva puede ser lícita o ilícita. Será reserva si responde a la definición elegida; en cambio, no será reserva si no responde a los criterios enunciados en los proyectos de artículo (y en los que tiene previsto aprobar la Comisión en su 51.º período de sesiones). Sin embargo, ello no implica necesariamente que las declaraciones sean lícitas (o ilícitas) con arreglo a otras reglas del derecho internacional.

4) Y, lo que es más, la determinación exacta de la naturaleza de una declaración es el requisito previo indispensable de la aplicación de un régimen jurídico concreto y anterior al establecimiento de su licitud. En tanto un instrumento concreto no se defina como reserva, no se puede decidir si ésta es o no lícita, percibir su alcance jurídico ni determinar sus efectos. No obstante, la licitud y los efectos no se ven afectados por la definición, que

²⁶⁵ «Proposición que expone con claridad y exactitud los caracteres genericos y diferenciales de una cosa », *Diccionario de la Lengua Española*, 20ª ed, Madrid, Espasa, 1984

únicamente determina la aplicación de las reglas correspondientes.

5) Este proyecto de directriz reviste una importancia especial en relación con el proyecto de directriz 1.1.1 [1.1.4], en el que se emplea el verbo «puede». Como indica el comentario de esa disposición, en ese contexto el término debe interpretarse en sentido puramente descriptivo y no permisivo; la Comisión no pretende indicar que sea lícito, o no, formular reservas amplias sino solamente que toda declaración unilateral que tenga ese carácter constituye efectivamente una reserva y que, como tal, está sujeta al régimen jurídico de las reservas. Asimismo, el hecho de que en el proyecto de directriz

1.1.2 se indique que «pueden formularse» reservas en todos los casos previstos en el proyecto de directriz 1.1 y en el artículo 11 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 no significa que esa reserva sea necesariamente lícita; lo será sólo si cumple las condiciones estipuladas por el derecho de las reservas a los tratados y, en particular, las estipuladas en el artículo 19 de esas Convenciones.

6) Desde un punto de vista más general, todos los proyectos de directriz aprobados hasta el momento son interdependientes y no cabe leerlos ni entenderlos aisladamente.

Capítulo X

OTRAS DECISIONES Y CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN

A.—Programa, procedimientos y métodos de trabajo de la Comisión, y su documentación

1. PLANIFICACION DE LA LABOR DEL ACTUAL PERIODO DE SESIONES

541. Al comienzo del período de sesiones la Comisión había previsto celebrar un seminario de dos días para conmemorar el 50.º aniversario del establecimiento de la Comisión. La primera parte del período de sesiones, que se celebraría en Ginebra, se dedicaría al examen de los informes presentados por los relatores especiales en relación con los temas incluidos en el programa de la Comisión, en tanto que la segunda parte del período de sesiones, en Nueva York, se destinaría a la aprobación de los proyectos de artículos [con respecto a los temas de las reservas a los tratados, la responsabilidad de los Estados y la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas)] y del informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor realizada en su 50.º período de sesiones.

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISION PARA EL RESTO DEL QUINQUENIO

542. La Comisión afirmó que el programa de trabajo para el resto del quinquenio, que figuraba en el informe a la Asamblea General sobre la labor realizada en su 49.º período de sesiones²⁶⁶, debía cumplirse en la medida de lo posible.

3. DISTRIBUCION DE LOS INFORMES DE LOS RELADORES ESPECIALES CON ANTERIORIDAD AL PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION

543. Se hizo referencia a la recomendación contenida en el informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor realizada en su 48.º período de sesiones²⁶⁷

en la que se señalaba que sería conveniente que «todos los informes estén disponibles algunas semanas antes del comienzo del período de sesiones, a fin de que los miembros de la Comisión puedan estudiarlos y reflexionar sobre ellos». Teniendo en cuenta el tiempo necesario para la revisión editorial, la traducción, la reproducción y la distribución de los documentos (habitualmente seis semanas antes del período de sesiones), la Comisión decidió que los relatores especiales presentaran sus informes a la Secretaría con tiempo para asegurar su pronta disponibilidad en todas las lenguas antes del comienzo del período de sesiones. A ese respecto, la Comisión decidió además que, en un futuro, se recordara a los candidatos a relatores especiales las exigencias de tiempo y dedicación que entrañaría su nombramiento.

544. La Comisión destacó la conveniencia de que se pidiera a la Secretaría que enviara a todos los miembros de la Comisión una copia de la carta enviada a los relatores especiales recordándoles el plazo para la presentación de sus informes. La Comisión también pidió a la Secretaría que distribuyera a todos los miembros, una vez recibido el informe y sometido a revisión editorial, el informe del relator especial en el idioma de presentación.

4. ORGANIZACION DEL 51.º PERIODO DE SESIONES

545. En relación con la sugerencia que figura en el informe a la Asamblea General sobre la labor realizada en su 49.º período de sesiones, en el que se señala que, para hacer más eficaz la organización de los trabajos, el acuerdo sobre los miembros para el período de sesiones siguiente de la Mesa o, al menos, su Presidente y el Presidente del Comité de Redacción, se adoptase al final de cada período de sesiones y no al comienzo como había sido el caso hasta el momento²⁶⁸, el Grupo de Planificación tomó nota de que los miembros de Europa Oriental propondrían un candidato a la Presidencia de la Comisión y los miembros de América Latina propondrían un candidato a la Presidencia del Comité de Redacción. Se instó a los miembros a celebrar consultas a fin de terminar el proceso de presentación de candidaturas.

²⁶⁶ *Anuario* 1997, vol II (segunda parte), párrs 220 y 221

²⁶⁷ *Anuario* 1996, vol II (segunda parte), doc A/51/10, párr 190

²⁶⁸ *Anuario* 1997, vol II (segunda parte), párr 224

B.—Conmemoración del 50.º aniversario de la Comisión

546. Con arreglo a una decisión adoptada por la Comisión en su 49.º período de sesiones²⁶⁹, los días 21 y 22 de abril de 1998 se celebró en Ginebra un seminario para conmemorar el 50.º aniversario de la Comisión. El tema del seminario fue una evaluación crítica de la labor de la Comisión y las enseñanzas extraídas para el futuro, que se debatió en cinco grupos que se centraron en los siguientes temas: a) resumen de la labor de la Comisión de Derecho Internacional, 1948-1998: responsabilidad internacional y observaciones sobre el criterio adoptado por la Comisión; b) inmunidad de los Estados: problemas actuales ¿heredados del pasado?; c) derecho de los tratados: cuestiones que no están resueltas; d) temas futuros; e) problemas del proceso legislativo internacional y usos y riesgos de la codificación. Se invitó a participar en los debates a miembros de la comunidad académica, diplomáticos y asesores jurídicos de los gobiernos y las organizaciones internacionales.

547. Las actas del seminario se publicarán y difundirán a las instituciones interesadas a los fines de aumentar el reconocimiento del derecho internacional.

548. En junio de 1998 se publicó *Pour un meilleur droit international: la Commission du droit international à 50 ans*²⁷⁰ para conmemorar el 50.º aniversario del establecimiento de la Comisión. Incluía las actas del Coloquio de las Naciones Unidas sobre el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional, celebrado en Nueva York los días 28 y 29 de octubre de 1997. La publicación incluía un prefacio del Secretario General y se dividía en tres partes: la parte I consistía en presentaciones orales de monografías y debate abierto, organizado en torno a los siguientes temas: a) panorama general del proceso de elaboración del derecho internacional y función de la Comisión de Derecho Internacional; b) principales problemas con que se tropieza en la elaboración del derecho internacional contemporáneo; c) selección de temas para la codificación y el desarrollo progresivo por la Comisión y sus métodos de trabajo; d) la labor de la Comisión y la configuración del derecho internacional; e) mejoramiento de la relación de la Comisión con otros órganos encargados de elaborar el derecho y con instituciones académicas y profesionales pertinentes; f) aumento de la pertinencia y disponibilidad del derecho internacional, y g) influencia de la Corte Internacional de Justicia en la labor de la Comisión de Derecho Internacional e influencia de la Comisión en la labor de la Corte. En la parte II figuraban las presentaciones por escrito de las monografías recibidas. En la parte III se reproducían las decisiones y conclusiones de la Comisión sobre su programa, procedimientos y métodos de trabajo adoptados en su 48.º período de sesiones y el estatuto de la Comisión de Derecho Internacional en francés e inglés.

549. En julio de 1998 se publicó *Analytical Guide to the Work of the International Law Commission, 1949-1997*²⁷¹ como una contribución de la División de Codificación para conmemorar el 50.º aniversario de la Comisión y complementa la publicación *La Comisión de Derecho Internacional y su obra*, actualmente en su quinta edición²⁷². El objeto de la guía analítica es servir como instrumento para facilitar la investigación sobre las contribuciones de la Comisión a la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional durante sus primeros 50 años de existencia. La guía analítica está organizada por temas y se subdivide en categorías y etapas de estudio dentro de la Comisión, con lo que permite al lector rastrear el desarrollo de cada tema desde su inicio hasta su conclusión.

550. La página de la Comisión de Derecho Internacional en la Web²⁷³ fue creada por la División de Codificación para conmemorar el 50.º aniversario de la Comisión. El propósito principal de la página de la Web es difundir información sobre las actividades de la Comisión a un público lo más amplio posible por medios electrónicos. A medida que un número mayor de documentos e informes de la Comisión se trasladen al formato electrónico y se incluyan en la Internet, la página de la Web también servirá como complemento de las versiones impresas de esos documentos e informes. Incluye información sobre el 50.º período de sesiones de la Comisión: una introducción a la Comisión, incluida una breve sinopsis histórica; información relativa a la composición y los miembros de la Comisión y sus actividades durante sus períodos de sesiones 48.º, 49.º y 50.º; un examen de su programa de trabajo; versiones electrónicas de los informes de la Comisión y de diversos textos adoptados por la Comisión o basados en su labor y una versión electrónica de la *Analytical Guide to the Work of the International Law Commission, 1949-1997*. La División de Codificación mantendrá esta página en la Web.

C.—Programa de trabajo a largo plazo

551. En su período de sesiones en curso el Grupo de Planificación restableció el Grupo de Trabajo sobre el programa de trabajo a largo plazo para que examinara los temas que podría abordar la Comisión más allá del presente quinquenio.

552. El Grupo de Trabajo estuvo presidido por el Sr. Ian Brownlie²⁷⁴ e informó de su labor al Grupo de Planificación.

553. Teniendo presente la recomendación del Grupo de Trabajo que figura en el informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la labor realizada en su 49.º período de sesiones²⁷⁵, la Comisión convino en que la

²⁷¹ Véase la nota 5 *supra*

²⁷² Publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta S 95 V 6

²⁷³ www.un.org/law/ilc/index.htm

²⁷⁴ Véase la composición del Grupo de Trabajo en el párrafo 8 *supra*

²⁷⁵ *Anuario* 1997, vol. II (segunda parte), párr. 238

²⁶⁹ *Ibid.*, párr. 229. La Asamblea General acogió con beneplácito esta decisión en el párrafo 19 de su resolución 52/156

²⁷⁰ Véase la nota 4 *supra*

selección de temas para el programa de trabajo a largo plazo debería orientarse por el criterio de que el tema reflejara las necesidades de los Estados respecto del desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional; que el tema estuviera en una etapa suficientemente avanzada en cuanto a la práctica de los Estados para permitir el desarrollo progresivo y la codificación; y que el tema fuera concreto y viable para el desarrollo progresivo y la codificación. La Comisión convino además en que no debería limitarse a los temas tradicionales, sino que también podría examinar los que representaran la evolución del derecho internacional e inquietudes apremiantes de la comunidad internacional en general.

554. La Comisión tomó nota del informe del Grupo de Trabajo, en que determinó y examinó una serie de temas relativos a diversos aspectos importantes del derecho internacional, como los derechos humanos, el medio ambiente, la responsabilidad y los tratados. Tomó nota además de que en el informe del Grupo de Planificación se seleccionaron los temas siguientes para que se incluyeran en el programa de trabajo a largo plazo: responsabilidad de las organizaciones internacionales, repercusiones de los conflictos armados para los tratados, recursos naturales compartidos (aguas subterráneas confinadas y estructuras geológicas únicas de petróleo y gas) y expulsión de extranjeros. Concordó además con la recomendación del Grupo de Planificación de preparar un sumario de esos temas para que lo examinara en el próximo período de sesiones de la Comisión. Convino además con la recomendación del Grupo de Planificación de que se preparara un estudio de viabilidad sobre otros temas para su inclusión en el programa de trabajo a largo plazo. La Comisión decidió que en el próximo período de sesiones se estableciera nuevamente el Grupo de Trabajo sobre el programa de trabajo a largo plazo para que completara su labor.

D.—Representación de la Comisión en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional

555. Teniendo presente el proyecto de estatuto de una corte penal internacional, preparado por la Comisión y presentado a la Asamblea General en su cuadragésimo noveno período de sesiones²⁷⁶, la Comisión decidió designar al Sr. James Crawford para que la representara en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional, celebrada en Roma del 15 de junio al 17 de julio de 1998. El Sr. Crawford hizo uso de la palabra en la Conferencia el 16 de junio de 1998 y presentó un informe a la Comisión el 27 de julio de 1998²⁷⁷.

556. El 27 de julio de 1998 el Secretario de la Comisión, que era el Secretario Ejecutivo de la Conferencia, transmitió el texto de la siguiente resolución aprobada por la Conferencia a ese respecto:

La Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional

Resuelve expresar su profundo agradecimiento a la Comisión de Derecho Internacional por su destacada contribución a la preparación del proyecto inicial del Estatuto que constituyó la base de los trabajos de la Comisión Preparatoria [sobre el establecimiento de una corte penal internacional]

E.—Cooperación con otros organismos

557. En la 2537.^a sesión de la Comisión, celebrada el 28 de mayo de 1998, el Sr. Tang Chengyuan, Secretario General del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, expresó el permanente interés del Comité en los temas incluidos en el programa de trabajo en curso de la Comisión. En lo que respecta a la responsabilidad de los Estados, el Sr. Tang Chengyuan informó a la Comisión de que la ley relativa a las contramedidas se había examinado en un seminario sobre medidas de alcance territorial adoptadas por los Estados, incluidas las sanciones impuestas a terceros, organizado por el Comité y celebrado en Teherán los días 24 y 25 de enero de 1998. En lo que respecta a las reservas a los tratados, se había organizado una reunión extraordinaria en el curso del 37.º período de sesiones del Comité, celebrado en Nueva Delhi del 13 al 18 de abril de 1998. El Comité había examinado, entre otros temas del programa de la Comisión, la prevención del daño transfronterizo causado por actividades peligrosas, la nacionalidad en relación con la sucesión de Estados y los actos unilaterales de los Estados. En el mismo período de sesiones el Comité también había examinado otros temas, por ejemplo el establecimiento de una corte penal internacional, el derecho que rige el uso de los ríos internacionales, así como la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. El Comité seguiría manteniendo una estrecha relación de trabajo con la Comisión.

558. El 9 de junio de 1998 los miembros de la Comisión y los funcionarios de asesoramiento jurídico del CICR y de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja celebraron una sesión oficiosa con objeto de examinar temas de interés común de esos órganos.

559. En la 2538.^a sesión, celebrada el 10 de junio de 1998, el Magistrado Stephen Schwebel, Presidente de la Corte Internacional de Justicia, presentó a la Comisión una reseña analítica de los casos que estaban sometidos a la consideración de la Corte. Señaló que la creciente carga de trabajo inevitablemente había originado retrasos cada vez mayores en el conocimiento de las causas. En promedio, los Estados podían actualmente esperar aproximadamente cuatro años desde la presentación de su alegato inicial hasta la sentencia final. Comprensiblemente, esos retrasos habían provocado cierta inquietud tanto dentro de la Corte como fuera de ella. El problema fundamental radicaba en el hecho de que los recursos de que disponía la Corte no habían aumentado de manera proporcional a la demanda de sus servicios e, incluso, habían sufrido recortes en los últimos años. Por consiguiente, el tamaño de los servicios de traducción y del departamento de archivos no era adecuado, los jueces de

²⁷⁶ *Anuario* 1994, vol II (segunda parte), pág 28, parr 91

²⁷⁷ Véase *Anuario* 1998, vol I, 2549^a sesión

la Corte no contaban con actuarios, tampoco había en la secretaría una plantilla designada para prestarles asistencia de manera individual y el número de letrados era muy reducido. La Corte, por su parte, había adoptado diversas medidas para acelerar sus procedimientos. Por ejemplo, se estaba alentando a los Estados a que presentaran sus alegatos consecutivamente en lugar de hacerlo en forma simultánea, y a que redujeran la proliferación de anexos en los alegatos, lo que tendía a absorber una cantidad desproporcionada de tiempo de traducción. En lo que respecta al uso que hacía la Corte de los proyectos de artículo preparados por la Comisión, el Presidente señaló que, en el curso de los años, la Corte habitualmente había atribuido considerable importancia a las convenciones elaboradas por la Comisión. Si bien los proyectos de artículo eran tan sólo proyectos y, por ende, no podía atribuirseles el mismo peso, toda vez que las partes en una controversia convenían en que determinados proyectos de artículo constituían una versión autorizada de las normas atinentes a un tema en particular, la Corte les asignaba el peso correspondiente.

560. En la 2554.ª sesión de la Comisión, celebrada el 3 de agosto de 1998, el Sr. Jonathan T. Fried, observador del Comité Jurídico Interamericano, informó a la Comisión sobre las actividades del Comité. El Comité había participado recientemente en estudios relativos a la dimensión jurídica de la integración y el comercio internacional, en particular la cláusula de nación más favorecida, así como el derecho a la información, en especial el acceso a la información y la protección de los datos personales. Por lo demás, el Comité había preparado un proyecto de convención contra la corrupción, aprobado posteriormente por la OEA, y estaba elaborando leyes modelo relativas al enriquecimiento ilícito y el soborno transnacional. Recientemente, el Comité también había examinado los temas siguientes: mejoramiento de la administración de justicia en las Américas, la cooperación interamericana contra el terrorismo, la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar por los Estados del hemisferio, un proyecto de declaración sobre los derechos de las poblaciones indígenas y la democracia en el sistema interamericano.

561. En la 2558.ª sesión, celebrada el 7 de agosto de 1998, el Sr. Rafael A. Benítez, observador del Comité de Asesores Jurídicos sobre Derecho Internacional Público (CAHDI) del Consejo de Europa, informó a la Comisión sobre la labor y las actividades del CAHDI. El Comité había establecido un grupo integrado por especialistas en reservas a los tratados. La primera reunión del Grupo de Especialistas sobre las reservas a los tratados internacionales se celebró en París en febrero de 1998 y el Grupo volvería a reunirse en septiembre de 1998. Algunas de las cuestiones examinadas por el Grupo, o que habría de examinar posteriormente, son: la admisibilidad de las reservas, el papel de los órganos creados en virtud de tratados, las repercusiones de las reservas ilegítimas y la práctica de los miembros del Consejo de Europa en relación con las reservas a los tratados. El Grupo tendría especialmente presente la labor que había llevado a cabo la Comisión en esta esfera. En lo que respecta a la práctica de los Estados en relación con la sucesión de Estados y las cuestiones de reconocimiento, en marzo de 1998 el CAHDI decidió preparar un informe, en colaboración

con algunas otras instituciones, con objeto de analizar la práctica de los Estados miembros del Consejo de Europa.

F.—Fecha y lugar de celebración del 51.º período de sesiones y de los períodos de sesiones subsiguientes

562. La Comisión convino en que su siguiente período de sesiones se celebraría en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, del 3 de mayo al 23 de julio de 1999 (12 semanas). Teniendo en cuenta la previsión del volumen de trabajo de la Comisión en los períodos de sesiones posteriores al 51.º período de sesiones, así como la necesidad de organizar su labor de la manera más productiva, la Comisión convino también en que, salvo circunstancias imprevistas, los períodos de sesiones posteriores a 1999 deberían fijarse de manera que quedarán divididos en dos partes aproximadamente iguales, con un intervalo razonable entre ellos, por un total de 12 semanas, en Ginebra. Por consiguiente, se pidió a la Secretaría que, a la luz de dicha decisión, hiciera las solicitudes administrativas y presupuestarias pertinentes. A ese respecto, el Secretario de la Comisión se refirió a la posibilidad de que fuera necesario incurrir en gastos.

563. La Comisión, por recomendación del Grupo de Planificación, decidió celebrar su 52.º período de sesiones en el año 2000 en Ginebra, del 24 de abril al 2 de junio y del 3 de julio al 11 de agosto.

G.—Representación en el quincuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General

564. La Comisión decidió que su Presidente, Sr. João Clemente Baena Soares, la representaría en el quincuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General²⁷⁸.

H.—Seminario de derecho internacional

565. De conformidad con la resolución 52/156 de la Asamblea General, durante el 50.º período de sesiones de la Comisión se celebró del 11 al 29 de mayo de 1998 en el Palacio de las Naciones el 34.º período de sesiones del Seminario de derecho internacional. El Seminario está dedicado a estudiantes avanzados que se especializan en derecho internacional y a profesores o funcionarios gubernamentales jóvenes que tienen la intención de seguir una carrera académica o diplomática o de trabajar en la administración pública de su país.

566. Veintitrés participantes de diferentes nacionalidades, en su mayoría de países en desarrollo, pudieron

²⁷⁸ En su 2563.ª sesión, el 14 de agosto de 1998, la Comisión pidió al Sr. A. Pellet, Relator Especial sobre reservas a los tratados, que asistiera al quincuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General de acuerdo con lo dispuesto en la resolución 44/35 de la Asamblea

asistir al período de sesiones²⁷⁹. Los participantes en el Seminario asistieron a sesiones plenarias de la Comisión, participaron en conferencias especialmente preparadas y en grupos de trabajo sobre temas específicos.

567. El Presidente de la Comisión, Sr. João C. Baena Soares, inauguró el Seminario.

568. Algunos miembros de la Comisión dictaron las siguientes conferencias: Sr. Pemmaraju Sreenivasa Rao, «La labor de la Comisión de Derecho Internacional»; Sr. Zdzislaw Galicki, «La nacionalidad, un derecho humano»; Sr. Mohamed Bennouna, «Protección diplomática»; Sr. James Crawford, «Responsabilidad de los Estados»; y Sr. Teodor Viorel Melescanu, «Sanciones económicas».

569. También se dictaron las siguientes conferencias: Sr. Vladimir Petrovsky, Secretario General de la Conferencia de Desarme y Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, «Desarme multilateral»; Sr. Roy S. Lee, Director de la División de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos y Secretario de la Comisión, «Establecimiento de la Corte Penal Internacional: problemas jurídicos»; Sr. Michel Moussalli, ex Director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, «La protección internacional de los refugiados»; Sr. Stéphane Jeannot, Asesor Jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja, «El derecho internacional humanitario y la labor del Comité Internacional de la Cruz Roja»; Sr. Mojtaba Kazazi, Jefe de la secretaría del Consejo de Administración de la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas, «Medidas del Consejo de Seguridad: la labor de la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas».

570. Los participantes en el Seminario fueron asignados a uno de los cuatro grupos de trabajo con el objeto de estudiar temas determinados bajo la dirección de los miembros de la Comisión de la siguiente forma: «Reservas a los tratados en el derecho interno» (Sr. Pellet), «Actos unilaterales» (Sr. Candioti), «Protección diplomática» (Sr. Hafner) y «Responsabilidad de los Estados» (Sr. Dugard). Cada grupo presentó sus resultados al Seminario; dos grupos presentaron estudios, uno sobre «Actos unilaterales de los Estados» y otro sobre «Protec-

ción diplomática», que también fueron compartidos con los miembros de la Comisión.

571. Los participantes también tuvieron la oportunidad de utilizar las instalaciones de la Biblioteca de las Naciones Unidas y del Centro de Visitantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de visitar el museo del Comité Internacional de la Cruz Roja.

572. La República y el Cantón de Ginebra brindaron su tradicional hospitalidad a los participantes tras una visita guiada a las salas Alabama y del Gran Consejo.

573. El Sr. João C. Baena Soares, Presidente de la Comisión, el Sr. Ulrich von Blumenthal, en nombre de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, y la Sra. Patricia Galvao Teles, en nombre de los participantes, formularon declaraciones a la Comisión y los participantes en la clausura del Seminario. Cada participante recibió un certificado de asistencia.

574. La Comisión señaló con particular agradecimiento que los Gobiernos de Alemania, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Suiza y Venezuela habían hecho contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para el Seminario de Derecho Internacional. Gracias a esas contribuciones fue posible conceder un número suficiente de becas para alcanzar una distribución geográfica adecuada de participantes y para traer de los países en desarrollo candidatos meritorios, que de otra manera no hubieran podido participar en el período de sesiones. En 1998 se concedieron becas completas (viajes y dietas) a 15 candidatos y becas parciales (sólo dietas) a cuatro candidatos.

575. De los 760 participantes, en representación de 144 nacionalidades, que han participado en el Seminario desde 1965, el año de su creación, 426 han recibido becas.

576. La Comisión destaca la importancia que concede a los períodos de sesiones del Seminario, que permiten a abogados jóvenes, especialmente de países en desarrollo, familiarizarse con la labor de la Comisión y las actividades de muchas organizaciones internacionales que tienen su sede en Ginebra. La Comisión recomienda que la Asamblea General haga un nuevo llamamiento a los Estados para que aporten contribuciones voluntarias a fin de asegurar la celebración del Seminario en 1999 con una participación lo más amplia posible.

577. La Comisión tomó nota con satisfacción de que en 1998 el Seminario contó con servicios de interpretación amplios. Expresa la esperanza de que los mismos servicios estén disponibles para el próximo período de sesiones del Seminario, a pesar de las dificultades financieras existentes.

I.—Conferencia en memoria de Gilberto Amado

578. El 13 de mayo de 1998 el Embajador Ramiro Saraiva Guerreiro, ex Ministro de Relaciones Exteriores

²⁷⁹ Las siguientes personas participaron en el 34.º período de sesiones del Seminario de derecho internacional, a saber: Sra Irène Abesolo (Gabón), Sr Agalar Atamoglanov (Azerbaiyán), Sr Yen The Banh (Viet Nam), Sr Kesab Prasad Bastola (Nepal), Sr Gela Bezhuashvili (Georgia), Sr Mohamed Bouqentar (Marruecos), Sra Irena Cacic (Croacia), Sra Mélanne Covic (Estados Unidos de América), Sr Juan Norberto Colorado Correa (Colombia), Sra Patricia Galvao Teles (Portugal), Sr Zafar Iqbal Gondal (Pakistán), Sr Fernando Herrera Rodríguez (México), Sr Kumbirai Hodzi (Zimbabue), Sra Alba Ibrahim (Albania), Sr Ali Reza Jahangiri (República Islámica del Irán), Sr Gilberto Marcos A. Rodrigues (Brasil), Sr Alejandro Moreno Díaz (Venezuela), Sra Dewi Naidu (Dinamarca), Sr Samuel Nerquaye-Tetteh (Ghana), Sr Giovanni Palec (Filipinas), Sra Suranjika Tittawella (Sri Lanka), Sra Jeannette Tramhel (Canadá), y Sr Mncedisi Xego (Sudáfrica). No participó en el Seminario un candidato que había sido seleccionado (de Zambia). Un comité de selección, bajo la presidencia del profesor Nguyen-Huu Tru (profesor honorario del Instituto de Posgrado de Relaciones Internacionales de Ginebra), se reunió el 11 de marzo de 1998 y seleccionó a 24 candidatos de 75 solicitudes presentadas para participar en el Seminario.

del Brasil, dictó la 14.^a Conferencia en memoria de Gilberto Amado, ilustre jurista brasileño y ex miembro de la Comisión, sobre el tema: «La creación de la Comisión de Derecho Internacional y algunas consideraciones sobre posibles nuevas fuentes del derecho internacional».

579. La Conferencia en memoria de Gilberto Amado ha sido posible gracias a las generosas contribuciones del Gobierno del Brasil, a quien la Comisión expresó su agradecimiento. La Comisión pidió al Presidente que transmitiera su agradecimiento al Gobierno del Brasil.

J.—Homenaje al Secretario de la Comisión

580. En su 2562.^a sesión, celebrada el 14 de agosto de 1998, la Comisión aprobó una resolución en que reconocía la importante contribución hecha por el Sr. Roy S. Lee, Secretario de la Comisión, a la labor de la Comisión y a la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional, le expresó su gratitud por la manera cordial y eficiente en que había guiado a la Comisión y le había prestado servicios, y le expresó los mejores deseos de la Comisión con ocasión de su retiro.

LISTA DE DOCUMENTOS DEL 50.º PERÍODO DE SESIONES

<i>Signatura</i>	<i>Título</i>	<i>Observaciones y referencias</i>
A/CN.4/483	Resumen por temas, preparado por la Secretaría, del debate en la Sexta Comisión sobre el informe de la CDI durante el quincuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General	Mimeografiado
A/CN.4/484	Informe preliminar sobre la protección diplomática, por el Sr. Mohamed Bennouna, Relator Especial	Reproducido en <i>Anuario</i> 1998, vol. II (primera parte)
A/CN.4/485 [y Corr. 1]	Programa provisional	Mimeografiado Véase el programa aprobado en la pág. 14, párr. 10 <i>supra</i>
A/CN.4/486	Primer informe sobre los actos unilaterales de los Estados, por el Sr. Víctor Rodríguez Cedeño, Relator Especial	Reproducido en <i>Anuario</i> 1998, vol. II (primera parte)
A/CN.4/487 y Add. 1	Primer informe sobre la prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas, por el Sr. Pemmaraju Sreenivasa Rao, Relator Especial	Ídem
A/CN.4/488 y Add. 1 a 3	Responsabilidad de los Estados. Comentarios y observaciones recibidos de los gobiernos	Ídem
A/CN.4/489	Cuarto informe sobre la nacionalidad en relación con la sucesión de Estados, por el Sr. Vaclav Mikulka, Relator Especial	Ídem
A/CN.4/490 y Add. 1 y 2 [y Add. 2/Corr. 1], Add. 3 y 4 [y Add. 4/Corr. 1] y Add. 5 a 7 [y Add. 7/Corr. 1]	Primer informe sobre la responsabilidad de los Estados, por el Sr. James Crawford, Relator Especial	Ídem
A/CN.4/491 y Add. 1 y 2 [y Add. 2/Corr. 1], Add. 3 y 4 [y Add. 4/Corr. 1] y Add. 5 y 6 [y Add. 6/Corr. 1]	Tercer informe sobre las reservas a los tratados, por el Sr. Alain Pellet, Relator Especial	Ídem
A/CN.4/L.552 y Add. 1	Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 50.º período de sesiones: capítulo IV (Protección diplomática)	Mimeografiado Véase el texto aprobado en <i>Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo tercer período de sesiones, Suplemento n.º 10 (A/53/10)</i> . El texto definitivo figura en la pág. 45 <i>supra</i>
A/CN.4/L.553	Informe del Grupo de Trabajo sobre la protección diplomática	Mimeografiado
A/CN.4/L.554 [y Corr. 1 y 2] y Add. 1 [y Add. 1/Corr. 1 y 2] y Add. 2 [y Add. 2/Corr. 1]	Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 50.º período de sesiones: capítulo VI [Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas)]	Ídem Véase el texto aprobado en <i>Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo tercer período de sesiones, Suplemento n.º 10 (A/53/10)</i> . El texto definitivo figura en la pág. 19 <i>supra</i>
A/CN.4/L.555 y Add. 1	Ídem: capítulo V (Actos unilaterales de los Estados)	Ídem, véase la pág. 53 <i>supra</i>
A/CN.4/L.556	Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas). Propuesta del Relator Especial	Mimeografiado

<i>Signatura</i>	<i>Título</i>	<i>Observaciones y referencias</i>
A/CN.4/L.557 [y Corr. 1]	Informe del Grupo de Trabajo sobre la nacionalidad en relación con la sucesión de Estados	Ídem
A/CN.4/L.558	Informe del Grupo de Trabajo sobre los actos unilaterales de los Estados	Ídem
A/CN.4/L.559 [y Corr. 1]	Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 50.º período de sesiones capítulo VIII (La nacionalidad en relación con la sucesión de Estados)	Ídem Véase el texto aprobado en <i>Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo tercer período de sesiones, Suplemento n.º 10 (A/53/10)</i> El texto definitivo figura en la pág. 96 <i>supra</i>
A/CN.4/L.560	Recomendaciones del Grupo de Planificación a la Comisión	Mimeografiado
A/CN.4/L.561 y Add. 1 a 6	Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 50.º período de sesiones capítulo VII (Responsabilidad de los Estados)	Ídem Véase el texto aprobado en <i>Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo tercer período de sesiones, Suplemento n.º 10 (A/53/10)</i> El texto definitivo figura en la pág. 64 <i>supra</i>
A/CN.4/L.562 [y Corr. 1] y Add. 1 y 2	Ídem capítulo IX (Las reservas a los tratados)	Ídem, véase la pág. 98 <i>supra</i>
A/CN.4/L.563 [y Corr. 1]	Las reservas a los tratados Títulos y textos del proyecto de directrices de la Guía de la práctica aprobado por el Comité de Redacción en el 50.º período de sesiones	Mimeografiado
A/CN.4/L.564	Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 50.º período de sesiones capítulo IX (Las reservas a los tratados) Texto del proyecto de directrices de la Guía de la práctica sobre las reservas a los tratados, con comentarios	Ídem Véase el texto aprobado en <i>Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo tercer período de sesiones, Suplemento n.º 10 (A/53/10)</i> El texto definitivo figura en la pág. 108 <i>supra</i>
A/CN.4/L.565 [y Corr. 1]	Responsabilidad de los Estados Proyectos de artículos aprobados provisionalmente por el Comité de Redacción primera parte, capítulo I (arts. 1, 2 [3] y 3 [4])	Mimeografiado
A/CN.4/L.566	Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 50.º período de sesiones capítulo I (Organización del período de sesiones)	Ídem Véase el texto aprobado en <i>Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo tercer período de sesiones, Suplemento n.º 10 (A/53/10)</i> El texto definitivo figura en la pág. 13 <i>supra</i>
A/CN.4/L.567	Ídem capítulo X (Otras decisiones y conclusiones de la Comisión)	Ídem, véase la pág. 119 <i>supra</i>
A/CN.4/L.568	Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (prevención de daños transfronterizos causados por actividades peligrosas) Título y texto de los proyectos de artículo 1 a 17 aprobados por el Comité de Redacción	Mimeografiado
A/CN.4/L.569 [y Corr. 1]	Responsabilidad de los Estados Proyectos de artículos aprobados provisionalmente por el Comité de Redacción primera parte, capítulo I (arts. 1, 3 y 4) y capítulo II (arts. 5, 7, 8, 8 <i>bis</i> , 9, 10, 15, 15 <i>bis</i> y A)	Texto reproducido en <i>Anuario 1998</i> , vol. 1, acta resumida de la 2562.ª sesión (párr. 72)
A/CN.4/L.570	Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 50.º período de sesiones capítulo III (Cuestiones concretas respecto de las cuales las observaciones podrían ser de particular interés para la Comisión)	Mimeografiado Véase el texto aprobado en <i>Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo tercer período de sesiones, Suplemento n.º 10 (A/53/10)</i> El texto definitivo figura en la pág. 17 <i>supra</i>
A/CN.4/L.571	Ídem capítulo II (Resumen de la labor de la Comisión en su 50.º período de sesiones)	Ídem, véase la pág. 15 <i>supra</i>
A/CN.4/SR.2519 a A/CN.4/SR.2564	Actas resumidas provisionales de las sesiones 2519 ^a a 2564 ^a	Mimeografiado El texto definitivo figura en <i>Anuario 1998</i> , vol. 1

كيفية الحصول على منشورات الأمم المتحدة

يمكن الحصول على منشورات الأمم المتحدة من المكتبات ودور التوزيع في جميع أنحاء العالم. استعلم عنها من المكتبة التي تتعامل معها أو اكتب إلى الأمم المتحدة، قسم البيع في نيويورك أو في جنيف.

如何购取联合国出版物

联合国出版物在全世界各地的书店和经售处均有发售。请向书店询问或写信到纽约或日内瓦的联合国销售组。

HOW TO OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS

United Nations publications may be obtained from bookstores and distributors throughout the world. Consult your bookstore or write to: United Nations, Sales Section, New York or Geneva.

COMMENT SE PROCURER LES PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES

Les publications des Nations Unies sont en vente dans les librairies et les agences dépositaires du monde entier. Informez-vous auprès de votre libraire ou adressez-vous à : Nations Unies, Section des ventes, New York ou Genève.

КАК ПОЛУЧИТЬ ИЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Издания Организации Объединенных Наций можно купить в книжных магазинах и агентствах во всех районах мира. Наводите справки об изданиях в вашем книжном магазине или пишите по адресу: Организация Объединенных Наций, Секция по продаже изданий, Нью-Йорк или Женева.

CÓMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

Las publicaciones de las Naciones Unidas están en venta en librerías y casas distribuidoras en todas partes del mundo. Consulte a su librero o diríjase a: Naciones Unidas, Sección de Ventas, Nueva York o Ginebra.
